Contenido Índices



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

REVISTA No. 34

Sexta Época

Año III Octubre 2010

Derechos Reservados ©
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
INSURGENTES SUR 881 TORRE 'O' PISO 12
COL. NÁPOLES. DELEG. BENITO JUÁREZ
C.P. 03810. MÉXICO, D.F.

Certificado No. 04-2001-012517410700-102

FIDEICOMISO PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DEL DERECHO FISCAL Y ADMINISTRATIVO

- **2010**
  Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta publicación, por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo fotocopia, grabación magnetofónica y cualquier sistema de almacenamiento de información, sin la autorización expresa.

- El contenido de los artículos publicados son de la exclusiva responsabilidad de los autores.

- ISSN 1665-0086 50118

- Página Internet del T.F.J.F.A: www.tfjfa.gob.mx
  Correo Electrónico de la Revista: publicaciones@.tfjfa.gob.mx

REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
OCTUBRE DE 2010. No. 34

CONTENIDO:

- **Primera Parte:**
  Jurisprudencias de Sala Superior 5

- **Segunda Parte:**
  Precedentes de Sala Superior 67

- **Tercera Parte:**
  Criterios Aislados de Sala Superior y de Salas Regionales 435

- **Cuarta Parte:**
  Criterios Aislados de Salas Regionales aprobados durante la Quinta Época 535

- **Quinta Parte:**
  Resolución y votos particulares de Sala Superior..... 543

- **Sexta Parte:**
  Acuerdos Generales 559

- **Séptima Parte:**
  Índices Generales 621

PRIMERA PARTE

JURISPRUDENCIAS DE SALA SUPERIOR

PLENO

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-SS-66

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ES INCOMPETENTE PARA IMPONER SANCIONES.- Si bien el artículo 78 de la Ley General de Educación otorga a la "autoridad educativa responsable" la facultad de sancionar a los infractores de las normas legales aplicables, y del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, se desprende que la Dirección General de Operación de Servicios Educativos tiene facultades para imponer sanciones a las instituciones registradas o incorporadas por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, lo cierto es que el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, que nos ocupa, no resulta ser el instrumento idóneo para otorgar competencia a las unidades administrativas adscritas a la citada Administración Federal, en virtud de que no constituye un reglamento expedido por el Ejecutivo Federal en ejercicio de la facultad reglamentaria conferida por el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni un acuerdo delegatorio de facultades, consecuentemente, la citada Dirección General de Operación de Servicios Educativos resulta incompetente para imponer sanciones.

Contradicción de Sentencias Núm. 23034/06-17-02-8/Y OTRO/2062/09-PL-04-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de junio de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Rossina Montandon Spinoso.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/17/2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

En la especie, este Pleno de la Sala Superior estima que se verifican los tres supuestos relatados, para considerar que existe la contradicción denunciada por el Presidente de este Tribunal, en la medida que en los dos asuntos se analiza lo relativo a la competencia de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación Pública, para imponer sanciones, según se aprecia de la transcripción de la parte considerativa de cada uno de los fallos involucrados, esta juzgadora estima que la contradicción deriva del análisis de los mismos elementos, pues en ambos casos, la cuestión se analizó a la luz del punto 8 del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

Ahora bien, tal y como se puede observar de la transcripción de los fallos en conflicto, la Segunda Sala Regional Metropolitana, en esencia, concluyó que el punto 8 del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005 **no le confiere facultades** a la Directora General de Operación de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación Pública para imponer sanciones.

Por su cuenta, la Quinta Sala Regional Metropolitana, concluyó que el punto 8 del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal **sí le confiere facultades** a la Directora General de Operación de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación Pública para imponer sanciones.

Cabe hacer notar que en el juicio 34624/06-11-05-8, radicado en la Quinta Sala Regional Metropolitana, la resolución impugnada es el recurso de revisión, en el que la Directora General de Operación de Servicios Educativos, modifica la sanción im-

puesta por la Dirección de Incorporación de Escuelas Particulares y Proyectos Específicos, en cantidad de $61,747.20, al considerar que la multa a cargo de la actora, debe ser en cantidad de $41,118.30. En esa medida, aun cuando es a través de la resolución de un recurso de revisión, la Dirección General de Operación de Servicios Educativos impone una sanción a la institución de asistencia privada, actora en el juicio 34624/06-17-05-8.

Ahora bien, antes de resolver la contradicción de sentencias que nos ocupa, esta Juzgadora estima importante conocer los antecedentes de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en su calidad de organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, de conformidad con el artículo 2, inciso B) del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, en relación con el Decreto por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005, que a la letra establecen:

[N.E. Se omite transcripción]

De los preceptos transcritos se aprecia que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, creado mediante Decreto expedido por el Presidente de la República, con facultades entre otras cosas, para imponer las sanciones correspondientes en los términos de la Ley General de Educación.

Precisado esto, resulta importante conocer el contenido del Manual General de Organización de la Administración General de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005, así como el artículo 78 de la Ley General de Educación, invocadas en la resolución impugnada y que establecen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De la transcripción anterior se aprecia que la Ley General de Educación, a través de su artículo 78, establece que cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del servicio o que haya otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, considere que existen causas que justifican la imposición de sanciones, le harán saber al presunto infractor antes de emitir la resolución con base en los datos aportados por el presunto infractor.

Asimismo, el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, describe el objetivo, los antecedentes históricos y la base legal en la que la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal sustenta sus actividades, en su calidad de órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, aunado a que determina su estructura orgánica, la descripción de sus atribuciones y las funciones de las áreas responsables que lo constituyen.

En ese sentido, el Manual en comento determina las atribuciones y ámbitos de competencia de cada una de las áreas que integran la Administración Federal, como en el caso la Dirección General de Operación de Servicios Educativos, la cual tiene, entre otras facultades, la de vigilar, en términos de la Ley General de Educación que las instituciones registradas o incorporadas cumplan con las disposiciones legales aplicables, de substanciar los procedimientos e imponer las sanciones que correspondan, como se aprecia del Punto 8 de la parte relativa del Manual transcrito.

No obstante lo anterior, dicho Manual no resulta idóneo para otorgar facultades a la Dirección General de Operación de Servicios Educativos de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en virtud de que, si bien el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que el titular de cada Secretaría de Estado y Departamento Administrativo expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, lo cierto es que los referidos manuales otorga competencia a las unidades administrativas de las Secretaría de Estado referidas, sino que la competencia de las autoridades administrativas debe estar contenida en una ley, un reglamento

expedido por el Presidente de la República o acuerdo delegatorio, cuando el titular tiene competencia originaria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que a la letra establecen:

[N.E. Se omite transcripción]

En el caso concreto, las resoluciones sancionadoras, impugnadas en los juicios materia de la presente contradicción, fueron emitidas por la Dirección General de Operación de Servicios Educativos de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, la cual sustenta sus facultades únicamente en el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, el cual no resulta idóneo para otorgar facultades a las unidades administrativas de los entes de la administración pública federal.

No pasa inadvertido para esta Juzgadora, que en el Decreto que crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, se establecen las atribuciones de dicho órgano, entre las cuales se aprecia la de imponer las sanciones a que se refiere el Capítulo VII de la Ley General de Educación, sin embargo, en los juicios que nos ocupan, la autoridad que impuso las sanciones no fue la señalada Administración, sino la Dirección General de Operación de Servicios Educativos, que como se precisó anteriormente, es una autoridad incompetente para imponer sanciones en los términos en que lo hizo.

Así las cosas, de una interpretación concatenada de los artículos 78 de la Ley General de Educación y del Manual General de Organización de la Administración General de Servicios Educativos en el Distrito Federal, se desprende que el primer precepto invocado otorga a la "autoridad educativa responsable" la facultad de sancionar a los infractores de las normas legales aplicables. A su vez, el Manual citado establece las facultades de las distintas unidades administrativas que integran la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, como en el caso, la Dirección General de Operación de Servicios Educativos en el Distrito Federal, sin embar-

go, como se señaló anteriormente, dicho Manual no resulta ser instrumento idóneo para otorgar competencia a dichas unidades administrativas, razón por la cual la citada Dirección General resulta incompetente para imponer sanciones, como las multas controvertidas.

Por lo que si el artículo 78 de la Ley General de Educación se refiere a "autoridades educativas responsables", es dable concluir que invariablemente debe entenderse como una autoridad competente, y no es el caso de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos, quien no cuenta con facultades para imponer las sanciones a las instituciones educativas como en el caso las partes actoras en los juicios 23034/06-17-02-8 y 34624/06-17-05-8, que nos ocupan.

Atento a lo anterior, a juicio del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, el criterio que debe prevalecer es el sostenido por la Segunda Sala Regional Metropolitana, en el sentido de que, en términos de los artículos 78 de la Ley General de Educación y Punto 8 en la parte relativa a la Dirección General de Operación de Servicios Educativos del General de Organización de la Administración General de Servicios Educativos en el Distrito Federal no cuenta con facultades para imponer sanciones a las instituciones registradas o incorporadas por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, por lo que debe sostenerse la siguiente tesis:

> "**DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ES INCOMPETENTE PARA IMPONER SANCIONES**.- Si bien el artículo 78 de la Ley General de Educación otorga a la "autoridad educativa responsable" la facultad de sancionar a los infractores de las normas legales aplicables, y del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, se desprende que la Dirección General de Operación de Servicios Educativos tiene facultades para imponer sanciones a las instituciones registradas o incorporadas por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, lo cierto es que el Manual General

de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, que nos ocupa, no resulta ser el instrumento idóneo para otorgar competencia a las unidades administrativas adscritas a la citada Administración Federal, en virtud de que no constituye un reglamento expedido por el Ejecutivo Federal en ejercicio de la facultad reglamentaria conferida por el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni un acuerdo delegatorio de facultades, consecuentemente, la citada Dirección General de Operación de Servicios Educativos resulta incompetente para imponer sanciones."

Por lo expuesto anteriormente y con fundamento en los artículos 77 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 18, fracciones IX y XVI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente a partir del 7 de diciembre de 2007, se resuelve:

I.- Existe contradicción entre las sentencias sustentadas por la Segunda Sala Regional Metropolitana y por la Quinta Sala Regional Metropolitana, que quedaron detalladas en los resultandos 3° y 5º del presente fallo.

II.- Debe prevalecer el criterio sustentado por la Segunda Sala Regional Metropolitana, atento a lo expuesto a lo largo del presente fallo.

III.- Se fija la jurisprudencia indicada en la parte final del Considerando Tercero de esta resolución.

IV. NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de junio de 2010, por mayoría de 9 votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez

Illescas y Francisco Cuevas Godínez, y 1 en contra del Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo. Estuvo ausente el Magistrado Luis Carballo Balvanera.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el 5 de julio de 2010, y con fundamento en los artículos 30, fracción V y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos que da fe.

SEGUNDA SECCIÓN

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-36

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. TRATÁNDOSE DE LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN EN LA CAPTACIÓN DE RECURSOS DEL PÚBLICO EN GENERAL, IMPUESTA POR VIOLACIÓN A LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA.- En términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, podrá otorgarse la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo, siempre y cuando con dicho otorgamiento no se afecte al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; es por ello entonces que, tratándose de aquellas sanciones que sean impuestas a las Sociedades Cooperativas con apoyo en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de manera específica las de suspender la captación de recursos de sus socios o del público en general, no son susceptibles de ser suspendidas en cuanto a su ejecución, ya que no debe pasar inadvertido que la legislación que regula esas sociedades tiene como finalidad la de proteger y dar seguridad al destino de los recursos económicos obtenidos a partir del desprendimiento que hacen los particulares de una parte de su patrimonio y su aportación a un fondo común, aspecto que evidentemente constituye una cuestión de interés general.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/7/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-136
Recurso de Reclamación Núm. 1778/07-17-10-4/1044/08-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

nistrativa, en sesión de 18 de septiembre de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de octubre de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 14. Febrero 2009. p. 332

VI-P-2aS-137
Recurso de Reclamación Núm. 31423/06-17-02-2/1128/07-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de octubre de 2008, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Isabel Messmacher Linartas.
(Tesis aprobada en sesión de 30 de octubre de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 14. Febrero 2009. p. 332

VI-P-2aS-205
Recurso de Reclamación Núm. 31436/06-17-06-6/1537/08-S2-06-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de marzo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de marzo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 17. Mayo 2009. p. 389

VI-P-2aS-336
Recurso de Reclamación Núm. 1173/07-17-08-6/278/09-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de junio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 131

VI-P-2aS-396

Recurso de Reclamación Núm. 19281/07-17-04-4/1414/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.

(Tesis aprobada en sesión de 15 de octubre de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 138

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes tres de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-37

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES OPORTUNO EL QUE SE DEPOSITA EN EL SERVICIO POSTAL MEXICANO PARA SU ENVÍO DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- El segundo párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que, cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse por el Servicio Postal Mexicano, mediante correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante. En los términos expuestos, es apegado a derecho y a la equidad considerar que, también existe a su favor la posibilidad de presentar por correo certificado todas las promociones o recursos que sean necesarios para ejercer plenamente su derecho. Por lo anterior, resulta procedente el envío del recurso de reclamación a través del Servicio Postal Mexicano mediante correo certificado con acuse de recibo, siempre que el promovente tenga su domicilio fiscal fuera de la sede de la Sala Regional, y que el depósito se realice dentro del plazo legal establecido.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/8/2010)

PRECEDENTES:

V-P-2aS-760
Recurso de Reclamación Núm. 3758/06-13-01-2/496/07-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de junio de 2007, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto

con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de junio de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 80. Agosto 2007. p. 98

V-P-2aS-808
Recurso de Reclamación Núm. 6335/06-12-02-5/945/07-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de noviembre de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de noviembre de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 84. Diciembre 2007. p. 130

VI-P-2aS-7
Recurso de Reclamación Núm. 487/07-03-01-3/781/07-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de enero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de enero de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 3. Marzo 2008. p. 95

VI-P-2aS-176
Recurso de Reclamación Núm. 33237/06-17-09-2/1398/08-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de enero de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de enero de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 16. Abril 2009. p. 231

VI-P-2aS-412

Recurso de Reclamación Núm. 5/09-19-01-3/1933/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.

(Tesis aprobada en sesión de 27 de octubre de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 203

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes tres de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-38

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD Y NO AL PARTICULAR DEMOSTRAR LA INSUFICIENCIA DEL VALOR REAL DE LOS BIENES EMBARGADOS MEDIANTE EL AVALÚO CORRESPONDIENTE.- El artículo 175, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación dispone que, la base para enajenación de los bienes inmuebles embargados será el de avalúo y para negociaciones, el avalúo pericial, ambos conforme a las reglas que establezca el Reglamento del Código Fiscal de la Federación; que en los demás casos, dicha base será la que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado, en un plazo de seis días contados a partir de la fecha en que se hubiera practicado el embargo; que a falta de acuerdo, la autoridad practicará el avalúo pericial, y que, en todos los casos, la autoridad notificará personalmente al embargado el avalúo practicado. Por tal razón, si la autoridad considera que el embargo practicado en el procedimiento administrativo de ejecución no garantiza suficientemente el interés fiscal, corresponde a dicha autoridad y no al particular acreditar con el avalúo correspondiente que, el valor de los bienes embargados es insuficiente y por ello se requiere de una garantía adicional.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/9/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-286
Recurso de Reclamación Núm. 27017/07-17-02-9/172/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de junio de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de junio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 21. Septiembre 2009. p. 187

VI-P-2aS-363
Recurso de Reclamación Núm. 28684/08-17-02-1/1272/09-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Karla Guadalupe Magallón Cuevas.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 217

VI-P-2aS-422
Recurso de Reclamación Núm. 9238/06-11-03-4/123/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 de octubre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 1 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 236

VI-P-2aS-423
Recurso de Reclamación Núm. 10797/06-11-03-6/1988/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 1 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 236

VI-P-2aS-424
Recurso de Reclamación Núm. 22384/08-17-02-7/420/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.-

Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 1 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 236

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes tres de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-39

LEY ADUANERA

GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL.- NO LA CONSTITUYE EL EMBARGO PRECAUTORIO DE MERCANCÍAS DE IMPORTACIÓN, PRACTICADO CONFORME AL ARTÍCULO 151 DE LA LEY ADUANERA.- El objeto del embargo precautorio establecido en el artículo 151 de la Ley Aduanera es impedir que se posean, transporten o manejen mercancías de importación o exportación prohibidas o aquellas respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país, o el debido cumplimiento de regulaciones o restricciones que para su tenencia, transporte o manejo exijan las disposiciones legales respectivas, es decir, a través de esta medida cautelar se embargan mercancías materia de infracción a las disposiciones legales aduaneras que, en algunos casos, pueden incluso pasar a ser propiedad del fisco federal. Por lo tanto, dicha medida no tiene por objeto asegurar el pago de las contribuciones al comercio exterior, sino primordialmente impedir que se continúe la transgresión a las disposiciones en materia aduanera protegiendo con ello el orden público y el interés social. En consecuencia el embargo precautorio que practiquen las autoridades con apoyo en la disposición citada no garantiza el interés fiscal y por ende, no puede dar lugar al otorgamiento de la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/10/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-13
Recurso de Reclamación Núm. 1029/07-14-01-5/1352/07-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de febrero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.-

Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Isabel Margarita Messmacher Linartas.
(Tesis aprobada en sesión de 5 de febrero de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 3. Marzo 2008. p. 126

VI-P-2aS-14
Recurso de Reclamación Núm. 9054/06-11-02-2/1265/07-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de febrero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de febrero de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 3. Marzo 2008. p. 126

VI-P-2aS-61
Recurso de Reclamación Núm. 2085/07-14-01-1/429/08-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de mayo de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de mayo de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 7. Julio 2008. p. 164

VI-P-2aS-167
Recurso de Reclamación Núm. 707/08-14-01-8/1807/08-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de enero de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de enero de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 15. Marzo 2009. p. 426

VI-P-2aS-431

Recurso de Reclamación Núm. 17816/07-17-09-2/1902/08-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de noviembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Thelma Semíramis Calva García.

(Tesis aprobada en sesión de 27 de noviembre de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 246

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes tres de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-40

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

PRESUNCIÓN LEGAL DEL DOMICILIO FISCAL PARA FIJAR LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES.- LA AUTORIDAD DEMANDADA PUEDE DESVIRTUARLA MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN IDÓNEA COMO LO SERÍA EL REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE.- Conforme al artículo 34, último párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la omisión de especificar el domicilio fiscal por la actora, establece la presunción legal de que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal; sin embargo, tal presunción puede ser desvirtuada por la autoridad demandada con la exhibición de los documentos idóneos, como lo es la copia certificada del Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente emitido por la Administración Local de Recaudación correspondiente con fecha posterior a la presentación de la demanda, toda vez que dicha probanza resulta ser la idónea para acreditar de manera fehaciente el domicilio fiscal del contribuyente, al tratarse de un documento expedido por la autoridad fiscal; certificación que además se formula por autoridad competente para ello como lo es la Administración Local de Servicios al Contribuyente, en términos de lo dispuesto en los artículos 16, primer párrafo y 14, fracción XII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, máxime si no lo desvirtúa el actor al correrse traslado con el incidente de incompetencia.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/11/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-271
Incidente de Incompetencia Núm. 5770/08-11-02-9/2030/08-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 28 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de mayo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 21. Septiembre 2009. p. 160

VI-P-2aS-311
Incidente de Incompetencia Núm. 19952/08-17-10-9/220/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Manuel Ángel Sánchez.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de mayo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 172

VI-P-2aS-359
Incidente de Incompetencia Núm. 2732/08-07-03-1/1472/08-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de septiembre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 211

VI-P-2aS-360
Incidente de Incompetencia Núm. 21103/08-17-05-9/682/09-S2-09-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. María Teresa Martínez García.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 211

VI-P-2aS-421

Incidente de Incompetencia Núm. 2066/09-11-03-3/1401/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Manuel Ángel Sánchez.

(Tesis aprobada en sesión de 22 de septiembre de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 233

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el jueves cinco de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-41

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL.- CUANDO NO SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS EXCEPCIONES PREVISTAS, EN EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA VIGENTE, DEBERÁ ESTARSE A LA REGLA GENERAL CONTENIDA EN EL PROPIO ARTÍCULO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, primer párrafo, de la Ley Orgánica de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por regla general la competencia territorial de las Salas Regionales para conocer de un juicio contencioso administrativo se fija atendiendo al domicilio fiscal del demandante. El propio artículo 34, en sus fracciones I, II y III establece como excepción que, deberá atenderse a la sede de la autoridad demandada, tratándose de personas morales que formen parte del sistema financiero, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o tengan el carácter de controladoras o controladas, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, y determinen su resultado fiscal consolidado; que el demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país; y que se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por las unidades administrativas adscritas a dicha Administración General. Por lo anterior, cuando en el caso no se actualice alguno de los supuestos de excepción, debe estarse a la regla general establecida en el artículo 34, primer párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el cual se dispone que, las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/12/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-224
Incidente de Incompetencia Núm. 809/08-09-01-3/1149/08-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 31 de marzo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 31 de marzo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 18. Junio 2009. p. 613

VI-P-2aS-367
Incidente de Incompetencia Núm. 635/09-18-01-8/415/09-21-01-9/1977/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 230

VI-P-2aS-388
Incidente de Incompetencia Núm. 710/09-05-03-1/1677/09-06-01-1/2070/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 113

VI-P-2aS-389
Incidente de Incompetencia Núm. 1274/09-09-01-9/1060/09-10-01-4/2163/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 septiembre de 2009, por unanimidad

de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 113

VI-P-2aS-390
Incidente de Incompetencia Núm. 2737/08-15-01-4/1343/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 113

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el jueves cinco de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-42

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES, SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LO PACTADO POR LAS PARTES EN UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente en enero de 2008, el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece su Ley Orgánica, entre las que se contemplan las dictadas sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, es decir lo que es materia de dicho juicio es la legalidad de la resolución administrativa combatida, y no así la validez o legalidad del contrato en cuestión. Por ende, si las partes que lo celebraron acuerdan someterse a Tribunales Federales con determinada jurisdicción, renunciando a la que les correspondería en razón de su domicilio que tengan al momento de contratar o uno futuro, para efecto de la interpretación, ejecución y cumplimiento del citado contrato, ello no significa que tal acuerdo de voluntades determine la competencia territorial de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que ésta deriva de la Ley Orgánica mencionada, que fija las bases para determinar la competencia territorial de dichas Salas, sin que se contemple la posibilidad de renuncia a la jurisdicción que corresponda.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/13/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-71
Incidente de Incompetencia Núm. 1523/07-14-01-8/1109/07-S2-10-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de enero de 2008, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Claudia Palacios Estrada.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de mayo de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 9. Septiembre 2008. p. 306

VI-P-2aS-143
Incidente de Incompetencia Núm. 2049/07-13-01-5/387/08-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de octubre de 2008, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Luis Malpica y de Lamadrid.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de octubre de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 14. Febrero 2009. p. 376

VI-P-2aS-144
Incidente de Incompetencia Núm. 2889/07-13-01-9/411/08-S2-10-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de octubre de 2008, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Claudia Palacios Estrada.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de octubre de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 14. Febrero 2009. p. 376

VI-P-2aS-236
Incidente de Incompetencia Núm. 4166/08-11-02-5/2200/08-S2-09-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 7 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. María Teresa Martínez García.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de mayo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 19. Julio 2009. p. 253

VI-P-2aS-380
Incidente de Incompetencia Núm. 1058/08-06-02-6/146/09-S2-10-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Claudia Palacios Estrada.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 99

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el jueves cinco de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-43

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES.- CASO EN EL QUE SE INDICAN DOS DOMICILIOS EN LA DEMANDA.- Conforme al artículo 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal, en vigor a partir del 7 de diciembre de 2007, para determinar la Sala Regional que conocerá del juicio en razón del territorio, debe atenderse al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante o bien, su domicilio particular cuando no cuente con aquel, y se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal, salvo que la parte demandada demuestre lo contrario, de lo cual se deriva que para el caso en que la actora señale como suyos, en cualquier parte de la demanda, dos domicilios, y respecto de uno de ellos especifique que es para oír y recibir notificaciones, si ambos se encuentran comprendidos en diferentes jurisdicciones de las Salas Regionales, el domicilio que debe presumirse como el domicilio fiscal para efectos de determinar la competencia de la Sala Regional que conocerá del juicio por razón de territorio, es el diverso al señalado específicamente para oír y recibir notificaciones.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/14/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-332
Incidente de Incompetencia Núm. 21661/08-17-03-9/222/09-S2-09-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. María Delfina Moreno Flores.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de julio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 122

VI-P-2aS-333
Incidente de Incompetencia Núm. 1576/08-10-01-5/4660/08-06-01-8/1073/09-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de julio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 122

VI-P-2aS-334
Incidente de Incompetencia Núm. 635/09-18-01-8/415/09-21-01-9/1977/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 122

VI-P-2aS-371
Incidente de Incompetencia Núm. 287/09-11-03-1/3858/09-17-08-5/1470/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 48

VI-P-2aS-506
Incidente de Incompetencia Núm. 1547/08-02-01-7/26382/09-17-10-3/125/10-S2-09-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de marzo de 2010, por unanimidad de

5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. David Alejandro Alpide Tovar.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de marzo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 29. Mayo 2010. p. 153

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes treinta y uno de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-44

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL. LOS DOCUMENTOS CERTIFICADOS DE PANTALLA DEL SISTEMA DE CÓMPUTO DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, SON MEDIOS DE CONVICCIÓN PARA LOGRAR DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN LEGAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 34, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- Del referido precepto, en sus párrafos primero y último, se desprende que las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, debiendo presumirse que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal, salvo que la parte demandada demuestre lo contrario. En este sentido, si la autoridad para desvirtuar dicha presunción legal, ofrece como prueba un documento certificado de pantalla del sistema de cómputo del Registro Federal de Contribuyentes, denominado "REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE", tal documento, valorándose en términos de lo dispuesto por los artículos 46, fracción I y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, logra desvirtuar la citada presunción legal, si del mismo se advierte que la demandante tenía manifestado el domicilio fiscal respectivo ante el Servicio de Administración Tributaria al momento de presentarse la demanda, que esa información consta en medios electrónicos y fue impresa para ofrecerse como medio de convicción en el juicio, estimándose fiable el método en que fue generada y archivada en razón de la certificación contenida en la copia exhibida, y que la información relativa es accesible para su ulterior consulta, al obrar en la base de datos de la referida dependencia.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/15/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-339
Incidente de Incompetencia Núm. 30361/08-17-03-5/444/09-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 145

VI-P-2aS-340
Incidente de Incompetencia Núm. 2496/08-11-02-8/780/09-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 145

VI-P-2aS-391
Incidente de Incompetencia Núm. 851/09-12-01-7/1031/09-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 116

VI-P-2aS-392
Incidente de Incompetencia Núm. 31317/08-17-02-9/1787/09-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 8 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 116

VI-P-2aS-476
Incidente de Incompetencia Núm. 13117/09-17-04-8/2851/09-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de febrero de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de febrero de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 28. Abril 2010. p. 117

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes treinta y uno de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-45

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISIS DEL NEXO ENTRE LA MATERIA DEL JUICIO PRINCIPAL Y LA MEDIDA ESPECÍFICA SOLICITADA.- El artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que pueden decretarse las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor; por lo que siendo estos sus objetivos y finalidades resulta claro que tales medidas cautelares guardan una relación estrecha con la materia de la controversia principal de la cual constituyen una cuestión accesoria, por lo que al momento de examinar y resolver sobre su otorgamiento, debe analizarse el nexo entre la materia del juicio y la suspensión solicitada, en la medida en que su dictado sólo tiene sentido si contribuye a preservar esa materia para el efecto de que pueda ejecutarse la sentencia definitiva que llegue a dictarse; y en el supuesto de que no sea así, carece de sustento decretarlas, sin que baste el mero hecho de haber sido solicitadas y estar prevista legalmente la facultad jurisdiccional de concederlas.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/16/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-64
Recurso de Reclamación Núm. 38930/06-17-10-3/44/08-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de marzo de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de marzo de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 8. Agosto 2008. p. 152

VI-P-2aS-347
Recurso de Reclamación Núm. 1941/08-18-01-4/723/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de agosto de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de agosto de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 192

VI-P-2aS-348
Recurso de Reclamación Núm. 10883/08-17-09-1/817/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de agosto de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de agosto de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 192

VI-P-2aS-400
Recurso de Reclamación Núm. 5183/07-17-03-8/670/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de octubre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 157

VI-P-2aS-456
Recurso de Reclamación Núm. 24662/06-17-02-6/1406/07-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de enero de 2010, por unanimidad de 5 votos a

favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de enero de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 358

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes treinta y uno de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-46

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VIOLACIÓN PROCESAL EN LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE PETICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. CASO EN QUE LA OMISIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR DE REQUERIR UN INFORME A LA AUTORIDAD A QUIEN SE IMPUTE EL ACTO ADMINISTRATIVO, ES INSUFICIENTE PARA REVOCAR LA SENTENCIA COMBATIDA VÍA RECURSO DE RECLAMACIÓN.- En términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción VIII de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la suspensión solicitada por la parte actora se tramitará por cuerda separada y con arreglo a las disposiciones del Capítulo III de la propia ley, relativo a las Medidas Cautelares y en el cual se encuentra inserto el artículo 25, cuyo primer párrafo establece que en auto admisorio del incidente, el Magistrado Instructor ordenará correr traslado a quien se impute el acto administrativo, para que rinda un informe en el plazo de tres días, transcurrido el cual con informe o sin él, la Sala Regional deberá dictar la resolución definitiva dentro del plazo de cinco días. En esa virtud, si se dicta la resolución sin requerirse a la autoridad para que rinda su informe relativo, ello constituye una violación procesal, sin embargo, por sí sola, no es suficiente para revocar la sentencia interlocutoria combatida vía recurso de reclamación, si el único efecto de tal determinación sería que se repusiera el procedimiento para que la Sala Regional considerara el informe que, en su caso, hubiera rendido la autoridad, toda vez que las Secciones de la Sala Superior pueden resolver tanto los planteamientos en él contenidos, así como los vertidos en el recurso y, según proceda, confirmar o revocar la interlocutoria cuestionada por algún aspecto sustantivo propio de la medida cautelar que se hubiere otorgado.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/17/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-387
Recurso de Reclamación Núm. 33216/07-17-02-1/1089/09-S2-06-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 108

VI-P-2aS-425
Recurso de Reclamación Núm. 22384/08-17-02-7/420/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 1 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 239

VI-P-2aS-426
Recurso de Reclamación Núm. 31868/08-17-08-1/2209/09-S2-06-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de octubre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión 20 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 240

VI-P-2aS-427
Recurso de Reclamación Núm. 34337/08-17-02-7/2587/09-S2-06-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 19 de noviembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de noviembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 240

VI-P-2aS-446
Recurso de Reclamación Núm. 23053/08-17-10-7/2022/09-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de noviembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Thelma Semíramis Calva García.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de noviembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 340

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes treinta y uno de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-47

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SUSPENSIÓN EN MATERIA DE REGISTRO MARCARIO.- NO PROCEDE SOBRE RESERVA DE DERECHOS DE PRELACIÓN.- Cuando el demandante en el juicio contencioso administrativo solicita la medida cautelar con el propósito de que la fecha de presentación de su solicitud de registro marcario, que fue negada en la resolución impugnada, sea citada y oponible como anterioridad a las solicitudes de registros de terceros en términos del artículo 121 de la Ley de Propiedad Industrial, no procede otorgarla en virtud de que implicaría que fuese declarada la restitución de un derecho preexistente a la emisión del acto materia del juicio, atento a que la suspensión no tiene otro efecto que el de mantener la situación de hecho existente antes de la interposición de la demanda ante el Tribunal.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/18/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-213
Recurso de Reclamación Núm. 4015/06-17-03-3/1824/08-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de enero de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de marzo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 18. Junio 2009. p. 472

VI-P-2aS-255
Recurso de Reclamación Núm. 37717/06-17-07-5/2176/08-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de abril de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1

voto en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.
(Tesis aprobada en sesión de 23 de abril de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 21. Septiembre 2009. p. 113

VI-P-2aS-312
Recurso de Reclamación Núm. 29048/06-17-06-7/1933/09-S2-09-09-05 (actual 323/08-EPI-01-4).- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de junio de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto más con los resolutivos.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Karla Guadalupe Magallón Cuevas.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de junio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 174

VI-P-2aS-342
Recurso de Reclamación Núm. 1126/08-EPI-01-5/668/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de julio de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de julio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 152

VI-P-2aS-459
Recurso de Reclamación Núm. 1350/08-EPI-01-9/994/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de enero de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de enero de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 364

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes treinta y uno de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-48

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SUSPENSIÓN CONTRA EL CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE NEGARSE, CUANDO ÉSTE SE DECRETE POR EL USO A TRAVÉS DE INSTALACIONES QUE ALTEREN O IMPIDAN EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL O DE MEDIDA.- Los artículos 1°, 2°, 7°, 8°, y 21 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, establecen que es una actividad exclusiva del Estado generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica; que todos los actos relacionados con el servicio público de energía eléctrica son de orden público y que la prestación de tal servicio público se realiza a través de la Comisión Federal de Electricidad, quien deberá mantener sus instalaciones en forma adecuada, para la prestación del servicio en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad. A su vez, el artículo 26, fracción II de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en relación con el artículo 35, fracción II de su Reglamento, prevén la procedencia del corte de suministro de energía eléctrica, cuando su uso se efectúe a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida. Por lo anterior, si el corte del suministro de energía eléctrica ordenado en la resolución impugnada tiene sustento en la alteración de las instalaciones de los instrumentos de medida de dicho servicio, a que se refieren los artículos 26, fracción II y 35, fracción II aludidos, con arreglo a lo dispuesto por el diverso 29, fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe negarse la suspensión solicitada, pues de lo contrario se causaría perjuicio al interés social, ya que la sociedad está interesada en que el servicio público de energía eléctrica, cuyos ingresos constituyen parte de la riqueza nacional, se preste por el Estado con estricto apego a las normas técnicas y de seguridad que lo regulan; además, se contravendrían disposiciones de orden público, como son las relacionadas con el servicio de energía eléctrica.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/19/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-225
Recurso de Reclamación Núm. 2003/08-03-01-8/2144/08-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de abril de 2009, por unanimidad de 5 votos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de abril de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 18. Junio 2009. p. 618

VI-P-2aS-260
Recurso de Reclamación Núm. 1651/08-06-01-9/518/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de mayo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 21. Septiembre 2009. p. 142

VI-P-2aS-261
Recurso de Reclamación Núm. 2667/08-03-01-3/825/09-S2-06-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, en sesión de 11 de junio de 2009, por unanimidad de 4 votos.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de junio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 21. Septiembre 2009. p. 142

VI-P-2aS-324
Recurso de Reclamación Núm. 1318/08-19-01-2/402/09-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de agosto de 2009, por unanimidad de 5 votos.- Magistra-

do Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretario: Lic. Luis Edwin Molinar Rohana.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de agosto de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 198

VI-P-2aS-483
Recurso de Reclamación Núm. 1730/09-03-01-8/2961/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de febrero de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de febrero de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 28. Abril 2010. p. 130

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes treinta y uno de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-49

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.- ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO EXENTO DE LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL.- Si en el juicio contencioso administrativo promovido por el organismo público descentralizado PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN en contra de la determinación de un crédito fiscal, se solicita la suspensión de su ejecución, la Sala del conocimiento debe conceder la medida cautelar sin exigir a la actora la presentación de garantía del interés fiscal; sin perjuicio de lo previsto en los artículos 141, 142 y 144 del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior, por virtud de que la empresa actora es un organismo descentralizado de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de acuerdo al artículo 3° de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; que en términos del artículo 14 del propio ordenamiento, queda exceptuado de otorgar la garantía que los ordenamientos legales le exijan, aun en los casos de controversias judiciales.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/20/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-369
Recurso de Reclamación Núm. 26187/08-17-09-3/752/09-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 43

VI-P-2aS-370
Recurso de Reclamación Núm. 26691/08-17-02-3/1780/09-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Thelma Semíramis Calva García.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 43

VI-P-2aS-428
Recurso de Reclamación Núm. 26683/08-17-09-9/1111/09-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de noviembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Karla Guadalupe Magallón Cuevas.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de noviembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 242

VI-P-2aS-429
Recurso de Reclamación Núm. 26687/08-17-09-3/1378/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de noviembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Manuel Ángel Sánchez.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de noviembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 242

VI-P-2aS-469
Recurso de Reclamación Núm. 4282/08-17-03-7/384/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-

tiva, en sesión de 21 de enero de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de enero de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 28. Abril 2010. p. 99

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes treinta y uno de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-50

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

SUSPENSIÓN. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, TRATÁNDOSE DE INFRACCIONES GRAVES O CASOS DE REINCIDENCIA.- En el caso de que se solicite la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada consistente en la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el sector público, a partir de un año, y en tal resolución se precisa que el servidor público es reincidente, para la determinación de la procedencia o no de la concesión de la medida suspensiva, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el cual señala en su último párrafo, que no procederá la suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando se trate de infracciones graves o casos de reincidencia, por lo que de otorgarse la suspensión solicitada, en estos dos supuestos, se contravendrían disposiciones de orden público, ante la prohibición expresa de la norma legal aplicable al caso concreto; esto es, si se surte la hipótesis legal, se tiene que aplicar la consecuencia jurídica ahí prevista, que en el caso es, que no se otorgue la suspensión de la ejecución de la resolución que impone una sanción, cuando se trate de infracciones graves o sea reincidente el servidor público; de ahí que al configurarse esta última hipótesis, el actor tiene la carga probatoria para desvirtuar la afirmación de la autoridad de que es reincidente. De acuerdo con lo anterior, si el actor es reincidente en la imposición de una infracción administrativa, es evidente que debe negarse la medida cautelar solicitada.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/21/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-108
Recurso de Reclamación Núm. 29337/06-17-07-4/212/08-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1º de julio de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Ponencia asumida por el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 12 de agosto de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 11. Noviembre 2008. p. 548

VI-P-2aS-374
Recurso de Reclamación Núm. 2778/08-06-02-6/935/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de agosto de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 77

VI-P-2aS-375
Recurso de Reclamación Núm. 2510/08-13-02-8/1531/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1º de septiembre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y un voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 1º de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 77

VI-P-2aS-376
Recurso de Reclamación Núm. 26265/06-17-04-6/2100/08-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 10 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos.- Magistrado Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 77

VI-P-2aS-499
Recurso de Reclamación Núm. 22808/08-17-11-7/1013/09-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de enero de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Claudia Palacios Estrada.- Encargado del engrose: Magistrado Luis Carballo Balvanera.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de enero de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 29. Mayo 2010. p. 127

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes treinta y uno de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-51

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.- CASO EN QUE SURTE TODOS SUS EFECTOS, SI EL INTERESADO ACREDITA HABER MANIFESTADO GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA Y ÉSTA NO CALIFICA SU PROCEDENCIA.- Los artículos 141 y 142, fracción I, del Código Fiscal de la Federación posibilitan a los causantes de un crédito fiscal, acudir ante la autoridad exactora a solicitar la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, siempre y cuando garanticen el interés fiscal mediante alguna de las formas establecidas en el primero de los mencionados preceptos, y cumplan los requisitos que para cada una de esas formas establece el reglamento de dicho código. El artículo 68 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación establece que ante el ofrecimiento de la garantía del interés fiscal, cualquiera que fuese su naturaleza, la autoridad fiscal debe calificarla, en su caso aceptarla, y tramitarla. Ahora bien, si en el juicio contencioso administrativo el interesado en obtener la medida cautelar suspensiva a que se refiere el artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, acredita que ofreció la garantía del interés fiscal ante la autoridad competente en los términos ordenados por el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, sin que la citada autoridad acredite haber dado cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 68 antes referido, la suspensión de la ejecución del acto impugnado surte todos sus efectos desde que el fallo que la concede es notificado a las partes. De pretender lo contrario se limitaría la efectividad de la medida cautelar suspensiva, atendiendo a causas que no resultan imputables al solicitante y sobre las cuales no tiene control alguno.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/22/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-287
Recurso de Reclamación Núm. 17477/08-17-09-4/451/09-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de junio de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Manuel Ángel Sánchez.
(Tesis aprobada en sesión de 30 de junio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 21. Septiembre 2009. p. 191

VI-P-2aS-368
Recurso de Reclamación Núm. 29591/07-17-10-4/2126/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 209

VI-P-2aS-433
Recurso de Reclamación Núm. 1446/08-17-09-6/891/09-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de noviembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Thelma Semíramis Calva García.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de noviembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 251

VI-P-2aS-454
Recurso de Reclamación Núm. 13802/08-17-04-9/2816/09-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 19 de enero de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. David Alejandro Alpide Tovar.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de enero de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 354

VI-P-2aS-521
Recurso de Reclamación Núm. 36139/07-17-11-9/1773/09-S2-06-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de abril de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de abril de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 183

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el jueves nueve de septiembre de dos mil diez.- Firman para constancia, Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-2aS-52

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA. EL DOMICILIO CONTENIDO EN LA CREDENCIAL EMITIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, NO DESVIRTÚA LA PRESUNCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- El primer párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal dispone que, las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante. A su vez, el último párrafo del propio artículo 34 dispone que, se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal salvo que la parte demandada demuestre lo contrario. En esos términos, no es ajustado a derecho que, las Salas Regionales se declaren incompetentes para conocer del juicio considerando para ello que, del contenido de la credencial para votar se desprende el domicilio fiscal del demandante, ya que este documento se expide por el Instituto Federal Electoral para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, de conformidad con los artículos 176 y 180 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se emite conforme al domicilio señalado por los ciudadanos, mientras que, el domicilio fiscal de las personas físicas se determina en el artículo 10, fracción I del Código Fiscal de la Federación en los siguientes términos: a) si la persona física realiza actividades empresariales, se considera domicilio fiscal el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios; b) cuando la persona física no realice actividades empresariales, se considera domicilio fiscal el local utilizado para el desempeño de sus actividades; c) por último, en los casos en que la persona física realice las actividades anteriores sin contar con un local, se considera que su domicilio fiscal se localiza en su casa habitación. Por tanto, ante la omisión del demandante de precisar en la demanda su domicilio fiscal, debe considerarse el domicilio señalado en la demanda para efectos de determinar la competencia de la Sala que debe

conocer del juicio, conforme a la presunción *iuris tantum* establecida en el último párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal Federal.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/23/2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-266
Incidente de Incompetencia Núm. 24906/08-17-09-3/257/09-08-01-7/834/09-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de mayo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 21. Septiembre 2009. p. 149

VI-P-2aS-304
Incidente de Incompetencia Núm. 20136/08-17-06-7/8445/08-11-02-7/2134/08-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de marzo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de junio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 161

VI-P-2aS-305
Incidente de Incompetencia Núm. 3359/08-01-01-4/417/09-02-01-9/1417/09-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de agosto de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de agosto de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 161

VI-P-2aS-404
Incidente de Incompetencia Núm. 15282/09-17-10-3/2391/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de octubre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 164

VI-P-2aS-405
Incidente de Incompetencia Núm. 42/09-17-04-5/1471/09-13-02-4/2250/09-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 164

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes catorce de septiembre de dos mil diez.- Firman para constancia, Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SEGUNDA PARTE

PRECEDENTES DE SALA SUPERIOR

PLENO

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-SS-331

PRECLUSIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. OPORTUNIDAD PARA FORMULAR AGRAVIOS, EN CONTRA DE LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.- La preclusión es uno de los principios que rigen el juicio contencioso administrativo, el cual está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados; por lo que se actualiza la misma, si del escrito de demanda se desprende que el actor conoce la resolución impugnada y no endereza en sus conceptos de impugnación agravios en contra de su notificación, sino que los formula hasta la ampliación a la demanda, lo que impide entrar a su estudio y resolución por el juzgador, pues conforme al artículo 16, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se alegue que la resolución impugnada no fue notificada o que lo fue ilegalmente, los agravios en contra de su notificación deberán hacerse valer en la demanda.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12175/07-17-02-5/1547/09-PL-03-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de noviembre de 2009, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro Godínez.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

En esos términos, esta Juzgadora una vez analizadas las manifestaciones de las partes y valoradas las constancias que obran en autos, considera que son **fundadas** las causales de improcedencia que plantea la autoridad demandada, de conformidad con los siguientes razonamientos de ley.

En principio, se tiene que no le asiste la razón a la actora cuando sostiene que en su escrito de demanda controvirtió **las actas de notificación de los créditos fiscales números 2169636, 2169637, 2169638, 2169639, 2169640 y 2169641**, puesto que del análisis y estudio que se realiza del escrito inicial de demanda, el cual obra a fojas 1 a 16 del expediente en que se actúa, se constata que efectivamente, como lo asevera la demandada, dicha actora no expresa agravio alguno en contra de esas actas de notificación levantadas por personal de la Administración Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal, pues en dicha demanda manifiesta expresamente lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De lo anterior se constata, que si bien es cierto la empresa actora señala como "**ACTO IMPUGNADO**" tanto la resolución liquidatoria contenida en el oficio N° 326-SAT-A25-IV-(8).- 12165, como las actas de notificación de los créditos fiscales números 2169636, 2169637, 2169638, 2169639, 2169640 y 2169641, y como "**AUTORIDADES DEMANDADAS**" a la Administración Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal, entre otras, también lo es que no expresa agravio o consideración alguna en contra de dichas actas de notificación o de la propia diligencia de notificación, por lo que la simple cita de que impugna las referidas actas de notificación, no es suficiente para que se les pueda considerar como tal.

En efecto, la enjuiciante no puede sostener que impugnó los actos de notificación relativos a los créditos aludidos, con la simple mención que realiza en el proemio de su demanda, pues era necesario para demostrar los extremos de sus pretensiones que señalara las razones, causas y motivos por las que consideraba que las diligencias de notificación realizadas por la Administración Local de Recaudación eran ilegales o se habían realizado en contravención de los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación.

Esto es, si la actora consideró que las actas de notificación eran ilegales, y por ello las señaló como actos impugnados en su demanda, la misma tenía la obligación de externar argumentos en contra de esas actas a fin de demostrar su ilegalidad o que en su levantamiento no se habían observado las formalidades esenciales del procedimiento, pero, se insiste, ninguno de sus argumentos o agravios se encuentran enderezados en ese sentido, ni tampoco niega conocer la resolución impugnada, sino que por el contrario, la identifica como acto impugnado.

Efectivamente, es claro para esta Juzgadora que la actora no impugnó por sus propios motivos y fundamentos las actas de notificación de fecha 26 de enero de 2007, ni tampoco manifestó que desconocía el oficio determinante del crédito, prueba de ello es que lo señaló también como acto impugnado y lo ofreció como prueba de su parte, así como las actas de notificación referidas.

Además, el hecho de que en su escrito denominado “MANIFESTACIONES DE DERECHO” y en su ampliación a la demanda, niegue lisa y llanamente que no se le notificó el documento determinante del crédito, tampoco puede ser tomado como una impugnación, puesto que tales argumentos sólo podían hacerse valer en su escrito inicial de demanda, por así disponerlo el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es del tenor siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De la lectura al transcrito artículo, se advierte que cuando la actora alegue que la resolución impugnada no le fue notificada o que lo fue ilegalmente, si afirma conocer la resolución administrativa podrá hacer valer en su demanda los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, y si manifiesta que no la conoce, señalará la autoridad a quien le atribuye su notificación, y al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y su notificación, a fin de que la actora la pueda combatir mediante la ampliación a la demanda.

En el presente caso, si bien es cierto la actora no señala expresamente que conoce el acto impugnado, también lo es que no aduce desconocerlo, puesto que, como antes se dijo, lo señala como acto impugnado y lo ofreció como prueba en el inciso e) del capítulo correspondiente de su demanda, en el que lo identifica como "*... **copia simple de Determinación de Situación Fiscal número 326-SAT-A25-IV-(8).- 12165.***", además de que sus agravios están encaminados a combatir dicha resolución, pues inclusive en la foja 3 de su demanda transcribe el resumen de los impuestos que a través de dicho oficio 12165, se determinaron como impuestos omitidos y las multas y recargos que fueron liquidados por la demandada, en los siguientes términos:

[N.E. Se omite transcripción]

Con lo anterior, se constata plenamente que la actora a la fecha en que presentó su escrito inicial de demanda, tenía pleno conocimiento de la resolución impugnada e inclusive así lo afirma al sostener en su apartado de ALEGATOS lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

En tal virtud, es claro que si consideró esa actora que las actas por las que se notificó la resolución impugnada no eran legales, debió expresar conceptos de impugnación contra dicha notificación en su demanda, por así exigirlo el citado artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; sin embargo,

como antes se dijo, no hay ningún concepto de impugnación contra dichas actas de notificación, ni contra la propia notificación.

Por lo que si esos agravios se hicieron valer hasta la ampliación a la demanda, en la que dicha actora niega lisa y llanamente que se le hubiere notificado la resolución liquidatoria y dice desconocerla, es claro que los mismos no pueden ser tomados en cuenta, porque su derecho a hacerlos valer precluyó y esa actitud omisa por parte del actor, le trae como consecuencia la pérdida de ese derecho.

Esto es así, pues el fenómeno de la preclusión procesal lleva inmersos los siguientes objetivos:

a) Que el proceso se desarrolle mediante un orden determinado, lo que sólo se consigue impidiendo mediante ella, que las partes ejerciten sus facultades procesales en cualquier momento, sin sujeción a principio temporal alguno.

b) Que el proceso esté constituido por diversas secciones o periodos, dedicados cada uno de ellos al desenvolvimiento de determinadas actividades. Concluido cada periodo no es posible retroceder al anterior. Así se logra en nuestro derecho que la primera parte del proceso esté consagrada a formar la litis, la segunda a ofrecer pruebas, la tercera a rendirlas, la cuarta a producir alegatos, la quinta al pronunciamiento de la sentencia y la sexta a la vía de apremio. En otras palabras, la preclusión engendra lo que los procesalistas modernos llaman “fases del proceso”.

c) Que las partes ejerciten en forma legal sus derechos y cargas procesales, es decir, no sólo dentro del término que para ello fije la ley, sino también con las debidas formalidades y requisitos (ejemplo: presentación de documentos conjuntamente con la demanda).

d) Por haberse ejercido válidamente esa facultad (consumación propiamente dicha, ejemplo: la propuesta de excepción de falta de personalidad y su resolución, impiden su nueva oposición).

En esos términos, el respeto a la preclusión procesal tiene por finalidad el llevar un orden del procedimiento y una sujeción a términos, para evitar que no pueda arribarse a su conclusión, así como imponer los límites que de no ser observados, producen la pérdida de una facultad procesal.

Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 21/2002 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos catorce del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Novena Época, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, la cual establece:

> "**PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.**"[N.E. Se omite transcripción]

En esos términos, puede advertirse que la preclusión es uno de los principios que rigen el juicio, el cual está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados; esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejercerse nuevamente.

Esta institución tiende a regular el desarrollo de la relación procesal otorgándole precisión y firmeza para hacer posible la declaración definitiva de los derechos y para garantizar su exacto cumplimiento. En efecto, todo proceso, para asegurar la precisión y la rapidez en el desenvolvimiento de los actos judiciales, limita el ejercicio de determinadas facultades procesales, con la consecuencia de que fuera de esos límites tales facultades ya no puedan ejercitarse.

Así entonces, si el actor no señaló en su demanda que desconocía el oficio liquidatorio y sólo adujo que las actas de notificación del mismo eran ilegales, pero sin expresar conceptos de impugnación en contra de esas actas, es claro que no

cumplió con la carga de hacer valer su derecho en tiempo y por ello perdió la oportunidad para ejercitarlo posteriormente en su ampliación a la demanda.

Resulta aplicable al caso la siguiente tesis jurisprudencial emitida por el Poder Judicial Federal, la cual aun cuando se refiere al artículo 209 Bis del Código Fiscal de la Federación, puede ser aplicada para este caso, puesto que el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contiene la misma hipótesis normativa que dicho artículo 209 Bis:

> "**PRECLUSIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA, QUE PUDIERON ESGRIMIRSE EN EL ESCRITO INICIAL, Y QUE NO SE FORMULARON POR ALEGAR EL ACTOR, INDEBIDAMENTE, DESCONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F., Tomo XXVII. Novena Época. Tesis: VI.3o.A. J/67. pág. 911]

En términos de lo antes resuelto, si la resolución impugnada fue de su conocimiento el 26 de enero de 2007 y ello queda debidamente demostrado con los conceptos de impugnación que esgrimió contra la misma en su demanda, y con el hecho de que la ofreció como prueba de su parte, es innegable que conforme a lo previsto en el transcrito artículo 16, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se le debe tener por sabedora de dicha resolución desde esa fecha.

Lo anterior es así, pues la finalidad de lo dispuesto en dicho artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, consiste por un lado, en otorgar la posibilidad a los demandantes de que esgriman conceptos de impugnación en contra del acto impugnado desconocido, cuando al contestar la demanda se les dé a conocer; pero por el otro, analizar si es dable esa ampliación, en el supuesto de que se demuestre que la parte actora, contrario a su dicho, tuvo conocimiento del acto impugnado con anterioridad a la presentación de la demanda.

Además, debe precisarse que esta Juzgadora no soslaya el hecho de que si bien es cierto las notificaciones de los actos administrativas están sujetas a una serie de formalidades previstas en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, que deben cumplir estrictamente las autoridades administrativas a fin de lograr que el destinatario tenga conocimiento del acto que le pueda ocasionar una afectación en su interés jurídico, también lo es que si ese destinatario no esgrime conceptos de impugnación contra esa notificación y a través de sus argumentos se constata que conoce el acto de autoridad que le causa un perjuicio, se debe concluir que dicha notificación cumplió con su cometido, por lo que tal situación no podría ser ignorada en este caso, máxime que, se insiste, el actor no manifestó en su demanda que desconociera la resolución liquidatoria, sino que por el contrario, con sus argumentos y conceptos de impugnación que esgrime en dicha demanda, manifestó conocerla e incluso la ofreció como prueba de su parte, en el capítulo correspondiente de la demanda.

Por lo que, ante la falta de argumentos esgrimidos en la demanda en contra de las actas de notificación levantadas por la Administración Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal, las cuales obran a fojas 35 de autos por haber sido ofrecidas por la propia actora, esta Juzgadora se abstiene de entrar a su análisis, puesto que no se tienen como actos impugnados.

Así, ante el supuesto aquí analizado, consistente en que la actora tuvo conocimiento del acto combatido con fecha 26 de enero de 2007, por lo que dicha notificación se tiene como legal, este Tribunal debe atender a lo dispuesto en la causal de improcedencia que plantea la demandada en el sentido de que la resolución impugnada resulta ser un acto consentido, porque no se impugnó dentro del plazo establecido en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso que establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

En el presente caso se actualiza el supuesto establecido en el inciso a) de dicho artículo 13, por lo que si ha quedado antes resuelto que a la empresa actora le fue notificada la resolución impugnada el día viernes 26 de enero de 2007, es claro que la

misma surtió sus efectos el lunes 29 del referido mes y año, por lo que el plazo de 45 días empezó a correr el martes 30 del mismo mes y año, y descontando los días sábados y domingos, así como el 05 de febrero, el 19 de marzo y los días 4, 5, y 6 de abril, todos de 2007, que fueron declarados inhábiles mediante el Acuerdo G/1/2007, emitido por el Pleno de este Tribunal, **concluyó dicho plazo el 9 de abril de 2007;** sin embargo, fue hasta el día **27 de abril de 2007**, en que se presentó la demanda, tal y como se desprende del sello que obra en el escrito inicial de demanda, esto es, fuera del plazo de los 45 días con que contaba la hoy actora.

En esos términos, es claro que la resolución impugnada resulta ser un acto consentido, por lo que se ubica en la fracción IV del artículo 8° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso que establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

En conclusión, al ser fundadas las causales de improcedencia que planteó la autoridad demandada, procede sobreseer el presente juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 9 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos 8, fracciones IV y X, y 9, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- Resultaron fundadas las causales de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas; en consecuencia;

II.- Se sobresee el presente juicio.

III.- **NOTIFÍQUESE.**

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de **once de noviembre de dos mil nueve**, por

unanimidad de 9 votos a favor de los CC. Magistrados Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas, Guillermo Domínguez Belloc y Silvia Eugenia Díaz Vega. Estuvieron ausentes los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y Francisco Cuevas Godínez.

Fue Ponente en el presente asunto, el Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, cuya ponencia se aprobó.

Se formuló el presente engrose el **veintitrés de noviembre de dos mil nueve** y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción V y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firman el C. Magistrado Francisco Cuevas Godínez Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos que da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-SS-332

ERRORES MECANOGRÁFICOS DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- El precepto mencionado establece, en su tercer párrafo, que las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del nombre de la parte actora en que se incurre en el escrito de demanda, así como cualquier otro error mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio contencioso administrativo o de las cuestiones incidentales y de trámite previstas en la referida Ley, evitándose de esa forma caer en rigorismos excesivos que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio o la promoción correspondiente se interponen en la forma y dentro de los plazos establecidos para cada caso concreto.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4302/08-06-02-2/2281/09-PL-06-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de noviembre de 2009, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- Esta juzgadora toma en cuenta que mediante oficio 600-48-2009-(01)-6248, presentado en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales del Noreste el 11 de agosto de 2009, el Administrador Local Jurídico de Monterrey del Servicio de Administración Tributaria en representación de la autoridad demandada, planteó una causal de improcedencia y sobreseimiento relativa a la falta de afectación del interés jurídico del demandante en términos de los artículos 8, fracción I, y 9, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, manifestando que la resolución impugnada se encuentra dirigida a DISTRIBUIDORA KSHER, S.A. DE C.V., mientras que la empresa enjuiciante es DISTRIBUIDORA KISHER, S.A. DE C.V., según se señaló en la primera hoja del escrito de demanda.

Al respecto este Pleno estima que el planteamiento de la demandada es del todo extemporáneo en razón de que se formuló una vez cerrada la instrucción del juicio (lo cual ocurrió el 1° de junio de 2009), y si bien existen criterios del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que las cuestiones de procedencia pueden argumentarse incluso en la etapa de alegatos, no existe sustento legal para que tales planteamientos puedan hacerse en cualquier momento con posterioridad al cierre de instrucción.

No obstante lo anterior, este Pleno estima que como las cuestiones de procedencia del juicio pueden ser analizadas incluso oficiosamente por parte del Tribunal, consecuentemente es necesario hacer un pronunciamiento respecto del interés jurídico de la demandante.

Del análisis de los autos del juicio en que se actúa se advierte que la actora incurrió en una imprecisión en cuanto a su denominación, lo cual obedece a un mero error mecanográfico que no trasciende, pues la resolución impugnada, los documentos emitidos en el procedimiento del que deriva y la escritura pública exhibida por el

promovente para acreditar su personalidad en el juicio, contemplan el nombre correcto DISTRIBUIDORA KSHER, S.A. DE C.V., y sólo es en la primera hoja del escrito de demanda que se dice DISTRIBUIDORA KISHER, S.A. DE C.V., lo que se insiste, es un simple error mecanográfico de poca importancia que puede ser corregido en este fallo conforme lo permite el artículo 50, tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aplicado por analogía y mayoría de razón; lo que se robustece con la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

> Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Tesis: P. XLVIII/98, Pagina: 69:
>
> "**ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO.**" [N.E. Se omite transcripción]
>
> [...]

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 14, fracciones I y XIII, y 18, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, se resuelve:

R E S O L U T I V O S

I.- Es infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento examinada de oficio por esta Juzgadora; por lo que no se sobresee el juicio.

II.- Resultó fundada la causal de ilegalidad analizada de oficio, por lo tanto:

III.- Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, precisada en el Resultando 1° de este fallo, por las razones expuestas en el último considerando del mismo.

IV.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 23 de noviembre de 2009, por mayoría de 10 votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas, Guillermo Domínguez Belloc y Francisco Cuevas Godínez, y 1 voto en contra de la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado Alfredo Salgado Loyo, cuya ponencia fue aprobada.

Se formuló el presente engrose el 9 de diciembre de 2009 y con fundamento en los artículos 30, fracción V, y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del propio Tribunal, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-333

DERECHO DE PRIORIDAD CONTEMPLADO EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- SÓLO SE ACTUALIZA CUANDO SE TRATA DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE UNA MISMA MARCA.- Los artículos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad Industrial, disponen que cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero; y que para reconocer esa prioridad se deberán satisfacer los requisitos consistentes en que, al solicitar el registro, se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen, así como la fecha de presentación de la solicitud en ese país, además de que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, y que se cumplan los requisitos que señalan los tratados internacionales, la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud. Sin embargo, lo dispuesto por los preceptos en cita no se actualiza, y por ende no procede reconocer como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud de registro de marca en el extranjero, si en ésta se reclamaron determinados colores como distintivos de la marca, mientras que en la solicitud presentada posteriormente en nuestro país, dichos colores no fueron reclamados como característica distintiva de la marca, aún y cuando la figura protegida en ambos casos sea exactamente la misma. Lo anterior, en virtud de que no se trata de la misma marca sino de marcas distintas, por lo que si bien los artículos en comento sólo establecen como razones para negar el reconocimiento del derecho de prioridad, la adición o ampliación de los productos o servicios solicitados originalmente en el extranjero, ello no quiere decir que la variación de colores en la marca no pueda ser impedimento para negar el reconocimiento del derecho de prioridad, pues cuando los colores de la marca son reclamados en el extranjero como una característica distintiva de la misma, es evidente que si en la solicitud presentada luego en nuestro país no se reclama

esa característica, no puede decirse que se trate de la misma marca, aún y cuando en ambos casos se ampare la misma figura, por lo que en ese supuesto resulta improcedente el reconocimiento de prioridad a que se refieren los artículos en cita, los cuales claramente aluden a "un registro de marca" cuya solicitud se presenta en México y en otros países, para que pueda reconocerse la prioridad respectiva.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1905/08-EPI-01-3/1761/09-PL-06-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de enero de 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Instructor: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

A juicio de este Pleno el único concepto de impugnación que hace valer la parte actora es **INFUNDADO**.

La resolución impugnada visible en autos a fojas 9 y 10, consiste en lo siguiente:

[N.E. Se omiten imágenes]

Como se advierte de la reproducción precedente, la autoridad demandada resolvió en el acto combatido en este juicio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad Industrial, que no resulta posible el reconocimiento al derecho de prioridad reclamado por la demandante en virtud de que de la documentación que obra en el expediente del registro de marca 859652, en

particular de la traducción al documento anexo al escrito ingresado ante la autoridad el 22 de septiembre de 2004 y al que correspondió el folio de entrada 158545, consistente en copia certificada de la solicitud de registro presentada en el extranjero y en base a la cual reclama el reconocimiento del derecho de prioridad contemplado en los artículos ya mencionados, se advierte que no existe una plena coincidencia entre el signo propuesto a registro en nuestro país y aquél que para los mismos efectos fue presentado en el extranjero.

Asimismo, se indica en la resolución impugnada que si bien es cierto existe una coincidencia entre los elementos gráficos que componen tanto el diseño plasmado en la solicitud ingresada en el extranjero, como en el que se visualiza en la solicitud presentada en México, esa coincidencia no se hace extensiva a los colores que los conforman, pues mientras en el primero fueron reclamados los colores rojo y gris como una característica distintiva de la marca, el segundo fue solicitado y registrado en blanco y negro, y por tanto no se trata del mismo signo.

Ahora bien, los artículos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad Industrial en que se apoyó la autoridad para negar a la actora el reconocimiento de derecho de prioridad que solicita, disponen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Los artículos reproducidos establecen en la parte que interesa que cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero; y que para reconocer la prioridad mencionada se deberán satisfacer los requisitos consistentes en que al solicitar el registro, se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país, así como que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida sólo

a los presentados en el país de origen, y finalmente, que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos que señalan los tratados internacionales, la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

En el caso, los documentos relativos a la solicitud de registro de marca y de la reclamación del derecho de prioridad planteada por la actora, que dieron origen al procedimiento correspondiente y del que deriva la resolución impugnada en este juicio, se encuentran visibles en autos a fojas 12 a 41, y consisten en lo que se reproduce a continuación:

[N.E. Se omiten imágenes]

De lo anterior se advierte que, por una parte, la solicitud de registro de marca presentada por la actora ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 18 de agosto de 2004, se refiere a un signo distintivo denominado "SIN DENOMINACIÓN", indicándose como tipo de marca "Innominada", y señalándose así mismo que no se ha usado; igualmente, se reclama en la solicitud de que se trata el derecho de prioridad indicando para ello como país de origen E.U.A., como número 78/382,660 y como fecha de presentación de la prioridad, el 11 de marzo de 2004.

Por otra parte, también se desprende que con fecha 24 de noviembre de 2004, se expidió a la parte actora el título de registro de marca 859652, en el que se indica que el tipo de marca es INNOMINADA, el signo distintivo, "Diseño", y la clase 39, que se aplica a "SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA; TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS Y CARGA POR AIRE; SERVICIOS RELACIONADOS DE VIAJE, EN ESPECIAL LLEVAR A CABO RESERVACIONES Y VENTA DE BOLETOS PARA TRANSPORTACIÓN POR AEROPLANO Y ARRENDAMIENTO DEL MISMO; OFRECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIAJERO FRECUENTE; SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEEN INFORMACIÓN DE VIAJES POR MEDIO DE RED MUNDIAL DE CÓMPUTO EN RELACIÓN CON LA TRANSPORTACIÓN DE PERSONAS Y BIENES; SERVICIOS EN LA TERMINAL DE AEROPUERTOS."

Igualmente, se precisa en el título de registro de marca de referencia que el expediente es el 672442 y la fecha de presentación el 18 de agosto de 2004.

Ahora bien, en cuanto a la diversa solicitud de marca 78/382, 660, presentada en los Estados Unidos de América, con fecha 11 de marzo de 2004, se advierte de la misma que los colores reclamados son el rojo y el gris como una **característica distintiva** de la marca, la cual a su vez se describe textualmente de la siguiente manera: "*La marca consiste de La (sic) marca está en la forma de una cola de aeroplano, el campo de la cola es el color rojo hay un círculo parcial en gris en el campo rojo y hay un triángulo gris en el campo rojo señalando el punto de la brújula noroeste en el círculo parcial gris.*"

Así mismo, la referida marca cuya solicitud de registro se presentó en los Estados Unidos de América, pertenece igualmente a la clase internacional 039 con la misma descripción de servicios que ya ha quedado mencionada.

De todo lo antes expuesto se deriva claramente que nos encontramos ante solicitudes de diversos registros de marca: por una parte, el registro de marca solicitado en los Estados Unidos de América, con fecha 11 de marzo de 2004, a través de la solicitud número 78/382,660, en la que el color rojo y el gris fueron reclamados como una característica distintiva de la marca cuya descripción consiste en lo siguiente: "*...La marca está en la forma de una cola de aeroplano, el campo de la cola es el color rojo, hay un círculo parcial en gris en el campo rojo y hay un triángulo gris en el campo rojo señalando el punto de la brújula noroeste en el círculo parcial gris*" ; y por otra, el registro de marca solicitado posteriormente en nuestro país, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fecha 18 de agosto de 2004, a través de la solicitud con número de folio 0139967, expediente 0672442, y número de código de barras A0649414B, en la que como signo distintivo se señala: "*SIN DENOMINACIÓN*", como tipo de marca, "*Innominada*", y como fecha de primer uso, "*No se ha usado*", y en la que se contiene una figura como la descrita en la referida solicitud de registro de marca presentada en los Estados Unidos de América, pero en blanco y negro, como la propia actora lo reconoce, sin que

hayan sido reclamados en la solicitud de registro de marca presentada en nuestro país, los colores rojo y gris como característica distintiva de la marca.

Siendo así, es claro que no se actualiza el supuesto contemplado en los artículos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad Industrial, y por tanto no procede reconocer como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud de registro de marca en los Estados Unidos de América, es decir, el 11 de marzo de 2004, por tratarse de un registro de marca diferente al solicitado en nuestro país con fecha 18 de agosto del mismo año, siendo que en el primero de dichos registros fueron reclamados los colores rojo y gris como una característica distintiva de la marca, mientras que en el segundo no hubo tal reclamación.

No es óbice para la determinación alcanzada lo argumentado por la actora en su único concepto de impugnación por las razones que enseguida se precisan:

El hecho de que la autoridad demandada reconozca que los diseños de las marcas solicitadas en México y en los Estados Unidos de América son gráficamente idénticos, como lo hace notar la parte actora, no significa que esté reconociendo que se trata de las mismas marcas, tan no es así que en la resolución impugnada claramente se resuelve que “al no existir una identidad entre los diseños que conforman a las marcas en análisis, no resulta posible el reconocimiento del derecho de prioridad reaclamado, lo anterior con fundamento en los artículos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por otra parte, si bien los artículos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el 60 del Reglamento de la mencionada ley, sólo establecen como razones para negar el reconocimiento del derecho de prioridad, la adición o ampliación de los productos o servicios solicitados originalmente en el extranjero, como lo argumenta la demandante, ello no quiere decir que la variación de colores de las marcas, no pueda ser impedimento para negar el reconocimiento del referido derecho, pues cuando los colores de una marca son reclamados como una de sus características distintivas, como ocurrió con la marca cuyo registro fue solicitado en los

Estados Unidos de América, es evidente que si una marca cuyo registro se solicita en otro país, en el caso, México, no cuenta con esa característica distintiva, no puede decirse válidamente que se trate de la misma marca, y si la marca no es la misma, no resulta procedente el reconocimiento de prioridad a que se refieren los artículo 117 y 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, preceptos que claramente aluden a **un registro de marca** cuya solicitud se presenta en México y en otros países, para que pueda reconocerse la prioridad respectiva, y no así a **registros de marcas** cuya identidad es esencialmente distinta por carecer uno de ellos de una característica distintiva que sí tiene el otro, como ocurre en el caso.

Por otra parte, la actora aduce que conforme al artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, la marca deberá usarse en el territorio nacional como se registra o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, y que por tanto, concluye la demandante, ello ocurre en el caso de los colores, pues éstos no alteran la marca que sigue siendo la misma.

Al respecto, cabe señalar lo siguiente:

El artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Conforme a dicho precepto legal, la marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Así pues, el artículo que la actora invoca a su favor regula un aspecto del registro de marcas diverso al relativo al derecho de prioridad, pues una cosa es que, como lo establece el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, la marca deba usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, y otra cosa muy distinta es que, como lo disponen los artículo 117 y 118 de la misma ley, cuando se solicite un **registro de marca** en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su

defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, se pueda reconocer como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero, esto es, es inaceptable legalmente querer desprender del artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, como pretende la actora, que en el caso del derecho de prioridad regulado por los artículos 117 y 118 de la misma ley, sea posible reclamar ese derecho aunque se trate, por una parte, de un marca registrada en otro país y, por otra, de una modificación a esa marca registrada en México, pues tal extremo no se encuentra regulado en los artículos 117 y 118 de la ley en cita, los cuales establecen el derecho de prioridad de que se trata, y el artículo 128 de la misma ley no se refiere en absoluto a ese derecho, sino a una cuestión enteramente distinta y que consiste en que, como ya se indicó, la marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Más aún, ni siquiera puede decirse válidamente que la mencionada solicitud de registro presentada en nuestro país, se refiera realmente a una modificación de la marca cuyo registro fue solicitado en los Estados Unidos de América, ya que como ha quedado expuesto, el hecho de no haberse reclamado en la solicitud presentada en México los colores rojo y gris como una característica distintiva de la marca, como sí ocurrió en la solicitud presentada en los Estados Unidos de América, altera el carácter distintivo de ésta, al grado de que la marca cuyo registro fue solicitado en nuestro país es distinta a la marca cuyo registro fue solicitado en los Estados Unidos de América.

Ahora bien, en lo que se refiere al señalamiento de la demandante en el sentido de que es una práctica reiterada de la autoridad que las marcas presentadas en blanco y negro pueden usarse en cualquier color, y que ello es así porque tal cuestión no altera la esencia de la marca, se trata solamente de una mera afirmación subjetiva de la actora ya que no la demuestra con prueba alguna, además de que, como ya se indicó, no se debe confundir lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial con lo que establecen los artículos 117 y 118 de la misma ley, ya que regulan supuestos distintos, y el hecho de que, como lo establece el primer artículo mencionado, la marca debe usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o

con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, no significa de ningún modo que los otros dos artículos mencionados permitan que pueda reclamarse el derecho de prioridad respecto de registros de marca diferentes, como ocurrió en el caso, en el que en la solicitud de registro de una marca se reclamó como característica distintiva de la misma los colores rojo y gris, y la solicitud de registro de la otra marca no fue así, lo cual hace que se trate de marcas diferentes en cuyo caso no procede reclamar el derecho de prioridad como claramente se desprende de lo dispuesto por los artículos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Finalmente, en cuanto a la argumentación consistente en que en el artículo 4, inciso d) numerales 1 y 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, las únicas formalidades exigibles para el reconocimiento del derecho de propiedad en materia de marcas, es la indicación de la fecha y del país del depósito, sin que puedan exigirse otras formalidades, cabe señalar lo que a continuación se indica:

El artículo 4, inciso D), numerales 1 y 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:

[N.E. Se omite transcripción]

Como se advierte de lo anterior, en efecto, el artículo en cita se refiere a diversas formalidades que deben cumplirse en el caso de hacer valer el derecho de prioridad, como son el indicar en una declaración la fecha y el país donde se solicitó primero el registro de la marca, dentro del plazo máximo que cada país determine, y se indica también en el precepto en comento que no pueden exigirse otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del "depósito de la solicitud", y que cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el artículo de que se trata, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.

Sin embargo, no debe perderse de vista que el artículo 4, inciso D), numerales 1 y 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se refiere

solamente a formalidades para la declaración de prioridad en un momento determinado, como lo es el momento del "depósito de la solicitud", y en el caso la autoridad no exigió, en el momento mencionado, alguna formalidad adicional a las señaladas en el artículo en cita, ni menos aún resolvió no acceder a la solicitud de reconocimiento de derecho de prioridad por no haberse cumplido, en el momento mencionado, con alguna formalidad diversa a las señaladas en el artículo de referencia, sino que la razón por la cual determinó que no resulta posible el reconocimiento del derecho de prioridad reclamado, es por "*no existir una identidad entre los diseños que conforman a las marcas en análisis*" , o dicho en otras palabras, por tratarse de marcas distintas aquellas respecto de las cuales la actora reclama el derecho de prioridad.

En virtud de todo lo anterior, al haber resultado infundados los argumentos esgrimidos por la actora en el único concepto de impugnación que hace valer en su escrito de demanda, lo procedente es reconocer la **validez** de la resolución combatida en este juicio.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 14, fracción XIII, y 18, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, se resuelve:

I.- La parte actora no demostró su pretensión, y en consecuencia:

II.- Se reconoce la **VALIDEZ** de la resolución impugnada descrita en el resultando 1º, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de esta resolución, devuélvase el expediente a la Sala Regional de origen, una vez que se haya resuelto en definitiva y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **en sesión del día 11 de enero de 2010**, por **mayoría de**

ocho votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel L. Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Olga Hernández Espíndola y Juan Manuel Jiménez Illescas, y tres votos en contra de los Magistrados Silvia Eugenia Díaz Vega, Luis Carballo Balvanera y Francisco Cuevas Godínez.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado **Alfredo Salgado Loyo**, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el **11 de febrero de 2010** y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30, fracción V, y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, en vigor a partir del día siguiente, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Lic. Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

VI-P-SS-334

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. ESTABLECE LA FACULTAD A LA SECRETARÍA DEL RAMO PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES DE PESO, DIMENSIONES Y CAPACIDAD CON LAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y PRIVADO DE PASAJEROS, TURISMO Y CARGA, MEDIANTE REGLAMENTOS Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS.- La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en su artículo 39 establece que los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad, límites de velocidad y otras especificaciones, en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. En el mismo tenor, su artículo 70 señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación de peso y dimensiones, que tanto el autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que operen en los caminos y puentes, cumplen con las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, de acuerdo con lo establecido en las normas oficiales mexicanas respectivas. Por tanto, contempla la posibilidad de que las condiciones de peso, dimensiones y capacidad con las que deben cumplir los vehículos de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, sean establecidas en los reglamentos de dicha ley, y asimismo, en normas oficiales mexicanas, al tratarse de aspectos técnicos. Con base en lo anterior, el Reglamento sobre el Peso y Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, señala en sus artículos 5 y 8, que cuestiones como el peso, dimensiones y capacidad máximos de los vehículos, entre otros, se determinen mediante las normas correspondientes expedidas de conformidad con lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. De lo anterior resulta que la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, sobre el “Peso y dimensiones máximas con los que pueden

circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal" no se encuentra emitida ilegalmente, ya que no contraviene lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4639/08-05-02-6/2358/09-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de febrero de 2010, por mayoría de 9 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Thelma Semíramis Calva García.
(Tesis aprobada en sesión de 12 de abril de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

Una vez que han sido analizados los argumentos de las partes, en relación con los medios probatorios exhibidos en juicio para sustentar sus afirmaciones, el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal concluye que son **infundados** los que vierte la actora, según los motivos y fundamentos que a continuación se exponen.

En principio, es importante identificar que la litis en el juicio se constriñe a determinar si la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, sobre el "Peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal", publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1º de abril de 2008, es ilegal por contravenir lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

A fin de dilucidar lo anterior, es menester conocer los fundamentos y motivos que sustentan la emisión de la Norma, expuestos en el numeral 1, precisamente de rubro Fundamentación y Motivación, en los siguientes términos:

[N.E. Se omite transcripción]

De lo anterior, se observa que los preceptos y ordenamientos legales en los cuales se sostiene la autoridad emisora de dicha Norma, son los artículos 36 fracciones I y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o., fracción XI, 38 fracción II; 40 fracciones III y XVI; 43 y 47 fracciones I, II, III y IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o. y 5o. fracciones IV y VI, 39, 60, 70 y 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 41 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares; 6o. fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 1o., 3o., 4o., 5o. y 6o. del Reglamento sobre el Peso y Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, cuyo texto a continuación se reproduce:

[N.E. Se omite transcripción]

De los ordenamientos legales y reglamentarios antes reproducidos, se desprenden los siguientes supuestos de derecho:

- Es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país, así como fijar normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones.

- Asimismo corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

- Vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes.

- Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes así como de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares.

- La inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes, así como de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el cumplimiento de la Ley de la materia, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida de acuerdo con la misma.

- Asimismo, inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación de peso y dimensiones, que tanto el autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que operen en los caminos y puentes, cumplen con las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, de acuerdo con lo establecido en las normas oficiales mexicanas respectivas. Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones que tiene conferidas la Secretaría de Seguridad Pública en la materia, cuando los vehículos circulen en los caminos y puentes.

- También corresponde a los Subsecretarios de las Dependencias, expedir las normas oficiales mexicanas y difundir normas mexicanas en el ámbito de su competencia.

- Una Norma Oficial Mexicana es la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, que establece reglas, especificaciones, atributos, directri-

ces, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.

- Las normas oficiales mexicanas tienen como finalidad, entre otras, establecer las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor, así como las características y/o especificaciones que deban reunir los aparatos, redes y sistemas de comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios conexos para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios.

- En la elaboración de normas oficiales mexicanas participarán, ejerciendo sus respectivas atribuciones, las dependencias de la Administración Pública Federal a quienes corresponda la regulación o control del producto, servicio, método, proceso o instalación, actividad o materia a normalizarse.

- Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos.

- Los vehículos nacionales y extranjeros destinados a la prestación de servicios de autotransporte internacional de pasajeros, turismo y carga a que se refiere el artículo anterior, deberán cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por la Ley de la materia y sus reglamentos.

- El peso, dimensiones y capacidad máximos de los vehículos, así como las configuraciones o combinaciones vehiculares, según el tipo de caminos y

puentes por el que transiten, y la presión de inflado de las llantas, se ajustarán a las normas correspondientes expedidas de conformidad con lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Precisado lo anterior, es dable para esta Juzgadora concluir que, **no asiste razón a la actora** cuando señala que la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, sobre el "Peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal", se emitió en contravención a lo que establece el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, según se explica.

Como se ha visto, la Ley especifica que regula la materia, esto es, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en su artículo 39 establece que los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de:

- peso
- dimensiones
- capacidad
- límites de velocidad y
- otras especificaciones

Señalando que ello debe ser **en los términos que establezcan los reglamentos respectivos**.

En el mismo tenor, el artículo 70 del ordenamiento legal aludido, señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá a su cargo la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes, así como de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida de acuerdo con la misma.

También dispone que, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación de peso y dimensiones, que tanto el autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que operen en los caminos y puentes, **cumplen con las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, de acuerdo con lo establecido en las normas oficiales mexicanas respectivas**.

Por tanto, como se observa, es la propia Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal la que establece dos vías para el establecimiento de las condiciones de **peso, dimensiones y capacidad** con las que deben cumplir los vehículos de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, siendo la primera, los **reglamentos** de dicha ley, y la segunda vía, las **normas oficiales mexicanas**, al tratarse de aspectos técnicos, por lo que es válido que se aborden tanto en un Reglamento, cuya finalidad es la de proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de la Ley, desarrollando y complementando en detalle las normas contenidas en los ordenamientos jurídicos expedidos por el Congreso de la Unión, como en una Norma Oficial Mexicana, que es precisamente la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación.

En efecto, si atendemos a que un reglamento es una norma subalterna que tiene su medida y justificación en la ley, y que precisamente provee en la esfera administrativa su exacta observancia, determinando de modo general y abstracto los medios que deberán emplearse para aplicar la ley a los casos concretos, es perfectamente válido que sea a través de un Reglamento que se establezcan cuestiones técnicas, sobre la materia especifica que regula la Ley que desarrolla.

Así, en el caso concreto la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes federales, los cuales constituyen vías gene-

rales de comunicación; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías.

Para la implementación y consecución de dichos fines, se emitió el **Reglamento sobre el Peso y Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal,** cuyo objeto a su vez, es precisamente regular el **peso, dimensiones y capacidad** a que se deben sujetar los vehículos de autotransporte de pasajeros, de turismo y de carga que transiten en los caminos de jurisdicción federal, según se establece en su artículo 1º.

Lo anterior hace que se actualice el supuesto que establece el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en cuanto a que las condiciones de **peso, dimensiones y capacidad** a que deben sujetarse los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deben establecerse a través de reglamentos.

En concordancia con lo anterior, tal como lo manifiesta la autoridad demandada, el propio **Reglamento sobre el Peso y Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal**, habilita en sus artículos 5 y 8 del Reglamento precisado en párrafos precedentes, a que cuestiones como el **peso, dimensiones y capacidad** máximos de los vehículos, entre otros, se determinen mediante las normas correspondientes expedidas de conformidad con lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Ahora bien, **como complemento de dicho marco normativo**, y tal como lo establece el referido artículo 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, precepto en el que tiene su fundamento el artículo 5 del Reglamento aludido en el párrafo anterior, el peso, dimensiones y capacidad máximos de los vehículos, entre otros aspectos, **se ajustarán a las normas correspondientes expedidas de conformidad con lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización**.

De lo anterior resulta que la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, sobre el "Peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal" no se encuentra emitida ilegalmente, ya que no contraviene lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, habida cuenta que como fue analizado en el presente Considerando, es **la propia Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal** la que permite que los aspectos técnicos relativos a las condiciones de **peso, dimensiones y capacidad** a que deben sujetarse los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, fueran establecidas también, a través de Normas Oficiales Mexicanas.

[...]

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 18, fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- La parte actora no probó los extremos de su pretensión, en consecuencia;

II.- Se **RECONOCE LA VALIDEZ** de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, sobre el "Peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal", la cual ha quedado precisada en el resultando primero de este fallo.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de fecha 10 de febrero de 2010, por mayoría de 9 votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alejan-

dro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Juan Manuel Jiménez Illescas y Francisco Cuevas Godínez; 1 voto con los puntos resolutivos de la Magistrada Olga Hernández Espíndola y 1 voto en contra del Magistrado Luis Carballo Balvanera, quien se reservó su derecho para formular voto particular.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el engrose el día 22 de marzo de 2010, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción V, y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO LUIS CARBALLO BALVANERA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 4639/08-05-02-6/2358/09-PL-09-04

El que suscribe, expone a continuación las razones por las cuales se aparta de lo resuelto por la mayoría en el caso a estudio.

En el considerando tercero de la sentencia no compartida, se analiza y resuelve el único concepto de impugnación expuesto por la actora en su demanda, en el que hizo valer, entre otros, los siguientes argumentos de agravio:

A) Que como se advierte de los artículos 43, 44, 46, 51 A y demás relativos de la Ley Federal de Metrología y Normalización, la expedición de una Norma Oficial Mexicana sigue un proceso diferente a la expedición de un Reglamento, lo cual hace evidente que la facultad reglamentaria emanada directamente del artículo 89 fracción I constitucional, es diferente a la facultad de las dependencias del ejecutivo federal

para expedir una Norma Oficial Mexicana, pues ambas disposiciones persiguen fines diversos, pues el reglamento tiene como objeto el establecer el exacto alcance y cumplimiento de la Ley y la Norma Oficial Mexicana persigue fines diversos pues por disposición expresa de la Ley Federal de Metrología y Normalización, se encamina de manera mas especifica a establecer, entre otras, las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor.

B) Que es evidente que la creación de una Norma Oficial Mexicana persigue fines muy específicos que están acotados precisamente en la Ley Federal de Metrología y Normalización, estableciendo incluso para ello un procedimiento diverso a lo que en conjunto nos establece el diverso 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en relación a que los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos.

C) Que en atención al principio de derecho que establece que la ley especial rige sobre la general se deberá considerar que la ley aplicable al caso que nos ocupa para efectos de regular o establecer las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones que los vehículos destinados al autotransporte federal de carga, es la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la cual deberá ser la aplicable en específico al caso que nos ocupa, por lo que la Ley Federal de Metrología y Normalización al ser una ley general a la materia que nos ocupa, no tiene el requisito de especialidad, en consecuencia para la determinación de los requisitos mencionados en la Norma Oficial Mexicana que se controvierte se deberá observar lo establecido en el diverso 39 en comento, es decir que tales requisitos se deben contener en un reglamento expedido formal y materialmente por el ejecutivo federal y no a través de un procedimiento distinto como lo sería una Norma Oficial Mexicana.

Al respecto, la mayoría de los Magistrados integrantes del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior, determinaron que resultaba **infundados** los argumentos agravios de la actora, porque a su consideración:

➢ Que es cierto que el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece que los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad, límites de velocidad y otras especificaciones en los términos que establezcan los reglamentos respectivos, sin embargo, el artículo 70 de la misma ley, dispone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tendrá a su cargo la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes, así como de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el cumplimiento de la propia Ley citada, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida de acuerdo con la misma.

➢ Que también dispone el referido artículo 70, que la Secretaría inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación de peso y dimensiones, que tanto el autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que operen en los caminos y puentes, cumplen con las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, de acuerdo con lo establecido en las normas oficiales mexicanas respectivas.

➢ Que por lo anterior, es evidente que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece dos vías para el establecimiento de condiciones de peso, dimensiones y capacidad con las que deben cumplir los vehículos de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, siendo la primera, los reglamentos de dicha ley, y la segunda vía, las normas oficiales mexicanas, al tratarse de aspectos técnicos, por lo que es válido que se aborden tanto en el Reglamento, cuya finalidad es la de proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de la ley, desarrollando y complementando en detalle las normas contenidas en los ordenamientos expedidos por el Congreso de la Unión, como en una Norma Oficial

Mexicana, que es precisamente la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación.

➢ Que además, el propio Reglamento sobre el peso y dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, habilita en sus artículos 5 y 8, que cuestiones como el peso, dimensiones y capacidad máximos de los vehículos, entre otros, se determinen mediante las normas correspondientes expedidas de conformidad con lo establecido en la Ley sobre Metrología y Normalización.

No comparto la forma en que la mayoría resolvió los conceptos de impugnación de la actora, ya que se aparta de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es del tenor literal siguiente:

> "**Artículo 50**.- Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y **resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda**, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.
> "Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.
> "**Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.**

> "Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.
> "En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el Tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada."
>
> (El énfasis es nuestro)

De una lectura a la transcripción que antecede, se advierte claramente que el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, obliga a este órgano jurisdiccional para que al momento de dictar sentencia en los asuntos sometidos a su consideración, resuelva sobre la **pretensión del actor que se deduzca de su demanda**, teniendo la facultad de corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de **resolver la cuestión efectivamente planteada**.

Lo dispuesto en el precepto legal en comento, está íntimamente vinculado con los principios de **exhaustividad** y de **congruencia externa** que debe revestir toda resolución jurisdiccional, conforme a los cuales la sentencia respectiva debe ser correspondiente y proporcional a la pretensión deducida o *petitio*; de tal suerte que este Tribunal, no puede omitir analizar aspectos planteados por las partes, ni rebasar el límite que la propia acción ejercitada le determina.

Bajo este contexto, considero que en el caso no se cumplió con los principios de mérito al examinarse y resolverse el único concepto de impugnación expuesto por la actora en su demanda, pues si bien es cierto que en la sentencia no compartida se

señala que el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece dos vías para el establecimiento de condiciones de peso, dimensiones y capacidad con las que deben cumplir los vehículos de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, siendo la primera, los reglamentos de dicha ley, y la segunda vía, las normas oficiales mexicanas, al tratarse de aspectos técnicos, también es verdad que no se analizaron y resolvieron los argumentos de agravio que hizo valer la actora y que el suscrito sintetizó previamente con los **incisos A), B) y C)**.

La omisión de estudio trasciende al sentido del fallo, pues dichos argumentos de agravio de la actora estaban encaminados precisamente a demostrar la ilegalidad de la Norma Oficial Mexicana impugnada, bajo la consideración de que las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de velocidad de los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deben necesariamente estar establecidos en un reglamento, no así en una Norma Oficial Mexicana.

Así, se concluye que la sentencia no cumple con los principios de exhaustividad y congruencia, ya que en ella no se analizaron los argumentos de agravio en los términos en que fueron expuestos por la actora.

En apoyo a las consideraciones expuestas, se invoca la tesis de **jurisprudencia I.4o.A. J/31**, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, correspondiente al mes de marzo de 2005, página 1047, que es del tenor literal siguiente:

> "**SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA.** De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la materia fiscal- la congruencia externa de las sentencias implica que la decisión sea correspondiente y proporcional a la pretensión deducida o

petitio; atento a lo cual, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el límite que la propia acción ejercitada le determina.

"CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo directo 197/2002. Carlos Islas González. 10 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

"Amparo directo 122/2003. Grupo Industrial Benisa, S.A de C.V. 25 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

"Amparo directo 224/2003. Innestec, S.C. 9 de julio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Cristina Fuentes Macías.

"Amparo directo 474/2003. José Fausto Romo Sánchez. 21 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

"Revisión fiscal 135/2004. Titular de la Administración Local Jurídica del Sur del Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 7 de julio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González."

También sirve de apoyo, la tesis de **jurisprudencia** I.1o.A. J/9, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, correspondiente al mes de agosto de 1998, página 764, cuyo rubro y texto es el siguiente:

"**PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia** al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo **cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada** ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

"Incidente de suspensión (revisión) 731/90 Hidroequipos y Motores, S.A. 25 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz.

"Amparo en revisión 1011/92. Leopoldo Vásquez de León 5 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz.

"Amparo en revisión 1651/92. Oscar Armando Amarillo Romero. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Luz Cueto Martínez.

"Amparo directo 6261/97. Productos Nacionales de Hule, S.A. de C.V. 23 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Ricardo Martínez Carbajal.

"Amparo directo 701/97. Comisión Federal de Electricidad. 11 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Serafín Contreras Balderas."

(El énfasis es nuestro)

En las razones anteriores, baso mi voto en contra de la sentencia que nos ocupa.

MAG. LUIS CARBALLO BALVANERA

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

VI-P-SS-335

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE AUDITORÍA FISCAL INTERNACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CUENTA CON FACULTADES PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES IMPORTADOS A TERRITORIO NACIONAL.- El artículo 506 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, prevé la facultad de la autoridad aduanera de una de las Partes para verificar el origen de los bienes importados a su territorio, a través de los cuestionarios escritos dirigidos a los exportadores o a los productores en el territorio de la otra Parte; en concordancia con lo anterior los artículos 19, apartado A, fracción XLII y apartado B, fracción XV y 20, apartado R, fracción II del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2005, establecen que la Administración Central referida en el rubro, es la autoridad aduanera de nuestro país facultada para verificar el origen de la mercancía exportada por una empresa extranjera a México.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 11220/08-17-06-2/2439/09-PL-04-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de febrero de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Rossina Montandon Spinoso.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

CUARTO.- [...]

Del análisis a los argumentos vertidos por la actora en el concepto de impugnación en estudio, esta Juzgadora considera que los mismos son **INFUNDADOS**, sobre la base del siguiente razonamiento:

En principio resulta pertinente conocer la resolución inicialmente recurrida emitida por la Administración Central de Auditoría Fiscal Internacional de la Administración General de Grandes Contribuyentes, que resolvió en definitiva la verificación de origen en los términos siguientes:

[N.E. Se omite transcripción]

De la transcripción anterior se desprende que la Administración Central de Auditoría Fiscal Internacional sustentó la resolución recurrida así como el procedimiento de verificación de origen que llevó a cabo a través de los cuestionarios de verificación, entre otros, en los artículos 501, 505, 506, 511 y 514 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Reglas 47, 48 y 69 de las Reglamentaciones Uniformes de Septiembre de 1995, que establecen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De los preceptos transcritos se advierte que las partes que suscriben el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establecerán un certificado de origen que servirá para confirmar que un bien que se exporte del territorio de una Parte a otra, califica como originario.

Cada una de las Partes dispondrá que un exportador o productor de su territorio que llene y firme un certificado de origen deberá conservarlo en su territorio durante un período de cinco años después de la fecha de firma del mismo y todos los registros relativos al origen de un bien para el cual se solicitó trato arancelario preferencial.

Para determinar si un bien que ingrese a su territorio proveniente del territorio de una de las Partes califica como originario, la autoridad de una Parte podrá verificar el origen a través de cuestionarios dirigidos a los exportadores o a los productores en territorio de otra Parte.

Cuando la autoridad hubiera enviado un cuestionario a un exportador o productor de un bien importado bajo trato arancelario preferencial, si transcurridos los 30 días contados a partir de la fecha de envío del cuestionario el particular no hubiere respondido, la autoridad enviará otro cuestionario, en caso de que el exportador o productor no responda al segundo cuestionario, la autoridad determinará que no procede el trato arancelario preferencial.

La autoridad aduanera podrá anexar al cuestionario subsecuente al primero, una resolución en los términos del artículo 506(9) del Tratado, que incluya el aviso de intención de negar el trato arancelario preferencial a que se refiere la regla 55.

Atento a lo anterior, es dable concluir que resultan infundados los argumentos de la actora, pues contrario a lo que sostiene, es precisamente el artículo 506 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, transcrito anteriormente, el que prevé la facultad de la autoridad aduanera de una de las Partes para verificar el origen de los bienes importados a su territorio, a través de los cuestionarios escritos dirigidos a los exportadores o a los productores en el territorio de la otra Parte.

En el caso concreto, la Administración Central de Auditoría Fiscal Internacional, a través del oficio número 330-SAT-VII-11766 de fecha 11 de abril de 2005, solicitó a la empresa actora (exportadora de Estados Unidos de América) a través de cuestionarios escritos, información relativa al origen de los bienes exportados por ella bajo trato arancelario preferencial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a México.

En ese orden de ideas, resulta claro que la Administración Central de Auditoría Fiscal Internacional ejerció la facultad otorgada expresamente por el artículo 506 del

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para verificar el origen de la mercancía exportada por la empresa actora, a través de los cuestionarios, sin que ello implique que la autoridad tuviera que llevar a cabo una visita de verificación como pretende la actora.

Asimismo, no le asiste la razón a la actora cuando argumenta que el procedimiento de verificación a través de los cuestionarios no se encuentra regulado, pues las Reglas 47, 48 y 69 de las Reglamentaciones Uniformes, transcritos anteriormente, son las que regulan el procedimiento de verificación de origen que se inicie a través de los cuestionarios.

[...]

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los numerales 14, fracciones IV, XII y XIII y 18, fracción XV, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de diciembre de 2007, se resuelve:

I.- La parte actora no probó los extremos de su acción; por tanto,

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada y de la inicialmente recurrida, detalladas en el Resultando 1° del presente fallo.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de febrero de 2010, por mayoría de 9 votos a favor de los Magistrados Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas y Francisco Cuevas Godínez, y 1 en contra del Magistrado Luis Carballo

Balvanera, quien se reservó su derecho para formular voto particular. Estuvo ausente el Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el 12 de marzo de 2010, y con fundamento en los artículos 30, fracción V y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos que da fe.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

VI-P-SS-336

ARTÍCULO 15 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SU TEXTO ORIGINAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE DICIEMBRE DE 2007, NO DEROGÓ TÁCITAMENTE LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN III Y 4 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- El argumento que en tal sentido postuló la parte actora es infundado, porque el conflicto de leyes que argumenta, se resuelve acudiendo al mecanismo de transición que también aprobó el Constituyente Permanente en el *Decreto por el que se reforma el artículo 73 fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,* publicado oficialmente el 4 de diciembre de 2006, pues en su artículo segundo se precisó, que en tanto no se modificara la legislación que regula la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos federales, ésta continuará rigiéndose por las disposiciones legales vigentes. La reforma de la legislación que regula la materia de responsabilidades administrativas, no se ha realizado. Se colige entonces, que el texto original del artículo 15 de la Ley Orgánica de este Tribunal, según el cual este Tribunal estaría facultado para la imposición de sanciones administrativas a los servidores públicos, no cobró vigencia, pues para ello habría sido necesaria la modificación de la legislación secundaria en dicha materia; de donde se concluye que el aludido mecanismo de transición, mantuvo incólume el sistema de imposición de sanciones previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en vigor desde el 14 de marzo de 2002.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19664/08-17-07-4/2735/09-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de marzo de 2010, por unanimidad de 7 votos a

favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de septiembre 2010)

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-SS-337

FACULTAD DE INTERPRETAR UNA LEY, REGLAMENTO O DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER GENERAL, HASTA FIJAR JURISPRUDENCIA.- De acuerdo con el artículo 48, fracción I inciso b) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Pleno o las Secciones del Tribunal, de oficio o a petición fundada de la Sala Regional correspondiente, de los particulares o de las autoridades, podrán ejercer la facultad de atracción con el propósito al rubro citado. Ahora bien, para que haya interpretación directa de un precepto, es indispensable que el tribunal sentenciador fije por sí mismo su sentido y alcance jurídico, para tal propósito, esta Sala Superior puede acudir indistintamente a cualquiera de los métodos de interpretación, en el orden que el grado de dificultad para interpretar la norma lo exija o así resulte jurídicamente conveniente, de manera que si no fuera suficiente la sola interpretación literal, habría que acudir al análisis sistemático, gramatical, analógico, histórico, lógico, causal o teleológico, hasta desentrañar el verdadero y auténtico sentido de la norma, sin que ello implique que en todos los casos deban agotarse los referidos métodos de interpretación, pues basta con que uno de ellos aclare el sentido y alcance de la norma, para que se considere suficiente para lograr el objetivo buscado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19664/08-17-07-4/2735/09-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de marzo de 2010, por unanimidad de 7 votos a

favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde.
(Tesis aprobada en sesión de 31 de mayo 2010)

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- Este Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 fracción XV, 15 y 18, fracción X, de la Ley Orgánica de este Tribunal, vigente a partir del 7 de diciembre de 2007, con reforma del 21 de diciembre de 2007, en relación al 25 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; por tratarse de un asunto que reviste las características especiales previstas en el artículo 48 fracción I, inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que para su resolución es necesario establecer por primera vez la interpretación directa del artículo 15 según su texto original en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de diciembre de 2006, esto en razón de que el actor sostiene que en el orden federal, actualmente ninguna autoridad cuenta con facultades para sancionar a los servidores públicos, es decir, que este Pleno de la Sala Superior debe esclarecer o revelar el sentido de dicho ordinal, atendiendo a la voluntad del legislador o al sentido lingüístico, lógico u objetivo de las palabras, a fin de entender el completo y auténtico sentido de la disposición, para lo cual puede valerse de los métodos: gramatical, analógico, histórico, lógico, sistemático, causal o teleológico, en el orden que el grado de dificultad para interpretar la norma lo exija o así resulte jurídicamente conveniente.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 48, fracción I inciso b) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 18 fracción X, de la Ley Orgánica de este Tribunal, que establecen en su parte relativa lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Es aplicable *mutatis mutandis* la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que define:

"**INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F., Tomo XV. Novena Época. Mayo 2002. Tesis: 1a./J. 27/2002. pág. 14]

Y en la misma forma la tesis aislada del Máximo Tribunal que dice:

"**REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. BASTA CON QUE SE UTILICE UNO DE LOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL PARA QUE SE CUMPLA CON EL REQUISITO DE PROCEDENCIA DE ESE RECURSO.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F., Tomo XXV. Novena Época. Mayo 2007. Tesis: P. XVIII/2007. pág. 16]

[...]

QUINTO.- El primer concepto de impugnación se estudia de manera prioritaria por referirse a una cuestión de orden público, ya que la actora hace valer la incompetencia de la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, derivada dice, de la derogación tácita de los artículos 3 fracción III, y 4 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con motivo de la publicación del artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, según su texto original publicado el 6 de diciembre de 2007.

Para resolver esta cuestión se acude a la relación de antecedentes que aparece en el considerando cuarto de este fallo de cuyo punto 9 en adelante se puede constatar, que para el 19 de febrero de 2008, cuando la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acordó el inicio del procedimiento sancionador incoado al hoy demandante, ya estaba

en vigor el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa según texto reformado que se había publicado desde el 21 de diciembre de 2007; también es vigente para el 8 de mayo de 2008 cuando se emitió el acto a debate, e incluso en la fecha en que se notificó la sanción al opositor el 14 de julio de 2008.

El texto reformado vigente en todos esos momentos y hoy en día precisa:

[N.E. Se omite transcripción]

De acuerdo a lo anterior, resulta que ésta es la disposición jurídica que rige el caso del ahora actor.

Ahora bien, el argumento de la parte actora relativo a que el texto del artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa originalmente publicado, el 6 de diciembre de 2007, derogara tácitamente los artículos 3, fracción III y 4 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es infundado por lo siguiente.

La reforma aprobada por el Constituyente Permanente al artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006, faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo facultándolos para imponer sanciones a los servidores públicos por la responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones.

Entonces, si el mencionado texto constitucional hace alusión a tribunales de lo contencioso administrativo, en consecuencia, el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa según su texto originalmente publicado, daba la pauta para concluir que sería este mismo Tribunal el que, además de resolver los conflictos que se suscitaran entre la Administración Pública Federal y los

particulares como hoy en día lo hace; impondría las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que determine la ley.

Sin embargo, el conflicto de leyes que plantea la parte actora, se resuelve acudiendo al mecanismo de transición que también aprobó el Constituyente Permanente en el *Decreto por el que se reforma el artículo 73 fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, publicado el 4 de diciembre de 2006, pues su Artículo Segundo precisó: **que en tanto no se modificara la legislación que regula la materia de responsabilidades administrativas** de los servidores públicos federales, ésta continuará rigiéndose por las disposiciones legales vigentes.

La modificación a la legislación que regula la materia de responsabilidades administrativa, es decir, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos reglamentaria del artículo 108 Constitucional, no se ha realizado, lo que explica que mediante reforma publicada el viernes 21 de diciembre de 2007, al artículo 15 de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 06 diciembre del mismo año, se estableciera que este Tribunal conocerá (no de la imposición de sanciones), sino de los juicios que se inicien en contra de las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, así como las que decidan los recursos que en contra de ellas se promuevan.

Se colige entonces, que mediante el texto original del artículo 15 de la Ley Orgánica de este Tribunal publicado el 6 de diciembre de 2007, se atendía a la reforma del texto permanente del artículo 73 fracción XXIX-H Constitucional, mientras que la reforma de 21 de diciembre del mismo año, sufrida por el mismo numeral 15 publicado apenas 15 días antes, se realizó para ajustar su texto a lo ordenado por el aludido Artículo Segundo Transitorio Constitucional del mismo *Decreto de reformas constitucionales, publicado el 4 de diciembre de 2006*, ya que tal disposición transitoria claramente precisó que mientras no se modificara la legislación en materia de responsabilidades administrativas, continuaría rigiéndose por las disposiciones legales vigentes.

A mayor abundamiento, el texto del artículo 15 de la Ley Orgánica de este Tribunal originalmente publicado el 6 de diciembre de 2007, señalaba que el procedimiento para conocer de estos juicios sería el que señale la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que no deja duda de que para la plena vigencia de dicho precepto era necesaria la reforma de estos ordenamientos secundarios, como lo ordena el mencionado Artículo Segundo Transitorio del *Decreto por el que se reforma el artículo 73 fracción XXIX-H de la Constitución General de la República.*

La señalada disposición transitoria constitucional, fue cabalmente observada al emitir el *Decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado el 21 de diciembre de 2007*, cuyo artículo Segundo señala:

[N.E. Se omite transcripción]

Con lo hasta aquí expuesto se colige que el *Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006, mantuvo incólume el sistema de imposición de sanciones previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 13 de marzo de 2002, y concretamente sus artículos 3, fracción III y 4, ya que tanto la referida disposición transitoria constitucional, como el Decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, plantean la necesidad de su continuación y aplicación hasta en tanto no se modifique la legislación federal en materia de responsabilidades administrativas, de donde deriva la ineficacia del primer concepto de impugnación postulado por la parte actora dado que sus argumentos resultan infundados, ya que en ningún momento existió la derogación tácita ni el conflicto de leyes que aduce la actora, pues el régimen de transición está claramente regulado desde la propia reforma constitucional de 04 de diciembre de 2004, a través del Artículo Segundo Transitorio en los términos apuntados.

Lo anterior se robustece porque el actor no postuló la derogación del artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que señala:

[N.E. Se omite transcripción]

Disposición que relacionada con la fracción XV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del 06 de diciembre de 2007, que dice:

[N.E. Se omite transcripción]

Permite concluir que también el sistema de impugnación de las resoluciones definitivas en materia de responsabilidades administrativas quedó intocado, es decir, no existió afectación a dicho sistema entre el 7 y el 21 de diciembre de 2007.

En consecuencia son plenamente aplicables los preceptos que la demandada citó en apoyo de su actuación, a saber:

[N.E. Se omite transcripción]

De estos numerales se destacan los siguientes:

[N.E. Se omite transcripción]

De tales preceptos se concluye que la demandada es competente para tramitar y resolver el procedimiento administrativo disciplinario del que derivó la resolución impugnada.

Es aplicable en apoyo de lo anterior la jurisprudencia **V-J-SS-1** de este Tribunal, que reconoce la competencia de los Órganos Internos de Control para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, determinar si existe o no responsabilidad

de los servidores públicos por el incumplimiento de sus obligaciones e imponer las sanciones previstas en la Ley de la materia, en el ámbito de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, misma que dice:

> "**CONTRALORÍAS INTERNAS EN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE FORMAN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARAESTATAL.- SON COMPETENTES PARA CONOCER, TRAMITAR Y RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en la R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año I. No. 6. Junio 2001. p. 7.]
>
> [...]

En mérito de lo expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 49, 50, y 52 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos 14, fracciones I y XIII, y 18, fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- La parte actora no probó su acción.

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, detallada en el Resultando 1° del presente fallo.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de marzo de 2010, por unanimidad de siete votos a favor de los Magistrados Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Luis Carballo Balvanera y Jorge Alberto García Cáceres, estando ausentes los Magis-

trados Alejandro Sánchez Hernández, Juan Manuel Jiménez Illescas, Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y Francisco Cuevas Godínez.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el 05 de abril de 2010, y con fundamento en los artículos 30, fracción V y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos que da fe.

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

VI-P-SS-338

CIRCULAR *CONSAR 28-16* DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA IMAGEN DEL ÁRBOL CON LA LEYENDA *"EN TU AFORE SIEMBRA Y COSECHA"*, ASÍ COMO EL ÍCONO *"www.e-sar.com.mx"*, NO CORRESPONDEN A NINGUNO DE LOS ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER LOS FORMATOS DE SOLICITUD DE REGISTRO Y CONSTANCIA DE REGISTRO PARA EL TRASPASO DE CUENTAS INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES.- El artículo 5°, fracciones I y II de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro disponen que, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro tiene facultades para expedir disposiciones de carácter general para regular lo relativo a las operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro, la recepción, depósito, transmisión, manejo e intercambio de aportaciones correspondientes a dichos sistemas, así como transmisión, manejo e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los institutos de seguridad social y los participantes en los sistemas, determinando los procedimientos para su buen funcionamiento, así también para expedir disposiciones de carácter general a las que deben sujetarse éstos, en cuanto a la constitución, organización, funcionamiento, operaciones y participación en ellos. En el caso, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro aprobó el 08 de marzo de 2007 la Circular CONSAR 28-16 Modificaciones y adiciones a las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los Trabajadores. Si bien la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro está facultada legalmente para emitir disposiciones de carácter general y, por ello regular el funcionamiento de las Administradoras de Fondos para el Retiro y establecer los lineamientos que se deben seguir en los formatos de solicitud de registro y constancia de registro, de las disposiciones aplicables no se desprende que la Comisión pueda establecer se incorpore información ajena a la materia del acto de registro y la constancia respectiva. Por tal

razón, la imagen del árbol con la leyenda *"EN TU AFORE SIEMBRA Y COSECHA"*, así como el ícono "*www.e-sar.com.mx*", no corresponde a ninguno de los elementos que deben contener los formatos de solicitud de registro y constancia de registro, ya que no tienen que ver con la relación legal y comercial entre el trabajador y la administradora, pues el primero se trata de un lema del gobierno y el segundo conecta con la Base Nacional de Datos del Sistema de Ahorro para el Retiro. Por lo anterior, las Administraciones de Fondos para el Retiro no están obligadas a incluir los íconos y leyendas en los formatos de solicitud de registro y constancia de registro aun cuando tengan como finalidad otorgar facilidades y elementos para que el trabajador tenga acceso a información respecto a su cuenta individual y al Sistema de Ahorro para el Retiro.

Cumplimiento de Ejecutoria D.A. 225/09 en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13821/07-17-05-7/634/08-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de marzo de 2010, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 31 de mayo de 2010)

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

VI-P-SS-339

CIRCULAR *CONSAR 28-16* DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. TIENE EL CARÁCTER DE NORMA AUTOAPLICATIVA, TODA VEZ QUE SU CUMPLIMIENTO ES OBLIGATORIO A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN, SIN ENCONTRARSE CONDICIONADO A LA EMISIÓN DE UN ACTO CONCRETO DE LA COMISIÓN.- El artículo 5o., fracciones I y II de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro disponen que, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro tiene facultades para expedir disposiciones de carácter general para regular lo relativo a las

operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro, la recepción, depósito, transmisión, manejo e intercambio de aportaciones correspondientes a dichos sistemas, así como transmisión, manejo e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los institutos de seguridad social y los participantes en los sistemas, determinando los procedimientos para su buen funcionamiento, así también para expedir disposiciones de carácter general a las que deben sujetarse éstos, en cuanto a la constitución, organización, funcionamiento, operaciones y participación en ellos. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro aprobó la Circular CONSAR 28-16 Modificaciones y adiciones a las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los Trabajadores, misma que fue aprobada el 08 de marzo de 2007. Si a través de dicha Circular se dispone que las Administradoras de Fondos para el Retiro deberán entregar a los trabajadores que deseen efectuar traspasos de su cuenta, la Solicitud de Traspaso establecida en el Anexo A, *Circular CONSAR 28-16*, conjuntamente con los Anexos B y C, dicha Circular tiene el carácter de norma autoaplicativa en la medida que con su sola entrada en vigor las Administradoras de Fondos para el Retiro se encuentran obligadas a cumplirla no encontrándose condicionado a la emisión de un acto concreto de la Comisión.

Cumplimiento de Ejecutoria D.A. 225/09 en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13821/07-17-05-7/634/08-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de marzo de 2010, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 31 de mayo de 2010)

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

VI-P-SS-340

CIRCULARES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. POR TRATARSE DE ACTOS ADMINIS-

TRATIVOS DIVERSOS A LOS REGLAMENTOS, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- El artículo 2º., último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que, procede el juicio contencioso federal en contra de actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación, en cuyo caso, la demanda se presentará por escrito directamente ante la Sala Regional competente, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que hubiere iniciado su vigencia cuando sea autoaplicativa. Por otra parte, el artículo 5º., fracciones I y II de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro disponen que, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro tiene facultades para expedir disposiciones de carácter general para regular lo relativo a las operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro, la recepción, depósito, transmisión, manejo e intercambio de aportaciones correspondientes a dichos sistemas, así como transmisión, manejo e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los institutos de seguridad social y los participantes en los sistemas, determinando los procedimientos para su buen funcionamiento, así también para expedir disposiciones de carácter general a las que deben sujetarse éstos, en cuanto a la constitución, organización, funcionamiento, operaciones y participación en ellos. Por tal razón, al ser las Circulares aprobadas por la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se trata de actos administrativos diversos de los Reglamentos, por tanto, es procedente controvertirlas a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Cumplimiento de Ejecutoria D.A. 225/09 en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13821/07-17-05-7/634/08-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de marzo de 2010, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 31 de mayo de 2010)

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

VI-P-SS-341

LEGALIDAD. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ES COMPETENTE PARA CONOCER DE VIOLACIONES A DICHO PRINCIPIO RESPECTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL, LIMITADO EL ANÁLISIS A LA COMPETENCIA DEL EMISOR DE DICHOS ACTOS, NO ASÍ RESPECTO DE INFRACCIONES CONSTITUCIONALES.- El artículo 2o., de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece la procedencia del juicio contencioso administrativo federal en contra de los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general que expidan las autoridades en ejercicio de sus facultades, cuando éstas sean contrarias a la Ley de la materia, siempre y cuando sean autoaplicativas o cuando el interesado las controvierta en unión del primer acto de aplicación, excepto los reglamentos y demás normas generales de mayor jerarquía. En esos términos, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá conocer de juicios en contra de los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, a efecto de revisar su legalidad a la luz del artículo 16 constitucional, es decir, que las autoridades sólo pueden hacer lo que les está permitido por la ley, de tal forma que, todo acto de autoridad debe estar debida y suficientemente fundado y motivado. Por lo anterior, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de la impugnación de las normas administrativas acotadas al cumplimiento del principio constitucional de legalidad en el marco de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, esto es, la competencia del emisor de la norma y su contenido material, mas no cuando se trate de otro tipo de infracciones constitucionales distintas al tema de legalidad.

Cumplimiento de Ejecutoria D.A. 225/09 en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13821/07-17-05-7/634/08-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de marzo de 2010, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 31 de mayo de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO. (SE REITERA EL CONTENIDO DEL CONSIDERANDO PRIMERO DE LA SENTENCIA DE 18 DE AGOSTO DE 2008).

Este Pleno de la Sala Superior es competente para resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 48, fracción I, inciso b) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que para resolver el presente juicio es necesario establecer por primera vez la interpretación directa de una disposición administrativa de carácter general, como lo es la **Circular CONSAR 28-16 Modificaciones y adiciones a las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los Trabajadores**.

CUARTO. (SE REITERA EL CONTENIDO DEL CONSIDERANDO SEGUNDO DE LA SENTENCIA DE 18 DE AGOSTO DE 2008).

La demandante controvierte en juicio la ***Circular CONSAR 28-16 Modificaciones y adiciones a las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los Trabajadores***.

Se controvierte dicha **Circular CONSAR 28-16**, en sus partes siguientes: *PRIMERA, en lo que se refiere a la modificación del último párrafo de la Regla Décima Primera de la Circular CONSAR 28-13; SEGUNDA, en lo que se refiere al Anexo A de la Circular CONSAR 28-13; TERCERA, en lo que se refiere a los Anexos B y C de la Circular CONSAR 28-13*, exclusivamente respecto de los símbolos y leyendas.

La existencia de la **Circular CONSAR 28-16**, queda acreditada con la certificación de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que sucedió el **08 de marzo de 2007,** disponiéndose en su artículo primero transitorio que entraría en vigor al día hábil siguiente de su publicación, con excepción de lo dispuesto en las reglas segunda a cuarta transitorias, en los siguientes términos:

[N.E. Se omite transcripción]

Como se indicó anteriormente, la demandante controvierte la **Circular CONSAR 28-16**, en sus partes siguientes: *PRIMERA, en lo que se refiere a la modificación del último párrafo de la Regla Décima Primera de la Circular CONSAR 28-13; SEGUNDA, en lo que se refiere al Anexo A de la Circular CONSAR 28-13; TERCERA, en lo que se refiere a los Anexos B y C de la Circular CONSAR 28-13*.

De acuerdo con el artículo cuarto transitorio, de la Circular controvertida, las partes controvertidas a través del presente juicio entraron en vigor **sesenta días naturales siguientes a la publicación de la Circular**, en los términos siguientes:

[N.E. Se omite transcripción]

En los términos así expuestos, si la **Circular CONSAR 28-16,** se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 08 de marzo de 2007, las disposiciones contenidas en el último párrafo de la regla décima primera que se modifica, así como en las reglas segunda y tercera de esta Circular, relativas a los Anexos A, B y C de esta Circular, **entraron en vigor el 07 de mayo de 2007**.

Por otra parte, queda acreditada la presentación oportuna de la demanda ante este Tribunal Federal conforme a lo siguiente.

La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con la procedencia del juicio contencioso administrativo, establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De conformidad con las disposiciones anteriormente transcritas, el juicio contencioso administrativo procede en contra de actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación, en cuyo caso, la demanda se presentará por escrito directamente ante la Sala Regional competente, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que hubiere iniciado su vigencia cuando sea autoaplicativa.

Es el caso que, la ***Circular CONSAR 28-16 Modificaciones y adiciones a las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los Trabajadores***, se emitió por el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en los artículos 5º, fracciones I y II y 12, fracción I de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que disponen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

En los términos así expuestos la ***Circular CONSAR 28-16*** impugnada en el presente juicio es un acto administrativo diverso de los Reglamentos, por tanto, resulta impugnada a través del juicio contencioso administrativo ante este Tribunal Federal.

Asimismo, se trata de una disposición auto aplicativa, ya que con su sola entrada en vigor la hoy demandada se encuentra obligada a cumplirla, en el caso particular, a entregar a los trabajadores que deseen efectuar traspasos de su cuenta, la Solicitud de Traspaso establecida en el Anexo A, ***Circular CONSAR 28-16***, conjuntamente con los Anexos B y C, no encontrándose condicionada a la emisión de un acto concreto de la autoridad administrativa correspondiente.

Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, contenido y datos de identificación son los siguientes:

"**LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en S.J.F. Novena Época. Tomo I, pág. 383].

Por lo antes expuesto, si la ***Circular CONSAR 28-16*** impugnada en el presente juicio entró en vigor el 07 de mayo de 2007, el plazo de cuarenta y cinco días para la presentación de la demanda inició el 08 de mayo y concluyó el 09 de julio de 2007, descontando de dicho cómputo los días 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de mayo; 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30 de junio; así como 1, 7, y 8 de julio de 2007, por corresponder a sábados y domingos, por ser días inhábiles conforme al Acuerdo G/1/2007 relativo al calendario de suspensión de labores para el año 2007.

Si en el caso, la presentación de la demanda se realizó el 16 de mayo de 2007 ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas, dicha presentación es oportuna en términos del artículo 13, fracción I, inciso b) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

QUINTO. (SE REITERA EL CONTENIDO DEL CONSIDERANDO TERCERO DE LA SENTENCIA DE 18 DE AGOSTO DE 2008).

Por ser de orden público, este Cuerpo Colegiado procede al estudio de la **PRIMERA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO** formulada por la autoridad al contestar la demanda, lo que realiza en los siguientes términos <folios 211 y 212 del expediente en que se actúa >:

[N.E. Se omite transcripción]

Manifiesta esencialmente la autoridad que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción I del artículo 8, por lo siguiente:

Que el establecimiento de medidas de instrumentación no le irroga perjuicio alguno a la demandante, ya que responden a la naturaleza de los sistemas en los que el fin primordial es el bien común, pues se trata de disposiciones de orden público e interés social;

Que de sentar algún precedente sobre la no obligatoriedad de incluir la dirección ***e-sar*** *o bien implementar el logotipo de SIEMBRA Y COSECHA en los estados de cuenta atentaría contra un grupo aproximado de 38 millones de trabajadores respecto de la omisión de enterarse oportuna y verazmente de los beneficios en materia de rendimientos y beneficios fiscales que repercuten en las aportaciones voluntarias que se efectúen o bien, realizar traspasos en línea obteniendo mejores rendimientos al cambiar de AFORE;*

Que no existe imposibilidad económica u operativa de la demandante para el envío de los folletos anexos a los estados de cuenta, mucho menos la afectación en sus intereses jurídicos, pues el pago de comisiones que la demandante recibe de los trabajadores conforma importantes ingresos que aseguran el óptimo servicio que puede solventar la demandante.

En su escrito de alegatos, en relación a esta causal de improcedencia, la demandante sostiene esencialmente lo siguiente <folio 267 del expediente en que se actúa>:

[N.E. Se omite transcripción]

En relación con la causal de improcedencia, manifiesta esencialmente la demandante lo siguiente:

Que al comprobar tener autorización para operar una Administradora de Fondos para el Retiro, está sujeta al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular CONSAR 28-16, por tanto, es titular del agravio personal y directo, por tanto, cuenta con interés jurídico que la legitima para promover el juicio;

Que el hecho de que las disposiciones generales pudieran ser de orden público y de interés social, ello no sería obstáculo para que el juicio se continuara hasta sus últimas consecuencias, pues la naturaleza de cualquier norma jurídica no exime a las autoridades responsables de su emisión, circunstancia que al haberse incumplido justifica la presentación del juicio.

A efecto de dar claridad a la causal de improcedencia formulada por la autoridad, se estima conveniente resaltar los principales antecedentes del acto impugnado en el presente juicio, esto es, la **Circular CONSAR 28-16** *Modificaciones y adiciones a las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los Trabajadores*, publicada el 08 de marzo de 2007:

1. **El 31 de agosto de 2006**, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro publicó la **Circular CONSAR 28-13**, "*Reglas generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los trabajadores*";

2. La Circular CONSAR 28-13 fue modificada y adicionada posteriormente por las Circulares CONSAR 28-14 y CONSAR 28-15;

3. El 08 de marzo de 2007, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a través de la **Circular CONSAR 28-16,** resolución impugnada en juicio, **modifica y adiciona a la Circular CONSAR 28-13**, indicándose en el apartado de Consideraciones del propio documento que, su emisión responde al propósito de fortalecer los controles aplicables al proceso de traspaso de cuentas individuales, y evitar prácticas que puedan resultar en daños y perjuicios para los trabajadores.

Expuesto lo anterior, se procede a continuación al análisis del primer argumento en el cual la autoridad sostiene la improcedencia el presente juicio, en el cual señala esencialmente lo siguiente:

Que el establecimiento de medidas de instrumentación no le irroga perjuicio alguno a la demandante, ya que responden a la naturaleza de los sistemas en los que el fin primordial es el bien común, pues se trata de disposiciones de orden público e interés social;

Este Órgano Colegiado considera INFUNDADA la causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada.

Para llegar a dicha conclusión, resulta conveniente revisar el contenido del artículo 8, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo:

[N.E. Se omite transcripción]

En términos de la fracción antes reproducida, el juicio contencioso administrativo es improcedente cuando el acto impugnado no afecte los intereses jurídicos del demandante; por lo tanto, a contrario sensu, el juicio será procedente si el acto que se controvierte afecta los intereses jurídicos de la demandante.

Ahora bien, la procedencia del juicio contencioso administrativo ante este Tribunal Fiscal, está condicionada a que la resolución impugnada afecte algún derecho del demandante o le prive los intereses jurídicos del demandante, es decir, la afectación de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado por un acto de autoridad, tal como lo ha sostenido el Poder Judicial en la jurisprudencia citada a continuación, que si bien se refiere al interés legítimo para promover el juicio de amparo, resulta aplicable en relación con los actos administrativos que pueden ser impugnables ante este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo contenido y alcance es el siguiente:

"**INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en S.J.F. Tomo VIII, Octava Época. Tesis VI.3o. J/26 Diciembre 1991, pág. 117].

En el caso a estudio, se aprecia que efectivamente el acto impugnado afecta el interés jurídico de la promovente, considerando que se emite con apoyo en el artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, disposición en la cual se establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Del contenido del artículo anteriormente transcrito se desprenden entre otros elementos, los siguientes:

Que los trabajadores afiliados tienen derecho a la apertura de su cuenta individual de conformidad con la Ley del Seguro Social, en la administradora de su elección;

Que los trabajadores afiliados podrán solicitar a su administradora que se traspasen sus cuentas individuales que se hayan abierto conforme al régimen previsto en la Ley del Seguro Social de 1973;

Que las administradoras estarán obligadas a abrir la cuenta individual o a aceptar el traspaso de dicha cuenta, de aquellos trabajadores afiliados que cumpliendo con las disposiciones aplicables, soliciten su apertura de cuenta. En ningún caso podrán hacer discriminación de trabajadores.

Que los trabajadores tendrán derecho a traspasar su cuenta individual de una administradora a otra;

Que las administradoras serán responsables de efectuar los trámites para el traspaso de cuentas individuales, una vez que el trabajador afiliado haya presentado las solicitudes correspondientes en los términos de las disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro.

Ahora bien, la emisión de la ***Circular CONSAR 28-16 Modificaciones y Adiciones a las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los Trabajadores,*** tiene como propósito modificar a la diversa ***Circular CONSAR 28-13, "Reglas generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los trabajadores"***, con los siguientes propósitos:

a) Disponer que todas las administradoras de fondos para el retiro establezcan controles comerciales y administrativos para verificar las solicitudes de traspaso que reciban, con el fin de asegurar que éstas cuentan con el consentimiento expreso de los trabajadores;

b) Establecer criterios de validación más objetivos, a fin de reforzar el proceso de verificación de las solicitudes de traspaso que realizan las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR.

En el caso particular, la demandante exhibe en juicio el oficio D00/1000/07/97 emitido el 27 de enero de 1997 por el cual la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro le autoriza para organizar y operar una Administradora de Fondos para el Retiro, documento público, que se valora en términos del artículo 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reproduciéndose a continuación <folio 185 a 187 del expediente en que se actúa>:

[N.E. Se omiten imágenes]

En los términos así apuntados, si en el caso, la demandante acredita tener autorización para organizar y operar una Administración de Fondos para el Retiro, resulta estar obligada al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ***Circular CONSAR 28-16 Modificaciones y Adiciones a las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas***

operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los Trabajadores.

Por lo antes expuesto, contrario a lo señalado por la autoridad, la demandante resulta tener interés jurídico para promover el presente juicio en contra de la ***Circular CONSAR 28-16.***

Expuesto lo anterior, se procede a continuación al estudio de los restantes argumentos de improcedencia formulados por la autoridad, los cuales por estar estrechamente relacionados se estudian de manera conjunta.

Sostiene esencialmente la autoridad demandada lo siguiente:

Que de sentar algún precedente sobre la no obligatoriedad de incluir la dirección ***e-sar*** *o bien implementar el logotipo de SIEMBRA Y COSECHA en los estados de cuenta atentaría contra un grupo aproximado de 38 millones de trabajadores respecto de la omisión de enterarse oportuna y verazmente de los beneficios en materia de rendimientos y beneficios fiscales que repercuten en las aportaciones voluntarias que se efectúen o bien, realizar traspasos en línea obteniendo mejores rendimientos al cambiar de AFORE;*

Que no existe imposibilidad económica u operativa de la demandante para el envío de los folletos anexos a los estados de cuenta, mucho menos la afectación en sus intereses jurídicos, pues el pago de comisiones que la demandante recibe de los trabajadores conforma importantes ingresos que aseguran el óptimo servicio que puede solventar la demandante.

Este Órgano Colegiado considera INFUNDADOS los argumentos en los que se sostiene la causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada.

En efecto, no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 8o, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debido a que los argu-

mentos expuestos por la demandada tienen como propósito justificar la legalidad de las modificaciones contenidas en la ***Circular CONSAR 28-16***, así como demostrar que no existe impedimento económico u operativo que impidan a la demandante cumplir con lo dispuesto en dicha Circular.

Son de desestimarse los anteriores argumentos, ya que con ellos, lejos de demostrar la falta de interés jurídico de la demandante para promover el presente juicio, se trata de argumentos tendientes a demostrar que la actora carece de razón en cuanto al fondo del asunto, conclusión a la cual podría arribarse, en su caso, derivado del análisis de los conceptos de impugnación formulados por la demandante.

Es aplicable al efecto la jurisprudencia número V-J-SS-78, sustentada por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, visible en la Revista que edita, Quinta Época, Año V, N° 57, septiembre de 2005, página 7, que señala:

> "**SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.- SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBE DESESTIMARSE.**" [N.E. Se omite transcripción]

En los términos antes expuestos, resultan infundados los argumentos formulados en la primera propuesta de improcedencia formulada por la autoridad demandada, por tanto, se procede al estudio de la segunda propuesta de improcedencia formulada por la demandada.

SEXTO. (SE REITERA EL CONTENIDO DEL CONSIDERANDO CUARTO DE LA SENTENCIA DE 18 DE AGOSTO DE 2008).

La autoridad formula una **SEGUNDA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO** en los siguientes términos <folio 212 del expediente en que se actúa >:

[N.E. Se omite transcripción]

Manifiesta esencialmente la autoridad que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción IV del artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo siguiente:

Que la obligatoriedad del envío de información adicional a los estados de cuenta nace desde la emisión de la Circular CONSAR 28-10, la cual no fue impugnada por la demandante y la cual no desconoce por haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de agosto de 2005, en cuya Regla Ducentésima vigésima quinta, se prevé desde entonces, la obligatoriedad de enviar los Anexos que la Comisión determine, por tanto, se está en presencia de actos consentidos.

En su escrito de alegatos, en relación a esta causal de improcedencia, la demandante sostiene esencialmente lo siguiente <folios 267 y 268 del expediente en que se actúa>:

[N.E. Se omite transcripción]

En su escrito de alegatos, en relación a esta causal de improcedencia, la demandante sostiene esencialmente lo siguiente <folio 267 del expediente en que se actúa>:

Que resulta falso que la Circular CONSAR 28-16 sea un acto derivado de otro consentido, porque las disposiciones que específicamente se combaten en el presente juicio, esto es, las relativas a incorporar leyendas y signos distintivos era materialmente inexistente en la Circular CONSAR 22-10, pues lo cierto es que cada Circular es un acto de autoridad nuevo, ajeno al anterior que deja sin efectos, perfectamente susceptible de ser impugnado a través de las acciones administrativas correspondientes.

Este Órgano Colegiado considera INFUNDADOS los argumentos en los que se sostiene la causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada.

Carece de sustento la causal de improcedencia formulada por la autoridad demandada, pues como ya se indicó, el 31 de agosto de 2006, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro publicó la **Circular CONSAR 28-13**, "*Reglas generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los trabajadores*".

Dicha Circular CONSAR 28-13 fue modificada y adicionada posteriormente por las Circulares CONSAR 28-14 y CONSAR 28-15.

Sin embargo, el 08 de marzo de 2007, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, publicó la ***Circular CONSAR 28-16 Modificaciones y Adiciones a las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los Trabajadores,*** que modifica a la ***Circular CONSAR 28-13, "Reglas generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los trabajadores***, con el propósito de establecer a cargo de las Administradoras de Fondos de Retiro mayores controles en los proceso de cuentas individuales, a efecto de evitar prácticas de las que puedan derivar daños y perjuicios para los intereses de los trabajadores.

Con independencia de que el 01 de agosto de 2005 se hubiera publicado la **Circular CONSAR 28-10**, que estableciera la obligación de enviar los Anexos que la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro determinara, lo cierto es que, la SÉPTIMA DISPOSICIÓN TRANSITORIA de la **Circular CONSAR 28-16 Modificaciones y Adiciones a las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los Trabajadores,** dejó sin efectos las anteriores disposiciones expedidas por la Comi-

sión que se opusieran a lo dispuesto en dicha Circular **CONSAR 28-16**, en los términos siguientes:

[N.E. Se omite transcripción]

Así las cosas, con la abrogación de las Circulares CONSAR citadas, es evidente que se está en presencia de un nuevo acto administrativo que sustituyó a los anteriores, por lo cual, en su contra procede un nuevo juicio para su impugnación.

Al respecto, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido se transcriben a continuación:

> "**LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO.** [N.E. Se omite transcripción, consultable en S.J.F. Tomo I, Novena Época, Tesis: 313, Apéndice 2000, pág. 369]

En los términos así expuestos, es evidente que tratándose de Reglas Administrativas de Carácter General, como lo es el caso de las Circulares de la CONSAR, cualquiera que sea el contenido y alcance de este tipo de actos, cuando es sustituido por otro texto distinto, similar o incluso idéntico, debe estimarse que se está en presencia de un nuevo acto, por lo que si la Circular anterior no se controvirtió, aunque tenga un contenido en esencia sea idéntico a la nueva, no implica que la nueva Circular esté consentida.

Esto es así, en tanto que esta clase de Circulares no son más que los actos administrativos que traducen la voluntad del órgano facultado para emitirlas, actos que desde luego se extinguen cuando el propio órgano, conforme al procedimiento y formalidades previstas para el caso, dicta otro para derogar o modificar el anterior;

en este sentido, basta que el texto de la Circular, en este caso, sufra alguna modificación, por intrascendente que parezca, para que cese el consentimiento de la anterior Circular que incluso se cumplimentó por el particular al que se aplicó, aun cuando ese nuevo texto pueda o no coincidir en esencia con el preexistente y concuerde esencialmente con el anterior.

En este tenor, se invoca por analogía la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, No. 124, publicada en el Apéndice de 1988, primera Parte, página 228, que precisa:

> "**LEYES, CONSENTIMIENTO DE LAS. NO EXISTE CUANDO DOS ORDENAMIENTOS LEGALES CONTEMPLAN SITUACIONES JURÍDICAS IGUALES, AUN CUANDO SE HAYA CONSENTIDO LA CREADA POR EL PRIMERO DE AQUELLOS.**" [N.E. Se omite transcripción]

De la lectura de los criterios jurisprudenciales transcritos con antelación se deriva que, resulta procedente la acción intentada en un juicio contencioso administrativo que se enderece en contra de una Circular como la que nos ocupa, aunque el contenido de esa Circular infiera o cause al particular un perjuicio igual o similar al que hubiera resentido con la Circular anterior, que no se controvirtió en su momento, e incluso se acató, siempre que la Circular impugnada provenga de un nuevo procedimiento contemplado en la ley que haya culminado con la creación de su nuevo texto, lo cual acontece, naturalmente, cuando se abroga una Circular en su integridad y se expide una nueva en el que se incluyen algunos preceptos idénticos a los contenidos en la anterior, o, en su caso cuando se introduce una modificación que varía en cualquier sentido el texto de la Circular anterior, toda vez que en ambos supuestos ya no se está en presencia del mismo acto, sino de uno distinto.

Expuestas las consideraciones de mérito, es claro advertir que, contrariamente a lo aducido por la parte demandada, a juicio de este órgano jurisdiccional el caso a

estudio no debe sobreseerse, ante la falta de actualización de la propuesta de improcedencia aducida por la autoridad.

En tal virtud, lo conducente es proceder al estudio del fondo de la litis planteada por las partes.

SÉPTIMO. SE DA ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EL 20 DE ENERO DE 2010, POR EL DECIMOSEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EN EL JUICIO DE AMPARO D.A. 225/2009

De conformidad con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debido a la estrecha relación que guardan entre sí, este Cuerpo Colegiado, procede al estudio conjunto de los tres agravios formulados por la actora en los cuales sostiene que la ***Circular CONSAR 28-16, que contiene las Modificaciones a las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, para el traspaso de cuentas individuales de los trabajadores, expedida por el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro resulta violatoria del principio de reserva de ley, esto es, va más allá de lo que dispone la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento***, que de resultar fundados, llevarían a declarar la nulidad lisa de la norma general impugnada <folios 010 a 039 del expediente en que se actúa>:

[N.E. Se omite transcripción]

En su escrito de alegatos la demandante reiteró las anteriores consideraciones, las que en obvio de repeticiones se tienen por reproducidas.

La autoridad en su contestación a la demanda se refirió respecto de este concepto de impugnación en los términos siguientes <folios 213 a 261 del expediente en que se actúa>:

[N.E. Se omite transcripción]

En su escrito de alegatos la autoridad reiteró las anteriores consideraciones, las que en obvio de repeticiones se tienen por reproducidas.

Expuesto lo anterior, debido a encontrarse estrechamente relacionados entre sí, se procede a continuación al análisis de los agravios de la demandante, en los cuales sostiene esencialmente lo siguiente:

Que las disposiciones generales contenidas en la Circular CONSAR 28-16, en cuanto la obligan a incorporar información adicional y modalidades a los formatos de traspaso de cuentas de los trabajadores, como iconos o la dirección de portales de Internet, violan el principio de legalidad, en cuanto al ámbito de atribuciones del Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, por inobservancia del texto constitucional, al establecer obligaciones que van más allá de la letra y espíritu de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y, en ese sentido, de los principios de Supremacía y Reserva de Ley;

Que al darse existencia a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, se le concedieron atribuciones para emitir disposiciones de carácter general en materias específicas; sin embargo, estas atribuciones reguladoras de carácter técnico-operativas, no deben confundirse con una facultad legislativa, ni tampoco con una facultad reglamentaria;

Que al emitir la Circular CONSAR 28-16, el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro incurrió en un claro desvío de poder y en franca transgresión al principio de reserva de Ley, ya que sin ser un órgano constitucionalmente legitimado para ello, estableció disposiciones generales que limitan el ejercicio de los derechos de los que son titulares las administradoras de fondos para el retiro, pues si bien puede emitir disposiciones generales para definir lineamientos técnico-operativos que son necesarios para hacer cumplir la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, esa atribución se encuentra circunscrita a las materias que la Ley misma establece, y no existe disposición legal alguna que le confiera la potestad para establecer obligaciones que graven y condicionen las actividades que son propias del particular;

Que la Circular CONSAR 28-16 resulta contraria a los principios y garantías que tutela el artículo 31, fracción IV de la Constitución, no sólo porque la contribución impuesta a las administradoras de fondos para el retiro no está prevista en una Ley, sino también porque no es proporcional ni equitativa;

Que la Circular CONSAR 28-16 viola la garantía de legalidad, concretamente de fundamentación y motivación, por indebida interpretación y aplicación de los artículos 5 y 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro por arrojarle una carga que en estricto sentido corresponde a la Administración Pública, lo que resulta confiscatorio y contrario al principio de legalidad tributaria que contempla el artículo 31, fracción IV de la constitución.

Que ninguna norma de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o de su Reglamento conceden a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro atribuciones específicas para emitir Reglas Generales o Circulares, a través de las cuales se atribuya, a sí misma, la facultad omnímoda para determinar la incorporación de información adicional y modalidades a los formatos de Traspaso de Cuentas Individuales de los trabajadores, tales como iconos y portales de Internet en los formatos de traspaso, considerando que ninguno de esos elementos tiene que ver con la relación entre la administradora de fondos para el retiro y el trabajador, es decir, con la decisión unilateral del trabajador de cambiar de administradora de fondos, o con los trámites que éstas deben seguir internamente para que ese traspaso se lleve a buen fin;

Que al haberse incorporado en los Anexos A, B y C de la Circular CONSAR 28-16 la información adicional y las modalidades consistentes en un icono de "Siembra y Cosecha" y la dirección del portal "e-sar", el Presidente de la CONSAR pasó por alto el texto expreso de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento.

Que la facultad contenida en el último párrafo del artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y el último párrafo del artículo 49 de su

Reglamento, puede desprenderse la facultad de la Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para emitir disposiciones generales que normaran los formatos de traspaso de cuenta más allá de su mero diseño y estructura formal, es decir, deben vincularse de manera forzosa con la materia que corresponde a dichos documentos y la información que lógica y jurídicamente debe contener, es decir: la petición de traspaso, fecha de la solicitud y determinación de la administradora a la que los fondos deben traspasarse, así como cambio de Afore y liquidación de los recursos que se traspasaron;

Por razón de método, este Cuerpo Colegiado procede al estudio de los agravios de la actora en los siguientes términos:

A) Se inicia con el análisis de la facultad del Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para expedir reglas de carácter general, en particular, la ***Circular CONSAR 28-16, que contiene las Modificaciones a las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, para el traspaso de cuentas individuales de los trabajadores, expedida por el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, publicadas el 08 de marzo de 2007***.

B) Posteriormente, se resolverá sobre la competencia de este Tribunal Federal para conocer del agravio en el sentido de que la ***Circular CONSAR 28-16 viola el principio de reserva de ley en relación con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento***.

C) Finalmente, se determinará si la ***Circular CONSAR 28-16*** *incurre en violación al principio de reserva de ley al obligar a los destinatarios de la misma, a incorporar información adicional y modalidades a los formatos de traspaso de cuentas de los trabajadores como íconos o la dirección de portales de Internet.*

En relación a la primera parte del agravio, misma que anteriormente se identificó con el inciso **A)**, resulta pertinente precisar que, la resolución controvertida en juicio, es la **Circular CONSAR 28-16 Modificaciones y adiciones a las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los Trabajadores**.

Que dicha Circular CONSAR 28-16 se emitió por el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro con fundamento en el contenido de los artículos 5o, fracciones I y II, y 12, fracciones I, VIII, y XVI de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, disposiciones que establecen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De los ordinales transcritos se aprecia con toda claridad que el Presidente tiene la representación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como el ejercicio de sus facultades.

Asimismo, conforme al contenido de dicha Circular CONSAR 28-16, la Comisión tiene conferida por el legislador la facultad expresa de expedir disposiciones de carácter general, a las que deben sujetarse los participantes de los sistemas de ahorro para el retiro, en cuanto a: constitución, organización, funcionamiento, operaciones, y participación en los sistemas de ahorro.

En esos términos, resulta que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro cuenta con facultades para emitir Reglas de Carácter General, y que el Presidente de dicha Comisión es el representante legal de la Comisión y quien ejerce sus facultades.

Por lo tanto, el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro cuenta con las atribuciones y competencia legales para emitir la **Circular Consar 28-13**, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de

2006, así como la **Circular CONSAR 28-16 Modificaciones y adiciones a las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los Trabajadores,** publicada, el 08 de marzo de 2007.

Tratándose de la segunda parte del agravio, identificada anteriormente con el inciso **B)**, **en cumplimiento a la ejecutoria dictada el 20 de enero de 2010, por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo D.A. 225/2009,** ***este Cuerpo Colegiado se refiere a la competencia de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer si la Circular CONSAR 28-16 viola el principio de reserva de ley en relación con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento,*** cuestión que ya fue resuelta en el Séptimo Considerando de la ejecutoria que se cumplimenta, **conforme a la transcripción que se realiza en las páginas 6 a 36 de la presente sentencia**, y en la que esencialmente se sostiene lo siguiente:

Que el artículo 2o., de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo incorporó una regla de procedencia del juicio contencioso administrativo federal no contemplada en el Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 31 de diciembre de 2005);

Que en ese contexto, se introdujo en la ley, como novedad, la posibilidad que los particulares puedan impugnar ante las salas de este Tribunal, no sólo actos administrativos de carácter individual dentro del ámbito de su competencia, sino también las diversas resoluciones administrativas de carácter general que expidan las autoridades en ejercicio de sus facultades, cuando éstas sean contrarias a la Ley de la materia, siempre y cuando sean autoaplicativas o cuando el interesado las controvierta en unión del primer acto de aplicación, excluyéndose la competencia del Tribunal para conocer de los reglamentos y demás normas generales de mayor jerarquía;

Que en esos términos, pueden impugnarse las circulares CONSAR que emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, dentro de los plazos establecidos en la propia ley citada, siendo evidente que se facultó a este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para revisar su legalidad, en el entendido de que dicha legalidad se encuentra consagrada como principio fundamental en el artículo 16 constitucional;

Que conforme al artículo 16 constitucional, las autoridades sólo pueden hacer lo que les está permitido por la ley, de tal forma que, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado;

Que el principio de legalidad es una expresión particular de la seguridad jurídica que garantiza el orden constitucional, de manera que una norma administrativa de cuya impugnación conoce este Tribunal Federal puede contener vicios que afecten su propia legalidad y que radican fundamentalmente en los siguientes tópicos:

- Aspectos propios de competencia de las autoridades emisoras de las normas generales (competencia subjetiva del emisor de la norma), lo que implica que este Tribunal Federal puede establecer si las normas impugnadas se expidieron o no por autoridad facultada para ello;

- Aspectos relativos al contenido de las normas impugnadas, es decir, este Tribunal Federal podrá analizar si dichas normas respetan el principio de "reserva de ley", el cual se traduce en que las normas generales no rebasen los ámbitos de validez de la ley que complementen;

Que en esos términos, las controversias de las cuales puede conocer este Tribunal Federal, tratándose de la impugnación de las normas administrativas de su competencia, en realidad, también implican la revisión de su constitucionalidad, pero acotada a los aspectos antes apuntados, que gravitan en torno a la infracción

al principio de legalidad a que se contrae el artículo 16 constitucional (competencia del emisor de la norma y su contenido material);

Que bajo esa óptica, este Tribunal Federal sí puede revisar la constitucionalidad de las normas administrativas de observancia general de su conocimiento, siempre que esa revisión implique la violación al artículo 16 de la Constitución Federal, mas no cuando se trate de otro tipo de infracciones constitucionales, distintas al tema de legalidad;

Que este nuevo sistema de control de la legalidad de normas administrativas de observancia general, no es irreconciliable con el sistema concentrado que ejercen los órganos del Poder Judicial de la Federación sobre la constitucionalidad de las normas generales a través del juicio de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, habida cuenta que se trata de sistemas con vertientes distintas, pues, como se mencionó, en el artículo 2o., de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el legislador tuvo la intención de implantar un sistema de control de la "legalidad" de este tipo de normas, inferiores a los reglamentos, en aras de ampliar la tutela de los derechos de índole administrativo que gozan los gobernados, mientras que el sistema concentrado a cargo de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, tienen como finalidad el control de la "constitucionalidad" de las normas generales, y con ello, salvaguardar el principio de supremacía constitucional instituido por el Poder Revisor de la Constitución, en el artículo 133 de este ordenamiento supremo;

Que por lo anterior, este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sí puede emprender el análisis constitucional de una norma general de su conocimiento; siempre que los vicios que contenga impliquen una violación al principio de legalidad a que se contrae el artículo 16 de la Constitución Federal, esto es, cuando se cuestione la competencia del emisor de la norma o si dicha norma respeta el principio de "reserva de ley".

Expuesto lo anterior, y en relación con la tercera parte del agravio, identificado anteriormente bajo el inciso C), este Cuerpo Colegiado en **cumplimiento a la ejecutoria dictada el 20 de enero de 2010, por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo D.A. 225/2009,** este Cuerpo Colegiado procede a determinar si la ***Circular CONSAR 28-16*** *obliga a los destinatarios de la misma, a incorporar información, adiciona y modalidades a los formatos de traspaso de cuentas de los trabajadores como íconos o la dirección de portales de Internet.*

A efecto de dilucidar correctamente los agravios de la actora, este Cuerpo Colegiado, considera oportuno atender al contenido del acto administrativo de carácter general controvertido, mismo que se reproduce a continuación <folios 053 a 058 y reverso del expediente en que se actúa>

[N.E. Se omite transcripción]

Del contenido de la Circular CONSAR 28-16 anteriormente reproducida, se desprenden las siguientes consideraciones:

Que dicha ***CIRCULAR CONSAR 28-16****, Modificaciones y adiciones a las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los trabajadores, se emite por el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en lo previsto por los* ***artículos 5o. fracciones I, II, XIV y XV, 12 fracciones I, VIII y XVI, 30, 58, 59, 74, 76, 89 y 90 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; así como los artículos 28 fracciones X y XI, 49, 50, 51, 56 fracciones I, II, VI, VII, VIII, XII y XV, inciso b, y 82 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro****;*

Que la ***CIRCULAR CONSAR 28-16*** *se emitió con el propósito de establecer que todas las administradoras de fondos para el retiro establezcan controles*

comerciales y administrativos para verificar las solicitudes de traspaso que reciban, con el fin de asegurar que éstas cuentan con el consentimiento expreso de los trabajadores;

Que en todo caso, los agentes promotores serán responsables de verificar que los trabajadores asienten correctamente sus datos en la ***Solicitud de Traspaso, la cual debe sujetarse al formato establecido en el Anexo "A" de las reglas generales contenidas en la propia CIRCULAR CONSAR 28-16, que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro publicará en el Diario Oficial de la Federación las actualizaciones o modificaciones que, en su caso, se realicen a dicho Anexo;***

Que se modifican los Anexo A, B y C de la Circular CONSAR 28-13*,* las cuales se reproducen a continuación <folios 058, anverso y reverso, así como 59, anverso y reverso, del expediente en que se actúa>:

[N.E. Se omiten imágenes]

Expuesto lo anterior, para este Cuerpo Colegiado son **FUNDADOS** los argumentos de agravio formulados por la actora, por las razones siguientes.

La actora impugna la **Circular CONSAR 28-16 Modificaciones y adiciones a las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los Trabajadores**, publicada el 08 de marzo de 2007, en las partes siguientes: *PRIMERA, en lo que se refiere a la modificación del último párrafo de la Regla Décima Primera de la Circular CONSAR 28-13; SEGUNDA, en lo que se refiere al Anexo A de la Circular CONSAR 28-13; TERCERA, en lo que se refiere a los Anexos B y C de la Circular CONSAR 28-13*, exclusivamente respecto de los símbolos y leyendas.

Los aspectos concretos impugnados por la actora, se refieren a que incluya en los formatos de solicitudes de traspaso de cuentas individuales de los trabajadores, en los formatos de constancia de traspaso y en los formatos de constancia de liquidación de traspaso, los siguientes elementos gráficos.

IMAGEN UNO, que debe contener la frase "En tu afore", seguida de la imagen de un árbol y que concluye con la diversa frase "Siembra y Cosecha".

IMAGEN DOS, correspondiente al ícono del portal electrónico "e-sar", seguido de la frase "traspaso por Internet" y de la dirección de dicho portal electrónico www.e-sar.com.mx, la cual concluye con la frase "!Recuerde que puede cambiar de Afore por Internet!".

A su vez, el argumento principal de la actora se hace consistir en que, la Circular CONSAR 28-16, que contiene las Modificaciones a las Reglas Generales a las que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, para el traspaso de cuentas individuales de los trabajadores, expedida por el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, publicadas el 08 de marzo de 2007, ***resultó violatoria del principio de reserva de ley***, ***esto es, va más allá de lo que dispone la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro***.

La CIRCULAR CONSAR 28-16 fue emitida por el Presidente del Sistema de Ahorro para el Retiro citando como fundamento los ***artículos 5o. fracciones I, II, XIV y XV, 12 fracciones I, VIII y XVI, 30, 58, 59, 74, 76, 89 y 90 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro,*** así como los **artículos *28 fracciones X y XI, 49, 50, 51, 56 fracciones I, II, VI, VII, VIII, XII y XV, inciso b, y 82 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro***.

Las disposiciones citadas como fundamento de la CIRCULAR CONSAR 28-16 señalan lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De las disposiciones anteriormente transcritas, en la parte que interesa al presente estudio, se desprende lo siguiente:

➢ **Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro:**

El artículo 5o., en sus fracciones I y II establece que *la Comisión del Sistema de Ahorro para el retiro tendrá facultades para* ***regular, mediante la expedición de disposiciones de carácter general, lo relativo a la operación de los sistemas de ahorro para el retiro, la recepción, depósito, transmisión y administración de las cuotas y aportaciones correspondientes a dichos sistemas, así como la transmisión, manejo e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los institutos de seguridad social y los participantes en los referidos sistemas, determinando los procedimientos para su buen funcionamiento;*** así como, para ***expedir las disposiciones de carácter general a las que habrán de sujetarse los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, en cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, operaciones y participación en los sistemas de ahorro para el retiro, tratándose de las instituciones de crédito esta facultad se aplicará en lo conducente***;

Asimismo, en las fracciones XIV y XV del propio artículo 5o., se dispone que, corresponde a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ***dar a conocer a la opinión pública reportes sobre comisiones, número de trabajadores registrados en las administradoras, estado de situación financiera, estado de resultados, composición de cartera y rentabilidad de las sociedades de inversión, cuando menos en forma trimestral;*** asimismo, **elaborar y publicar estadísticas y documentos relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro**.

El artículo 12, fracciones I, VIII y XVI señala que, son facultades y obligaciones del Presidente de la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro, ***tener a su cargo la representación legal de la Comisión y el ejercicio de sus facultades, proveer en los términos de la ley y demás relativas, el eficaz cumplimiento de***

sus preceptos*;* así como, ***las demás facultades que le delegue la Junta de Gobierno o le sean atribuidas por ésta y otras leyes***.

El artículo 30 dispone que, en cada administradora existirá un contralor normativo responsable de vigilar que los funcionarios y empleados de la misma cumplan con la normatividad externa e interna que sea aplicable. Asimismo establece que, la administradora deberá dotar al contralor normativo de los recursos humanos y materiales que requiera para el buen desempeño de las funciones a su cargo; señala los términos de su nombramiento, así como lo relativo a la suspensión, remoción o revocación de dicho nombramiento; y las funciones que éste debe cumplir.

El artículo 58 declara de interés público la operación de la Base de Datos Nacional SAR que tiene por finalidad la identificación de las cuentas individuales en las administradoras e instituciones de crédito; la certificación de los registros de trabajadores en las mismas; el control de los procesos de traspasos; así como instruir al operador de la cuenta concentradora, sobre la distribución de los fondos de las cuotas recibidas a las administradoras correspondientes.

El artículo 59 señala que, las empresas operadoras deberán sujetar su operación a lo dispuesto en la ley, así como en el título de concesión; a su vez, los concesionarios en ningún caso podrán ceder, ni en forma alguna gravar, transferir o enajenar la concesión o los derechos en ella conferidos.

El artículo 74 señala el derecho de los trabajadores a la apertura de su cuenta individual de conformidad con la Ley del Seguro Social, en la administradora de su elección; los requisitos para abrir dichas cuentas así como la forma en que se integran dichas cuentas individuales;

El artículo 76 señala que, los recursos de los trabajadores afiliados que no elijan administradora serán enviados a las administradoras que cobren las comisiones más bajas de conformidad con los criterios de la Junta de Gobierno para preservar el equilibrio en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las cuales les deberán abrir una

cuenta individual y colocar sus recursos en una sociedad de inversión cuya cartera esté integrada por valores que preserven el valor adquisitivo de los ahorros de los trabajadores, con la periodicidad que determine la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro.

El artículo 89 establece que, la supervisión que realice la Comisión se sujetará al Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y comprenderá el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, prevención y corrección que se confieren a la Comisión en la propia ley, así como en otras leyes y disposiciones aplicables; que tratándose de las instituciones de crédito, la supervisión se realizará exclusivamente por lo que respecta a las operaciones que realicen en relación con los referidos sistemas.

El artículo 90 señala las facultades de la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro en materia del ejercicio de sus funciones de supervisión.

➢ **Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro:**

El artículo 28 señala los derechos de los trabajadores afiliados en relación con su cuenta individual.

El artículo 49 señala que, los Trabajadores Afiliados tendrán derecho a solicitar el traspaso de su Cuenta Individual a otra Administradora distinta a la que la venía administrando, a través de los medios a que se refiere el artículo 30 del propio Reglamento.

El artículo 50 dispone que, en ningún caso podrán ser discriminados los Trabajadores Afiliados, por lo que la Administradora Receptora y la Administradora Transferente no podrán negarse a efectuar el traspaso solicitado, cuando se cumpla con las disposiciones legales establecidas al efecto.

El artículo 51 establece que, para proteger los intereses de los Trabajadores Afiliados, las Administradoras Receptoras serán responsables del traspaso indebido de Cuentas Individuales de Trabajadores Afiliados.

El artículo 56 señala que, la operación de las Empresas Operadoras asegurará el buen funcionamiento de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en beneficio de los Trabajadores Afiliados, señalando para ello las funciones correspondientes.

El artículo 82 indica que, los Trabajadores inscritos en el ISSSTE, tendrán derecho a solicitar el traspaso de su Cuenta Individual a una Administradora diferente a la que opere la cuenta, señalando los supuestos correspondientes.

En ese orden de ideas, si bien la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro está facultada legalmente para emitir disposiciones de carácter general y, por ende, puede regular el funcionamiento de las Administradoras de Fondos para el Retiro y establecer los lineamientos que se deben seguir en los formatos de solicitud de registro y constancia de registro, de las disposiciones antes transcritas no se desprende que dicha Comisión pueda establecer que se incorporen en dichos documentos elementos que no sean indispensables para su objeto.

Esto es, los formatos de solicitud de registro y constancia de registro deben contener los datos esenciales para los que fueron creados, sin que se pueda obligar a que en ellos se incorpore información ajena a la materia del acto de registro y la constancia respectiva.

Cabe apuntar que el artículo18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en su fracción I, I Bis, I Ter y I Quarter dispone que, las Administradoras de Fondos para el Retiro, tienen por objeto abrir, administrar y operar cuentas individuales de los trabajadores conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida la Comisión. El artículo en comento señala literalmente lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Sin embargo, el hecho de que la hoy actora en su carácter de Administradora de Fondos para el Retiro deba abrir, administrar y operar cuentas individuales de los

trabajadores conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida la Comisión no implica que se le pueda imponer la obligación de insertar en los formatos de solicitud de registro y constancia de registro, los elementos que de manera discrecional establezca la Comisión y que no se refieran a los datos que por virtud del objeto para el que fueron creados deban incluir.

En tal virtud, la imagen del árbol con la leyenda respectiva, así como el ícono "e-sar", no corresponden a ninguno de los elementos que deben contener los documentos en mención, ya que no tienen que ver con la relación legal y comercial entre el trabajador y la administradora, pues el primero se trata un lema del gobierno y el segundo conecta con la Base Nacional de Datos del Sistema de Ahorro para el Retiro, la cual, atento a lo establecido por el artículo 57 del ordenamiento legal en mención, contiene la información de los sistemas de ahorro para el retiro, así como la información individual de cada trabajador y el registro de la administradora o institución de crédito en que cada uno de éstos se encuentra afiliado.

De igual manera, no puede considerarse que, por el hecho de que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro pueda regular el funcionamiento de las Administradoras de Fondos para el Retiro y además establecer los lineamientos que se deben seguir en los formatos de solicitud de registro y constancia de registro, con los íconos y leyendas en comento esté regulando, supervisando y vigilando el funcionamiento de dichos sistemas, pues la incorporación de tales elementos no conlleva a que se regule, supervise o vigile la actuación de la quejosa en las funciones que debe realizar.

Asimismo, cabe señalar que la circunstancia de que los iconos y leyendas en comento, faciliten a los trabajadores la consulta de las disposiciones aplicables a los fondos para el retiro, así como que les proporcionen los medios para que obtengan información precisa y fidedigna sobre su cuenta individual y el funcionamiento legal del sistema en lo general no significa que por esa razón la actora deba incorporarlos en los documentos de referencia.

Se afirma lo anterior, toda vez que, la transparencia en el manejo de cuentas corresponde a un documento elaborado periódicamente en el que se refleja el estado de cuenta del trabajador, el cual contiene las operaciones que la administradora hubiere realizado con los recursos y aportaciones, el cual es distinto a su registro y constancia de registro, que se refiere a la materialización del comprobante o medio de prueba con que debe contar el trabajador para asegurarse de que ha quedado afiliado a una administradora.

Por otra parte, quien tiene la obligación de dar a conocer al trabajador las disposiciones aplicables a los fondos para el retiro, así como los medios para que obtengan información sobre su cuenta individual y el funcionamiento legal del sistema en lo general, es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de conformidad con los artículos 5, fracciones XIV y XV, y 37, penúltimo y últimos párrafos, 57 y 59 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 3º de su Reglamento que establecen:

[N.E. Se omite transcripción]

Con la finalidad de que los trabajadores puedan tener información oportuna sobre las comisiones que se cobren con cargo a sus cuentas individuales, la Comisión deberá informar periódicamente a través de los medios a su disposición las comisiones que cobren las distintas administradoras, procurando que dicha información sea expresada en lenguaje accesible y permita a los trabajadores comparar las comisiones que cobran las distintas administradoras.

Asimismo, la Comisión determinará la forma y términos en que las administradoras deberán dar a conocer a los trabajadores sus estructuras de comisiones, en los siguientes términos:

[N.E. Se omite transcripción]

De los artículos transcritos de advierte que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro tiene entre sus facultades la de dar a conocer a la opinión pública reportes sobre comisiones, número de trabajadores registrados en las administradoras, estado de situación financiera, estado de resultados, composición de cartera y rentabilidad de las sociedades de inversión, cuando menos en forma trimestral, así como elaborar y publicar estadísticas y documentos relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro, así como informar periódicamente a los trabajadores las comisiones que cobren las distintas administradoras; para lo cual cuenta con la Base de Datos Nacional SAR, que se conforma por la información procedente de los sistemas de ahorro para el retiro, y que contiene la información individual de cada trabajador y el registro de la administradora o institución de crédito en que cada uno de éstos se encuentra afiliado, además que tiene por finalidad la identificación de las cuentas individuales en las administradoras e instituciones de crédito, la certificación de los registros de trabajadores en las mismas, el control de los procesos de traspasos, así como instruir al operador de la cuenta concentradora, sobre la distribución de los fondos de las cuotas recibidas a las administradoras correspondientes.

De igual manera, se aprecia que la Comisión debe contar con un sistema que permita a los Trabajadores consultar la proyección del saldo que alcanzará SU cuenta individual al momento de pensionarse, el cual debe ser accesible para los trabajadores a efecto de que puedan realizar la consulta a través de equipos y sistemas automatizados o de telecomunicación, para lo cual se estableció además que los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro deben contar con sistemas automatizados que aseguren la consistencia e integridad de la información que contienen.

En tales condiciones, no es obligación de la actora incluir los íconos y leyendas en mención contenidos en la Circular CONSAR 28-16, aun cuando tengan como finalidad otorgar facilidades y elementos para que el trabajador tenga acceso a información respecto a su cuenta individual y al Sistema de Ahorro para el Retiro en lo general, lo cierto es que no corresponden a los elementos que deben integrar la solicitud de registro del trabajador o su constancia de registro, sino que se refieren a la comunicación social a que se

encuentra obligada a proporcionar la Comisión de que se trata, por lo que este tribunal considera que la circular en mención, por lo que al aspecto analizado se refiere, excede las facultades que tiene conferidas en la ley dicha Comisión para emitir disposiciones generales.

Por lo antes expuesto, lo procedente es declarar la nulidad de la Circular CONSAR 28-16, porque considera ilegalmente como obligación incorporar en la solicitud de registro del trabajador y la respectiva constancia de registro los íconos con la imagen de un árbol que en la parte superior contiene la leyenda "En tu Afore" y en la parte inferior "Siembra y Cosecha", así como el que dice "e-sar" y que en su parte inferior señala "Traspaso por Internet" y en la parte inferior contiene la dirección www.e-sar-com.mx y la leyenda "¡Recuerde que puede cambiar de Afore por Internet!", aspectos que exceden a las facultades que la Ley le confiere a la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro, el emitir disposiciones de carácter general.

El anterior criterio fue sostenido en la sentencia aprobada por este Cuerpo Colegiado el 26 de noviembre de 2008 en el juicio 17240/06-17-05-6/1049/07-PL-03-04 seguido por Afore Banamex, S.A. de C.V. formulada en cumplimiento de la ejecutoria dictada el 27 de octubre de 2008 por el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito que al resolver el amparo D.A. 197/2000 concedió el amparo y protección de la justicia federal a la actora.

En atención a lo anterior, se decreta la nulidad de la disposición de carácter general controvertida en el presente juicio y que quedó identificada en el Resultando 1o., de la presente sentencia.

Por último, este Cuerpo Colegiado procede al análisis del último agravio por la demandante, en la cual sostiene esencialmente lo siguiente:

Que declarándose la invalidez y nulidad de la disposición general impugnada, la misma declaratoria debe hacerse respecto de sus efectos y consecuencias,

por tratarse de actos que, en todo caso, estarían viciados de origen, por ser inválidos aquéllos que constituyen su fundamento y de los que derivan.

El anterior agravio deviene INOPERANTE, ya que el artículo 2o, segundo párrafo, en relación con el artículo 52, fracción V, inciso c), ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, otorgan competencia a este Tribunal Federal para conocer del juicio de nulidad en contra de decretos y actos administrativos de carácter general, diversos a los reglamentos, en unión de su primer acto de aplicación, así como para declarar la nulidad tanto de dicho acto administrativo controvertido como de su primer acto de aplicación.

Sin embargo, el cuerpo legal antes invocado no contiene disposición legal en el que se disponga que, habiéndose controvertido un acto administrativo de carácter general, este Tribunal Federal pueda resolver sobre la ilegalidad de futuras e inciertas aplicaciones del propio acto administrativo controvertido.

En mérito de lo antes expuesto y no existiendo agravios pendientes de estudio, con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 18, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en Diario Oficial de la Federación el 06 de diciembre de 2007 y en vigor al día siguiente de su publicación, se resuelve:

I. Con fundamento en el artículo 104 de la Ley de Amparo en estricto cumplimiento a la ejecutoria dictada el **20 de enero de 2010**, por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo D.A. 225/2009, este Cuerpo Colegiado **deja insubsistente la sentencia de 18 de agosto de 2008 en la parte materia de la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, en los términos precisados en el Considerando Segundo de este fallo;**

II. Han resultado infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas, en consecuencia;

III. No es de sobreseerse ni se sobresee en el presente juicio;

IV. La parte actora acreditó los fundamentos de su pretensión, en consecuencia;

V. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, precisada en el Resultando 1o., del presente fallo;

VI. Mediante atento oficio que se gire al Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remítase copia certificada del presente fallo, como cumplimiento de la ejecutoria dictada el 20 de enero de 2010 en el juicio de amparo D.A. 225/2009;

VII. NOTIFÍQUESE. Con copia autorizada del presente fallo, devuélvanse los autos a la Sala Regional de origen una vez que hubiere quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente asunto, y en su oportunidad archívese el presente expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de marzo de 2010, por mayoría de 10 votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Juan Manuel Jiménez Illescas, Luis Carballo Balvanera y Francisco Cuevas Godínez y 1 en contra de la Magistrada Olga Hernández Espíndola.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia se aprobó.

Se elabora el presente engrose el 7 de abril de 2010, y con fundamento en lo previsto en los artículos 30, fracción V, y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-342

MARCAS EVOCATIVAS. SU REGISTRO.- La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 90, fracciones IV y VI prohíbe el registro de aquellas marcas que son descriptivas del producto o servicio al que están destinadas, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto o con sus propiedades, bien porque expresa el tipo, peso, medida, función o destino de la mercancía; así como la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. Sin embargo, en ambos casos tales prohibiciones no son absolutas, pues se admiten como válidas las denominaciones que, formadas de modo injustificado, despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad, que son las llamadas marcas evocativas y que se relacionan de modo remoto indirecto con el producto o servicio. De esta forma cuando la denominación o expresión, sea sugestiva de alguna cualidad del producto, pero no sea considerada como descriptiva, sí procede su registro marcario.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1277/08-EPI-01-4/2609/09-PL-03-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de abril de 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro Godínez.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

En esos términos, se tiene que la **litis** a dirimir en el presente juicio se constriñe a determinar si la marca "**MIRACLE FRUITS OF THE WORLD**" propuesta a registro por la hoy actora, resulta ser indicativa de una cualidad o característica de los productos que se pretenden proteger.

Por tanto, esta Juzgadora procede a analizar si el signo propuesto por la empresa actora, esto es "**MIRACLE FRUITS OF THE WORLD**", contraviene lo dispuesto en el artículo 90, fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De la interpretación gramatical y armónica del precepto antes transcrito se desprende que contempla diversos supuestos que no son registrables como marca, dentro de los que encontramos a las denominaciones, palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, así como la traducción a otros idiomas y la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.

Asimismo, es necesario destacar lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, que son del tenor siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Incluso, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en su tesis 67, visible en el apéndice de 1975; Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, parte VI, página 113, ha sustentado el siguiente criterio referente a las características de una marca, mismo que señala lo siguiente:

"**MARCAS, CARACTERÍSTICAS DE LA.**" [N.E. Se omite transcripción]

En ese orden de ideas, se tiene que las principales funciones que pueden atribuirse a un signo marcario de acuerdo a la doctrina son los siguientes:

a) Distinción;
b) Protección;
c) Garantía de calidad; y,
d) Propaganda

Así, para el caso que nos ocupa conviene hacer notar que la función de distinción deriva de la esencia misma de la marca, por cuando que su objeto está destinado a distinguir un producto de otro del mismo género. De acuerdo con tal función es el producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención.

De igual manera, debe precisarse que los productos comprendidos en la clase 05 internacional según la Clasificación de Niza, son los siguientes: "Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas."

De acuerdo con los preceptos citados y el criterio invocado, esta Juzgadora considera que la marca propuesta por la actora "**MIRACLE FRUITS OF THE WORLD**", no es indicativa o descriptiva de una cualidad de los productos que pretende amparar, ni tampoco la traducción al español que se hace de la misma, a saber (sic) FRUTAS MILAGROSAS DE EL MUNDO", puede indicar o describir alguna de las características o cualidades de los productos que pretende proteger, los cuales son: vitaminas, suplementos minerales, dietéticos, herbales y nutricionales, y bebidas de jugo fortificadas nutricionalmente, por lo que no se ubica en las prohibiciones que establece el artículo 90, en sus fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, en el que la autoridad sustentó su negativa para otorgar el registro marcario.

En efecto, la denominación MIRACLE FRUITS OF THE WORLD, no sirve para distinguir la especie, la calidad, cantidad, composición, destino, valor, origen o época de producción de las vitaminas, los suplementos o las bebidas de jugo nutricionales que se pretenden amparar, y menos aun se trata de la traducción a otros idiomas de palabras no registrables.

Lo anterior, en virtud de que lo que prohíbe el artículo 90, en sus fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, es que las marcas propuestas a registro describan el producto o sus características intimas o particulares y, en el caso que nos ocupa, si bien es cierto la marca propuesta contiene las palabras frutas y milagrosas, también lo es que las mismas no pueden describir por si solas que se trate de una vitamina, un suplemento o una bebida de jugo fortificada, siendo que además, las frutas aun siendo un alimento que otorga vitaminas o proteínas al organismo, no puede ser considerado por sí mismo como un alimento milagroso, entendida esta palabra, según el Diccionario de la Lengua Española como: "milagroso, sa. adj. Que supera o no puede ser explicado por las fuerzas de la naturaleza: curación milagrosa. Maravilloso, asombroso: su recuperación económica ha sido milagrosa. Que hace milagros: santo milagroso."

Ese decir, las frutas por más que sean un alimento saludable por los nutrientes o vitaminas que puedan contener, no pueden ser consideradas como un alimento que supere a la fuerza de la naturaleza o que sea por sí solo suficiente para curar alguna enfermedad, por lo que la palabra **milagrosa**, no puede denotar una cualidad o característica de las frutas.

Por tanto, le asiste la razón a la actora cuando asevera que el hecho de que cualquier fruta tenga vitaminas, no indica que la misma sea milagrosa, ni tampoco lo es una vitamina o un suplemento de carácter mineral, dietético, herbal o nutricional, ya que por sí sola una vitamina o un suplemento no son suficientes para mantener el perfecto equilibrio de las diferentes funciones vitales que una persona debe desarrollar para estar sana.

Lo anterior, se corrobora si tomamos en cuenta lo que significa la palabra vitamina, el mismo Diccionario de la Lengua Española la define como: "vitamina. f. Nombre genérico de ciertas sustancias orgánicas indispensables para la vida que los animales no pueden sintetizar y que, por ello, han de recibir ya formadas con los alimentos.", es decir, una vitamina es cualquier **sustancia orgánica indispensable para la vida que se recibe ya formada con los alimentos**, lo que demuestra que no únicamente las frutas pueden otorgar esas sustancias sino cualquier otro alimento, por lo que aun cuando la demandada sostenga en la resolución impugnada que hay frutas milagrosas como la banana, el limón, el kiwi, la mandarina, la naranja, el tomate, etc., se puede sostener que las mismas por sí solas no podrían ser suficientes para que el ser humano tuviera salud, ya que para ello requiere de otras sustancias que se encuentran en las carnes, los pescados, las aves, las semillas, las verduras, etc., por lo que es incorrecta la motivación que invoca dicha demandada para negar el registro marcario solicitado por la actora.

Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada *contrario sensu*, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, página 454:

"**MARCAS. DESCRIPTIVIDAD.**" [N.E. Se omite transcripción]

En esta tesitura, no puede considerarse que la marca propuesta por la actora resulte descriptiva o indicativa de los productos que pretende amparar, pues contrario a lo sostenido por la autoridad demandada, dicha denominación no es la traducción a otro idioma de palabras no registrables, ni es indicativa de una cualidad o de la finalidad de los productos a proteger, ya que ni siquiera en el comercio se le utiliza con tal fin.

Además, el Poder Judicial de la Federación en la siguiente tesis ha establecido que existe la prohibición de registro cuando un adjetivo calificativo que traducido de un idioma extranjero al español, su significado evoque sus cualidades íntimas, o

cuando la palabra sea sugestiva de cierta cualidad o característica, entonces el carácter descriptivo de una denominación propuesta a registro no sólo se restringe a vocablos del idioma español, sino a aquellos que siendo su lengua extranjera, su traducción corresponda a palabras no registrables en lengua española, pero en el caso la denominación MIRACLE FRUITS OF THE WORLD", no evoca las cualidades íntimas, ni es sugestiva de cierta cualidad o característica de los producto que pretende amparar (vitaminas, suplementos minerales, dietéticos, herbales y bebidas de jugos fortificados).

> "**MARCAS. ADJETIVOS CALIFICATIVOS EN IDIOMA EXTRANJERO, CUANDO SON REGISTRABLES.** [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F. Tomo VI. Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990. Octava Época. pág. 571]

Además, también le asiste la razón a la empresa actora cuando asevera que la autoridad para justificar que el signo propuesto a registro era descriptivo, utilizó en un buscador de internet las palabras- FRUTAS MILAGROSAS DEL MUNDO- apareciendo un sinnúmero de direcciones con vínculos a dichos sitos de internet, puesto que efectivamente a fojas 6 y 7 de la resolución impugnada, dicha autoridad sostiene que se transcriben algunas de las direcciones en las que la denominación propuesta se refiere a "frutas milagrosas" que se conocen en el mundo, con las que se preparan bebidas de jugos fortificadas nutricionalmente; sin embargo, tal motivación para negar el registro marcario es indebida, puesto que el hecho de que haya un sinnúmero de productos en el mercado que se conceptualizan como "frutas milagrosas" no índica o describe alguna cualidad o característica del producto que pretende amparar la marca propuesta por la actora, siendo que lo que está prohibido por la ley, son aquellas marcas que definen el producto al que se aplican, pero no aquellas que pueden despertar la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad, las cuales son las llamadas marcas evocativas, mismas que se relacionan de modo remoto e indirecto con la mercancía.

En tal virtud, el simple hecho de que una de las palabras utilizadas en el signo propuesto pueda dar lugar a la idea de una fruta no sugiere su finalidad, naturaleza o utilidad del producto que pretende amparar, pues puede ser simplemente sugestiva de alguna cualidad del producto, pero ello de ninguna manera la hace no registrable, pues al tener características propias e individuales que permitan diferenciar el producto, ello le permite ser susceptible de registro.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con número de registro 251,600, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 133-138, Sexta Parte, página 285, que es del tenor siguiente:

"**MARCAS DESCRIPTIVAS.**" [N.E. Se omite transcripción]

Asimismo, resulta aplicable la siguiente tesis del Poder Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente:

"**MARCAS EVOCATIVAS. REGISTRO DE LAS.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F. Octava Época. Tomo X. Octubre de 1992. pág. 374]

Conforme al anterior criterio, no es absoluta la prohibición del carácter descriptivo de una marca, pues se admiten como válidas las denominaciones que, formadas de modo arbitrario, despiertan la idea del producto o sugieran su naturaleza o utilidad, que son las llamadas marcas evocativas y que se relacionan de modo remoto indirecto con la mercancía.

Así entonces "MIRACLE FRUITS OF THE WORLD", aun cuando se pueda entender que traducida del idioma inglés al español, significa FRUTAS MILAGROSAS DEL MUNDO, de ninguna manera se podría concluir que las mismas describen de manera directa el producto al que va destinada la marca propuesta (vitaminas, suplementos minerales, suplementos dietéticos, suplementos herbales,

suplementos nutricionales, bebidas de jugos fortificadas nutricionalmente); por lo que, se reitera, contrario a lo resuelto por la autoridad demandada, esta Juzgadora considera que la denominación propuesta por la actora sí es registrable.

Por tanto, es evidente que no se advierte que el signo propuesto sea descriptivo de los productos que se desean proteger con la misma, porque si de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, describir significa delinear, dibujar, figurar algo, representándolo de modo que dé cabal idea de ello, o bien, representar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias, es incuestionable que esa marca propuesta por la hoy actora no define a los productos de la clase 05, tales como: "Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.", toda vez que estos productos no se conocen comúnmente dentro del mercado con ese vocablo.

Corrobora lo anterior la tesis con número de registro 231,557, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, Página: 403, que establece:

"**MARCAS, NATURALEZA DE LAS.**" [N.E. Se omite transcripción]

En tales consideraciones, la autoridad demandada no demuestra que en el caso del signo propuesto cuyo registro solicitó la hoy actora, actualice el supuesto previsto en el artículo 90, fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, pues tal signo no es descriptivo o indicativo de los productos de la clase 5 internacional y mucho menos se les utiliza en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, composición o destino de dichos productos.

Por el contrario, dicha denominación proporciona individualidad a dichos productos al permitir que el público consumidor los distinga de otros productos de la misma clase que sean fabricados o comercializados por otras empresas, cubriendo así la cualidad que toda marca debe tener, es decir, que sea distintiva, debido a que tiene características propias e individuales que permitan diferenciar a los productos que protege.

Así es, en el caso debemos recordar que esta limitación a efecto de registrar una marca descriptiva del producto que pretende amparar, tiene como finalidad, que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante frente a sus competidores, pues éstos estarían impedidos de utilizar dicha denominación.

[...]

Con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracción IV, y 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con relación al artículo 18, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, se resuelve:

I.- La demandante acreditó su pretensión, en consecuencia;

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, descrita en el Resultando 1° de este fallo, por los fundamentos y motivos, y para los efectos precisados en el último considerando del mismo.

III.- Notifíquese.-

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de **doce de abril de dos mil diez**, por mayoría de ocho votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Manuel L. Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alfredo Salgado Loyo,

Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas y Francisco Cuevas Godínez; y tres votos en contra de los CC. Magistrados Nora Elizabeth Urby Genel, Luis Carballo Balvanera y Alejandro Sánchez Hernández, quien se reservó su derecho para formular voto particular.

Fue Ponente en el presente asunto, el Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, cuya ponencia se aprobó.

Se formuló el presente engrose el **veinte de mayo de dos mil diez** y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción V y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firman el C. Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos que da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1277/08-EPI-01-4/2609/09-PL-03-10

Disiento del criterio mayoritario pues considero que es incorrecta la interpretación a los artículos 90, fracciones IV y VI, de la Ley de la Propiedad Industrial, y 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por las razones que a continuación se expresan:

En primer término, resulta conveniente precisar que de conformidad con lo establecido en las fracciones IV y VI, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial -transcritas en la página 25 del fallo mayoritario-, no serán registrables como marca: las denominaciones que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar

de origen de los productos o la época de producción. Tampoco es registrable como marca la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.

Ahora bien, la actora pretende registrar como marca el signo MIRACLE FRUITS OF THE WORLD, para amparar productos de la clase 5 internacional, consistentes en: "productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas".

Cabe precisar que, la traducción al español de la denominación "MIRACLE FRUITS OF THE WORLD", como se precisa en la resolución impugnada, es: "frutas milagrosas del mundo"; con la cual la parte actora, pretende amparar la producción de vitaminas, suplementos minerales, dietéticos, herbales y nutricionales, y bebidas de jugo fortificadas nutricionalmente; en esos términos, considero que tal denominación sí es descriptiva de dichos productos, o de las características íntimas y particulares de éstos, pues, en una concepción general, las frutas, ciertamente, contienen vitaminas, son nutricionales y se utilizan en bebidas de jugo fortificadas, tan es así que, nutricionalmente, cualquier dieta incluye frutas, ya sea en jugo o en su estado natural.

En consecuencia, considero que es correcta la determinación de la autoridad demandada, al emitir la resolución impugnada, en el sentido de que la marca "MIRACLE FRUITS OF THE WORLD", es descriptiva de los productos que pretende amparar.

Cabe precisar que, del artículo 6 quinquies, apartado B, inciso 3, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se desprende que podrán rehusarse las marcas que sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público; por tanto, si en el escrito de demanda, la

propia actora señaló que no existen frutas milagrosas pues: “hasta donde la ciencia ha llegado, nunca se ha publicado que existan propiedades milagrosas y menos contenidas en una fruta”; resulta ser que, la marca cuyo registro solicita, traducida al idioma español, contiene elementos capaces de engañar al público, pues como lo señala la propia actora, no existen frutas milagrosas.

Finalmente, hago notar que de conformidad con el citado artículo 6 quinquies, apartado B, inciso 2, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, también, se podrán rehusar marcas formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción.

De lo anterior, concluyo que, jurídicamente, es correcto que la autoridad demandada hubiera negado el registro de la marca “MIRACLE FRUITS OF THE WORLD”, pues además de ser descriptiva de los productos que pretende amparar, contiene elementos capaces de engañar al público.

MAG. ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-SS-343

VIOLACIÓN SUSTANCIAL DEL PROCEDIMIENTO.- CUANDO NO SE EMPLAZA AL TERCERO EN EL JUICIO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 211, del Código Fiscal de la Federación, el tercero debe ser emplazado a juicio para que dentro de los 45 días siguientes a aquél en que se corra traslado de la demanda, pueda apersonarse en juicio. Por tanto, si el Magistrado Instructor no emplaza al tercero interesado en el juicio, a que se refieren los artículos 198, fracción IV y 208, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación, resulta evidente que ello trae como consecuencia una violación sustancial al procedimiento contencioso administrativo, debiendo por consiguiente, ordenarse la reposición del mismo, a fin de que el Magistrado Instructor del juicio, dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 211, del Código Fiscal de la Federación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 37390/04-17-03-1/AC1/3026/09-PL-03-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de abril de 2010, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro Godínez.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de abril de 2010)

PRECEDENTES:

V-P-SS-169
Juicio No. 4761/01-17-05-5/178/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de abril de 2002, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 12 de abril de 2002)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año II. No. 21. Septiembre 2002. p. 197

V-P-SS-872

Juicio Contencioso Administrativo No. 20281/03-17-09-3/314/06-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de septiembre de 2006, por mayoría de 7 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Andrés López Lara.

(Tesis aprobada en sesión de 11 de septiembre de 2006)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo II. No. 73. Enero 2007. p. 650

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-SS-344

VIOLACIÓN SUSTANCIAL DEL PROCEDIMIENTO.- CUANDO NO SE EMPLAZA AL TERCERO EN EL JUICIO EN EL CASO DE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA DERIVA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Fiscal de la Federación, el tercero debe ser emplazado a juicio para que dentro de los 45 días siguientes a aquél en que se corra traslado de la demanda, pueda apersonarse en juicio. Tratándose de asuntos derivados de licitaciones públicas, donde se aplicó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debe considerarse como tercero interesado a quienes resultaron favorecidos con la adjudicación del contrato, y que deben estar interesados y mantienen interés jurídico en defender la adjudicación hecha del propio contrato, por tanto, en aplicación de la técnica procesal en la instrucción del juicio contencioso administrativo, deben ser llamados esos terceros a juicio; por tanto, si el Magistrado Instructor no los emplaza con ese carácter, resulta evidente que ello trae como consecuencia una violación sustancial al procedimiento contencioso administrativo, debiendo por consiguiente, ordenarse la reposición del mismo, a fin de que el Magistrado Instructor del juicio, dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 211 del Código Fiscal de la Federación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 37390/04-17-03-1/AC1/3026/09-PL-03-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de abril de 2010, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro Godínez.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de abril de 2010)

PRECEDENTE:

V-P-SS-679
Juicio No. 16616/03-17-01-8/345/04-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 25 de octubre de 2004, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 25 de octubre de 2004)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 56. Agosto 2005. p. 70

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-345

PATENTE. CUANDO LA SOLICITUD SEA IMPRECISA U OSCURA, SE DEBE REQUERIR SE PRECISE, ACLARE O SUBSANE CONFORME AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y NO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17-A DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- En relación con las solicitudes de patente presentadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que, presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma de la documentación y "*podrá*" requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones; que de no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud. Por otra parte, el artículo 17 A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuerpo legal aplicable a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal, como en el caso lo es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dispone que, cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite. Por lo anterior, aun cuando se trata de disposiciones con similar contenido, tratándose del registro de patentes, debe prevalecer la aplicación del artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial por tratarse de la disposición contenida en la Ley de la materia, que resulta ser el cuerpo legal específicamente aplicable, y si bien dentro de su redacción utiliza el término "*podrá*", ello no implica que sea discrecional formular el requerimiento, pues no se refiere a la opción de escoger entre hacerlo o no, sino a la obligación de hacerlo cuando el solicitante hubiera incurrido en omisiones en su solicitud, o la misma resulte imprecisa u obscura.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1546/08-EPI-01-8/2718/09-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de abril de 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

Para este Cuerpo Colegiado es **FUNDADO** el agravio de la actora conforme a las siguientes consideraciones.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento prevén el reconocimiento de la fecha de prioridad de una patente primeramente presentada en un país diverso, estableciendo al efecto lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De las disposiciones anteriormente transcritas, en lo que interesa a la resolución del agravio en estudio se desprende lo siguiente:

➢ **Del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:**

El artículo 4o., apartado D, incisos 1) y 3) dispone que, quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la

fecha y el país de este depósito; que cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada la declaración.

Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad, la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente.

➢ **De la Ley de la Propiedad Industrial:**

El artículo 38 dispone que, **para obtener una patente deberá presentarse solicitud escrita ante el Instituto, en la que se indicará el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad de este último, la denominación de la invención, y demás datos que prevengan esta Ley y su reglamento**.

El artículo 40 dispone que, **cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen**.

El artículo 41 señala que, **para reconocer la prioridad señalada en el artículo 40, se deberán satisfacer los requisitos siguientes**:

a) Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;

b) Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero;

Que si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo

parcial y referida a esta solicitud. Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad, y

c) Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos que señalen los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento, y

El artículo 50 señala que, **presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones; que de no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud**.

➢ **Del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial:**

El artículo 36 señala que, para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo 40 de la Ley, el solicitante deberá satisfacer los requisitos siguientes:

a) Señalar en la solicitud, cuando se conozca o esté disponible, el número de la solicitud presentada en el país de origen, cuya fecha de presentación se reclame como fecha de prioridad;

b) Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y

c) **Exhibir dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, una copia certificada de la solicitud presentada en el país de origen y, en su caso, de la traducción correspondiente. En caso de no cumplir con ese requisito, se tendrá por no reclamada la prioridad**.

De conformidad con las disposiciones anteriormente señaladas, con motivo de la presentación de una solicitud de registro de patente, el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial **realizará un examen de forma de la documentación presentada por el solicitante**.

En el caso de que, en la solicitud respectiva el solicitante hubiera incurrido en omisiones, o la misma resultara imprecisa u obscura, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial **"PODRÁ" requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones, y para el caso el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud**.

El que en el artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial se utilice la frase "**PODRÁ requerir**", no implica que sea discrecional para la autoridad formular el requerimiento, pues la expresión "podrá" no se refiere a la opción de escoger entre hacerlo o no, sino a la obligación de hacerlo en caso de ser necesario, cuando el solicitante haya incurrido en omisiones en su solicitud, o la misma haya resultado imprecisa u obscura.

En este orden de ideas, no debe interpretarse como una facultad discrecional el empleo del verbo "poder", en el precepto que nos ocupa, sino como una obligación a cargo de la autoridad, en virtud de que la norma señala los casos en que procede el requerimiento respectivo (para que se precise o aclare lo necesario, o se subsanen las omisiones), por lo que tal situación obliga al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a dar la oportunidad al solicitante de subsanar lo que corresponda, ya que interpretar lo contrario equivaldría a dejar al arbitrio de la autoridad el otorgar o no la oportunidad de corrección, creando con ello una posibilidad de desigualdad al otorgar a unos y no a otros dicha oportunidad; más aún, carecería de sentido la norma en cuestión si el requerimiento correspondiente dependiera únicamente de la voluntad de la autoridad, la que actuaría bajo parámetros inciertos y subjetivamente.

Al respecto, resulta aplicable la tesis por contradicción de sentencias aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, contenido y datos de identificación se transcriben a continuación:

"**PODER. EL USO DE ESTE VERBO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES, NO NECESARIAMENTE IMPLICA UNA FACULTAD DISCRECIONAL.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F. Tomo VI. Agosto de 1997. Novena Época. Tesis: 2a. LXXXVI/97. pág. 217]

En esos términos, el artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial exige a las autoridades hacer una prevención a los interesados cuando los escritos que éstos presenten no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, sin que pueda desecharse de plano el trámite por incompleto.

Este Cuerpo Colegiado advierte que coincidentemente, el artículo 17 A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuerpo legal que resulta aplicable a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal dispone que, **cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite**.

Señala asimismo el precepto en comento que, de no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del plazo aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto; en el supuesto de que el requerimiento de información se haga en tiempo, el plazo para que la dependencia correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que el interesado conteste.

Las disposiciones legales en comento señalan literalmente lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Cabe apuntar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal Paraestatal, tal como lo dispone el artículo 6o., de la Ley de la Propiedad Industrial, en los términos siguientes:

[N.E. Se omite transcripción]

Expuesto lo anterior, para este Cuerpo Colegiado, en el caso a estudio, debe prevalecer la aplicación del artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, por tratarse de una disposición específicamente aplicable respecto de la presentación de solicitudes de registro de patente al disponer que, **presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma de la documentación y "PODRÁ" requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones; que de no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud.**

En cambio, el artículo 17 A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se refiere genéricamente al supuesto en que los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados.

En ese orden de ideas, aun cuando se trata de disposiciones con similar contenido, en el caso que debe prevalecer la aplicación del artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial por tratarse de la disposición contenida en la Ley de la Propiedad Industrial, que resulta ser el cuerpo legal específicamente aplicable tratándose del registro de patentes.

Al respecto, resulta aplicable por analogía el precedente **VI-P-SS-225** sustentado por este Cuerpo Colegiado, el cual ha sido publicado en la Revista correspondiente a la Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 144, que se transcribe a continuación:

"**SOLICITUDES DE PATENTES. SI LOS SOLICITANTES OMITEN PRESENTAR LA TRADUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE**

ACOMPAÑEN A AQUÉLLAS, EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEBE FORMULAR UN REQUERIMIENTO AL RESPECTO Y NO DESECHAR DE PLANO EL TRÁMITE." [N.E. Se omite transcripción]

Por otra parte, este Cuerpo Colegiado advierte que la resolución impugnada a través de la cual se determinó no tomar nota del reclamo de prioridad solicitada por la hoy actora, se funda en la fracción III del artículo 36 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, disposición en la que se señala que, para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo 40 de la Ley, el solicitante **exhibirá, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, una copia certificada de la solicitud presentada en el país de origen y, en su caso, de la traducción correspondiente. En caso de no cumplir con ese requisito, se tendrá por no reclamada la prioridad**, en los siguientes términos:

[N.E. Se omite transcripción]

Sin embargo, para este Cuerpo Colegiado debe prevalecer la disposición contenida en el artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial por establecerse en una ley emanada del Congreso de la Unión, y favorecer en su contenido el derecho de audiencia requiriendo previamente al solicitante la presentación de la documentación omitida, situación que no prevé el artículo 36, fracción III del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por las razones expuestas, no se encuentra ajustado a derecho el proceder de la demandada al desechar de plano ***la solicitud de reclamo del derecho de prioridad formulado por la actora*** por carecer de copia certificada de la solicitud de registro de patente ante la autoridad de los Estados Unidos sin formular un requerimiento previo al respecto, lo que implica que la resolución impugnada sea ilegal.

[...]

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 14, fracciones XI y XIII, y 18, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I. La actora acreditó los fundamentos de su pretensión, en consecuencia;

II. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, precisada en el resultando 1o., de este fallo, en los términos y para los efectos indicados en el último considerando de esta sentencia;

III. NOTIFÍQUESE. Con copia autorizada del presente fallo, devuélvanse los autos a la Sala Regional de origen una vez que hubiere quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente asunto, y en su oportunidad archívese el presente expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de abril de 2010, por mayoría de 8 votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Jorge Alberto García Cáceres, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas, Luis Carballo Balvanera y Francisco Cuevas Godínez y 3 en contra de los Magistrados Nora Elizabeth Urby Genel quien se reserva su derecho para formular voto particular, Manuel Luciano Hallivis Pelayo y Alejandro Sánchez Hernández.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia se aprobó.

Se elabora el presente engrose el 7 de mayo de 2010, y con fundamento en lo previsto en los artículos 30, fracción V, y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ad-

ministrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA C. MAGISTRADA NORA ELIZABETH URBY GENEL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1546/08-EPI-01-8/2718/09-PL-07-10

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, último y penúltimo párrafos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por diferir del criterio mayoritario sustentado en la sentencia, la suscrita Magistrada formula voto particular razonado en los términos siguientes:

En la sentencia mayoritaria, se resolvió FUNDADO el argumento de la parte actora en el sentido de que conforme al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento prevén el reconocimiento de la fecha de prioridad de una patente primeramente presentada en un país diverso; que en específico en términos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, se señala que, presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones; que de no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada; que por tanto, dicho precepto legal exige a las autoridades hacer una prevención a los interesados cuando los escritos que éstos presenten no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, sin que pueda desecharse de plano el trámite por incompleto.

En ese orden de ideas, la mayoría concluyó que en el presente asunto, debe prevalecer la aplicación del artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial, por tratarse de una disposición específicamente aplicable respecto de la presentación de solicitudes de registro de patente, además de que se trata de la disposición contenida

en la Ley de la Propiedad Industrial, que resulta ser el cuerpo legal específicamente aplicable tratándose del registro de patentes.

No obstante lo anterior, difiero del criterio mayoritario, sustentado en el fallo, en razón de que considero que la Ley de la Propiedad Industrial señala reglas específicas tratándose del reconocimiento de la fecha de prioridad, lo que se desprende del contenido de los artículos 40 y 41 de la Ley de la materia, en relación con el numeral 36 de su Reglamento, y que disponen lo siguiente:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"**Artículo 40.-** Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen."

"**Artículo 41.-** Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes:
"**I.-** Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;
"**II.-** Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.
"Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud. Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad, y
"**III.-** Que **dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos que señalen los Tratados Internacionales**, esta Ley y su reglamento, y
"(...)"

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"**Artículo 36.-** Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo 40 de la Ley, el solicitante deberá satisfacer los requisitos siguientes:
"**I.-** Señalará, en la solicitud, cuando se conozca o esté disponible, el número de la solicitud presentada en el país de origen, cuya fecha de presentación se reclame como fecha de prioridad;
"**II.-** Exhibirá el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y
"**III.- Exhibirá, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, una copia certificada** de la solicitud presentada en el país de origen y, en su caso, **de la traducción correspondiente**. En caso de no cumplir con ese requisito, se tendrá por no reclamada la prioridad."

(Énfasis añadido)

De lo anterior se tiene que cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países, **se podrá reconocer como fecha de prioridad** la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México **dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o**, en su defecto, **dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen**.

Para reconocer la fecha de prioridad, se deben de satisfacer los siguientes requisitos:

1.- Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país.

2.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.

3.- Que **dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se exhiba copia certificada de la solicitud presentada en el país de origen**.

De lo hasta aquí expuesto, se advierte que los artículos **40 y 41 de la Ley de la Propiedad Industrial y 36, fracción III de su Reglamento** señalan de forma específica que se exhibirá copia certificada de la presentación de la solicitud correspondiente dentro de los **tres meses siguientes** a la presentación de la solicitud de patente, por lo que considero que dichos numerales son a **los que debe atenderse, no así al 50 de ese mismo ordenamiento legal como se resolvió por la mayoría**.

Lo anterior en virtud de que **la propia Ley de la Propiedad Industrial establece reglas específicas en relación al derecho de prioridad, por lo que debe atenderse a la norma especial sobre la general**.

Bajo este orden de ideas, considero que el plazo con que contaba la parte actora era el de tres meses contados a partir de la presentación de la solicitud de patente, para exhibir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la copia certificada de la solicitud de presentación de patente referida al reclamo del derecho de prioridad.

Por lo anterior, me aparto del criterio mayoritario, formulando el presente voto particular para constancia.

MAG. NORA ELIZABETH URBY GENEL

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-SS-346

CARGA DE LA PRUEBA.- LA TIENE EL TITULAR DEL REGISTRO MARCARIO PARA ACREDITAR LA FECHA DE PRIMER USO ASENTADA EN LA SOLICITUD DE REGISTRO.- De lo dispuesto por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se desprende el principio probatorio de que "el que afirma siempre está obligado a probar", por lo tanto, las afirmaciones realizadas por el solicitante, incluida la fecha de primer uso, contenidas en la solicitud de registro de una marca, siempre deberán ser probadas por el propio solicitante. Esto se entiende, en principio por la regla general de procedimiento antes mencionada y, por otro lado, si se considera que en la materia con el registro de la marca otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se obtiene el derecho a su uso exclusivo, es decir, el Estado reconoce un derecho exclusivo a favor de quien obtiene el registro de una marca, que como tal podrá ser oponible a terceros y salvaguardado incluso de manera coercitiva por los mecanismos establecidos por el propio Estado, en consecuencia es claro que se tiene una calidad privilegiada que sólo se puede obtener cumpliendo cabalmente con todos los requisitos establecidos en la Ley, de ahí la importancia de que todos los datos o afirmaciones contenidas en una solicitud de registro deban ser veraces y comprobables por el propio solicitante.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 17743/07-17-09-7/950/09-PL-06-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de abril de 2010, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de abril de 2010)

PRECEDENTES:

V-P-SS-511
Juicio No. 7793/01-17-02-2/341/02-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de febrero de 2004, por mayoría de 8 votos a favor y 3 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de febrero de 2004)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 43. Julio 2004. p. 76

V-P-SS-576
Juicio No. 18413/01-17-01-3/1235/02-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de abril de 2004, por unanimidad de 7 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de abril de 2004)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 46. Octubre 2004. p. 202

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-347

MARCAS INNOMINADAS.- NO SON REGISTRABLES CUANDO REPRODUZCAN ESCUDOS OFICIALES DE CIUDADES Y NO SE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.- El artículo 90, fracción VII de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no serán registrables como marca, las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de agrupaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la descripción verbal de los mismos, por lo que si un particular pretende el registro del diseño de una marca innominada que constituye el escudo oficial de una ciudad, es evidente que dicha marca no es registrable, si no se acredita que tenga autorización de dicha ciudad para utilizar ese escudo, en consecuencia se debe negar el registro solicitado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2245/08-EPI-01-2/2728/09-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de mayo de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 31 de mayo de 2010)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-SS-348

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 571/09-EPI-01-2/332/10-PL-06-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de agosto de 2010, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magis-

trado Ponente: Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de agosto de 2010)

VI-P-SS-349

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1178/09-EPI-01-5/375/10-PL-01-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de septiembre de 2010, por mayoría de 7 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Andrés López Lara.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

CUARTO.- [...]

A juicio de esta Juzgadora los agravios en estudio son **INFUNDADOS**.

Esta Juzgadora considera tener presente los motivos y fundamentos expresados por la autoridad en la resolución impugnada, la cual fue transcrita en el Considerando Segundo de esta sentencia y de la cual se desprende lo siguiente:

Que el signo propuesto no es registrable como marca, con fundamento en el artículo 90, fracción VII de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el artículo 6TER (Marcas: Prohibiciones en cuanto a los Emblemas de Estado, Signos Oficiales de Control y Emblemas de Organizaciones Intergubernamentales) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París), Canadá CA 0475, escudo de armas, color, 813/22/01/1969, pues resulta ser el escudo oficial de la ciudad de Westminster dentro de la ciudad de Londres en Gran Bretaña.

Que respecto de la existencia del consentimiento de la Embajada Británica en México para el uso del escudo de la ciudad de WESTMINSTER, como del escudo de dicha ciudad, siendo en el presente caso este último el consentimiento del interés, se le comunica que en virtud de que el mismo no fue exhibido, habiéndose sólo presentado la solicitud de la ratificación de la anuencia para el uso de la denominación y del escudo que constituye el signo propuesto, se le comunica que la documentación exhibida no resulta suficiente para demostrar que se cuenta con dicho consentimiento, por lo que es procedente negar el registro del signo propuesto conforme al artículo 90, fracción VII de la Ley de la Propiedad Industrial.

Que respecto del certificado del diseño propuesto, así como de la denominación WESTMINSTER ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, se señala que el certificado otorgado no obliga a ese Instituto a otorgarle el registro de una marca que encuadra en los supuestos prohibitivos de la Ley de la Propiedad Industrial.

Que tanto el registro de marca como la obtención de un certificado de derechos de autor se trata de dos tipos de trámites diferentes y se realizan incluso ante diversas autoridades resultando independiente uno del otro, por lo que independientemente de la presentación del documento de certificado autoral, el mismo no constituye un documento que resulta favorable para realizar el trámite para la obtención de un registro marcario, también dicha circunstancia se regula a través del artículo 6TER del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Que el signo distintivo propuesto no es registrable como marca en virtud de tratarse del escudo oficial que pertenece a la ciudad de Westminster. Que de la información de la página de Internet, la ciudad de Westminster (en inglés City of Westminster) es un distrito (borough) de Gran Bretaña situada al oeste del distrito de la ciudad de Londres y al norte del río Támesis. Que el signo propuesto es el escudo de dicha ciudad.

Que no se presentó documento mediante el cual se acredite fehacientemente que se cuenta con el consentimiento correspondiente para el uso de dicho escudo,

por lo que procede a negar el registro de dicho signo, ya que no serán registrables como marca los escudos de cualquier país o estado si no se cuenta con el consentimiento para ello.

Que a fin de salvaguardar los intereses y derechos de la ciudad de Westminster como los del público destinatario y consumidor se niega el registro de marca que se solicita a fin de que éste no asuma que los productos adquiridos y ofrecidos en el mercado bajo el signo consistente en el escudo emblemático de Westminster son respaldados o patrocinados por dicha ciudad. Que por ello se niega el registro de marca cuya solicitud se contiene en el expediente 853506 correspondiente al signo INNOMINADO. Hasta aquí lo señalado por la autoridad en la resolución impugnada.

Los artículos 90, fracción VII de la Ley de la Propiedad Industrial y artículo 6TER del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establecen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Como se observa del artículo 90 en su fracción VII de la Ley de la Propiedad Industrial que no serán registrables como marcas las que reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.

Por su parte, el artículo 6TER del Convenio de París aludido en la parte conducente establece que los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado

de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

La marca de la cual se negó el registro tiene los siguientes elementos:



Como se observa la autoridad niega el registro de la marca antes reproducida porque es el escudo oficial que pertenece a la ciudad de Westminster, dentro de la ciudad de Londres por lo que es evidente que dicha marca no es registrable en términos del artículo 90, fracción VII de la Ley de la Propiedad Industrial pues establece que no serán registrables, entre otras, las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, de tal manera que la autoridad no va más allá de dicho precepto, pues está presumiendo que la actora no acredita que tenga autorización de dicha ciudad para utilizar ese escudo.

En efecto, si dicho numeral indica que procede la negativa de registro si no se cuenta con autorización para utilizar como marca un escudo de la ciudad de Westminster, es evidente que dicha autorización debe ser expresa, pues es evidente que no existe otra forma a través de la cual la autoridad acredite dicha autorización, sin que al efecto el precepto en mención tenga que referirse a que la autorización deba ser expresa, esto es, por escrito.

El artículo 1803 del Código Civil Federal que la actora invoca, señala lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Dicho precepto hace una diferencia entre el consentimiento expreso y el tácito, sin embargo, la actora debió acreditar que tiene el consentimiento, sin que en el caso se muestre dicho consentimiento sea expreso o tácito, ello en virtud de que la marca en mención resulta ser un escudo de la ciudad de Westminster, sin que además se acredite que tiene consentimiento para utilizarlo como marca.

Ahora bien, la actora indica que en la escritura pública 28550 de 20 de septiembre de 1948 se constituyó Westminster School como sociedad de responsabilidad limitada. Que ahí consta el permiso que otorgó la Secretaría de Relaciones Exteriores para que su representada utilizara como razón social la denominación Westminster School.

Sin embargo, en autos no consta dicha escritura en donde la actora manifiesta que la Secretaría de Relaciones Exteriores haya autorizado utilizar como razón social la denominación Westminster School, S.C., por lo que no acredita sus afirmaciones.

Por otro lado, en autos, folios 072 y 073 consta copia simple de un escrito dirigido al Embajador de la Embajada Británica en México, en el que indica que:

[N.E. Se omite transcripción]

Como se observa de la transcripción aludida, solo se hace referencia a una supuesta autorización en su momento que otorgó la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin embargo no acredita dicha circunstancia y por otro lado, que en ese entonces, al constituirse la sociedad el embajador de esa ciudad haya otorgado de manera verbal la anuencia para usar el nombre y escudo Westminster, sin que tampoco lo acredite, pues dicha autorización indica fue de manera verbal, pero sin que conste en un documento que así haya quedado autorizada.

Además, suponiendo que se haya autorizado la denominación de Westminster School, S.C., como razón social, no se indica que también lo fue la utilización del escudo referido para la clase 25 que se refiere a vestuario, calzado y sombrería.

En efecto, en autos consta la solicitud de registro del diseño innominado, a continuación se reproduce el mismo.

[N.E. Se omite imagen]

De tal manera que con base en esa solicitud de registro la actora pretende usar el escudo aludido para la clase 25, vestuario, calzado y sombrería, sin que tal circunstancia fuera autorizada con los documentos que indica, además de que no los exhibe, así como tampoco exhibe el oficio 21681 de 19 de octubre de 1949, por el que indica que la Secretaría de Educación Pública concedió la inscripción del Colegio Westminster School, además de que dicha circunstancia no constituye una autorización para utilizar la marca consistente en el escudo de la ciudad de que se trata.

Sin que al efecto, el hecho de que el país o estado no se haya opuesto a la utilización de dicho escudo no quiere decir que exista consentimiento tácito, pues concretamente el artículo 90, fracción VII de la Ley de la Propiedad Industrial prohíbe el registro del signo marcario en controversia, pues constituye el escudo de una ciudad, situación que además es reconocida por la propia actora.

De tal manera que no existe el consentimiento tácito que indica la actora, máxime que el artículo 6TER del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece en la parte relativa la exigencia del permiso de las autoridades correspondientes para la utilización de los escudos o emblemas de Estados de los países de la Unión, lo que en el caso no queda acreditado, esto es, que exista el consentimiento de la utilización del escudo referido.

Ahora bien, la actora indica que no se valoran las pruebas ofrecidas en el numeral 4 incisos a) al f) contenidos en diversos certificados de registro expedidos

por el Registro Público del Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor, como se indicó en el escrito de contestación al impedimento legal de 14 de diciembre de 2007. En efecto, en la parte respectiva del escrito de referencia que consta en autos, folios 58 a 62 del expediente en estudio, consta el oficio de impedimento legal. En la parte respectiva indica:

[N.E. Se omite transcripción]

De lo anterior, efectivamente se observa que la actora al contestar el oficio de impedimento legal, invocó la existencia de diversos certificados emitidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, a saber:

a) 03-2005-100412545900-14

b) 03-2005-100412442300-01

c) 03-2007-052811405000-01

d) 03-2007-0528113858800-01

e) Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo en el género de difusiones periódicas.

f) Certificado de reserva de derechos del uso exclusivo en el género de publicaciones periódicas.

Al efecto, la autoridad en la resolución impugnada sí se refirió a los certificados aludidos de manera general, aduciendo que el certificado otorgado no obliga de ninguna manera a otorgarle el registro de una marca que encuadra en los supuestos prohibitivos de la Ley de la Propiedad Industrial. Que tanto el registro de marca como la obtención de un certificado de derechos de autor se trata de dos tipos de trámites diferentes y se realizan incluso ante diversas autoridades resultando indepen-

dientes uno del otro, por lo que independientemente de la presentación del documento de certificado autoral, el mismo no constituye un documento que resulte favorable para realizar el trámite para la obtención de un registro marcario.

En autos constan los certificados que a continuación se reproducen:

[N.E. Se omiten imágenes]

Como se advierte de dichos certificados en ellos aparece que la compilación y obras que ahí se indican ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, así como por otro lado los certificados de reserva de derechos de difusiones periódicas y publicaciones periódicas, todas ellas, al titular Westminster School, S.C., sin embargo con tales documentos solo se prueba que a dicha actora se le otorgaron certificados y reservas de derechos para la utilización de lo que ahí se indica, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor, no así de la Ley de la Propiedad Industrial que en el caso se controvierte.

Dichos certificados se valoraron en términos del artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En el primer certificado consta el número de registro 03-2005-100412545900-14, se desprende que fue emitido además con fundamento en el artículo 9, fracción I del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor que consigna:

[N.E. Se omite transcripción]

Por su parte, en el certificado número de registro 03-2005-100412442300-01, se funda además en los artículos 162, 163, 164, 168, 169 y 209, fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor que establecen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Igual sucede en el certificado 03-2007-052811405000-01 en donde se invocan dichos preceptos, pero además en el certificado 03-2007-052811385800-01 se indica que de conformidad con lo establecido en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal del Derecho de Autor ese certificado no ampara el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en esa obra.

En consecuencia, conforme a los artículos invocados es evidente que las inscripciones de que se trata no acreditan que exista un consentimiento para el uso del escudo en referencia en términos de la prohibición a que se refiere el artículo 90, fracción VII de la Ley de la Propiedad Industrial, sino que son inscripciones conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor para el titular Westminster School, pero incluso se indica en uno de los certificados que no ampara el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en la obra.

Por último en los certificados de reserva de derechos de uso exclusivo fueron emitidos conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, por lo que tampoco pueden obligar a la autoridad a otorgar el registro de la marca de que se trata y no constituyen documentos que resulten favorables para realizar el trámite de obtención de un registro marcario.

Por otro lado, si bien el artículo 164, fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor establece cuándo se debe negar la inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor, es evidente que en el caso no se está controvirtiendo sí es o no procedente el registro de las obras conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, sino conforme a la Ley de la Propiedad Industrial y que la marca INNOMINADA de que se trata, resulta ser el escudo de una ciudad.

En efecto, el artículo 164, fracción II de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece:

[N.E. Se omite transcripción]

En consecuencia, independientemente de que en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor, la actora utilizó su razón social para registrar sus obras, ello no quiere decir que existió un consentimiento de la autoridad respectiva para utilizar el escudo en mención, sino únicamente de las obras ahí señaladas en términos de dicha Ley, no así en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que en ese sentido son infundados los argumentos en estudio.

[...]

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50,51, fracciones I y II y 52, fracciones II y III y segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I. Ha resultado fundado el estudio de oficio de la suficiente fundamentación de la competencia de la autoridad que emitió el oficio de impedimento legal, antecedente de la resolución impugnada.

II. La parte actora no probó su pretensión conforme a lo razonado en el Considerando Cuarto de esta sentencia.

III. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, descrita en el Resultando 1º de este fallo por los motivos y fundamentos expresados en el Considerando Tercero de esta sentencia y para los efectos precisados en el último Considerando de este fallo.

IV. NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de mayo de 2010, por mayoría de 9 votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Jorge Alberto García Cáceres, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas, Luis Carballo

Balvanera y Francisco Cuevas Godínez y 1 voto con los puntos resolutivos del Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, estando ausente el Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 14 de mayo de 2010, y con fundamento en lo previsto por los artículos 30, fracción V y 47 fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Magistrado Francisco Cuevas Godínez, ante la Secretaria General de Acuerdos: Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, quien da fe.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-350

MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO. ES FACULTAD DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, LLEVAR A CABO SU TRADUCCIÓN PARA ESTABLECER, SI CONSIDERADA EN SU CONJUNTO, ES O NO REGISTRABLE.- En el artículo 90, fracción VI, de la Ley de la Propiedad Industrial, el legislador estableció que no serán registrables como marcas, la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables; de lo que se sigue, que la autoridad para establecer si son registrables o no las marcas, cuya denominación se presente en idioma extranjero, y estar en aptitud y pericia de determinar si se actualizan o no las hipótesis establecidas en el artículo en comento, está facultada para traducir de manera individual una denominación que esté integrada por una o más palabras, a fin de obtener un significado global de la misma, y establecer si la marca propuesta a registro, considerada en su conjunto, es o no descriptiva, dado que tal carácter, no sólo se restringe a los vocablos del idioma español, sino a aquellos que siendo en lengua extranjera su traducción corresponde a palabras no registrables en lengua española.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1263/08-EPI-01-6/2333/09-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de mayo de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de mayo de 2010)

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-351

MARCAS PROPUESTAS A REGISTRO EN IDIOMA EXTRANJERO. NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA AUTORIDAD SUSTENTE SU ESTUDIO EN DEFINICIONES O TRADUCCIONES OBTENIDAS DE LA INTERNET.- Las unidades administrativas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pueden apoyarse, no sólo en las definiciones contenidas en un diccionario enciclopédico, para establecer el significado de las palabras que en idioma inglés componen el signo marcario cuyo registro se pretenda, sino también en las definiciones incluidas a través de las páginas electrónicas, como lo son la de Internet, al no existir precepto legal alguno que lo prohíba, mientras se dé a conocer al interesado los datos de localización suficientes con los que pueda cerciorarse de la existencia de tales definiciones y, en su caso, esté en aptitud de acreditar que no son correctas.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1263/08-EPI-01-6/2333/09-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de mayo de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de mayo de 2010)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-SS-352

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1708/09-EPI-01-3/613/10-PL-09-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de julio de 2010, por unanimidad de 10 votos a favor.-

Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Thelma Semíramis Calva García.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de julio de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

CUARTO.- [...]

Con el propósito de resolver debidamente los planteamientos de las partes contendientes, se atiende a las consideraciones de hecho y de derecho, que a continuación se apuntan.

De la revisión integral a las actuaciones que conforman el presente juicio, se desprende que a fojas 53, obra agregada la solicitud de registro del signo nominativo "**BRAND ANALYSIS**", con el que se pretenden proteger los servicios de la clase 42 internacional, consistentes en: "**DISEÑO DE ARTES GRÁFICAS**".

[N.E. Se omite imagen]

Ahora bien, en el Considerando Segundo de este fallo, quedó debidamente precisado el texto de la resolución que se impugna, mismo que por economía procesal, se tiene aquí por reproducido, como si a la letra se insertara, advirtiéndose que la autoridad para negar el registro marcario "BRAND ANALYSIS", citó como **fundamentos** legales, entre otros, los artículos 88, 89, 90, fracciones IV y VI, de la Ley de la Propiedad Industrial, los cuales en lo conducente prevén:

[N.E. Se omite transcripción]

Asimismo, se desprende que vertió como **motivos** de tal negativa de registro, lo siguiente:

➢ Que el signo propuesto, se conforma por las palabras en inglés "**BRAND ANALYSIS**", cuya traducción al español "**BRAND**: **marca**"; "**ANALYSIS: análisis. Estudio minucioso de una obra, de un escrito o de cualquier otro objeto de estudio intelectual**", significa: "**ANÁLISIS DE MARCAS**", por lo que resulta que los servicios de "**artes gráficas**" que pretende amparar tienen la característica de realizarse a través del análisis de marcas, lo que implica que dicho signo sea descriptivo de una característica de los servicios a distinguir, por lo que el mismo no es registrable.

➢ Que el significado anterior, fue obtenido de las siguientes páginas **http://www.wordreference.com/ y http://diccionarioselmundo.es**

De conformidad con lo precisado en los párrafos que anteceden, se desprende que los argumento del actor resumido en los incisos del **a)** al **d),** son parcialmente **fundados, pero suficientes** para declarar la nulidad de la resolución impugnada, en atención a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se precisan:

En principio, es de señalar que **no le asiste razón al actor**, cuando refiere, que la resolución impugnada, se encuentra indebidamente fundada y motivada, porque la autoridad se sustentó para negar la solicitud del registro del signo marcario, en dos direcciones de Internet.

Lo anterior es así, pues contrario a lo que aduce el actor, a juicio de esta Sentenciadora, las unidades administrativas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pueden apoyarse, no sólo en las definiciones contenidas en un diccionario enciclopédico, para establecer el significado de las palabras que en idioma inglés componen el signo marcario cuyo registro pretende, sino también en las definiciones incluidas a través de las páginas electrónicas, como son las de Internet, al no existir

precepto legal alguno que lo prohíba, mientras se dé a conocer al interesado los datos de localización suficientes con los que pueda cerciorarse de la existencia de tales definiciones, y en su caso, esté en aptitud de acreditar que no son correctas, lo cual no ocurre en la especie.

De otra parte, **tampoco le asiste razón al actor**, cuando refiere que resulta ilegal que la autoridad llevara a cabo la traducción de las palabras que conforman la marca, cuando debió realizar el análisis del signo tal y como fue propuesto a registro.

Lo anterior resulta así, pues del transcrito artículo 90, fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, se desprende que no serán registrables como marcas:

- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, **considerando el conjunto de sus características**, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. (Fracción IV).

- Las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción; (Fracción IV) y,

- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. (Fracción VI).

- El numeral en estudio, en su fracción IV, comprende un enunciado que, por regla general, no es susceptible de ser probado, al no referirse a hechos, ya que para su análisis, el operador debe limitarse a realizar un ejercicio mental, que jurídicamente se conoce como subsunción, a efecto de comprobar que el supuesto de hecho encuadra en el caso hipotético previsto por el legislador.

De esta manera, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está facultado para decidir sobre el registro marcario solicitado **atendiendo exclusivamente a las**

palabras o signos que integran la marca propuesta, y corroborar si éstas son descriptivas de los productos o servicios que tratan de ampararse como marcas, motivando debidamente su conclusión, aún ante la inexistencia de alguna de las pruebas permitidas por la ley.

Sostener un criterio en contrario implicaría aceptar que el lenguaje está sujeto a prueba; es decir, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estuviera obligado a demostrar, con material probatorio, el significado de las palabras que forman una marca que se pretende registrar, para de esta manera estar en aptitud de resolver si son descriptivas o indicativas, lo cual es materialmente imposible.

Sustenta lo anterior la tesis **I.7o.A.448 A**, dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 2041, que precisa:

> "**MARCAS DESCRIPTIVAS. PARA DETERMINAR QUE TIENEN ESE CARÁCTER, EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI), POR REGLA GENERAL, NO DEBE ALLEGARSE DE PRUEBAS.**" [N.E. Se omite transcripción]

No obstante lo anterior, en la fracción VI, del artículo de que se trata, el legislador estableció que no serán registrables como marcas, **la traducción a otros idiomas**, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.

De lo que se sigue, que la autoridad para establecer si son registrables o no las marcas, cuya denominación se presente en idioma extranjero, y estar en aptitud y pericia de determinar si se actualizan o no las hipótesis establecidas en la fracción VI del artículo en comento, válidamente puede traducir de manera individual una denominación que esté integrada por una o más palabras, **a fin de obtener un significado global** de la misma, y establecer si la marca propuesta a registro, **considerada en**

su conjunto, es o no descriptiva, dado que tal carácter, no sólo se restringe a los vocablos del idioma español, sino a aquellos que siendo en lengua extranjera su traducción corresponde a palabras no registrables en lengua española.

Por otra parte, esta Juzgadora considera **fundados**, los restantes argumentos del actor, respecto a que el signo marcario propuesto a registro "**BRAND ANALYSIS**", aún traducido al idioma español "**ANÁLISIS DE MARCAS**", no es descriptivo de las cualidades de los servicios que pretende proteger de la clase 42 Internacional, consistentes en "**DISEÑO DE ARTES GRÁFICAS**", ya que analizado en su conjunto y atendiendo a la forma en que va a ser percibida, a primera impresión, por el público consumidor promedio, no identifica, por virtud de ese signo, cuáles son los servicios que pretenden protegerse con el mismo, ni mucho menos, las cualidades de tales servicios por lo que la misma no se encuentra comprendida en las hipótesis del artículo 90, fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial.

De otra parte, la marca propuesta tampoco coincide con las excepciones que al caso establece el artículo 6 quinquies, en su apartado B, inciso ii), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que en lo conducente prevé:

[N.E. Se omite transcripción]

El artículo transcrito establece, que las marcas no podrán ser rehusadas para su registro, ni invalidadas, excepto:

1. Cuando estén desprovistas de distintividad;

2. Cuando estén formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el lugar de origen de los productos o la época de producción o;

3. Cuando hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama.

Como se advierte el artículo 6 quinquies, apartado B, inciso ii), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es el sustento de lo previsto por el artículo 90, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial.

Asimismo, ha quedado debidamente precisado que el artículo 90, fracciones IV y VI, de la Ley de la Materia, establecen la prohibición de registrar como marca, la denominación, que sea descriptiva o indicativa del producto o servicio que trata de amparar y que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, así como la traducción de otros idiomas de palabras no registrables.

Ahora bien, como es reconocido por la autoridad, y no controvertido por la actora, las palabras "BRAND ANALYSIS", traducidas al idioma español significan, "ANÁLISIS DE MARCAS", signo, que analizado en su conjunto, a juicio de este Órgano Colegiado, no resulta descriptivo de las cualidades de los servicios que se pretenden amparar de la clase 42 Internacional a saber: "**DISEÑO DE ARTES GRÁFICAS**", como se advierte en la solicitud de registro antes precisado, y no así el de "**artes gráficas**", como indebidamente lo cita la autoridad a foja dos, de la resolución que se impugna.

La determinación anterior, se sustenta en las diversas tesis dictadas por el Poder Judicial de la Federación, quien ha establecido que se está en presencia de un signo descriptivo cuando se refiere precisamente a la cualidad, características o propiedades que usualmente corresponden al producto o servicio que se pretende distinguir y que se ofrece en el mercado.

Asimismo, que debe considerarse que las palabras extranjeras tienen tal carácter sólo cuando el consumidor promedio de los productos o servicios a que se refieren percibe directamente el carácter o función descriptiva de tal denominación, y que, en ese sentido, la ratio legis del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, es evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes, esto es, impedir la apropiación individual de una expresión que sea de tal naturaleza común que todos

éstos tengan derecho a usarla, para lo cual, lo mismo es que sea descriptiva de las cualidades que de la calidad de un producto, independientemente de que la separación de ambos significados es eventual y, en cierta forma, convencional, y a menudo se usan indistintamente.

Por tanto, la prohibición de registrar los signos descriptivos se apoya en:

a) Su falta de carácter distintivo, porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, proporcionan al público información acerca de sus propiedades y características y,

b) La necesidad de mantenerlos libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado.

Así, se debe establecer cuándo una marca es descriptiva y no es registrable, y cuándo es simplemente sugestiva y si se puede registrar.

En este aspecto, el artículo 6 quinquies, apartado B, inciso ii), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial revisado en Lisboa en 1958, como quedó precisado en párrafos que anteceden, señala que las marcas pueden ser rechazadas cuando estén desprovistas "de todo" carácter distintivo, o bien estén formadas "exclusivamente" por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

Por tanto, una denominación no podrá ser registrada como marca, cuando describa o pretenda describir la cualidad de los productos o servicios que con la misma se pretenden amparar, sin una indicación o característica específica que los distinga de los productos o servicios semejantes de los demás productores o prestadores del servicio, ya que no podría otorgarse el registro como marca al solici-

tante, de una denominación que en sí misma pudiera servir para calificar los productos o servicios de todos los competidores, pues no se podría privar a éstos del derecho de usar esa expresión en sus etiquetas para evitar el peligro de incurrir en imitación de marca.

Sin embargo, cuando la denominación o expresión, es evocativa de alguna cualidad del producto o servicio, sin que esa expresión peculiar impida a los competidores usar la denominación o expresión genérica en sus etiquetas, entonces sí es susceptible de registro, pues en los casos de las marcas evocativas, se exige al consumidor, para llegar a comprender qué producto o servicio ampara la marca, hacer uso de la imaginación y del entendimiento, generándose un proceso deductivo entre la marca y el producto o servicio; es por ello, que los signos evocativos son registrables marcariamente, pues no cumplen con el requisito de descriptividad previsto por el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sustenta lo anterior, la tesis **I.4o.A.658 A**, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, página 1374, que refiere:

> "**PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS DESCRIPTIVAS Y RAZONES PARA PROHIBIR SU REGISTRO.**" [N.E. Se omite transcripción]

Asimismo, es aplicable la tesis jurisprudencial **431**, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice 2000, Séptima Época, Tomo XI, página 476, que señala:

> "**MARCAS DESCRIPTIVAS.**" [N.E. Se omite transcripción]

En ese orden de ideas, es evidente que la resolución impugnada, es ilegal, pues esta Juzgadora estima que no se actualizan los supuestos de prohibición contenidos

en las fracciones IV y VI, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial y por tanto, tampoco la excepción prevista por el artículo 6 quinquies, apartado B, inciso ii) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, para que fuera rehusado el registro del signo de que se trata, toda vez que contrario a lo resuelto por la autoridad, la marca nominativa "BRAND ANALYSIS", no es descriptiva de las cualidades de los servicios que se pretenden amparar, incluidos en la clase 42 internacional, consistentes en "DISEÑO DE ARTES GRÁFICAS", ello en razón, de que tal signo marcario, al primer golpe de vista del consumidor promedio, no infiere cuáles son los servicios que identifica.

Debiéndose entender como **consumidor promedio**, en relación con las marcas, aquél capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, de los que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, no obstante que rara vez pueda comprobar pormenorizadamente las marcas que se presentan en el mercado; tal como se ha establecido en la tesis **I.4o.A.614 A**, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 2765, cuyo texto, es el siguiente:

> "**CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS.**" [N.E. Se omite transcripción]

Luego entonces, como lo indica el actor, considerando que la marca de que se trata, va a ser percibida por el público consumidor promedio, sin realizar un examen exhaustivo de la denominación que identifica el servicio, ya que es cierto que rara vez puede comparar pormenorizadamente las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado, así como realizar su traducción, misma que la autoridad refiere, como "ANÁLISIS DE MARCAS"; a consideración de esta juzgadora, tal signo analizado en su conjunto, y a primer golpe de vista, no describe las cualidades de los servicios de "DISEÑO DE ARTES GRÁFICAS", como tampoco evoca una conexión directa con los servicios que pretende proteger; evocación, que en todo caso, no resultaría un elemento que prohíba el registro marcario del signo "BRAND ANALYSIS", si se

toma en consideración que las marcas evocativas, son aquéllas que derivan de la palabra "evocar" y que implican traer a la memoria o a la imaginación una cosa, sin embargo, esto no es sinónimo del término describir, que se refiere a la representación cabal detallada y por partes de una cosa; de tal suerte que, no se advierte de modo alguno que la marca de que se trata, sea descriptiva de los servicios de "DISEÑO DE ARTES GRÁFICAS", de la clase 42 Internacional, que con la misma se pretenden amparar.

Sustenta lo anterior la tesis **I.4o.A.659 A**, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, página 1375, que señala:

> "**PROPIEDAD INDUSTRIAL. LOS ADJETIVOS (INCLUYENDO PALABRAS EXTRANJERAS) SON REGISTRABLES COMO MARCAS SI NO SE REFIEREN A LAS CUALIDADES ESENCIALES O PREDOMINANTES DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE DENOMINAN, AL TRATARSE DE SIGNOS EVOCATIVOS O SUGESTIVOS.**" [N.E. Se omite transcripción]

Asimismo, cobra aplicación por analogía la tesis **423**, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Apéndice 2000, Octava Época, Tomo III, página 400, que refiere:

> "**MARCAS EVOCATIVAS. REGISTRO DE LAS.**" [N.E. Se omite transcripción]

Bajo ese contexto, se concluye que la autoridad debió conceder el registro solicitado, al encontrarse satisfecha la exigencia prevista en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que el signo supracitado "BRAND ANALYSIS", se considera suficientemente distintivo, para diferenciar los servicios de la clase 42 Internacional "DISEÑO DE ARTES GRÁFICAS", de otros de su misma especie o clase en el mercado, por lo que se impone declarar la nulidad de la resolución impugnada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción IV y 52, frac-

ción IV, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para el efecto de que la autoridad, dentro del plazo de cuatro meses, emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que conceda el registro marcario que le fue solicitado, siguiendo los lineamientos precisados en este fallo.

Lo anterior es así, pues no obstante que la resolución impugnada es producto de actos viciados de origen, debido a la insuficiente fundamentación de la competencia de la autoridad emisora del impedimento legal, Coordinadora Departamental de Examen de Marcas "C", declarada en el Considerando Tercero de esta sentencia, no resulta procedente ordenarle que regularice el procedimiento a partir del momento de la emisión de tal oficio de impedimento, en razón de haber resultado fundada la pretensión de fondo del actor.

Por lo expuesto y fundado, así como con apoyo en los artículos 18, fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción IV y segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- Resultó fundado el estudio oficioso de la fundamentación de la competencia material de la autoridad emisora del oficio de impedimento legal, identificado con el código de barras número 20070092672, de fecha siete de marzo de dos mil siete, conforme lo precisado en el Considerando Tercero de este fallo.

II.- La parte actora acreditó las pretensiones de su acción, por tanto;

III.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, detallada en el Resultando 1° de esta sentencia, para los efectos precisados en la parte final del Considerando Cuarto de la misma.

IV.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada del presente fallo, devuélvanse los autos a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal,

una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente asunto, y en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 17 de mayo de 2010, por mayoría de 9 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas, Luis Carballo Balvanera y Francisco Cuevas Godínez, y un voto en contra del C. Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, quien se reservó su derecho a formular voto particular. Estuvo ausente el C. Magistrado Jorge Alberto García Cáceres.

Fue Ponente el Magistrado Luis Caballo Balvanera, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 10 de junio de 2010 y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30, fracción V y 47, fracción III de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1263/08-EPI-01-6/2333/09-PL-10-10

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, disiento del criterio aprobado por mayoría en el presente asunto, por las razones que en seguida expreso.

En el Considerando Cuarto del fallo mayoritario, se determina que asiste la razón a la actora al argumentar que, contrario a lo señalado por la autoridad deman-

dada, la marca "BRAND ANALYSIS", aplicable a los productos correspondientes a la clase 42, consistentes en: diseño de artes gráficas, no es descriptiva de los productos que pretende amparar.

Sin embargo, considero que, contrario a tal conclusión mayoritaria, la marca cuyo registro solicita la parte actora, no es registrable pues, como quedó precisado en la propia resolución mayoritaria, la traducción al idioma español de las palabras "BRAND" y "ANALYSIS", que forman el signo "BRAND ANALYSIS", es: "MARCA" y "ANÁLISIS, ESTUDIO MINUCIOSO DE UNA OBRA, DE UN ESCRITO O DE CUALQUIER OTRO OBJETO DE ESTUDIO INTELECTUAL"; en esos términos, es dable concluir que la traducción de la denominación "BRAND ANALYSIS", al idioma español, es: "ANÁLISIS DE MARCA", por lo que la denominación que se pretende registrar constituye una construcción artificial de palabras no registrables, por ser de uso común, como lo son las palabras "análisis" y "marca".

Aunado a lo anterior, considero que la traducción al idioma español, de la denominación "BRAND ANALYSIS", sí es descriptiva de los productos que pretende amparar, a más de que guarda relación directa con la naturaleza, propiedades, características, especie, calidad y destino de dichos productos; toda vez que, el signo en mención, se pretende aplicar a productos y servicios relacionados con el diseño de artes gráficas, definidas éstas como la manifestación de la actividad humana relacionada con la elaboración de todo tipo de elementos visuales, **fundamentalmente técnicas de imprenta, grabado y dibujo**; por tanto, las artes gráficas, **abarcan el proceso artístico de la creación de un diseño, usando un medio y la transferencia de la imagen hacia un sustrato (como el papel), creando así una expresión artística**.

En esos términos, se puede entender por artes gráficas, el grupo de todos los oficios que se relacionan con la impresión, la tipografía, la litografía, la impresión digital, la encuadernación, el terminado y todas las variantes o procesos adicionales que se hacen al material impreso, como la serigrafía, la flexografía, el huecograbado o rotograbado, entre muchas otras.

De lo anterior, concluyo que la denominación “BRAND ANALYSIS”, cuya traducción al idioma español, “ANÁLISIS DE MARCA”, sí es descriptiva de los productos que pretende amparar, a más de que guarda relación directa con la naturaleza, propiedades, características, especie, calidad y destino de dichos productos, dado que a fin de lograr el producto y servicio relacionado con las artes gráficas, se requiere de un proceso en el que se haga una serie de análisis de marcas, esto es, estudios relacionados con señales, medidas, tamaños, rasgos, grabados, dibujos, diseños.

De lo razonado, concluyo que, contrario a lo dispuesto en el artículo 90, fracciones IV y VI, de la Ley de la Propiedad Industrial, se ordena otorgar el registro de marca solicitado por la actora, no obstante que es descriptiva de los productos que pretende proteger.

MAG. ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-353

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA. DEBE ANALIZARSE TOMANDO EN CUENTA SI LA MARCA ESTÁ INSCRITA EN UN PAÍS EXTRANJERO.- El artículo 6 quinquies, A, 1), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece que los países que forman parte de ese convenio deben registrar y proteger, tal cual es, cualquier marca regularmente registrada en el país de origen, salvo que se trate de marcas desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen o la época de elaboración de los productos que pretende amparar, o que con tal denominación se les conozca de forma común en el mercado. Por tanto, al momento de resolver sobre la solicitud, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe analizar la inscripción del registro en un país extranjero, que se exhiba como prueba, y otorgar el registro si no se actualiza algún supuesto de descriptividad previsto en el punto 2 del inciso B) del numeral referido.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1938/08-EPI-01-6/2709/09-PL-01-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de mayo de 2010, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Andrés López Lara.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

CUARTO.- [...]

En consecuencia, resulta incorrecto que la autoridad haya negado el registro como marca de la denominación DEEP BRILLIANCE, pues ésta tiene la calidad de distinguir productos de la clase 03 internacional de otros de la misma especie y clase en el mercado, al no referirse a la especie, calidad, cantidad, destino, valor o lugar de origen de las preparaciones para el cuidado del cabello, incluyendo brillos y luces para el cabello, champues, acondicionadores, gels, mousses, preparaciones para estilizar, alaciadores, lociones para ondulado permanente, y preparaciones colorantes para el cabello, ni proporcionar al público información directa e inmediata acerca de sus propiedades, características o finalidades, sino que es distintiva, siendo por ello susceptible de ser registrada como marca, al no ubicarse en los supuestos previstos en las fracciones IV y VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Corrobora la conclusión alcanzada el Precedente VI-P-SS-238 sustentado por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, publicado en la Revista N° 24, Sexta Época, Año II, Diciembre de 2009, página 197:

> "**MARCAS INDICATIVAS O DESCRIPTIVAS.- NO SE DA ESE SUPUESTO CUANDO SUS ELEMENTOS NO SON CARACTERÍSTICOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PRETENDE PROTEGER.**" [N.E. Se omite transcripción]

También es importante señalar que la prohibición de registrar una marca descriptiva del producto o servicio que pretende amparar tiene como finalidad que dicha marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante frente a sus competidores, pues éstos estarían impedidos de utilizar dicha denominación y por ello esta juzgadora considera que quien se dedique a la producción, venta o comercialización de los productos de la clase 03 internacional no sufrirá una desventaja frente a la hoy actora por no poder utilizar la denominación DEEP BRILLIANCE, pues se insiste, dicha denominación no es la descripción específica y exclusiva de tales productos, ni a éstos se les conoce o identifica de esa forma en el mercado, resultando por ello suficientemente distintiva.

A mayor abundamiento, cabe señalar que incluso en el supuesto de que la denominación DEEP BRILLIANCE, traducida al idioma español se considerara evocativa de los productos de la clase 03 internacional, ello no constituye un impedimento para su registro como marca, ya que ese supuesto no está contemplado en alguna de las fracciones del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el cual sustentó su decisión la autoridad demandada.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volúmenes 187 a 192, Sexta Parte, página 93, cuyo rubro y texto rezan:

> "**MARCAS, FIGURAS Y DISEÑOS EVOCATIVOS. LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS NO CONTIENE PROHIBICIÓN DE REGISTRARLOS.**" [N.E. Se omite transcripción]

Asimismo apoya la anterior conclusión la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VI, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1990, página 571, que es del tenor siguiente:

> "**MARCAS. ADJETIVOS CALIFICATIVOS EN IDIOMA EXTRANJERO, CUANDO SON REGISTRABLES.**" [N.E. Se omite transcripción]

Por otra parte, pero tomando en cuenta la conclusión alcanzada, esta juzgadora considera que también es fundado el argumento de la actora en el sentido de que la resolución impugnada es ilegal porque la autoridad demandada no aplicó correctamente lo establecido en el artículo 6 quinquies, A, 1), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del que México es signatario, cuya parte conducente se transcribe:

[N.E. Se omite transcripción]

El precepto transcrito obliga a los países de la Unión a admitir y proteger, tal cual es, toda marca regularmente registrada en el país de origen, y sólo permite se rehúse el registro a las marcas desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen o la época de producción de los productos de la clase 03 internacional, o que con tal denominación se les conozca de forma común.

En este orden de ideas, le asiste la razón a la actora en cuanto a que se violó en su perjuicio el apartado A, inciso 1, del artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues con las pruebas que ofreció tanto en este juicio como en el procedimiento administrativo del que deriva la resolución impugnada, demostró plenamente que la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos de América le otorgó el registro como marca de la denominación DEEP BRILLIANCE para proteger productos de la clase 03 internacional, como se observa de las documentales visibles a fojas 23 a 37 del expediente administrativo exhibido por la autoridad demandada a requerimiento de la Sala Instructora, que a continuación se reproducen:

[N.E. Se omiten imágenes]

Analizando las pruebas que han sido reproducidas, se puede concluir que le asiste la razón a la actora, pues la autoridad demandada debió otorgarle el registro de marca solicitado respecto de la denominación DEEP BRILLIANCE, ya que la misma fue registrada en Estados Unidos de América para proteger productos de la clase 03 internacional y, por ende, debe ser otorgada en México "tal cual es", habida cuenta que no se actualiza el supuesto de descriptividad previsto en el punto 2 del inciso B) del artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, tal y como se razonó y demostró ampliamente al analizar los argumentos dirigidos a demostrar que no se actualizan las prohibiciones previstas en las fracciones IV y VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, en las que incorrectamente fundó su decisión la autoridad.

[...]

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracciones I, II y IV, y 52, fracción IV y segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; así como en los artículos 14, fracciones XI y XIII, y 18, fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I. La demandante acreditó los hechos constitutivos de su acción.

II. Resultó fundada la causal de ilegalidad analizada de oficio por este Pleno; en consecuencia,

III. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, descrita en el Resultando 1° de esta sentencia, por los fundamentos y motivos señalados en el último Considerando, y para los efectos precisados en la parte final de éste.

IV. NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión celebrada el día 17 de mayo de 2010, por mayoría de ocho votos a favor de los Magistrados, Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas y Francisco Cuevas Godínez, más un voto con los puntos resolutivos del Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, y un voto en contra del Magistrado Luis Carballo Balvanera, estando ausente el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres.

El Magistrado Luis Carballo Balvanera, se reservó su derecho para formular voto particular.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 9 de junio de 2010 y con fundamento en los artículos 30, fracción V, y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO LUIS CARBALLO BALVANERA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1938/08-EPI-01-6/2709/09-PL-01-10

El que suscribe, expone a continuación las razones por las cuales se aparta de lo resuelto por la mayoría en el caso a estudio.

La mayoría de los Magistrados integrantes del Pleno de esta Sala Superior, determinaron en el Considerando Cuarto del fallo no compartido, que es fundado el agravio de la parte actora, toda vez que, a su juicio, la autoridad determinó incorrectamente que la marca propuesta a registro "**DEEP BRILLIANCE"**, es descriptiva de una característica de los productos a distinguir; es decir, "Preparaciones para el cuidado del cabello, incluyendo brillos y luces para el cabello, champúes, acondicionadores, gels, mousses, preparaciones para estilizar, alaciadores, lociones para ondulado permanente, y preparaciones colorantes para el cabello". Se señala que la denominación "**DEEP BRILLIANCE**", no es descriptiva de una cualidad de los productos que con la misma se pretenden proteger, pues de la consulta al Pocket Oxford Spanish dictionary 2005, Oxford University Press y el Diccionario Espasa Concise 2000, Editorial Espasa Calpe, las palabras **DEEP BRILLIANCE** se traducen como "profunda brillantez" o "profunda viveza", que no son una característica o cualidad esencial, ni secundaria de este tipo de productos. Por lo que la autoridad debió conceder el registro solicitado. De ahí que se declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad competente, emita una nueva en la que resuelva la solicitud de registro marcario "**DEEP BRILLIANCE**", planteada por la actora, otorgando dicho registro.

El suscrito no comparte la forma en que se resolvió el presente asunto, atendiendo a las razones, que a continuación se explican.

De la sentencia no compartida, se tiene que la actora solicitó el registro como marca de la denominación "**DEEP BRILLIANCE**", para la clase 03 internacional de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, para proteger "*Preparaciones para el cuidado del cabello, incluyendo brillos y luces para el cabello, champúes, acondicionadores, gels, mousses, preparaciones para estilizar, alaciadores, lociones para ondulado permanente, y preparaciones colorantes para el cabello*".

En la resolución impugnada, se negó tal solicitud por las siguientes razones:

1.- Que el signo marcario propuesto no es registrable, dado que es descriptivo de una cualidad de los productos que pretenden protegerse con el mismo, incurriendo en los supuestos previstos en las fracciones IV y VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

2.- Que la denominación se compone de dos palabras en idioma inglés DEEP que significa profundo, hondo, intenso, y BRILLIANCE que significa resplandor, viveza, brillantez, brillo, por lo que traducida al español significa BRILLANTEZ O BRILLO PROFUNDO, por lo que indica que los productos que se pretenden amparar, como son preparaciones para el cuidado del cabello, tendrán la finalidad de dar al cabello una apariencia de brillo profundo o intenso, por lo que sí es indicativa de la finalidad de los productos, por lo que se limitaría a los demás comerciantes o fabricantes de señalar que sus productos también proporcionan dicha característica.

Al respecto, resulta pertinente transcribir los artículos atinentes al caso, de la Ley de la Propiedad Industrial, y que son los siguientes:

"**Artículo 87.-** Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que

presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto."

"**Artículo 88**.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

"**Artículo 89.-** Pueden constituir una marca los siguientes signos:
"I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
"II.- Las formas tridimensionales;
"III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y
"IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado."

"**Artículo 90.-** No serán registrables como marca:
"(...)
"**IV**.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;
"(...)
"**VI.-** La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;
"(...)"

Conforme al artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios pueden usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad correspondiente.

Atento al artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, la marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros, y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. Asimismo, el signo marcario es el vehículo que utilizan las empresas para capturar la clientela y dominar los mercados, y desempeña un papel primordial en la comercialización de las mercancías y servicios.

Por su parte, el artículo 89 de la Ley en comento, establece de manera general el tipo de signos que podrán constituir una marca registrada.

A su vez, el artículo 90, se refiere a los supuestos por los que una marca no es registrable.

Al respecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis de Jurisprudencia, visible en la página 52, de la Sexta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1985, sustentó el siguiente criterio referente a las características de una marca:

> "**MARCA, CARACTERÍSTICAS DE LA**. La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente, y pueda ser reconocida fácilmente.
>
> "TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO."
>
> "Séptima Época
> "Sexta Parte:
> "Volumen 48, página 41. Amparo en revisión 2733/71. La Nueva Medalla, S.A. 14 de febrero de 1972. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

"Volumen 48, página 41. Amparo en revisión 2986/71. Alcoholes, Vinos y Licores. Planta Elaboradora, S.A. 28 de febrero de 1972. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
"Volumen 55, página 55. Amparo en revisión 239/72. American Home Products, Corporation. 6 de julio de 1973. Unanimidad de votos. La publicación no el nombre del menciona ponente.
"Volumen 56, página 43. Amparo en revisión 469/73. Motores y Aparatos Eléctricos, S.A. de C.V. 21 de agosto de 1973. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
"Volumen 60, página 49. Amparo en revisión 30/73. Bioresearch Products Laboratories, S.A. 2 de marzo de 1973. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente."

También tiene aplicación la tesis I.4o.A.609 A emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 2793:

"**MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES.-** El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: 'Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.', se colige que marca es el signo, denominativo, gráfico o mixto, que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, y vincula psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación. Es así que la información derivada de la marca es aprehendida por el consumidor y desencadena representaciones en su mente, lo que evoca el aspecto dinámico e ingrediente psicológico del signo marcario. En este orden de ideas, la marca comercial debe ser susceptible de distinguir, por sí, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, determinando y constituyendo así su valor económico, en cuanto permite y es un instrumento para que el comerciante los ofrezca y logre venderlos, aunado al beneficio de que éstos tengan demanda y aceptación

entre los consumidores. Así, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de una marca, están las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca."

De la lectura al artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, se observa que establece que no serán registradas como marcas:

1. Las denominaciones o figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que se traten de proteger como marca.

2. Las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.

3. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.

Es decir, las fracciones IV y VI del artículo 90 en comento, contemplan la prohibición de inscribir una marca que sea descriptiva o indicativa del producto o servicio que trata de amparar, sus características íntimas o particulares y que sea descriptiva en general de cualquier cosa, por lo que si se pretende registrar como marca un adjetivo calificativo que traducido de un idioma extranjero al español, su significado describa en sí mismo el producto o servicio; o bien, sea indicativo de manera directa de cierta cualidad o características del producto o servicio que ampara la marca, la misma resulta ser descriptiva, y por lo tanto, está prohibido su registro.

De ahí que las denominaciones, figuras o formas tridimensionales no son registrables como marcas, cuando éstas, considerando el conjunto de sus características, describen los productos o servicios que se tratan de proteger como marca; es

decir, si una denominación que se pretendiera registrar como marca, fuera descriptiva de los productos o servicios que se trataran de proteger con la misma, ésta no sería registrable.

Cabe señalar en este punto, que atendiendo al texto de la referida fracción IV del artículo 90 se deduce que lo relevante para determinar si una denominación, considerando el conjunto de sus características, es descriptiva, son los productos o servicios que se traten de proteger con ella, es decir aquéllos en los que se esté usando o se pretenda usar la marca y que por tanto se estén comercializando.

Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha emitido diversas tesis relacionadas con las marcas descriptivas, mismas que a continuación se transcriben:

La primera es la Tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, página 454:

> "**MARCAS. DESCRIPTIVIDAD.-** La razón de la no registrabilidad de las marcas descriptivas cuando denoten alguna cualidad o característica del servicio que se pretende prestar, prohibición que establece la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, lo es el hecho de que si tal denominación registrase como marca la administración estaría convalidando que un particular se apropiara, para su uso exclusivo, de la enunciación de una cualidad que le es aplicable a toda una clase de servicios, creando así una situación de monopolio en la que resultarían perjudicados los demás prestadores del mismo servicio, pues se verían impedidos de hacer uso de esas palabras, dado el privilegio injustificado que se otorgaría."

En segundo lugar, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Septiembre de 1991, página 155, también interpretó:

"**MARCAS COMPUESTAS. DESCRIPTIVIDAD Y CONDICIÓN DISTINTIVA DE LAS.-** De conformidad con lo establecido en el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, no son registrables como marca 'V.- Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Una denominación no se considera distintiva porque ostente una ortografía caprichosa, o construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras que, analizadas aisladamente, continúen siendo descriptivas o indicativas de las cualidades, características físicas, contenido, uso, destino o función, composición de propiedades, tipo (sic) especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios'. En la disposición legal transcrita, se advierte que el legislador impuso una regla de apreciación atinente a las denominaciones que pretendan registrarse como marcas, que esté relacionada estrechamente con uno de los caracteres esenciales que toda marca debe reunir, como lo es su condición distintiva. La referida regla consiste en considerar que una marca está desprovista de tal requisito, si la denominación respectiva se integra por dos o más palabras que al ser analizadas en forma aislada resultan descriptivas de los productos o de los servicios correspondientes y las mismas continúan siendo descriptivas en su conjunto; en tal caso la denominación propuesta para registro en esos términos, debe ser rechazada. Consecuentemente, la negativa de registrar como marca la denominación **Taco Bar**, no resulta contraria a derecho, habida cuenta que al decretar dicha negativa, la respectiva autoridad responsable ajustó su proceder a la mencionada regla de apreciación de las marcas, en tanto que las palabras que integran esa denominación, analizadas aisladamente o en forma conjunta, conservan el significado que naturalmente les corresponde, mismo que contribuye una clara y directa alusión a los servicios a proteger, que son de restaurante y bar, pues la palabra 'taco' significa bocado o comida ligera que se toma fuera de las horas de comida y el vocablo 'bar' indica una especie de establecimiento donde se sirven bebidas preparadas que suelen tomarse de pie ante el mostrador, significados que se aprecian como común denominador de ambas expresiones en la mayoría de los diccionarios de la lengua española."

Además, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Tesis 431, publicada en el Apéndice 2000, Tomo III, Administrativa, interpretó lo siguiente:

> "**MARCAS DESCRIPTIVAS.-** Conforme al artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, no son registrables como marca las frases descriptivas de los productos que traten de ampararse con la marca, incluyendo aquellas que pueden servir para designar la calidad de esos productos y una denominación descriptiva no se considerará distinta por el hecho de ostentar una ortografía caprichosa. Se debe, pues, establecer cuándo una marca es descriptiva y no es registrable, y cuándo es simplemente sugestiva y sí se puede registrar. En este aspecto, y para iluminar la interpretación del precepto, se puede recordar que el artículo 6o. quinquies, apartado b, inciso 2o., del Convenio de París revisado en Lisboa en 1958, señala que las marcas pueden ser rechazadas cuando estén desprovistas 'de todo' carácter distintivo, o bien estén formadas 'exclusivamente' por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie o destino de los productos. Así pues, una denominación no será apropiable como marca, por un productor, cuando describa o pretenda describir la calidad de sus productos, sin una indicación o característica específica que los distinga de los productos semejantes de los demás productores. No se podría otorgar el registro como marca a un productor, de una denominación que en sí misma pudiera servir para calificar los productos de todos los competidores, pues no se podría privar a éstos del derecho de usar esa expresión en sus etiquetas para evitar el peligro de incurrir en imitación de marca. Pero cuando la denominación o expresión, siendo sugestiva de alguna calidad del producto, tiene características propias e individuales que permitan diferenciar el producto, sin que esa expresión peculiar impida a los competidores usar la denominación o expresión genérica en sus etiquetas, entonces sí es susceptible de registro. Por ejemplo, en el caso, la marca 'komodo' no sería susceptible de registro como marca para zapatos, porque cualquier fabricante tiene derecho a decir, en sus etiquetas, que los zapatos que él produce son cómodos, y la expresión 'komodo', que no por

> su ortografía caprichosa se diferencia sustancialmente de la expresión 'cómodo', no es susceptible de apropiación individual por un fabricante. Pero la expresión 'komodini', en cambio, aunque es sugestiva de comodidad, no está totalmente desprovista de carácter distintivo, ni es sustancialmente idéntica a la expresión 'cómodo', y su registro no impedirá que los competidores puedan usar en sus etiquetas y publicidad, la denominación 'cómodo' para sus productos. En consecuencia, esa expresión 'komodini' sí es susceptible de registro como marca."

De las tesis transcritas con antelación, se confirma que no son registrables como marca las frases descriptivas de los productos o servicios que traten de ampararse con la marca, incluyendo aquéllas que pueden servir para designar la calidad de esos productos.

Asimismo, que una marca no es distintiva si la denominación respectiva se integra por dos o más palabras que al ser analizadas en forma aislada resultan descriptivas de los productos o de los servicios correspondientes y las mismas continúan siendo descriptivas en su conjunto; en tal caso la denominación propuesta para registro en esos términos, debe ser rechazada.

Finalmente, la prohibición del registro tiene como finalidad evitar que un particular se apropie de manera exclusiva de la enunciación de una cualidad que le es aplicable a toda una clase de productos o servicios, con lo cual se provocaría una situación de monopolio en la que resultarían perjudicados los demás comerciantes del mismo producto o prestadores del mismo servicio, ya que estarían impedidos para hacer uso de palabras que son comunes a la naturaleza de éstos.

Tiene aplicación la Tesis I.4o.A.658 A emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, página 1374:

"**PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS DESCRIPTIVAS Y RAZONES PARA PROHIBIR SU REGISTRO.-** El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, quedando incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. En congruencia con lo anterior, **se está en presencia de un signo descriptivo cuando se refiere precisamente a la cualidad, características o propiedades que usualmente corresponden al producto o servicio que se pretende distinguir y que se ofrece en el mercado**. Asimismo, debe considerarse que las palabras extranjeras tienen tal carácter sólo cuando el consumidor promedio de los productos o servicios a que se refieren percibe directamente el carácter o función descriptivo de tal denominación. En ese sentido, la ratio legis del precepto en comento es evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes, esto es, impedir la apropiación individual de una expresión que sea de tal naturaleza común que todos éstos tengan derecho a usarla, para lo cual, lo mismo es que sea descriptiva de las cualidades que de las calidades de un producto, independientemente de que la separación de ambos significados es eventual y, en cierta forma, convencional, y a menudo se usan indistintamente. Por tanto, la prohibición de registrar los signos descriptivos se apoya en: a) su falta de carácter distintivo, porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, proporcionan al público información acerca de sus propiedades y características y, b) la necesidad de mantenerlos libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado."

Tiene aplicación a lo anterior la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación I , Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, página 403:

"**MARCAS, NATURALEZA DE LAS.-** El artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, establece: 'No son registrables como marca: ...V. Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Una denominación no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa, o construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras que, analizadas aisladamente, continúen siendo descriptivas en su conjunto. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de las cualidades, característica físicas, contenido, uso, destino o función, composición de propiedades, tipo, especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos'. De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, edición decimonovena, descriptiva es la palabra que describe algún objeto. **Describir** significa: 'Tr. Delinear, dibujar, figurar una cosa, representándola de modo que de cabal idea de ella. 2. Representar a personas o cosas por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. 3. Definir imperfectamente una cosa, no por sus predicados esenciales, sino dando una idea general de sus partes o propiedades'. En los términos del numeral de que se trata y de la definición del vocablo 'describir', se colige que la prohibición de utilizar denominaciones descriptivas, esta condicionada al hecho de que esas denominaciones se encuentren vinculadas con la naturaleza de los productos o servicios que se trata de proteger con el registro, indicando cualesquiera de sus elementos: cualidades, característica, etc., prohibición lógica si se toma en consideración que su teleología es la de impedir el monopolio de palabras comunes que pudieren evitar su uso cotidiano por los demás. Dicho de otro modo: si la denominación que se pretende registrar como marca evoca una cualidad o característica, pero sin que precisamente se refiera a la naturaleza del producto o servicio que se quiere amparar con dicha marca, no puede afirmarse que se trata de una marca descriptiva, porque no delinea ni representa el objeto que la denominación describe. Por tanto, **sólo serán descriptivas, las marcas que conformen en su definición la naturaleza del producto a que se aplican, o que evoquen la idea del mismo**, pues, con independencia de que la deno-

minación tenga diversos significados, si ninguno de estos describe el producto o servicio que se pretende amparar, esa sola circunstancia es suficiente para descartar la hipótesis contenida en la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas en cuanto alude a la descriptividad de las marcas."

También se transcriben a continuación, las tesis que ha emitido la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual, de este Tribunal:

"**VI-TASR-EPI-172**

"**DESCRIPTIVIDAD DE LAS MARCAS.- SE PUEDE ACTUALIZAR POR INDICAR UNA O VARIAS DE LAS ESPECIES O TIPOS QUE ADQUIEREN LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A PROTEGER.-** De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, es impedimento legal para el registro de las marcas, que éstas se compongan, entre otros, por signos o figuras que considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse; asimismo, deberán incluirse dentro de este supuesto, aquellas palabras que sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o época de producción, del referido producto o servicio. Ahora bien, debe entenderse como 'especie' al 'conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes', de tal suerte que una marca puede ser indicativa y por tanto, descriptiva, cuando indique una o varias de las especies o tipos de productos o servicios que se desean amparar, pues es claro que una marca no puede reservarse para sí, estos aspectos, cuando los mismos son empleados por la mayoría de los titulares de las marcas para promocionar o publicitar la misma especie o tipo de productos o servicios, generándose con ello una ventaja competitiva injustificada. En consecuencia, si en un determinado asunto, el solicitante pretende registrar una marca, cuyas palabras implican una o varias de las especies o tipos que adquieren lo productos o servicios a proteger, debe negarse la marca, habida cuenta que resulta descriptiva. (55)

"Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2366/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.
"R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 277"

"**VI-TASR-EPI-79**

"**MARCAS DESCRIPTIVAS.-** En los términos establecidos en el artículo 90, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, con relación a la fracción VI del mismo artículo, a fin de determinar si una marca es o no registrable, se debe examinar en su conjunto, primero haciendo la traducción respectiva al idioma español y posteriormente, verificar si la misma define los servicios o productos que pretende amparar; esto es, si la marca da una idea general de sus partes o propiedades, o bien, si indica sus características o cualidades; por lo que no es lícito negar el registro fraccionándola en partes o atendiendo de manera aislada a cada uno de sus elementos. (63)

"Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1132/08-EPI-01-8.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de febrero de 2009, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: María de los Ángeles Garrido Bello.- Secretaria: Lic. Tania Monroy Caudillo.
"R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 270

"**VI-TASR-EPI-75**

"**MARCAS DESCRIPTIVAS.- CARACTERÍSTICAS DE LAS.-** Se está en presencia de un signo DESCRIPTIVO, cuando se refiere a la cualidad, características o propiedades que generalmente corresponden al producto o parte de los productos o servicios que se pretenden distinguir, ya que la razón

de existir del precepto 90 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que refiere que: 'No serán registrables como marca: las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción' es precisamente, a). Evitar se registren marcas que no sean distintivas, y b). Que no se apropie de manera individual una expresión, que sea de uso común al tener el derecho de usarla cualquier persona. (59)

"Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1560/08-EPI-01-6.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de febrero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Teresa Olmos Jasso.- Secretaria: Lic. Gloria Balvanera Franco.
"R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 267"

"**VI-TASR-EPI-34**

"**DESCRIPTIVIDAD DE LAS MARCAS.- SE PUEDE ACTUALIZAR POR EL DESTINO O FINALIDAD DE LAS MISMAS.-** De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, es impedimento legal para el registro de las marcas, que éstas se compongan, entre otros, por signos o figuras que considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse; asimismo, deberán incluirse dentro de este supuesto, aquellas palabras que sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o época de producción, del referido producto o servicio. Ahora bien, debe entenderse como destino, a la consignación, señalamiento o aplicación de una cosa o de un lugar para determinado fin, de tal

suerte que una marca puede ser indicativa y por tanto, descriptiva, cuando señale la finalidad o aplicación de ésta, pues es claro que una marca no puede reservarse para sí, estos aspectos, cuando los mismos son empleados por la mayoría de los titulares de las marcas para promocionar o publicitar la misma clase de productos o servicios, generándose con ello una ventaja competitiva injustificada. En consecuencia, si en un determinado asunto, el solicitante pretende registrar una marca, cuyas palabras implican la indicación de la finalidad o destino que tiene la misma, en relación con los productos o servicios que intenta proteger, debe negarse la marca, habida cuenta que resulta descriptiva del producto o servicio que protege. (54)

"Juicio Contencioso Administrativo Núm. 908/08-EPI-01-4.- Resuelto por la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de marzo de 2009, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Denisse Juárez Herrera.
"R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 20. Agosto 2009. p. 337"

Después de especificar la regulación legislativa y los criterios de interpretación, tanto del Poder Judicial Federal, como de este Tribunal, se razona lo siguiente:

La solicitud que pretende la actora, es respecto al registro de marca "**DEEP BRILLIANCE**", para la clase 03 internacional de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, para proteger "*Preparaciones para el cuidado del cabello, incluyendo brillos y luces para el cabello, champúes, acondicionadores, gels, mousses, preparaciones para estilizar, alaciadores, lociones para ondulado permanente, y preparaciones colorantes para el cabello*".

Se sostiene en el proyecto que no es descriptiva de una cualidad de los productos que con la misma se pretenden proteger, pues de la consulta al Pocket Oxford Spanish dictionary 2005, Oxford University Press y el Diccionario Espasa Concise 2000, Editorial Espasa Calpe, las palabras **DEEP BRILLIANCE** se traducen como

'profunda brillantez' o 'profunda viveza', que no son una característica o cualidad esencial, ni secundaria de este tipo de productos. Por lo que la autoridad debió conceder el registro solicitado.

De lo anterior se tiene que la denominación "**DEEP BRILLIANCE**", a juicio del suscrito, sí es descriptiva de los bienes y servicios referidos en la clase 03 internacional de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, pues la "profunda brillantez" o "profunda viveza", directamente describe una cualidad que dan al cabello, las preparaciones para el cuidado del cabello, los brillos y luces para el cabello, champúes, acondicionadores, gels, mousses, preparaciones para estilizar, alaciadores, lociones para ondulado permanente, y preparaciones colorantes para el cabello.

Por lo que es evidente que sí se trata de una marca descriptiva de los servicios por los cuales se pretende registrar.

En las razones anteriores, baso mi voto en contra de la sentencia que nos ocupa.

MAG. LUIS CARBALLO BALVANERA

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-SS-354

COMPETENCIA RESERVADA DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- SUPUESTO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA.- El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con el artículo 18, fracción XV, en relación con el artículo 14, fracción XIII, ambos de la Ley Orgánica del mencionado Tribunal, conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se funden en un Tratado o Acuerdo Internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer, como concepto de impugnación, que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos Tratados o Acuerdos. De esta forma, si del análisis realizado a la resolución impugnada y al escrito de demanda se advierte, por una parte, que dicha resolución no se funda en un Tratado o Acuerdo Internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, y por otra, que el demandante no hace valer, como concepto de impugnación, que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos Tratados o Acuerdos, sino que solamente alude a alguno de ellos como apoyo a sus aseveraciones, no puede considerarse legalmente que se actualice la competencia reservada del Pleno de la Sala Superior del mencionado Tribunal, para el conocimiento del asunto.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1088/08-EPI-01-4/37/10-PL-06-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de mayo de 2010, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

ÚNICO.- Por cuestión de orden procesal, este Pleno procede a analizar en primer término, el aspecto relativo a su competencia, para así poder determinar si se encuentra o no en posibilidad legal de dictar resolución en este juicio.

Por acuerdo de 27 de octubre de 2009, visible en autos a foja 765, la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, actualmente Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, determinó lo siguiente:

[N.E. Se omiten imágenes]

Conforme a lo anterior, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual consideró que la parte actora, en su segundo concepto de impugnación, hace valer la falta de aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que en tal virtud el juicio es de las características descritas en el artículo 18, fracción XV, de la Ley Orgánica de este Tribunal, por lo que ordenó remitir los autos del juicio a la Sala Superior a efecto de que este Pleno ejerza su competencia especial y resuelva el asunto en definitiva.

Ahora bien, el artículo 14, fracción XIII, de la Ley Orgánica de este Tribunal, y el artículo 18, fracción XV, del mismo ordenamiento legal, invocado por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, establecen lo que a continuación se indica:

[N.E. Se omite transcripción]

Conforme a los artículos transcritos, es competencia de este Pleno conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas fundadas en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos.

Por otra parte, el segundo concepto de impugnación hecho valer por la parte actora, y al cual se refiere en su acuerdo la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, consiste textualmente en lo que sigue:

[N.E. Se omiten imágenes]

Como se advierte de lo anterior, en los dos primeros párrafos de su segundo agravio, y en el penúltimo párrafo del mismo, la parte actora señala lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Esto es, la actora solamente argumenta violación a las garantías individuales de legalidad y debida fundamentación y motivación, consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por no haber sido valoradas debidamente las pruebas que presentó para acreditar el uso en México de las marcas C&A (Y DISEÑO), C&A Y C&A (Y DISEÑO) dentro de los últimos tres años contados a partir de la presentación de las demandas de caducidad, en términos de los artículos 130 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial; pero no hace valer, como concepto de impugnación, que no se haya aplicado a su favor algún tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México.

Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta que en el penúltimo párrafo de su agravio, la actora concluye que "*...la hoy demandada interpretó y aplicó de manera errónea los preceptos contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial*...", pero no refiere en ningún momento que también la autoridad hubiera interpretado y aplicado de manera errónea algún tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México.

Asimismo, en el restante contenido del concepto de impugnación en cita, la demandante se limita a desarrollar argumentos encaminados todos ellos a demostrar la indebida valoración de las pruebas por parte de la autoridad demandada.

Ahora bien, es cierto que a página 41 del escrito de demanda, la enjuiciante alude al artículo 1708, párrafo 9, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero no como un concepto de impugnación en el que haga valer que dicho precepto no haya sido aplicado en su favor, sino sólo como una referencia, ya que el concepto de impugnación que propiamente hace valer consiste en la falta de valoración de las pruebas con las que, según indica, demuestra que el uso de las marcas de que se trata se hizo de conformidad con el artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial, de acuerdo con el cual el uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca.

En conclusión, a lo largo de los argumentos que formula la actora en el agravio en cita, no aduce la falta de aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino solamente la falta o indebida valoración de las pruebas con las que manifiesta acreditar el uso en México de las marcas C&A (Y DISEÑO) y C&A Y C&A (Y DISEÑO), dentro de los últimos tres años contados a partir de las demandas de caducidad en su contra, en términos de lo dispuesto por los artículos 130 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por tanto, es claro que en el caso no se actualiza en modo alguno el supuesto consistente en que "*el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdo*," supuesto contemplado en los artículos 14, fracción XIII, y 18, fracción XV, de la Ley Orgánica de este Tribunal, relativos a la competencia de este Pleno, ya que para actualizar tal supuesto no basta con la alusión que hace la actora del artículo 1708, párrafo 9, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino que, tal y como claramente lo disponen los artículos primeramente mencionados, es preciso que la demandante haga valer, como *concepto de impugnación*, que no se aplicó en su favor algún tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial.

A mayor abundamiento, en el caso tampoco se actualiza el otro supuesto de los artículos 14, fracción XIII, y 18, fracción XV, de la Ley Orgánica de este Tribu-

nal, consistente en que se trate de resoluciones que "*se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México*", como se advierte del contenido del capítulo de "**CONSIDERACIONES**" de la resolución impugnada, **capítulo visible en autos** a fojas 119 a 145 y que a continuación se reproduce:

[N.E. Se omiten imágenes]

De lo reproducido anteriormente, se desprende que la demandada no invoca precepto alguno del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o de otro tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, como fundamento de la resolución impugnada.

En consecuencia, conforme a lo que ha quedado expuesto, lo procedente es declarar que el presente juicio no es materia de competencia reservada al Pleno, dado que no se actualizan los supuestos previstos en los artículos 14, fracción XIII, y 18, fracción XV, de la Ley Orgánica de este Tribunal, por lo que no le asiste la razón a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, al haber remitido a la Presidencia de este Tribunal los autos originales del juicio para que se emitiera la sentencia que en derecho corresponda, y por tanto, deberán devolverse dichos autos a la mencionada Sala para que, en ejercicio de su competencia legal, dicte la sentencia referida.

Con fundamento en los artículos 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 14, fracción XIII, y 18, fracción XV, de la Ley Orgánica de este Tribunal, se resuelve:

I.- El presente juicio no es materia de competencia reservada al Pleno, en los términos del Único Considerando de este fallo;

II.- Con copia autorizada de esta resolución, devuélvanse los autos del juicio a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, para que dicte la sentencia definitiva que en derecho corresponda.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada a las partes, para su conocimiento.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 19 de mayo de 2010, por unanimidad de nueve votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas y Francisco Cuevas Godínez. Estuvieron ausentes los Magistrados Alejandro Sánchez Hernández y Luis Carballo Balvanera.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado Alfredo Salgado Loyo, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 16 de junio de 2010 y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30, fracción V, y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, en vigor a partir del día siguiente, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Lic. Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY GENERAL DE POBLACIÓN

VI-P-SS-355

REPRESENTACIÓN LEGAL DE UNA EMPRESA OTORGADA POR CONDUCTO DE UN EXTRANJERO.- DEBE ACREDITARSE QUE EL OTORGANTE CUENTA CON LAS FACULTADES CORRESPONDIENTES Y CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA DESARROLLAR ESA ACTIVIDAD.- De conformidad con los artículos 43 y 67 de la Ley General de Población, los extranjeros están obligados a cumplir estrictamente con las condiciones que se le fijen en su permiso de internación, de forma que las autoridades nacionales, entre otras las federales, así como los notarios públicos, los que se sustituyan en estos o hagan sus veces y los corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que comprueben su legal estancia en el país y acrediten que su condición o calidad migratoria les permite realizar el acto o contrato de que se trate o en su defecto, que cuentan con el permiso especial de la Secretaria de Gobernación. Por tanto, cuando a nombre de una empresa, un extranjero otorga a un tercero poder general para pleitos y cobranzas, es necesario para tener por acreditada en el juicio la representación legal conferida a ese tercero, que en la escritura pública en donde se otorgó el poder se haga constar mediante la relación, inserción o agregado correspondiente, en términos del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que dicho extranjero tiene facultades para otorgarlo, que se encontraba legalmente en el país y que su calidad o condición migratoria le permitía ejercer esa actividad, o en su caso que contaba con el permiso especial de la Secretaría de Gobernación, de modo que no es suficiente para acreditar la supracitada representación que en el juicio se exhiba un poder en el que sólo se hizo referencia a que el extranjero tenía facultades para otorgar el poder y que acreditó su legal estancia en el país con su documento migratorio denominado FM3, pero sin hacer mayor precisión sobre la calidad o condición migratoria del compareciente y que permita corroborar que estaba autorizado por la Secretaría de Gobernación para desarrollar esa actividad.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 32137/08-17-07-5/2493/09-PL-09-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de mayo de 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. David Alejandro Alpide Tovar.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

Del contenido de dichos preceptos legales se desprende que es improcedente el juicio contencioso administrativo seguido ante este Tribunal, cuando el acto o resolución impugnado, no afecte el interés jurídico del demandante, o bien, en el caso de que la improcedencia devenga de alguna disposición de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, o bien de algún otra ley de carácter fiscal o administrativa.

Ahora bien, tomando en consideración que la autoridad demandada controvierte la representación del promovente del juicio que nos ocupa, y que por lo tanto, el mismo carece de interés jurídico para demandar la resolución impugnada, es por lo que esta Juzgadora considera necesario realizar el análisis del instrumento notarial 17,146, pasado ante la fe del Notario Público número 212 del Distrito Federal, mediante el cual dicho promovente pretendió justificar su representación en el presente juicio, el cual obra en copia certificada agregada a folios 58 a 69 de autos, y que a continuación se inserta:

[N.E. Se omiten imágenes]

Del instrumento notarial y su anexo antes insertos se desprende lo siguiente:

1.- Que del apéndice "A" del instrumento notarial 17,146, con el que se tuvo por acreditada la personalidad del promovente del presente juicio, se desprende que mediante la diversa escritura pública número 17,049 pasada ante la fe del Notario Público número 212 del Distrito Federal, el 3 de agosto de 2005, la sociedad denomina "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V." mediante su asamblea ordinaria de socios, otorgó al C. SYED MUKHTAR HAIDER, poder general con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para pleitos y cobranzas, en términos del primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal y de sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los Estados, facultándolo para a su vez otorgar poderes generales y/o especiales.

2.- Que con el poder conferido en el instrumento 17,049, antes descrito, el C. SYED MUKHTAR HAIDER, a nombre de la sociedad antes citada, otorgó a su vez a diversas personas, entre ellas al C. FRANCISCO JAVIER LEGARRETA MARTÍNEZ, poder general para pleitos y cobranzas, tan amplio como en derecho fuera necesario, en términos del artículo 2554 del Código Civil Federal y de los artículos correspondientes de los Códigos Civiles de los Estados; lo anterior conforme al instrumento notarial número 17,146, pasado ante la fe del Notario Público número 212 del Distrito Federal, el 18 de agosto de 2005.

3.- Que en el apartado de personalidad del instrumento 17,146 previamente reproducido, el Notario Público de referencia dio fe de que el C. SYED MUKHTAR HAIDER, se identificó como consta en la relación de identidad agregada en el apéndice "B" del multicitado instrumento, **(*apéndice que no obra agregado en autos*)**, que **el compareciente manifestó ser de nacionalidad paquistaní y que acreditó su legal estancia en el país con su Documento Migratorio de No Inmigrante forma FM-TRES número un millón setecientos dos mil setecientos once**.

Ahora bien, el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, precepto que establece los requisitos que deben reunir los instrumentos a través de los cuales se haga constar el poder que otorguen al efecto las sociedades mercantiles, establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

En efecto, de acuerdo con el dispositivo en comento, cuando una sociedad otorgue poder por conducto de persona distinta al administrador u órgano de administración de la sociedad, el notario deberá hacer constar en el instrumento correspondiente, **mediante la relación, inserción o el agregado** al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, **de los documentos que al efecto se hayan exhibido**, respecto de la denominación o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social, y el objeto de la misma, así como en adición a lo anterior, **debe dejarse acreditado que dicha persona tiene las facultades legales para ello**.

Así, del instrumento notarial 17,146, previamente reproducido en el presente fallo, y con el cual el C. FRANCISCO JAVIER LEGARRETA MARTÍNEZ, pretende acreditar su personalidad para promover el presente juicio, se desprende que se encuentra acreditado que el C. SYED MUKHTAR HAIDER, tiene facultades para otorgar poder para pleitos y cobranzas al citado promovente, a nombre de la empresa "BRISTOL-MYERS SQUIBB DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V."

Sin embargo del mismo instrumento notarial, **no se advierte que se haya debidamente relacionado, insertado o agregado al apéndice correspondiente**, en términos del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en comento, los documentos con los que se identificó el C. SYED MUKHTAR HAIDER, quien actuó a nombre y representación de la empresa BRISTOL MYERS SQUIBB DE MÉXICO, S.A. DE R.L. DE C.V., específicamente por lo que hace a su **documento migratorio de no Inmigrante forma FM-TRES número un millón setecientos dos mil setecientos once**, y con el cual dicha persona de nacionalidad paquistaní,

acreditó su legal estancia en nuestro país y que por lo tanto podía ejercer las facultades que le fueron conferidas por la sociedad antes precisada.

Efectivamente, en términos del artículo 67 de la Ley General de Población, los Notarios Públicos están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente acrediten su legal estancia en el país, y que en los casos que establezca el reglamento de dicha ley, que su condición y calidad migratoria les permite realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto el permiso especial de la Secretaría de Gobernación, lo anterior en los siguientes términos:

[N.E. Se omite transcripción]

En ese sentido, no es suficiente para tener por cumplida dicha obligación, el que en el caso concreto, el mencionado fedatario público haya referido en el instrumento notarial número 17,146, que el C. SYED MUKHTAR HAIDER, acreditó "*su legal estancia en el país con su Documento Migratorio de* ***No Inmigrante*** *forma FM-TRES número un millón setecientos dos mil setecientos once*" *(énfasis añadido)*, lo anterior toda vez que de dicha referencia no se desprende ningún otro elemento que acredite que efectivamente esa persona de nacionalidad extranjera, se encontraba legalmente en el país, como sería la autoridad que emitió dicho documento, la fecha y vigencia del mismo, **así como la calidad migratoria y características del permiso de internación en el país que le fue otorgado a esa persona**, porque lo único que puede desprenderse de lo referido en el instrumento notarial, es la calidad de no inmigrante de quien compareció ante el Notario Público, siendo que los datos anteriormente precisados resultan necesarios para corroborar que el otorgante efectivamente acreditó su legal estancia en nuestro país en términos del precepto legal en comento.

Se afirma lo anterior, toda vez que el artículo 43 de la Ley General de Población establece que **el extranjero que se interna al país se encuentra obligado a cumplir estrictamente con las condiciones de su permiso de internación**, así

como en lo dispuesto en las leyes aplicables. Para mayor precisión se transcribe el artículo antes referido:

[N.E. Se omite transcripción]

Por su parte, el artículo 42 de la Ley General de Población, establece las características y actividades que puede realizar el extranjero con calidad de no inmigrante, en los siguientes términos:

[N.E. Se omite transcripción]

Del precepto legal antes citado, se desprende que tratándose de los extranjeros no inmigrantes que con permiso de la Secretaría de Gobernación se internen en el país, se establecen diversas categorías y características para cada una de ellas, dependiendo de las actividades que pueden desarrollar los extranjeros en función de su calidad de no inmigrante.

Cabe resaltar que por ejemplo, tratándose del no inmigrante con características de "visitante", la actividad que éste puede desarrollar comprende el ejercicio de alguna actividad lucrativa o no, siempre que sea lícita y honesta, y con autorización para permanecer en el país hasta por un año; asimismo, se establece que entre otras, cuando el visitante se interne para ocupar cargos de confianza, o asistir a asambleas y sesiones de consejos de administración de empresas, se podrán conceder hasta cuatro prórrogas por igual temporalidad cada una, con entradas y salidas múltiples.

En ese orden de ideas, de la referencia hecha en el instrumento notarial en estudio, no se desprende cuál es la categoría o característica de la calidad migratoria que le fue autorizada al C. SYED MUKHTAR HAIDER, y que le permita ejercer la actividad concreta de representar a la empresa BRISTOL MYERS SQUIBB DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., delegando las facultades que le fueron conferidas para otorgar poderes a nombre de esa sociedad; es decir, no se desprende que la categoría o característica de la autorización de la Secretaría de Gobernación para

internarse en nuestro país, le permitiera realizar dichas actividades en el mismo, esto en términos de los artículos 42 y 43 de la Ley General de Población, previamente citados en el presente fallo.

En esta tesitura, si bien es cierto le asiste la razón a la autoridad en el sentido de que del instrumento notarial número 17,146 del 18 de agosto de 2005, no se desprende que la calidad migratoria del otorgante le permitiera desarrollar la actividad consistente en conferir poderes a nombre de la sociedad cuya representación en este juicio se combate, sin embargo, esa situación no acredita fehacientemente que la persona que otorgó el poder al C. FRANCISCO JAVIER LEGARRETA MARTÍNEZ, no estaba legalmente en el país, ni que su calidad y características migratorias no le permitían desarrollar esa actividad, y por consiguiente que el promovente del presente juicio no tiene personalidad para representar a la sociedad actora.

Lo anterior toda vez que existe un defecto o imprecisión en el instrumento notarial que fue exhibido en el presente juicio, máxime que esta Juzgadora advierte que el testimonio notarial en comento **obra en autos de forma incompleta**, toda vez que en el apartado relativo a la personalidad, en la fracción III del mismo, el notario público dio fe de que "*el compareciente se identificó como consta en la relación de identidad que se agrega al apéndice de este instrumento marcada con* ***la letra 'B'***..." (énfasis añadido), sin embargo en autos no obra el referido apéndice "B", sino únicamente el marcado con la letra "A" del mismo, en los términos previamente reproducidos en el presente fallo.

Por lo anterior, se pude concluir que con el instrumento notarial que obra en autos, no resulta factible determinar si como lo alega la autoridad, el extranjero de nacionalidad paquistaní, el C. SYED MUKHTAR HAIDER al momento de otorgar el poder a nombre de la sociedad actora, se encontraba legalmente en el país y si tenía o no la calidad y características migratorias para realizar dicha actividad, y por consiguiente, no se puede corroborar si el C. FRANCISCO JAVIER LEGARRETA MARTÍNEZ, al momento de presentar la demanda, contaba con facultades legales para representar a esa empresa; por lo que esta Juzgadora estima que se encuentra

impedida para pronunciarse respecto de la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad en su contestación de la demanda.

Sin embargo, es cierto que no se puede reconocer la personalidad del C. FRANCISCO JAVIER LEGARRETA MARTÍNEZ para promover el presente juicio en representación de la empresa BRISTOL MYERS SQUIBB DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., con la copia certificada que obra en autos de la escritura 17,146 de fecha 18 de agosto de 2005, pasada ante la fe del Licenciado Francisco I. Hugues Vélez, titular de la Notaria número doscientos doce del Distrito Federal, porque se reitera, **no se advierte que en ese instrumento el citado Notario Público haya pormenorizado el documento con el cual el compareciente acreditó su legal estancia en nuestro país y del cual se desprenda además, la calidad migratoria con la que actuaba el mismo**.

[...]

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5 y 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 1º de la citada Ley, y 18, fracción XII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- De la causal de improcedencia y sobreseimiento formulada por la autoridad demandada se advierte la existencia de violaciones sustanciales del procedimiento; en consecuencia,

II.- Devuélvanse los autos del juicio 32137/08-17-07-5 a la Séptima Sala Regional Metropolitana, para los efectos precisados en el presente fallo.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del diecinueve de mayo de dos mil diez, por mayoría de 8 votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas y Francisco Cuevas Godínez, y un voto en contra del Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, quien se reservó su derecho para formular voto particular. Estuvieron ausentes los Magistrados Alejandro Sánchez Hernández y Luis Carballo Balvanera.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, cuya ponencia se aprobó en sus términos.

Se elaboró el engrose el día quince de junio de dos mil diez, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción V y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY ADUANERA

VI-P-SS-356

IMPORTACIÓN TEMPORAL DE BIENES REALIZADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.- El artículo 106, fracción II, inciso a) de la Ley Aduanera, establece que por régimen de importación temporal, se entiende la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo estado en un plazo de seis meses, tratándose de importaciones que realizadas por residentes en el extranjero siempre que, sean utilizados directamente por ellos o por personas con las que tengan relación laboral, excepto tratándose de vehículos. Para la realización de las importaciones previstas en el precepto citado, se deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 136 del Reglamento de la Ley Aduanera, como son: I. Que el pedimento de importación señalará el nombre de la persona residente en el extranjero y el de una persona residente en territorio nacional. Además, se deberá acompañar a dicho pedimento un escrito en el que esta última, asuma la responsabilidad solidaria a que se refiere la fracción VIII del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, por los créditos fiscales que lleguen a derivarse por no retornar las mercancías al extranjero dentro del plazo establecido en la Ley; II. Los residentes en el extranjero deberán tener relación laboral con quien utilizará los bienes importados temporalmente, salvo que sean utilizados por ellos mismos, y III. Los residentes en el extranjero o los responsables solidarios, con anterioridad a que presenten el pedimento, darán aviso por escrito a la autoridad aduanera que corresponda a la localidad en la cual se vayan a utilizar los bienes que se importen. En consecuencia, si el actor aceptó expresamente actuar como responsable solidario de la empresa extranjera importadora, estaba obligada a tener en su poder la documentación correspondiente con la que comprobara la legal estancia de la mercancía de procedencia extranjera que se encuentre en territorio nacional.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 439/09-02-01-2/2808/09-PL-04-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-

tiva, en sesión de 19 de mayo de 2010, por unanimidad de 8 votos a favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Rossina Montandon Spinoso.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

SÉPTIMO.- [...]

Analizados los argumentos vertidos por la actora, esta Juzgadora considera que los mismos son **INFUNDADOS**, pues los artículos 26, fracción VIII del Código Fiscal de la Federación, 52, 53 y 106, fracción II inciso a) de la Ley Aduanera en relación con el artículo 136 de su Reglamento, establecen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De los preceptos transcritos se desprende que son responsables solidarios con los contribuyentes quienes manifiesten su voluntad de asumir dicha responsabilidad.

Las personas que introduzcan mercancías al territorio nacional están obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior, entendiéndose que se presume que los tenedores, los remitentes o destinatarios de la importación son quienes introducen la mercancía de procedencia extranjera al país.

Son responsables solidarios en el pago de los impuestos al comercio exterior, quienes introduzcan mercancía de procedencia extranjera al país, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.

Los residentes en el extranjero pueden llevar a cabo la importación temporal hasta por seis meses de mercancía de procedencia extranjera, asentando en el pedimento de importación el nombre de una persona residente en el territorio nacional que actuará como responsable solidario, expresando su voluntad de actuar como tal.

En ese tenor, de los pedimentos de importación 3875 7000509 y 3875 7008972 materia de la visita domiciliaria, visibles a fojas 64 y 69 del expediente administrativo aportado por la autoridad, se aprecia en el campo de "observaciones" que se asentó lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De la anterior transcripción se desprende que en los pedimentos de importación citados la parte actora aceptó expresamente, asumir la calidad de responsable solidario de la empresa importadora, por lo que resulta claro que la autoridad actuó conforme a derecho, al llevar a cabo la visita domiciliaria a la actora en su carácter de responsable solidario respecto de las importaciones amparadas con los pedimentos de importación 3875 7000509 y 3875 7008972.

En ese sentido, no le asiste la razón a la actora cuando pretende que por no haber importado los bienes de procedencia extranjera, no tuviera que responder por su legal estancia en el país, pues en la orden de visita domiciliaria la autoridad reconoce que la importación la llevó a cabo la empresa extranjera Manuel Huerta Trucking, Inc., razón por la cual la autoridad precisó que la visita domiciliaria se llevaba a cabo a la actora en su calidad de responsable solidario del importador.

Así las cosas, la autoridad no le está estableciendo a la actora obligaciones que no sean propias de ella, en su calidad de responsable solidario, pues como se advirtió anteriormente, la actora aceptó expresamente asumir dicho carácter, lo que implica que al igual que la responsable directa, en el caso la empresa importadora Manuel Huerta Trucking, Inc., deben tener en su poder la documentación correspondiente que compruebe la legal estancia de la mercancía de procedencia extranjera que

se encuentre en territorio nacional, aun cuando no esté sujeta al pago de las contribuciones de comercio exterior por encontrarse en el supuesto previsto en el artículo 106, fracción II inciso a) de la Ley Aduanera, es decir, el supuesto de exención previsto en dicho precepto no exime de la obligación de acreditar la legal estancia y tenencia de mercancía extranjera en territorio nacional.

Ahora bien, resulta igualmente infundado el argumento de la actora en el sentido de que la autoridad debió requerir primero al responsable directo, en el caso el importador Manuel Huerta Trucking, Inc., para que acreditara haber retornado las mercancías importadas temporalmente antes de determinar la responsabilidad solidaria, pues primeramente, como se señaló, la responsabilidad solidaria se encuentra debidamente acreditada con el reconocimiento expreso de la actora; en segundo lugar, no existe precepto legal alguno que obligue a la autoridad a exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales primero al responsable directo antes que al responsable solidario.

Lo anterior es así, pues la figura de la responsabilidad solidaria implica que el acreedor puede exigir indistintamente al sujeto directo u al obligado solidario el cumplimiento de la obligación, en consecuencia, contrario a lo señalado por la actora, la autoridad no tenía la obligación de fundar y motivar porque no fiscalizó primero al responsable directo, en el caso la empresa importadora Manuel Huerta Trucking, Inc., sino que únicamente tenía la obligación de citar los preceptos legales que sustentaran su facultad para llevar a cabo la visita domiciliaria a la empresa actora en su calidad de responsable solidario, lo que en la especie aconteció con la invocación del artículo 10, fracción I, en relación con el artículo 9, fracción XXXVII y último párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, como quedó precisado en el Considerando Tercero del presente fallo.

[...]

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en rela-

ción con los numerales 14, fracciones I, XII y XIII y 18, fracción XV, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de diciembre de 2007, se resuelve:

I.- La parte actora no probó los extremos de su acción, en consecuencia

II.- Se reconoce la validez de las resoluciones impugnada y recurrida, descritas en el resultando primero del presente fallo.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de mayo de 2010, por unanimidad de 8 votos a favor de los Magistrados Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas y Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez. Estuvieron ausentes los Magistrados Alejandro Sánchez Hernández, Luis Carballo Balvanera y Francisco Cuevas Godínez.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el 3 de junio de 2010, y con fundamento en los artículos 30, fracción V y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos que da fe.

COMERCIO EXTERIOR

VI-P-SS-357

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA INEXACTA DE MERCANCÍA IMPORTADA BAJO EL TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL DE UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.- CORRESPONDE AL AGENTE ADUANAL O AL IMPORTADOR DESVIRTUAR DICHA INEXACTITUD CON LAS PRUEBAS IDÓNEAS CORRESPONDIENTES.- En aquellos casos en que la autoridad aduanera determine únicamente la inexacta clasificación arancelaria de la mercancía importada bajo trato preferencial arancelario, siempre que la descripción comercial de las mercancías declaradas en el pedimento de importación corresponda con las mercancías importadas, el Agente Aduanal o el importador podrán desvirtuar tal infracción con las pruebas idóneas correspondientes, como son: el pedimento de rectificación en el que conste la fracción arancelaria determinada por la autoridad; el Certificado de Origen de dicha mercancía, para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias; y las facturas que amparan el origen de la mercancía importada, señaladas en el pedimento de importación y/o en el pedimento de rectificación. Por lo que si una vez adminiculadas tales pruebas se desvirtúa la inexacta clasificación arancelaria, procede otorgarles valor probatorio pleno.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5671/09-17-11-2/3099/09-PL-03-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de mayo de 2010, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro Godínez.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de septiembre de 2010)

COMERCIO EXTERIOR

VI-P-SS-358

PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN Y CERTIFICADO DE ORIGEN. PROCEDE LA RECTIFICACIÓN DEL PRIMERO Y SE CONSIDERA VÁLIDO EL SEGUNDO, SIEMPRE QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA CORRESPONDA CON LAS IMPORTADAS.- De conformidad con lo dispuesto en la regla 2.12.2, letra B), numeral 1, de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2008, cuando se importe mercancía bajo trato arancelario preferencial y se ampare con un certificado de origen o documento que acredite el origen, y con motivo del reconocimiento aduanero la autoridad determine una clasificación arancelaria diversa a la declarada en el pedimento respectivo, el importador tiene un plazo de 15 días para presentar su rectificación con la fracción arancelaria asignada por la demandada, siempre que la descripción de las mercancías declaradas en el pedimento corresponda con las importadas. La misma regla refiere que se considerará válido el certificado de origen o documento respectivo, aún cuando la clasificación arancelaria que contenga sea distinta a la determinada por la autoridad aduanera, siempre que la descripción de las mercancías señaladas en tales documentos permita la identificación plena con las mercancías presentadas a despacho. En este contexto, para efectos de que proceda la rectificación del pedimento de importación y se considere válido el certificado de origen que lo acompaña, se requiere que se señale la fracción arancelaria asignada por la demandada y exista correspondencia entre la mercancía que se importó y aquella que se declaró en el pedimento, de donde resulta procedente otorgar el trato arancelario preferencial solicitado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5671/09-17-11-2/3099/09-PL-03-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de mayo de 2010, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro Godínez.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

En opinión de este Cuerpo Colegiado el agravio de la actora es **fundado y suficiente** para declarar la nulidad de la resolución impugnada, de conformidad con las siguientes consideraciones de derecho.

En primer término, es conveniente conocer los antecedentes de los que deriva la resolución impugnada, la cual se encuentra a fojas 15 del expediente en que se actúa, y a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 46 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por ser una documental pública.

1.- La hoy actora, a través del agente aduanal Daniel del Río García, con fecha 29 de julio de 2008, presentó ante la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el pedimento de importación definitiva número 08 47 3695 8001402, el cual obra a fojas 107 de autos, mismo al que le correspondió el reconocimiento aduanero.

2.- Derivado del examen de las mercancías y de la revisión documental del pedimento referido se detectó que en la secuencia 006 se declaró la cantidad de 293 piezas de la mercancía descrita como: “blusas presentación de tejido de no punto, composición 93% viscosa 7% elastano”, como país de origen Italia, clasificadas en la fracción arancelaria 6206.40.99; sin embargo, al momento de la revisión física se detectó que de las 293 piezas declaradas, 113 piezas de blusas modelo 82M20810 tienen una presentación de tejido de punto, composición 93% viscosa 7% elastano, con un elástico que ciñe la parte baja de la prenda, por lo que única y exclusivamente respecto de esas 113 piezas la fracción arancelaria declarada por el agente aduanal es

incorrecta, ya que tiene una fracción arancelaria más específica que es la 6114.30.99, por lo que se configuró una inexacta clasificación arancelaria.

3.- Con fecha 29 de julio de 2008, la autoridad procedió a notificar al dependiente autorizado de la hoy actora, el acta circunstanciada de hechos por omisión de contribuciones número 800-36-2008-RECHS/02037, en la que se hace constar que se cometió la infracción consistente en una inexacta clasificación arancelaria, y se otorgó a la hoy actora el plazo de 10 días hábiles para que ofreciera pruebas de su parte y alegara lo que a su interés convenía.

4.- Con fecha 11 de agosto de 2008, el agente aduanal Daniel del Río García, presentó escrito de pruebas y alegatos, el cual se encuentra a fojas 59 del expediente en que se actúa, en el que se advierte que aportó como pruebas, entre otros documentos, copia simple del Certificado de Origen EUR. 1 VEN. L 694055, que se presentó adjunto con el pedimento de importación 3695 8001402; original del pedimento de rectificación número 08 47 3695 8001475 clave R1; y original del formulario múltiple de pago para comercio exterior pagado por la cantidad de $794.00.

5.- Las mencionadas probanzas fueron analizadas y valoradas por la autoridad demandada, según se desprende de las fojas 6 y 7 de la resolución impugnada, la cual consideró que las mismas eran insuficientes para desvirtuar la infracción señalada, pues sostiene que era necesaria la presentación de la documentación que acredite la legal importación de la mercancía, de conformidad con lo establecido en la Regla 2.12.2 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior y el artículo 36, fracción I, en relación con el artículo 89, ambos de la Ley Aduanera. Que, además, del certificado de origen se desprendía que la mercancía mencionada en él, corresponde a una fracción arancelaria distinta y errónea y el pedimento de rectificación carece de sustento, toda vez que se anexó la secuencia 007, sin acreditar la legal estancia en el país de la mercancía descrita en dicha secuencia, por lo que persistía la omisión de contribuciones y se tenía por pagada la infracción consistente en un dato general inexacto de conformidad con el artículo 184, fracción III de la Ley Aduanera.

De acuerdo con lo anterior, con fecha 25 de noviembre de 2008, la autoridad demandada emitió la resolución contenida en el oficio N° 800-36-00-01-04-2008-S-228/08, la cual constituye la resolución impugnada en este juicio, misma que señala en la parte que nos interesa lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De acuerdo con la anterior transcripción, queda claro que la autoridad demandada consideró que aún cuando dentro del plazo otorgado en el Acta Circunstanciada de hechos el agente aduanal presentó pruebas para desvirtuar la inexacta clasificación arancelaria, las mismas fueron insuficientes puesto que para dichos efectos era necesario la presentación de la documentación que acredite la legal importación de la mercancía, de conformidad con la Regla 2.12.2 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior y el artículo 36, fracción I de la Ley Aduanera, y por lo que respecta al Certificado de origen EUR. 1 Número L 694055, el mismo se tenía como una prueba que carecía de elementos, ya que contiene una mercancía que tiene una fracción arancelaria distinta y errónea de la determinada y, por lo que concierne al Pedimento de Rectificación N° 08 47 3695 8001475, carecía de sustento pues se (sic) anexó la secuencia 007, sin acreditar la legal estancia en el país de la mercancía descrita en dicha secuencia.

Ahora bien, la actora como se señaló anteriormente, sustenta su argumento en el hecho de que le era aplicable el beneficio previsto en la citada Regla 2.12.2, numeral B, inciso 1, de las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior, vigente para 2008, la cual establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Contrario a lo resuelto por la autoridad demandada, esta Juzgadora considera que el beneficio previsto en dicha regla sí se actualizó a favor de la hoy actora, ya que si como consta en la transcrita resolución impugnada, esa actora declaró en el pedimento de importación N° 08 47 3695 8001402, **293** piezas de **blusas** presentación de

tejido de no punto, composición 93% viscosa y 7% elastano, como país de origen Italia, bajo la fracción arancelaria 6206.40.99, pero la autoridad detectó que por **113 piezas de ese total**, dicha clasificación no era la correcta sino la 6114.30.99, pues se trataba de **blusas** presentación de tejido de punto, composición 93% viscosas y 7% elastano, con un elástico que ciñe la parte baja de la prenda, es claro que la hoy actora conforme a dicha regla tenía el derecho de presentar la rectificación a dicho pedimento asentando la fracción arancelaria que correspondía a esas 113 blusas, siempre que la descripción comercial de las mercancías declaradas en el pedimento corresponda con las mercancías importadas.

En efecto, la actora válidamente podía presentar una rectificación al pedimento de importación, pues la descripción de las mercancías declaradas en la secuencia 006 del pedimento de importación N° 08 47 3695 8001402, era la de blusas y la autoridad demandada no niega tal situación, pues lo único que señala en la resolución impugnada es que **113 piezas de blusas de las 293 piezas de blusas** que se importaron tiene una fracción arancelaria más específica, que es la 6114.30.99.

En tal virtud, al cumplir con la condición establecida en la citada Regla 2.12.2, la actora demuestra que ante la propia autoridad demandada, dentro del término que se le concedió en el Acta Circunstanciada de Hechos y Omisiones, presentó el Pedimento de Rectificación N° 08 47 3695 8001475, clave R1, el cual se encuentra a fojas 54 de autos, mismo que se digitaliza a continuación:

[N.E. Se omiten imágenes]

De tal pedimento se desprende, respecto de la secuencia 007, que la empresa actora declaró **113 piezas de blusas**, bajo la fracción arancelaria **61143099**, es decir, la determinada por la autoridad demandada en el Acta Circunstanciada de Hechos y Omisiones, por lo que a tal pedimento se le debió otorgar pleno valor probatorio, ya que contrario a lo resuelto por la autoridad demandada, esa secuencia 007 se refiere a esas 113 piezas de blusas que debían estar bajo dicha fracción arancelaria determinada por la autoridad demandada, es decir, no se trata de una

mercancía diversa o diferente a la que se importó el día 29 de julio de 2008, con el pedimento de importación número 08 47 3695 8001402, y si se agregó dicha secuencia 007, como lo sostiene la actora, fue para separar las 113 blusas de presentación tejido de punto, que tenían una fracción arancelaria diferente a las 180 que no fueron observadas por la autoridad demandada.

Además, también es infundado que la autoridad demandada haya señalado que ese pedimento de rectificación no se podía tener como prueba porque la actora no acredita la legal estancia en el país de la mercancía señalada en esa secuencia 007, pues si se trata de las 113 piezas de blusas que se introdujeron al país con el referido pedimento de importación número 08 47 3695 8001402, al cual se le adjuntó el Certificado de Origen EUR.1 N° L 694055, que fue el mismo Certificado de Origen que se adjuntó al Pedimento de rectificación N° 08 47 3695 8001475, es claro que a través de dicho certificado de origen la actora demostró que la mercancía observada (113 piezas de blusas) provenía de Italia, el cual se digitaliza a continuación:

[N.E. Se omiten imágenes]

Dicho certificado de origen, se aclara, que aun cuando no se encuentra traducido al idioma español, sí permite apreciar a esta Juzgadora el origen de la mercancía importada, el cual es Italia. En esos términos, es claro que la actora demostró con la documentación idónea el origen de esa mercancía, puesto que además del certificado de origen aludido, exhibe como prueba en este juicio, las facturas señalas en el citado pedimento de rectificación antes digitalizado, y en concreto, la factura que ampara el origen de las 293 blusas importadas, es la número E/136, de fecha 16 de julio de 2008, la cual se encuentra a fojas 115 de autos, en la que se advierte que tienen como origen Italia, factura que inclusive se ofreció también como prueba en el escrito de 11 de agosto de 2008, presentado por el agente aduanal dentro del plazo establecido en el artículo 152 de la Ley Aduanera, por lo que, contrario a lo sostenido por la autoridad demandada, cumplió con el artículo 36, fracción I de la Ley Aduanera, que dispone lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Conforme a dicho precepto legal, quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana, un pedimento en la forma oficial aprobada por la autoridad fiscal, la factura comercial y el documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, entre otros, y toda vez que dichos documentos se adjuntaron tanto al pedimento de importación N° 08 47 3695 8001402, como al pedimento de rectificación N° 08 47 3695 8001475, es claro que la actora cumplió tanto con ese artículo 36 de la Ley Aduanera, como con la transcrita Regla 2.12.2, la cual, además establece en la parte que nos interesa lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Por tanto, aún cuando la actora haya anexado a su Pedimento de Rectificación N° 08 47 3695 8001475, el mismo Certificado de Origen EUR. 1 N° L 694055, que presentó al momento de realizar la importación de la mercancía, el cual teniéndose a la vista al momento de formular el presente fallo (folio 45 de autos), permite observar a esta Juzgadora que contiene la fracción arancelaria 6206 y no la determinada para las 113 piezas de blusas por la demandada que es la 6114.30.99, lo cierto es que dicho Certificado de origen sí tiene valor probatorio, pues la misma Regla 2.12.2 prevé en el párrafo antes transcrito, la posibilidad de presentar el mismo certificado que contenga la fracción arancelaria incorrecta, siempre y cuando la descripción de la mercancía señalada en él, permita la identificación plena con las mercancías presentadas a despacho, y en el caso, la autoridad no rechaza ese certificado porque no haya esa coincidencia, sino porque es el mismo documento que contiene la fracción arancelaria errónea.

Esto es, la autoridad demandada deja de aplicar en perjuicio de la actora lo previsto en la citada Regla, cuando la actora demuestra haber cumplido con lo exigido en ella, para efectos de demostrar que le es aplicable el trato arancelario preferencial, puesto que, se reitera, el hecho de no tomar en cuenta el pedimento de rectificación y el certificado de origen, se sustenta única y exclusivamente en que respecto a

la secuencia 007 que contiene 113 piezas de blusas, no se acredita su legal estancia en el país y que el citado certificado contiene la fracción arancelaria errónea.

Sin embargo, ha quedado antes resuelto en este fallo, que la actora demuestra que las 293 piezas de blusa que importó estaban amparadas con el Certificado de Origen EUR. 1 Número L 694055 y que respecto de las 113 piezas de ese total de 293, respecto de las cuales la autoridad demandada determinó que existía una inexacta clasificación arancelaria, la misma fue corregida dentro del plazo y en los términos que establece la citada Regla 2.12.2, por lo que los documentos que ofreció como prueba dicha actora, desvirtúan la señalada infracción.

Resultan aplicables, a contrario sensu, las siguientes tesis emitidas por este Órgano Jurisdiccional, publicadas en la Revista de este Tribunal. Sexta Época, Año II, números 15, y 24, de Marzo y Diciembre de 2009, páginas 213 y 119, respectivamente, que son del tenor siguiente:

> "**VI-P-SS-116**
> "**PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN Y CERTIFICADO DE ORIGEN. PROCEDE LA RECTIFICACIÓN DEL PRIMERO Y SE CONSIDERA VÁLIDO EL SEGUNDO, SIEMPRE QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA CORRESPONDA CON LAS IMPORTADAS.**" [N.E. Se omite transcripción]
>
> "**VI-P-SS-221**
> "**RECTIFICACIÓN DE PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN.- SU PROCEDENCIA EN TÉRMINOS DE LA REGLA 2.12.2 DE LAS REGLAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR DE 2004.**" [N.E. Se omite transcripción]

Asimismo, a fojas 67 de autos consta el formulario múltiple de pago por el que dicha actora acredita que cubrió el monto de la multa contemplada en el artículo 185

fracción II de la Ley Aduanera, ya que se cometió la infracción prevista en el artículo 184, fracción III de la misma ley, consistente en presentar los documentos que amparan las mercancías importadas, con datos inexactos, y el pago de dicha multa, es plenamente aceptado por la autoridad demandada en la resolución impugnada.

En tal virtud, se considera que procede otorgar el trato arancelario preferencial a la hoy actora, conforme al Tratado de Libre Comercio celebrado entre México y la Comunidad Europea, ya que se reitera, los motivos y razones jurídicas que externó en el acto impugnado la autoridad demandada, fueron desvirtuadas debidamente tanto por la actora como por el agente aduanal, al que se le determinó una responsabilidad solidaria en la resolución impugnada, con los documentos que ofrecieron como prueba en la misma sede administrativa y ante este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Resulta aplicable el siguiente precedente emitido por este Órgano Jurisdiccional:

"**CLASIFICACIÓN ARANCELARIA INEXACTA DE MERCANCÍA DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN IMPORTADA BAJO EL TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL DE UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.- CORRESPONDE AL AGENTE ADUANAL Y AL IMPORTADOR DESVIRTUAR DICHA INEXACTITUD CON LAS PRUEBAS IDÓNEAS CORRESPONDIENTES.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en la R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 68. Agosto 2006. Tesis: V-P-2aS-494. pág. 37]

Por tanto, dado que la empresa actora y el agente aduanal, en su carácter de responsable solidario, logran desvirtuar la infracción por la que se negó el trato arancelario preferencial y se determinó una omisión de impuestos, procede declarar la nulidad de la resolución impugnada, en virtud de que los hechos que la motivaron se apreciaron en forma equivocada, de conformidad con el artículo 51 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de diciembre de 2005, se resuelve:

I.- La parte actora acreditó sus pretensiones; en consecuencia:

II.- Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, misma que quedó debidamente precisada en el Resultando Primero de este fallo, por las razones expuestas en esta sentencia.

III.- Notifíquese.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de **diecinueve de mayo de dos mil diez**, por unanimidad de nueve votos de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel L. Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas y Francisco Cuevas Godínez. Estuvieron ausentes los CC. Magistrados Alejandro Sánchez Hernández y Luis Carballo Balvanera.

Fue Ponente en el presente asunto, el Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, cuya ponencia se aprobó.

Se formuló el presente engrose el **catorce de junio de dos mil diez** y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción V y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firman el C. Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos que da fe.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-SS-359

JUICIO DE NULIDAD CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.- COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR PARA REVISAR DE OFICIO LAS VIOLACIONES SUBSTANCIALES AL PROCEDIMIENTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 48, fracción I, inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Pleno de la Sala Superior es competente para pronunciar el fallo en los juicios en los que para su resolución sea necesario establecer, por primera vez, la interpretación directa de una ley, hasta fijar jurisprudencia, por lo que las Salas Regionales, en estos casos, serán competentes para efectuar sólo la instrucción del expediente. Ahora bien, a fin de poder dictar el fallo, el Pleno de la Sala Superior debe revisar todas las actuaciones de la instrucción y en caso de detectar una violación substancial al procedimiento en esa etapa, debe estudiarla de oficio para respetar el debido equilibrio procesal y la legalidad de la resolución que se emita.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4425/06-17-11-8/189/07-PL-08-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de mayo de 2010, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Manuel Ángel Sánchez.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de mayo de 2010)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-SS-360

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1829/08-EPI-01-1/40/10-PL-03-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-

tiva, en sesión de 2 de junio de 2010, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Elizabeth Ortiz Guzmán. (Tesis aprobada en sesión de 2 de junio de 2010)

PRECEDENTE:

VI-P-SS-80
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 27990/06-17-01-6/535/08-PL-03-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de junio de 2008, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Enrique Orozco Moles. (Tesis aprobada en sesión de 10 de septiembre de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 12. Diciembre 2008. p. 72

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-361

MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO.- SI AL TRADUCIRSE NO SON DESCRIPTIVAS DE LOS PRODUCTOS QUE PRETENDE PROTEGER DEBEN REGISTRARSE.- El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece diversos supuestos cuando la marca no es registrable, la fracción IV, previene las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción; la fracción VI indica la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. Ahora bien, si del análisis que efectúa este Tribunal del conjunto de los elementos de una marca incluyendo su traducción advierte que no es descriptiva de los servicios que pretende proteger, es decir, no son signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, ni tampoco evoca conexión directa con el producto a proteger, es evidente que dicha marca sí es registrable, siempre y cuando no exista algún impedimento legal para ello.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 606/09-EPI-01-2/77/10-PL-04-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de mayo de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de mayo de 2010)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-SS-362

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1828/08-EPI-01-5/659/10-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de agosto de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de agosto de 2010)

PRECEDENTES:

VI-P-SS-241
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 917/08-EPI-01-4/772/09-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de agosto de 2009, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 7

VI-P-SS-326
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2407/08-EPI-01-2/2725/09-PL-01-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de mayo de 2010, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de mayo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 111

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

VI-P-SS-363

AGRAVIOS INOPERANTES.- TIENEN ESTA NATURALEZA AQUELLOS QUE NO SE REFIEREN A LOS RAZONAMIENTOS FUNDAMENTALES DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- Los conceptos de anulación hechos valer por la parte actora, en su escrito de demanda, resultan inoperantes, si no están orientados a controvertir los razonamientos esenciales que dan la motivación y fundamentación de la resolución impugnada.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 9173/07-17-06-2/2885/09-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de mayo de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Beatriz Rodríguez Figueroa.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de mayo de 2010)

PRECEDENTES:

V-P-SS-467
Juicio No. 14098/01-17-05-9/763/02-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 8 de octubre de 2003, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Martín García Lizama.- Engrose: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de octubre de 2003)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 42. Junio 2004. p. 106
Fe de Erratas. R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 45. Septiembre 2004. p. 424

VI-P-SS-158

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 24947/06-17-01-3/2081/08-PL-08-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de abril de 2009, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.

(Tesis aprobada en sesión de 15 de abril de 2009)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 18. Junio 2009. p. 315

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-364

DENOMINACIÓN DESCRIPTIVA NO REGISTRABLE COMO MARCA.- CASO EN EL QUE NO ESTÁ FORMADA DE PALABRAS QUE SIRVEN EN EL COMERCIO PARA DESIGNAR EL DESTINO DE LOS PRODUCTOS QUE PRETENDEN PROTEGERSE.- El artículo 90, fracciones IV y VI, de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone que no serán registrables como marca, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, y que quedan incluidas en dicho supuesto las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción; y que tampoco será registrable la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. Por tanto, si por una parte, la denominación "PLUG AND PUMP" que pretende registrarse como marca, se traduce del inglés al español como "conectar o enchufar e inflar", según señala la autoridad, o bien, "enchufa y bombea", como lo manifiesta la propia actora en su agravio, y por otra parte, los productos de la clase 12 Internacional que se pretenden proteger con dicha denominación consisten en "conectores de válvula universal para neumáticos de vehículos y/o productos en los cuales los conectores de válvula universal son usados", luego entonces la denominación mencionada, considerando el conjunto de sus características, es descriptiva de los productos que pretenden protegerse como marca, en tanto que está formada de palabras que sirven en el comercio para designar el destino de dichos productos, esto es, "conectar o enchufar e inflar", o bien, "enchufa y bombea", ya que se entiende que la denominación indica que al conectar o enchufar la válvula universal, se inflan o bombean neumáticos de vehículos o productos en los cuales los conectores de válvula universal son usados, sin que esa característica permita distinguir los productos que pretenden protegerse como marca, de otros de su misma especie o clase en el mercado, con lo que se incumple el requisito de distintividad a que se refiere el artículo 88

de la Ley de la Propiedad Industrial, conforme al cual se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, preceptos los anteriormente referidos que coinciden con lo dispuesto por el artículo 6 quinquies, apartado B, inciso ii), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que establece que las marcas de fábrica o de comercio no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas, salvo que estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usadas en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 139/08-EPI-01-2/2758/09-PL-06-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de junio de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

CUARTO.- [...]

Este Órgano Jurisdiccional estima **INFUNDADOS** los conceptos de impugnación sujeto a estudio, al tenor de las siguientes consideraciones.

La resolución impugnada, visible en autos a fojas 22 a 28, consiste en lo siguiente:

[N.E. Se omiten imágenes]

De lo reproducido con antelación, se desprende que la autoridad demandada, al resolver la solicitud de registro de marca de la actora, consideró lo siguiente:

-Que la denominación propuesta traducida al idioma español, resulta ser indicativa de una característica de los productos a proteger, es decir, no es considerada como un signo visible capaz de distinguir o identificar los productos pretendidos al amparo, frente a otros de su misma clase o especie, por ser carente de distintividad y descriptiva de los productos que pretende distinguir el solicitante, de acuerdo a lo establecido en los artículos 88, 89 y 90, fracciones IV y VI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

-Que la traducción al español de la denominación "PLUG AND PUMP" significa conectar o enchufar e inflar (diccionario en línea www.elmundo.es), por lo que al encontrarse amparando conectores de válvula universal para neumáticos de vehículos o productos en los cuales los conectores de válvula universal son usados, se entiende que la denominación indica que al conectar la válvula se pueden inflar neumáticos o cualquier otro tipo de artículo inflable; tal y como lo argumenta el apoderado legal en el escrito de fecha 1 de noviembre de 2001, en el cual dice que los conectores de válvula universal son conectados directamente a la válvula de la llanta que va ser inflada, por lo que se puede afirmar que se trata de una marca que resulta indicativa de las características de los productos que se pretenden amparar.

-Que considerando el conjunto de características del signo propuesto a registro, el mismo resulta ser carente de distintividad, en virtud de que la denominación propuesta a registro "PLUG AND PUMP" en su traducción al castellano resulta ser indicativa de las características del producto que se pretende distinguir, ya que atiende a la idea de un producto que se conecta o enchufa para inflar diferentes tipos de artículos inflables, sin que ésta característica permita distinguir un producto de otro.

-Que la moción de la no registrabilidad marcaria, cuando la denominación propuesta es descriptiva de las características de los productos que se pretenden amparar, es por ello que dicha denominación resulta ser carente de toda distintividad,

para los productos a los que se desea aplicar, puesto que si se registrase como marca, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, estaría convalidando que un particular se apropiara, para su uso exclusivo, de una denominación que describe una de las características de los productos, creando así una situación de ventaja en la que resultarían perjudicados los demás productores o prestadores de los mismos, pues se verían impedidos de hacer uso de dicho término, dado el privilegio injustificado que se otorgaría.

-Que el registro otorgado en los países de Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Japón y Taiwán, no obliga de ninguna manera a la autoridad a otorgarle el registro de una marca que a todas luces de la legislación nacional encuadra en los supuestos prohibitivos de la ley de la materia, por lo que si se otorgara el registro en cuestión, se contravendría a lo estipulado en la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, al respecto cabe señalar en primer término por parte de este Pleno, que el artículo 90, fracciones IV y VI, de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone literalmente lo que sigue:

[N.E. Se omite transcripción]

De la interpretación gramatical y armónica del precepto antes transcrito se desprende que contempla diversos supuestos que no son registrables como marca, dentro de los que se encuentran las denominaciones y palabras, así como su traducción a otros idiomas, que sean descriptivas o indicativas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, y que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o época de producción.

En este orden de ideas, si por una parte la traducción al español de la denominación "**PLUG AND PUMP**" significa "***conectar o enchufar e inflar***", según señala la autoridad, o bien, "***enchufa y bombea***", como lo manifiesta la propia actora en su agravio, y por otra, los productos de la clase 12 Internacional que se pretenden

proteger con dicho signo consisten en "**CONECTORES DE VÁLVULA UNIVERSAL PARA NEUMÁTICOS DE VEHÍCULOS Y/O PRODUCTOS EN LOS CUALES LOS CONECTORES DE VÁLVULA UNIVERSAL SON USADOS**", como se advierte de la respectiva solicitud de registro de marca visible en autos a foja 29, luego entonces la denominación mencionada ("**PLUG AND PUMP**"), considerando el conjunto de sus características, es descriptiva de los productos que pretenden protegerse, **ya que está formada de palabras descriptivas o indicativas del destino de dichos productos**, esto es, "***conectar o enchufar e inflar***", o bien, "***enchufa y bombea***".

Así pues, la denominación propuesta, traducida al idioma español, resulta ser indicativa de característica o cualidad esencial de los productos, como lo es su destino, es decir, no puede ser considerada como un signo visible capaz de distinguir o identificar los productos de que se trata frente a otros de su misma clase o especie, de acuerdo a lo establecido en los artículos 88, 89 y 90, fracciones IV y VI, de la Ley de la Propiedad Industrial, por carecer de distintividad.

En efecto, si la traducción al español de la denominación "PLUG AND PUMP" es "***conectar o enchufar e inflar***", o bien, "***enchufa y bombea***", y pretenden ampararse conectores de válvula universal para neumáticos de vehículos o productos en los cuales los conectores de válvula universal son usados, se entiende que la denominación indica que al conectar o enchufar la válvula universal, se inflan o bombean neumáticos de vehículos o productos en los cuales los conectores de válvula universal son usados.

Por tanto, considerando el conjunto de características del signo propuesto a registro, el mismo resulta ser carente de distintividad, en virtud de que la denominación propuesta a registro en su traducción al español resulta indicativa de característica o cualidad esencial de los productos a proteger, como lo es su destino, ya que atiende a la idea de un producto que se conecta o enchufa para inflar diferentes tipos de artículos inflables, sin que esta característica permita distinguir un producto de otro.

Ahora bien, no es necesario para que se considere descriptiva una marca, que se refiera a todas y cada una de las cualidades o características de los productos, pues basta que describa, como en el caso, una de ellas, como lo es su destino, para que se considere improcedente el registro de marca, por lo que ésta será descriptiva cuando aluda a característica o cualidad esencial de los productos que pretenda proteger, aunque no describa necesariamente todas sus características o cualidades.

En consecuencia, el signo cuyo registro solicitó la actora como marca, no cumple con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, que es del tenor siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Conforme al precepto citado se puede afirmar que el signo "PLUG AND PUMP", no tiene la cualidad de distinguir productos de la clase 12 internacional ("**CONECTORES DE VÁLVULA UNIVERSAL PARA NEUMÁTICOS DE VEHÍCULOS Y/O PRODUCTOS EN LOS CUALES LOS CONECTORES DE VÁLVULA UNIVERSAL SON USADOS**"), de otros de su misma especie o clase en el mercado, porque describe o indica característica o función esencial de los mismos, ya que existe nexo causal entre los productos que han quedado señalados y la expresión "PLUG AND PUMP" ("*conectar o enchufar e inflar*" o bien "*enchufa y bombea*"), por lo que se ubica en los supuestos del artículo 90, fracciones IV y VI, de la Ley de la Propiedad Industrial, en los que la autoridad sustentó su determinación de negar el registro de marca a la parte actora.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda parte-1, enero a junio de 1989, página 454:

"**MARCAS. DESCRIPTIVIDAD.**" [N.E. Se omite transcripción]

En esta tesitura, puede considerarse que el registro del signo de que se trata, otorgaría a la actora el uso exclusivo de una expresión que enuncia una de las características de los productos de la clase 12 internacional en perjuicio de los demás productores o comerciantes, pues dicha frase resulta indicativa de una cualidad esencial como lo es el destino de los productos a proteger, por lo que tiene la característica de ser descriptiva.

Refuerza la conclusión alcanzada la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, invocada por analogía, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, septiembre de 1991, página 155:

> "**MARCAS COMPUESTAS. DESCRIPTIVIDAD Y CONDICIÓN DISTINTIVA DE LAS.**" [N.E. Se omite transcripción]

Así, en el caso la denominación de referencia está desprovista de condición distintiva al integrarse por dos palabras (PLUG= "*conectar o enchufar*" o bien "*enchufa*", *y* PUMP= "*inflar*" o bien "*bombea*") que al ser analizadas en forma aislada resultan descriptivas del destino de los productos ("CONECTORES DE VÁLVULA UNIVERSAL PARA NEUMÁTICOS DE VEHÍCULOS Y/O PRODUCTOS EN LOS CUALES LOS CONECTORES DE VÁLVULA UNIVERSAL SON USADOS"), y las mismas continúan siendo descriptivas en su conjunto ("*PLUG AND PUMP*").

Consecuentemente, la negativa de registrar como marca la denominación mencionada, no resulta contraria a derecho, habida cuenta que al decretar dicha negativa, la autoridad ajustó su proceder a la mencionada regla de apreciación de las marcas, en tanto que las palabras que integran esa denominación, analizadas aisladamente o en forma conjunta, conservan el significado que naturalmente les corresponde, mismo que constituye una clara y directa alusión al destino de los productos a proteger.

[...]

Con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracciones I y II, y 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

R E S O L U T I V O S

I.- Resultó fundado el estudio oficioso de la competencia de la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas "B", al emitir el oficio de impedimento legal, en los términos del Considerando Tercero de esta sentencia;

II.- La parte actora no acreditó los fundamentos de su pretensión, como se analizó en el Considerando Cuarto de esta resolución; en consecuencia:

III.- Se declara la **NULIDAD** de la resolución impugnada, detallada en el Resultando 1° del presente fallo, para los efectos señalados en el último Considerando de la presente sentencia.

IV.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de esta resolución, devuélvase el expediente a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, una vez que se haya resuelto en definitiva y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 2 de junio de 2010, por mayoría de nueve votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alfredo Salgado Loyo, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas, Luis Carballo Balvanera y Francisco Cuevas Godínez, y un voto con los puntos resolutivos del Magistrado Alejandro Sánchez Hernández. Estuvo ausente la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado Alfredo Salgado Loyo, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 6 de julio de 2010 y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30, fracción V, y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, en vigor a partir del día siguiente, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Lic. Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-SS-365

REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- ES PROCEDENTE CUANDO EL EMPLAZAMIENTO AL TERCERO INTERESADO NO SE REALIZA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO TRATÁNDOSE DE NOTIFICACIONES POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO.- El artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que la notificación del auto que corra traslado de la demanda se hará personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, y para el desahogo de esta última forma de notificar, se tiene que el artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, dispone que las notificaciones por correo certificado con acuse de recibo serán legales, si se atienden dos requisitos: 1) Ser entregadas a los destinatarios y 2) Que se recabe su firma. En virtud de ello, tratándose de la notificación a personas morales, ésta debe entenderse con su representante legal; por lo que si del acuse de recibo correspondiente, no se desprenden elementos que permitan tener la certeza de que el emplazamiento del tercero interesado, que es una persona moral, se entendió con su representante legal, la notificación es ilegal y procede la regularización del procedimiento contencioso administrativo, a efecto de que se le emplace con la finalidad de salvaguardar su derecho de audiencia.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1478/08-EPI-01-1/3097/09-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de junio de 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Beatriz Rodríguez Figueroa.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de junio de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

Por tanto no se puede considerar por este Órgano Jurisdiccional, que la notificación del acuerdo de admisión de la demanda, mediante la cual se emplazó a la tercera interesada al juicio contencioso administrativo, se haya realizado en forma legal; pues aún cuando el Magistrado Instructor ordenó se notificará por correo certificado con acuse de recibo, y **existe constancia del acuse de recibo de la notificación, ésta debió realizarse directamente con el representante legal de la tercera interesada BIENES RAÍCES SAMEX, S.A. de C.V.**

Ello porque en el acuse de recibo debe aparecer la certificación correspondiente, en la que se haga constar que la notificación se entregó al representante legal de la tercera interesada; ello con fundamento en lo señalado en el artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y no como se practicó en la especie, con persona que no era el representante o apoderado legal de BIENES RAÍCES SAMEX, S.A. de C.V.

En esa virtud, resulta que la notificación del acuerdo de admisión de la demanda, mediante el cual se emplazó a la tercera interesada no fue realizada apegándose a los formalidades que al efecto señala la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley del Servicio Postal Mexicano.

Razón más que suficiente para concluir que la notificación del acuerdo de admisión de la demanda, mediante el cual se emplazó a la tercera interesada no se realizó conforme a derecho.

En esa virtud, con tal omisión se deja en estado de indefensión a la tercera interesada, pues al no haberse practicado conforme a derecho la notificación del acuerdo admisorio de fecha 06 de mayo de 2008 en el cual se le

emplazó al juicio contencioso administrativo, ésta desconoce que existe un juicio en contra de la resolución controvertida contenida en el oficio con número de folio 23961 de 30 de noviembre de 2007 a través del cual la C. Subdirectora Divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó la declaración administrativa de las infracciones previstas en las fracciones I, IV, IX, incisos a), b) y c), XVIII y XXV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte de la empresa tercera interesada.

En ese tenor, la Magistrada Instructora debió ordenar reponer la notificación del acuerdo de admisión de fecha 06 de mayo de 2008, a fin de que se realizara con apego a las formalidades establecidas en el artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano; a fin de que se emplazara a la tercera interesada del juicio contencioso administrativo conforme a derecho; ello para salvaguardar su derecho de audiencia, y al no haberlo cumplido de esa manera, ello provocó una violación al procedimiento contencioso administrativo.

Resulta aplicable en la especie la tesis: VI-J-SS-15, con No. Registro. 50,253, emitida por el Pleno, publicada en la R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 11. Noviembre 2008., Página: 68, cuyo rubro y texto rezan de la siguiente manera:

> "**VIOLACIÓN SUBSTANCIAL DEL PROCEDIMIENTO.- CUANDO NO SE EMPLAZA AL TERCERO EN EL JUICIO.**" [N.E. Se omite transcripción]

En tales circunstancias, al ser el procedimiento una cuestión de orden público, y **de no ser subsanada la violación y omisión referida la tercera interesada quedaría en estado de indefensión, al no haberse emplazado legalmente al juicio contencioso administrativo e impedírsele así manifestarse respecto al registro marcario que en la fase oficiosa administrativa afirmó era de su propiedad**; razón por la cual este Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estima procedente **DEVOLVER LOS AUTOS ORIGINALES DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1478/**

08-EPI-01-1/3097/09-PL-02-10 a la Magistrada Instructora de la Sala Especializada en Materia de la Propiedad Intelectual de este Tribunal, para que regularice y reponga el procedimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria tratándose del procedimiento contencioso administrativo, el cual dispone lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

[…]

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia fiscal, 1º y 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 18, fracción XII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 06 de diciembre de 2007, vigente a partir del día siguiente, este Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resuelve:

I.- Se DEVUELVEN los autos originales del presente juicio a la Magistrada Instructora de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, para que reponga el procedimiento del mismo y subsane la violación y omisión cometida durante la substanciación del mismo, en términos de lo dispuesto en el Considerando Tercero de esta sentencia.

II.- Una vez subsanadas las violaciones y omisiones cometidas durante la substanciación del juicio y agotada la instrucción, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual deberá remitir de inmediato los autos al Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, para que resuelva lo que en derecho proceda.

III.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de **02 de junio de 2010**, por **mayoría de ocho votos a favor** de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas y Luis Carballo Balvanera; **y dos votos en contra** de los CC. Magistrados Alfredo Salgado Loyo y Francisco Cuevas Godínez.

Estuvo ausente en la sesión la C. Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega.

El C. Magistrado Alfredo Salgado Loyo, se reservó su derecho a formular voto particular.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada **Nora Elizabeth Urby Genel**, cuya ponencia se aprobó.

Se formuló el presente engrose el 15 de junio de 2010, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción V y 47, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 6 de diciembre de 2007, vigente a partir del día siguiente a su publicación, firma el C. Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Lic. Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos que da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO ALFREDO SALGADO LOYO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1478/08-EPI-01-1/3097/09-PL-02-10

Respetuosamente me aparto del criterio adoptado por la mayoría.

En primer lugar porque contrariamente a como se sostiene en el fallo y en especial en la página 13, las supuestas violaciones de procedimiento referidas a la "*omisión de emplazar legalmente a la tercera interesada*", no pueden atribuirse al Magistrado Instructor, ya que ni éste ni algún funcionario del Tribunal practicaron las notificaciones, sino en el caso concreto lo hizo el Servicio Postal Mexicano, razón por la cual si las diligencias fueran ilegales, ello no es imputable al Magistrado, quien ordenó las notificaciones por correo certificado porque así se lo permite el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, considerando además que el domicilio de esa parte no se encuentra dentro de la sede de la Sala Regional del conocimiento.

En segundo lugar, porque en términos de lo dispuesto por los artículos 29 fracción III y 33 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que pueda declararse que las notificaciones no fueron hechas conforme a derecho, ello debe ser a instancia del perjudicado, no oficiosamente.

Lo anterior además de tener el soporte legal apuntado, responde a privilegiar la agilidad en los procedimientos y a efecto de que este Tribunal no caiga en un error calificando de ilegal una diligencia que bien pudo haber cumplido su cometido, conforme a los artículos 71 y 72 del ordenamiento antes mencionado.

Los acuses de recibo que se reproducen en páginas 26 y 27 del fallo contienen la firma del destinatario, sin que este Tribunal pueda prejuzgar si se trata o no de su representante legal y calificar la circunstanciación de tales acuses.

Sin que sea óbice que la resolución se apoye en el hecho de que en la escritura pública reproducida en páginas 28 a 39, no se señala como representante legal a la persona que firmó los acuses, toda vez que el tercero interesado es una empresa que puede tener cuantos representantes legales le convenga, señalados en cuantas escrituras públicas corresponda, por lo que no es correcto el manejo que se da a ese tema para arribar a una presunción dudosa.

Por las razones expuestas difiero del criterio de la mayoría de los integrantes de este Pleno.

MAG. ALFREDO SALGADO LOYO

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-SS-366

CONSULTAS FISCALES.- ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTENTADO EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES RECAÍDAS A ÉSTAS.- El juicio es improcedente cuando se plantea en contra de las resoluciones recaídas a las consultas fiscales reguladas en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, en su texto vigente a partir de 2007, de conformidad con la causal prevista por la fracción I, del artículo 8, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, precepto conforme al cual el juicio ante este Tribunal es improcedente en contra de actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del demandante. El anterior aserto se formula en virtud de que el referido artículo 34, establece que las respuestas que emiten las autoridades fiscales a las consultas planteadas por los contribuyentes no obligan a éstos, es decir, que no trascienden a su esfera jurídica, porque no quedan vinculados a aplicar el criterio de la autoridad; por lo tanto, no existe afectación alguna. Por ende, la enjuiciante está en su derecho de aplicar o no el criterio emitido por la autoridad demandada y en todo caso, de no hacerlo, si la autoridad llegase a aplicar dicho criterio en su perjuicio mediante alguna resolución definitiva, ésta podrá impugnarlo de considerarlo necesario. En el mismo tenor, no puede considerarse que la respuesta a una consulta fiscal sea una resolución definitiva, y en esa virtud, no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia que prevé el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 25059/07-17-01-1/287/10-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de junio de 2010, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Thelma Semíramis Calva García.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de junio de 2010)

PRECEDENTE:

VI-P-SS-294
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 15800/08-17-03-5/1783/09-PL-09-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de noviembre de 2009, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Thelma Semíramis Calva García.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de enero de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 163

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO MANUEL LUCIANO HALLIVIS PELAYO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 25059/07-17-01-1/287/10-PL-09-04

Con fundamento en el artículo 49, tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el que suscribe, Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, formula el siguiente voto particular, en contra de la resolución mayoritaria conforme a la que se resolvió el presente juicio.

La resolución mayoritaria en el presente asunto determinó aplicar las jurisprudencias 1a./J. 43/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las diversas 2a./J. 112/2009 y 2a J. 170/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sobreseer el juicio.

Las citadas jurisprudencias señalan lo siguiente:

"**Registro No.** 166470
"**Localización:** Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXX, Septiembre de 2009 Página: 473. Tesis: 2a./J. 112/2009. Jurisprudencia Materia(s): Administrativa

"**CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE DESDE EL 1o. DE ENERO DE 2007, AL MODIFICAR LOS EFECTOS DE LAS RESPUESTAS QUE RECAEN A AQUÉLLAS, ES CONGRUENTE CON LA REGULACIÓN EN MATERIA FISCAL Y CON EL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS TRIBUTOS.-** Previamente a la reforma del mencionado precepto, los criterios emitidos por la autoridad fiscal al dar respuesta a una consulta fiscal eran considerados una instancia y vinculaban al particular que la formuló, por lo que podían impugnarse. No obstante, la resolución a las controversias donde se combatía la respuesta recaída a una consulta fiscal en ocasiones se limitaba al contenido de ésta, y no a una apreciación de los hechos, documentos, contabilidad y demás elementos que conforman la realidad económica y jurídica del contribuyente. Por ello, el legislador pretendió dar a éste una mayor seguridad jurídica, modificando los efectos de las respuestas a las consultas fiscales, pues en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del 1o. de enero de 2007, estableció que ya no serían obligatorias para los particulares. Lo que resulta congruente con la regulación en materia fiscal, pues acorde con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede promoverse juicio contencioso administrativo contra resoluciones definitivas, pero la respuesta a las consultas fiscales no puede considerarse como tal, al no obligar al particular ni determinar a su cargo una situación fiscal; así como con el principio de autodeterminación de los tributos -conforme al cual el contribuyente determina el impuesto a pagar-, pues la esfera jurídica de éste se afectará hasta que la autoridad ejerza sus facultades de fiscalización y establezca su situación fiscal.

"Amparo en revisión 205/2008. **********. 2 de julio de 2008. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

"Amparo en revisión 432/2008. Geo Laguna, S.A. de C.V. 13 de agosto de 2008. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera.

"Amparo en revisión 463/2008. Tejidos Gaytán de Moroleón, S.A. de C.V. 3 de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.

"Amparo en revisión 683/2008. Geo Hogares Ideales, S.A. de C.V. 24 de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

"Amparo en revisión 965/2008. **********. 29 de octubre de 2008. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

"Tesis de jurisprudencia 112/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de agosto de dos mil nueve."

"**CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2007).-** El hecho de que conforme al citado precepto legal, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, los particulares no puedan impugnar las respuestas recaídas a las consultas fiscales realizadas a la autoridad, sino sólo las resoluciones definitivas en las que ésta aplique los criterios contenidos en dichas respuestas, no viola la garantía de seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tales consultas no son actos vinculatorios que produzcan efectos en la esfera jurídica de los gobernados. Ello es así, porque no se deja al arbitrio de la autoridad la decisión del momento en que ésta, mediante el ejercicio de sus facultades de fiscalización, debe aplicar el criterio emitido en la respuesta a la consulta que se le haya formulado, ya que el artículo 67 del mencionado Código expresamente señala el plazo en que se extinguen dichas facultades."

"**CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34, CUARTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2007).-** El citado precepto no viola la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que las respuestas recaídas a aquéllas no son obligatorias para los particulares, pues no impide el acceso a la impartición de justicia, ya que no coarta el derecho de los gobernados para interponer los medios de defensa conducentes a fin de que se resuelva el caso concreto. Esto es, el artículo 34, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación no priva del derecho de acción al particular por establecer que la respuesta recaída a la consulta fiscal no le es obligatoria, pues ello no implica necesariamente que por esa razón sea inimpugnable, sino simplemente consigna que debe esperar a que tal decisión le sea aplicada en una resolución definitiva para que pueda proceder su impugnación."

Con base en las interpretaciones jurisprudenciales transcritas, la mayoría decidió sobreseer el juicio en virtud de que como en el presente caso se impugna una resolución negativa ficta recaída a la consulta de confirmación de criterio en materia de impuesto sobre la renta, en la que se debe aplicar el contenido del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2007, se estimó que conforme a dicho precepto legal no es dable la impugnación de lo que la autoridad resuelve mediante dicha consulta.

Difiero del criterio mayoritario, porque si bien la resolución por parte de la autoridad en torno a la consulta se realizó el 26 de noviembre de 2007, cuando ya se encontraba en vigor la reforma al artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que la consulta se presentó el 19 de diciembre de 2006, fecha en la cual el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación no había sido modificado y en ese mismo momento las consultas a las autoridades tributarias eran impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sin ninguna limitación.

En efecto, el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 1° de enero de 2007, establecía lo siguiente:

> "Artículo 34.- Las autoridades fiscales sólo están obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente; de su resolución favorable se derivan derechos para el particular, en los casos en que la consulta se haya referido a circunstancias reales y concretas y la resolución se haya emitido por escrito por autoridad competente para ello.
> "Las autoridades fiscales no resolverán las consultas efectuadas por los particulares cuando las mismas versen sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución. En estos casos, no procederá la negativa ficta a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de este Código.
> "La validez de las resoluciones que recaigan sobre las consultas aplicables a residentes en el extranjero podrán estar condicionadas al cumplimiento de requisitos de información que se soliciten por las autoridades fiscales en las citadas resoluciones.
> "El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de las principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere este artículo, debiendo cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 de este Código."

A su vez, el artículo 34 que entró en vigor a partir del 1° de enero de 2007, establece lo siguiente:

> "Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente.
> "La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente:
> "I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad se pueda pronunciar al respecto.

"II. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieren modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad.
"III. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta.
"La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad de los hechos o datos consultados o se modifique la legislación aplicable.
"Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no serán obligatorias para los particulares, por lo cual éstos podrán impugnar, a través de los medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables, las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos en dichas respuestas.
"Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.
"El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de las principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere este artículo, debiendo cumplir con lo dispuesto por el artículo 69 de este Código."

A partir de ello la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las resoluciones a las consultas a partir del 1° de enero de 2007, no son susceptibles de ser controvertidas vía juicio contencioso administrativo.

Sin embargo, ese esquema interpretativo sólo puede ser aplicado respecto de consultas presentadas con posterioridad a la reforma, pero no como ocurre en el presente caso a un supuesto en que la consulta se presentó en 2006, cuando el Código Fiscal de la Federación permitía que las resoluciones recaídas a consultas formuladas por los particulares fueran impugnables.

Máxime que en el presente caso, como se señaló anteriormente, la consulta respecto de la cual se configuró la negativa ficta se presentó por la parte actora el 19 de diciembre de 2006, por lo que si fue hasta el 26 de noviembre de 2007, cuando la autoridad demandada le dio a conocer los motivos y fundamentos en que sustentó dicha negativa, es claro que ello no le puede deparar perjuicio a dicha actora.

Pensar de otro modo implicaría hacer retroactiva en perjuicio de la demandante la aplicación del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, en vigor a partir de 2007.

En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la retroactividad de las leyes, ha establecido la jurisprudencia P./J. 123/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, del mes de octubre de 2001, página 16, que a continuación se transcribe:

> "**RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.-** Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato,

el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.”

Ahora bien, es importante precisar que el punto medular en este juicio consiste en establecer si debe aplicarse el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación

vigente en 2007, cuando la autoridad resolvió la consulta, o bien, si el aplicable resulta ser el vigente en 2006 por tratarse del año en que se presentó la consulta.

Con base en la teoría de los componentes de la norma a que se ha aludido, el más Alto Tribunal de la Nación ha establecido que una norma legal rige todos los hechos que durante el lapso de su vigencia ocurren en concordancia con sus supuestos.

En efecto, en este caso y como también se ha sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta antes del 1° de enero de 2007 es una norma de carácter sustantivo, derivado de que regula la naturaleza de las consultas y sus consecuencias.

El hecho de que el texto vigente para 2007 haya modificado la vinculación de las respuestas recaídas a las consultas que sobre situaciones reales y concretas se realicen, recae únicamente sobre las consultas que se realicen después de la entrada en vigor del precepto impugnado, y no así sobre las que se hayan realizado con anterioridad.

De esta manera, si el actor presentó su consulta en 2006 adquirió el derecho a que se le resolviera en los términos señalados por el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente en ese momento, de manera que resulta claro que una disposición posterior (modificada a partir del 1° de enero de 2007), no puede afectar el derecho de que gozaba para que se resolviera la consulta a la luz de las disposiciones vigentes cuando fue presentada, y obviamente que si dicha resolución se podía impugnar, no existe razón para privar al contribuyente afectado por una resolución de la autoridad tributaria del derecho a combatir la resolución que recayó a la consulta mediante el juicio contencioso administrativo.

Por esas razones estimo que el presente juicio no debió sobreseerse, sino que, atendiendo a lo ya expuesto, debió considerarse aplicable el contenido y las consecuencias del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente cuando el actor presentó su consulta.

MAG. MANUEL LUCIANO HALLIVIS PELAYO

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO LUIS CARBALLO BALVANERA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 25059/07-17-01-1/287/10-PL-09-04

El suscrito se adhiere al voto razonado expuesto por el Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo.

MAG. LUIS CARBALLO BALVANERA

PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-367

MARCAS. CASO EN EL QUE NO SE DESCRIBE UNA CUALIDAD O CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO.- Cuando la marca se aplica a máquinas lectoras de medios de datos (grabados); programas y software de computadoras; cartuchos magnéticos de datos, a saber, cintas magnéticas, discos magnéticos, discos magnéticos de silicio y tarjetas magnéticas, comprendidos dentro de la Clase 9 Internacional de la Clasificación de Niza, no vienen a la mente del público consumidor que dichos productos tengan como característica o cualidad que se elaboren por diseño o de acuerdo a un proyecto, plan o concepción original del comprador, o mediante la explicación y descripción previamente proporcionada del mismo, de acuerdo con sus necesidades o preferencias. Por lo que de ninguna manera dicha marca al aplicarse a esos productos a distinguir, está denotando alguna cualidad o característica de los mismos, de ahí que proceda su registro.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 848/09-EPI-01-4/498/10-PL-03-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de junio de 2010, por mayoría de 7 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro Godínez.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

En esos términos, se tiene que la **litis** a dirimir en el presente juicio se constriñe a determinar si la denominación propuesta por la actora "**ByDesign**" como lo sostiene la autoridad demandada, resulta ser descriptiva de una cualidad o características de los productos que pretende amparar, pues en su traducción al español, a saber: por diseño o según diseño, describe que los productos que pretende proteger: máquinas lectoras de medios de datos (grabados); programas y software de computadora, cartuchos magnéticos de datos, a saber, cintas magnéticas, discos magnéticos, discos magnéticos de silicio y tarjetas magnéticas se elaboran por diseño o según diseño del adquirente; de acuerdo a un proyecto, plan o concepción original del comprador, o bien, mediante la explicación y descripción previamente proporcionada del mismo, de acuerdo a sus necesidades o preferencias.

En esos términos, esta Juzgadora procede a analizar si la denominación propuesta por la empresa actora, esto es "**ByDesign**", contraviene lo dispuesto en el artículo 90, fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De la interpretación gramatical y armónica del precepto antes transcrito se desprende que contempla diversos supuestos que no son registrables como marca, dentro de los que encontramos a las denominaciones, palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, así como la traducción a otros idiomas y la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.

Asimismo, es necesario destacar lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, que son del tenor siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Incluso, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en su tesis 67, visible en el apéndice de 1975; Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, parte VI, página 113, ha sustentado el siguiente criterio referente a las características de una marca, mismo que señala lo siguiente:

"**MARCAS, CARACTERÍSTICAS DE LA.**" [N.E. Se omite transcripción]

En ese orden de ideas, se tiene que las principales funciones que pueden atribuirse a un signo marcario de acuerdo a la doctrina son los siguientes:

a) Distinción:
b) Protección;
c) Garantía de calidad; y,
d) Propaganda

Así, para el caso que nos ocupa conviene hacer notar que la función de distinción deriva de la esencia misma de la marca, por cuando que su objeto está destinado a distinguir un producto de otro del mismo género. De acuerdo con tal función es el producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención.

En esa tesitura, y de acuerdo a lo antes expuesto, para que cualquier signo pueda constituir una marca, es necesario que reúna dos requisitos a saber: (i) que tenga una eficacia distintiva; y (ii) que sea jurídicamente tutelable como marca.

El primero de dichos requisitos surge de la propia conceptuación y funciones de la marca a registrar, ya que el signo marcario está destinado a identificar un producto o un servicio entre los productos y servicios de la misma especie o clase ofrecidos por los competidores.

La demanda de un producto o servicio es posible mediante la fuerza distintiva que tiene la marca; de ahí, la capacidad que tienen los consumidores de poder realizar directamente y con cuidado sus propias elecciones a fin de adquirir el producto o

servicio preferido o que se adapte a sus necesidades, con lo que se evita la confusión respecto de otros similares; además, permite al productor o prestador de servicios acudir al proceso de identificación en el resultado material de su trabajo.

Lo anterior, inclusive se ve reflejado en lo dispuesto en el artículo 89, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

En esos términos, la marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, además, esa distinción debe ser objetiva o real, con el objeto de no engañar al público o inducir al error.

Por otra parte, conviene precisar que los productos comprendidos en la clase 9 internacional según la Clasificación de Niza, son los siguientes:

[N.E. Se omite transcripción]

De acuerdo con los preceptos citados y los razonamientos esgrimidos por esta Juzgadora, se tiene la convicción que la marca propuesta por la actora "**ByDesign**", no es descriptiva de alguna cualidad o característica de los productos que pretende amparar, ni tampoco la traducción al español que la autoridad demandada realiza de la misma, a saber "POR DISEÑO O SEGÚN DISEÑO", puede indicar o describir alguna característica o cualidad de los productos a proteger, los cuales son: máquinas lectoras de medios de datos (grabados); programas y software de computadora; cartuchos magnéticos de datos, a saber, cintas magnéticas, discos magnéticos, discos magnéticos de silicio y tarjetas magnéticas, por lo que no se ubica en las prohibiciones que establece el artículo 90, en sus fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, en el que la autoridad sustentó su negativa para otorgar el registro marcario.

En efecto, la denominación “ByDesign”, no sirve para distinguir la especie, la calidad, cantidad, composición, destino, valor, origen o época de producción de los productos antes señalados, y menos aún se trata de la traducción a otros idiomas de palabras no registrables, sino que se trata de un término abstracto y totalmente vago.

Lo anterior es así, porque de la propia traducción al español de las palabras “ByDesign”, realizada por la demandada en la resolución impugnada, aplicadas a los productos que pretende amparar, de ninguna manera puede entenderse o considerarse, como lo afirma dicha demandada, que tales productos se elaboran por diseño o de acuerdo a un proyecto, plan o concepción original del comprador, o mediante la explicación y descripción previamente proporcionada del mismo, de acuerdo con sus necesidades o preferencias, por lo que de ninguna manera dicha marca al aplicarse a los productos a distinguir está denotando alguna cualidad o característica de tal producto o de una cualidad, especie, cantidad, composición, destino, valor o lugar de origen de los productos.

Lo anterior, en virtud de que lo que prohíbe el artículo 90, en sus fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, es que las marcas propuestas a registro describan el producto o sus características intimas o particulares y, en el caso que nos ocupa, tales supuestos no se actualizan porque la marca tal como fue propuesta por la hoy actora “**ByDesign**”, no puede denotar o dar la idea de que se aplicará a productos tales como máquinas lectoras de medios de datos (grabados); programas y software de computadora; cartuchos magnéticos de datos, a saber, cintas magnéticas, discos magnéticos, discos magnéticos de silicio y tarjetas magnéticas.

En tal virtud, dicha marca o denominación no se encuentra describiendo una cualidad o característica de tales productos, porque aún separando las palabras que la conforman, cuya traducción al español es:

[N.E. Se omite transcripción]

Se puede desprender una connotación diversa de los mismos, así como una serie de combinaciones de significados como son: “por dibujo”, “junto a diseño”, “por propósito”, “por motivo o modelo”, etc., luego entonces, dicha denominación por sí sola no puede describir alguna característica de los productos que pretende amparar, ni define a dichos productos, ni las palabras guardan relación directa con la naturaleza de los mismos.

Así entonces, aun con la traducción al español que se realizó de la marca propuesta por la actora, es decir, “por diseño o según diseño”, esta Juzgadora considera que no le asiste la razón a la autoridad demandada, puesto que esas palabras unidas o por separado, no definen los productos o características o finalidad de máquinas lectoras de medios de datos (grabados); programas y software de computadora; cartuchos magnéticos de datos, a saber, cintas magnéticas, discos magnéticos, discos magnéticos de silicio y tarjetas magnéticas.

En efecto, al primer golpe de vista y al escuchar las palabras “**ByDesign**”, no vienen a la mente del público consumidor que dichos productos tengan como cualidad o característica, ser máquinas lectoras de medios de datos (grabados); programas y software de computadora; cartuchos magnéticos de datos, a saber, cintas magnéticas, discos magnéticos, discos magnéticos de silicio y tarjetas magnéticas.

Resultan aplicables las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación.

> “**MARCAS DESCRIPTIVAS.**” [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F. 133-138 Sexta Parte. Séptima Época. pág. 222]
>
> “**MARCAS DESCRIPTIVAS.**” [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F. 133-138 Sexta Parte. Séptima Época. pág. 100]
>
> “**MARCAS DESCRIPTIVAS.**” [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F. 133-138 Sexta Parte. Séptima Época. pág. 219]

En esta tesitura, no puede considerarse que la marca propuesta por la actora resulte descriptiva o indicativa de los productos que pretende amparar, pues contrario a lo sostenido por la autoridad demandada, dicha denominación no es la traducción a otro idioma de palabras no registrables, ni es indicativa de una cualidad o de la finalidad de los productos a proteger, ya que ni siquiera en el comercio se le utiliza con tal fin.

Además, el Poder Judicial de la Federación en la siguiente tesis ha establecido que existe la prohibición de registro cuando un adjetivo calificativo que traducido de un idioma extranjero al español, su significado evoque sus cualidades íntimas, o cuando la palabra sea sugestiva de cierta cualidad o característica, entonces el carácter descriptivo de una denominación propuesta a registro no sólo se restringe a vocablos del idioma español, sino a aquellos que siendo su lengua extranjera, su traducción corresponda a palabras no registrables en lengua española, pero en el caso la denominación "ByDesign", no es descriptiva de los productos que pretende proteger, ni evoca las cualidades íntimas, ni es sugestiva de cierta cualidad o característica de dichos productos.

> "**MARCAS. ADJETIVOS CALIFICATIVOS EN IDIOMA EXTRANJERO, CUANDO SON REGISTRABLES.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F. Tomo VI. Segunda Parte-2. Julio a Diciembre de 1990. Octava Época. Pág. 571]

En esos términos, se reitera, que lo que está prohibido por la ley, son aquellas marcas que definen el producto al que se aplican, pero no aquellas que pueden despertar la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad, las cuales son las llamadas marcas evocativas, mismas que se relacionan de modo remoto e indirecto con la mercancía.

En tal virtud, el simple hecho de que una de las palabras utilizadas en el signo propuesto pueda dar lugar a la idea de un diseño o que se elaboran de acuerdo a un proyecto, plan o concepción original del comprador, o bien, mediante la explicación

y descripción previamente proporcionada por el comprador, no sugiere enteramente sus cualidades o características, pues puede ser simplemente sugestiva de alguna cualidad del producto, pero ello de ninguna manera la hace no registrable, pues al tener características propias e individuales que permitan diferenciar el producto, ello le permite ser susceptible de registro.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con número de registro 251,600, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 133-138, Sexta Parte, página 285, que es del tenor siguiente:

"**MARCAS DESCRIPTIVAS.**" [N.E. Se omite transcripción]

Asimismo, resulta aplicable la siguiente tesis del Poder Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente:

"**MARCAS EVOCATIVAS. REGISTRO DE LAS.**"

Conforme al anterior criterio, no es absoluta la prohibición del carácter descriptivo de una marca, pues se admiten como válidas las denominaciones que, formadas de modo arbitrario, despiertan la idea del producto o sugieran su naturaleza o utilidad, que son las llamadas marcas evocativas y que se relacionan de modo remoto indirecto con la mercancía.

Por tanto, es evidente que no se advierte que el signo propuesto sea descriptivo de los productos que se desean proteger con el mismo, porque si de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, describir significa delinear, dibujar, figurar algo, representándolo de modo que dé cabal idea de ello, o bien, representar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias, es incuestionable que esa marca propuesta por la hoy actora no define a los productos de la clase 9, tales como: máquinas lectoras de medios de datos (grabados); progra-

mas y software de computadora; cartuchos magnéticos de datos, a saber, cintas magnéticas, discos magnéticos, discos magnéticos de silicio y tarjetas magnéticas.

Corrobora lo anterior la tesis con número de registro 231,557, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, Página: 403, que establece:

"**MARCAS, NATURALEZA DE LAS.**" [N.E. Se omite transcripción]

En tales consideraciones, la autoridad demandada no demuestra que en el caso del signo propuesto cuyo registro solicitó la hoy actora, actualice el supuesto previsto en el artículo 90, fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, pues tal signo no es descriptivo o indicativo de las cualidades o características de los productos de la clase 9 internacional y mucho menos se les utiliza en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, composición o destino de dichos productos.

[...]

Con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracciones I, IV y penúltimo párrafo, y 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con relación al artículo 18, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, se resuelve:

I.- Resultaron fundados los agravios expresados por la parte actora; en consecuencia;

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, descrita en el Resultando 1° de este fallo, para los efectos precisados en el Considerando Tercero del presente fallo.

III.- Notifíquese.-

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de **nueve de junio de dos mil diez**, por mayoría de siete votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Manuel L. Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas y Francisco Cuevas Godínez; más un voto con los puntos resolutivos del C. Magistrado Luis Carballo Balvanera; y uno en contra de la C. Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel. Estuvieron ausentes los CC. Magistrados Silvia Eugenia Díaz Vega y Alfredo Salgado Loyo.

Fue Ponente en el presente asunto, el Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, cuya ponencia se aprobó.

Se formuló el presente engrose el **veintiocho de junio de dos mil diez** y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción V y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el C. Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos que da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-SS-368

DECRETO POR EL QUE SE SUJETA EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO A PRECIOS MÁXIMOS DE VENTA DE PRIMERA MANO Y DE VENTA A USUARIOS FINALES PUBLICADO EL 27 DE FEBRERO DE 2003.- ES IMPROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- Dicho decreto fue emitido por el Presidente de la República con fundamento en el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tuvo como finalidad que el gas licuado de petróleo y los servicios involucrados en su entrega, queden sujetos a precios máximos de venta de primera mano y de venta al usuario final, por razones de orden público e interés social, al tratarse de bienes y servicios necesarios para la economía del país y que utiliza la gran mayoría de la población. Dicho acto jurídico está integrado por un conjunto de disposiciones abstractas e impersonales de observancia general, dado que el ejercicio de tales atribuciones no se agota con su aplicación a un caso concreto, por lo que se trata de un acto emitido en ejercicio de la facultad reglamentaria del Presidente de la República. Por lo que, resulta improcedente el juicio contencioso administrativo en virtud de que se da la excepción a que se refiere el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, actualizándose la causal de improcedencia establecida en el artículo 8, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues contra dicho acto no corresponde conocer a este Tribunal.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7547/06-17-02-6/2874/09-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de junio de 2010, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de septiembre de 2010)

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-SS-369

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.- PROCEDE RESPECTO DE LOS DECRETOS EMITIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EJERCICIO DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA, AL EQUIPARARSE A UN REGLAMENTO.- El artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece en su segundo párrafo que procede el juicio contencioso administrativo federal contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Como se advierte de dicho precepto, si bien es procedente el juicio contencioso administrativo federal en contra de decretos de carácter general, también lo es que establece una excepción a los reglamentos, así el reglamento es un acto formalmente administrativo porque proviene de un órgano de esa naturaleza y desde el punto de vista material es un acto legislativo en razón de que participa de los atributos de la ley, por tanto, un acto jurídico emitido por el Presidente de la República en el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, con independencia de la denominación que tenga, entra en el campo de los actos formalmente administrativos que pueden equipararse a un reglamento si tiene por objeto desarrollar, mediante reglas generales, abstractas e impersonales, las normas contenidas en la ley para hacer posible y práctica su aplicación. Por lo que, si en un juicio se impugna un Decreto con las características aludidas, el que formalmente constituye un reglamento expedido por el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades establecidas, se actualiza el supuesto de excepción a que se refiere el artículo citado y por ello procede sobreseer el juicio, en términos del artículo 9, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7547/06-17-02-6/2874/09-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 16 de junio de 2010, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de septiembre de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- Esta Juzgadora plantea de oficio la procedencia del juicio contencioso administrativo, en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, fracción II y 9º, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Dichos preceptos establecen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

En primer lugar es necesario analizar la naturaleza del decreto impugnado, el que se reprodujo en el considerando segundo de esta sentencia.

De dicho decreto se observa que fue emitido por el Presidente de la República, con fundamento en los artículos 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28 de la propia Constitución, 7, fracción I de la Ley Federal de Competencia Económica y 31, 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dichos preceptos establecen:

[N.E. Se omite transcripción]

Ahora bien, de dicho acuerdo se observa que fue emitido por el Presidente de la República con los siguientes objetivos, según se desprende del Considerando de dicho Decreto:

- Que conforme a la Ley Federal de Competencia Económica es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal determinar mediante decreto cuáles bienes y servicios podrán sujetarse a precios máximos;

- Que el gas licuado de petróleo (gas L.P.) tiene una gran importancia social ya que alrededor del 63% del consumo nacional de gas licuado de petróleo se destina para uso doméstico y se utiliza en aproximadamente el 80% de los hogares mexicanos;

- Que durante la vigencia de los Decretos publicados el 12 de marzo y el 5 de septiembre de 2001, el 4 de septiembre de 2002 y el 27 de febrero de 2003, la venta a usuarios finales del gas licuado de petróleo ha quedado sujeta a precios máximos, lo que ha evitado un detrimento mayor en la economía de las familias mexicanas;

- Que las condiciones de incertidumbre en los mercados energéticos han persistido y se han agravado por los fenómenos meteorológicos, impactando sensiblemente el precio del gas licuado de petróleo;

- Que como resultado del incremento en el precio del gas licuado de petróleo, es necesario continuar moderando el efecto de la volatilidad del precio de este producto con el propósito de preservar la economía de las familias mexicanas;

- Que con el propósito de continuar con el reordenamiento del mercado nacional de gas licuado de petróleo, lograr en la medida de lo posible un equilibrio en los resultados comerciales vinculados con las ventas de primera mano de gas licuado de petróleo y a efecto de evitar la insuficiencia en el abasto del combustible, es responsabilidad del Ejecutivo Federal, tomar las medidas pertinentes para continuar regulando temporalmente los precios máximos de este producto, así como los criterios para su determinación con el propósito de alcanzar, en la medida de lo posible, los objetivos del Decreto del 27 de febrero de 2003;

- Que para cumplir con el compromiso contenido en el punto Tercero del paquete de medidas energéticas anunciado el 12 de septiembre de 2005 (Decálogo Energético) que establece un máximo del 4% en el incremento del gas licuado de petróleo a usuarios finales, se considera conveniente ampliar la vigencia del Decreto por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado el 27 de febrero de 2003 en el Diario Oficial de la Federación y reformado mediante diversos publicados en el mismo medio informativo los días 10 de julio y 27 de noviembre de 2003, 30 de junio y 24 de diciembre de 2004;

- Que se expide ese decreto con la finalidad de que el gas licuado de petróleo y los servicios involucrados en su entrega, queden sujetos a precios máximos de venta de primera mano y de venta al usuario final, por razones de orden público e interés social, ya que se trata de bienes y servicios necesarios para la economía del país y que utiliza la gran mayoría de la población.

Del análisis anterior se observa que el Decreto de referencia incluye disposiciones de observancia general. Al respecto sobre el concepto de generalidad, como característica esencial de los actos materialmente legislativos, lo indica el maestro Gabino Fraga, en su libro "Derecho Administrativo" Editorial Porrúa, S.A., México, 1982, página 31, lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De igual forma el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señala:

[N.E. Se omite transcripción]

En estas condiciones, por generalidad debe entenderse que el acto jurídico no desaparezca después de su aplicación, de ahí que, además, deba aplicarse cuantas

veces se dé el supuesto previsto, sin distinción de persona. En cambio, por particularidad se entiende que el acto jurídico está dirigido a una situación concreta, por lo que, una vez aplicado, se extingue.

Con relación a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado en qué consiste el carácter general de las leyes, en oposición a las leyes privativas, destacando que:

a) Una norma será de carácter general y abstracto cuando no desaparece después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que pervive y rige sin consideración de especie o de persona para todos los casos idénticos al que prevén, en tanto no sea abrogada.

b) Por el contrario, será privativa si se refiere a personas individualmente determinadas, atendiendo a criterios subjetivos y por el hecho de que después de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano, pierde su vigencia.

Tales principios están contenidos en las jurisprudencias cuyos rubros, textos y datos de identificación son los siguientes:

"**LEYES PRIVATIVAS.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F., Tomo XXVIII. Quinta Época. pág. 1959]

"**LEYES PRIVATIVAS. SU DIFERENCIA CON LAS LEYES ESPECIALES.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F., Tomo VII. Marzo de 1998. Novena Época. Tesis P./J. 18/98. pág. 7]

En esa virtud, debe estimarse que el Decreto en cuestión contiene disposiciones de observancia general que cumplen con los requisitos de generalidad, permanencia y abstracción, dado que establece que la Secretaría de Energía por conducto de la Comisión Reguladora de Energía y considerando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá la metodología para la determinación del precio

de venta de primera mano del gas licuado de petróleo y la Secretaría de Economía, sin modificar el margen comercial actual, fijará los precios máximos de venta del gas licuado de petróleo al usuario final de manera que el precio mensual promedio ponderado nacional aumente 0.327374% respecto al precio promedio ponderado nacional del mes anterior. En efecto el Artículo Tercero de dicho Decreto establece:

[N.E. Se omite transcripción]

Es decir, en dicho Decreto se establece cómo se fijarán los precios máximos de venta del gas licuado de petróleo al usuario final de manera que el precio mensual promedio ponderado nacional aumente en el porcentaje ahí establecido respecto del precio promedio ponderado nacional del mes anterior.

Por otra parte, es importante señalar que el acto jurídico por el cual el Presidente de la República emite disposiciones de observancia general, con el fin de desarrollar o ejecutar lo dispuesto en una Ley, con independencia de la denominación que se le dé, constituye una expresión de la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la doctrina han señalado que la facultad reglamentaria del titular del Ejecutivo Federal consiste en la realización de actos jurídicos formalmente administrativos pero materialmente legislativos, pues participa de los atributos de la ley, sólo en cuanto a que ambos ordenamientos, ley y reglamento, son de naturaleza impersonal, general, abstracta y permanente.

Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 287 correspondiente a la Séptima Época, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo I, Parte SCJN, página 268, que dice:

"**REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. FACULTAD DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA EXPEDIRLOS. SU NATURALEZA.**" [N.E. Se omite transcripción]

Asimismo la Jurisprudencia 2a./J. 29/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Abril de 1999, página 70, que señala:

"**FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN.**" [N.E. Se omite transcripción]

En atención a que la jurisprudencia y la doctrina, examinan las funciones del Estado desde dos puntos de vista: formal y material, conviene destacar que el criterio formal atiende al órgano que emite el acto para calificarlo, con independencia de los elementos esenciales del mismo, en tanto que con el criterio material, se alude a las cualidades intrínsecas del acto, prescindiéndose del órgano que lo emite, para conceptuarlo.

Deriva de lo anterior, que el reglamento es un acto formalmente administrativo porque proviene de un órgano de esa naturaleza y desde el punto de vista material es un acto legislativo en razón de que participa de los atributos de la ley, por tanto, un acto jurídico emitido por el Presidente de la República en el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, con independencia de la denominación que tenga, entra en el campo de los actos formalmente administrativos que pueden equipararse a un reglamento si tiene por objeto desarrollar, mediante reglas generales, abstractas e impersonales, las normas contenidas en la ley para hacer posible y práctica su aplicación.

En ese orden de ideas, como se puede apreciar del "Decreto que reforma al diverso por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado el 27 de febrero de 2003", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2005, encuentra su fundamento entre otros preceptos legales, en el artículo 89, fracción (Sic) Constitucional, ya invocado.

[N.E. Se omite transcripción]

Efectivamente como se advierte de la transcripción anterior el Decreto en cuestión fue emitido por el entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en ejercicio de la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Federal, el cual ya quedó transcrito con antelación.

Por lo que el Decreto aludido fue emitido con la finalidad de que el gas licuado de petróleo y los servicios involucrados de su entrega queden sujetos a precios máximos de venta de primera mano y de venta al usuario final, por razones de orden público e interés social, al tratarse de bienes y servicios necesarios para la economía del país y que utiliza la gran mayoría de la población y al ser expedido por el Presidente de la República con fundamento en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una expresión de la facultad reglamentaria que le confiere la Carta Magna, en virtud de que contiene disposiciones de observancia general que ejecutan o desarrollan la Ley Federal de Competencia Económica, dado que su emisión tuvo sustento, además en dicha Ley, concretamente el artículo 7, fracción I y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículos 31, 33 y 34, preceptos que ya fueron reproducidos con antelación en esta sentencia.

De lo anterior se observa que la emisión del Decreto en cuestión tuvo como finalidad determinar los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado, en el caso, tratándose de determinación del precio de venta de primera mano del gas licuado de petróleo y los precios máximos de venta del gas licuado de petróleo al usuario final, por lo que formalmente constituye un reglamento expedido por el Presidente de la República dado que participa de los atributos de la ley en sentido material.

Lo anterior es así porque a través del citado Decreto el Presidente de la República establece cómo se debe determinar el precio de venta de primera mano del gas licuado de petróleo, sin modificar el margen comercial actual fijará los precios máximos de venta del gas licuado de petróleo al usuario final, con intervención de la Comisión Reguladora de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Economía. En ese sentido dicho acto jurídico está integrado por un conjunto

de disposiciones abstractas e impersonales de observancia general, dado que el ejercicio de tales atribuciones no se agota con su aplicación a un caso concreto, de donde se sigue que se trata de un acto emitido en ejercicio de la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I, constitucional.

En ese sentido resulta improcedente el juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 2, párrafo segundo y 8, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 114, fracción I de la Ley de Amparo. Los primeros dos preceptos citados ya fueron transcritos con antelación, el artículo 114, fracción I de la Ley de Amparo consigna:

[N.E. Se omite transcripción]

Si bien conforme lo dispuesto en el artículo 2, párrafo segundo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es procedente el juicio contencioso administrativo federal en contra de decretos de carácter general, también lo es que ese mismo párrafo establece como excepción los Reglamentos, en virtud de que dicha competencia se encuentra reservada a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y toda vez que el Decreto impugnado en el presente juicio, tiene la naturaleza de un Reglamento emitido por el Presidente de la República, en ejercicio de la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I, constitucional, tal y como ha quedado establecido a lo largo del presente fallo, no obstante su decisión, es evidente la improcedencia del presente juicio, en virtud de que este Tribunal no es competente para conocer de su impugnación y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 9, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, resulta procedente sobreseer el presente juicio.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 8, fracción II y 9, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 18, fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, se resuelve:

I. Ha resultado fundado el estudio de oficio de la improcedencia del juicio, en consecuencia;

II. Se sobresee el presente juicio, conforme a los razonamientos expresados en el último considerando de esta sentencia.

III. NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de junio de 2010, por unanimidad de 10 votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas y Francisco Cuevas Godínez, estando ausente el Magistrado Luis Carballo Balvanera.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 5 de julio de 2010, y con fundamento en lo previsto por los artículos 30, fracción V y 47 fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Magistrado Francisco Cuevas Godínez, ante la Secretaria General de Acuerdos: Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, quien da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-SS-370

CONTRADICCIÓN DE SENTENCIAS.- NO SE PRODUCE CUANDO UNO DE LOS CRITERIOS SE EMITIÓ EN CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA.- Si ante este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se denuncia una contradicción de sentencias, pero en una de ellas la Sala se limitó a cumplimentar en forma estricta la ejecutoria de un Tribunal Colegiado, haciendo el pronunciamiento del criterio de la *ad quem*, no se puede concluir que exista la contradicción de sentencias, toda vez que no obstante haber sido emitidas las dos por la Sala Regional de este Tribunal, el criterio de una de ellas corresponde a un órgano jurisdiccional diverso.

Contradicción de Sentencias Núm. 2343/07-12-02-5/Y OTRO/2317/09-PL-05-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de junio de 2010, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretario: Lic. Luis Alberto Placencia Alarcón.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de junio de 2010)

PRECEDENTE:

V-P-SS-96
Juicio No. 12977/97-11-07-2/14597/97-11-07-3/23/99-PL-01-01.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de enero de 2001, por unanimidad de 10 votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Martha Elizabeth Ibarra Navarrete.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de abril de 2001)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año I. No. 10. Octubre 2001. p. 20

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-371

MARCAS EVOCATIVAS.- El concepto de marca evocativa debe entenderse referido a aquellas marcas que no designan o describen de forma cabal y detallada un producto, sino que exclusivamente generan en la memoria del consumidor la evocación o imaginación de alguna cosa, es decir, corresponden a denominaciones o figuras conformadas de un modo arbitrario que sólo despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza. En consecuencia, en los casos de las marcas evocativas, se exige al consumidor, para llegar a comprender qué producto o servicio ampara la marca, hacer uso de la imaginación y del entendimiento, generándose un proceso deductivo entre la marca y el producto o servicio; es por ello, que los signos evocativos son registrables marcariamente, pues no cumplen con el requisito de descriptividad previsto por el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1035/08-EPI-01-9/22/10-PL-08-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de junio de 2010, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010)

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-372

MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO.- SI AL TRADUCIRSE NO SON DESCRIPTIVAS DE LOS SERVICIOS QUE PRETENDE PROTEGER DEBEN REGISTRARSE.- El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece diversos supuestos cuando la marca no es registrable, la fracción IV, previene las

denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, la fracción VI indica la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. Ahora bien, si del análisis que efectúa este Tribunal del conjunto de los elementos de una marca incluyendo su traducción advierte que no es descriptiva de los servicios que pretende proteger, es decir, no son signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, ni tampoco evoca conexión directa con el servicio a proteger, es evidente que dicha marca sí es registrable.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1035/08-EPI-01-9/22/10-PL-08-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de junio de 2010, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de junio de 2010

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-SS-373

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 852/09-EPI-01-7/3036/09-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de mayo de 2010, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de mayo de 2010)

VI-P-SS-374

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1858/08-EPI-01-2/358/10-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de junio de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de junio de 2010)

PRECEDENTE:

VI-P-SS-226
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 348/08-EPI-01-3/1447/09-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de septiembre de 2009, por mayoría de 8 votos a favor y 2 votos con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de noviembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 150

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-375

MARCAS INDICATIVAS O DESCRIPTIVAS.- NO SE DA ESE SUPUESTO CUANDO SUS ELEMENTOS NO SON CARACTERÍSTICOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PRETENDE PROTEGER.- El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece en su primer párrafo y fracción IV que no serán registrables como marcas, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan

incluidas en ese supuesto las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. La fracción VI de dicho precepto establece que no serán registrables como marca la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. Por lo que, si del estudio integral de una marca se advierte que sus elementos no son indicativos ni descriptivos de los productos que pretende proteger en una clase determinada, esto en relación a la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción, además de que la traducción de los elementos de dicha marca no se advierta que son indicativos de los productos a proteger, es evidente que debe concederse el registro de la misma.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1035/08-EPI-01-9/22/10-PL-08-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de junio de 2010, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 21 de junio de 2010)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-SS-376

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 852/09-EPI-01-7/3036/09-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de mayo de 2010, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de mayo de 2010)

VI-P-SS-377

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1858/08-EPI-01-2/358/10-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de junio de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de junio de 2010)

VI-P-SS-378

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 606/09-EPI-01-2/77/10-PL-04-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de mayo de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de mayo de 2010)

VI-P-SS-379

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1828/08-EPI-01-5/659/10-PL-02-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de agosto de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de agosto de 2010)

PRECEDENTES:

VI-P-SS-135
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 28876/07-17-01-3/1816/08-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 4 de marzo de 2009, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de marzo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 17. Mayo 2009. p. 116

VI-P-SS-238
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1589/08-EPI-01-7/1449/09-PL-08-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de octubre de 2009, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 197

VI-P-SS-312
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 992/08-EPI-01-1/2620/09-PL-08-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de abril de 2010, por mayoría de 9 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de abril de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 78

VI-P-SS-313
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1938/08-EPI-01-6/2709/09-PL-01-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de mayo de 2010, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Andrés López Lara.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de mayo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 78

VI-P-SS-314
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2294/08-EPI-01-4/2651/09-PL-01-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de mayo de 2010, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Andrés López Lara.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de mayo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 78

VI-P-SS-315
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2407/08-EPI-01-2/2725/09-PL-01-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de mayo de 2010, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de mayo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 78

C O N S I D E R A N D O :

[...]

CUARTO.- [...]

Así entonces, en virtud de lo hasta este momento precisado y de la valoración de los argumentos y elementos probatorios aportados por las partes en el juicio, este Cuerpo Colegiado estima que los argumentos de la parte actora, resultan **FUNDADOS y suficientes** para declarar la nulidad de la resolución impugnada en el presente juicio, por virtud de la cual se negó a la hoy actora el registro marcario solicitado.

En efecto, a juicio de este Cuerpo Colegiado la demandada incorrectamente determinó que la marca propuesta a registro "**CLEARLY DEFINED"**, es descriptiva de los productos que se pretenden amparar, en virtud de que señala directamente la finalidad de lo mismo, es decir, "**preparaciones para el cuidado del cabello, champúes, acondicionadores para el cabello, espumas (mousses para el cabello), sprays para el cabello, lociones para el cabello; aceites para el cabello, gels para el cabello, ceras para el cabello, cremas para estilizar el cabello, preparaciones colorantes para el cabello; aceites esenciales; cosméticos; dentífricos**".

De igual forma, contrario a lo señalado por la autoridad demandada, los elementos que conforman la denominación "**CLEARLY DEFINED**", ya sea de manera conjunta o separada, no describen los productos que con la misma se pretenden amparar, o bien alguna de las finalidades de dichos productos; es decir, "preparaciones para el cuidado del cabello, champúes, acondicionadores para el cabello, espumas (mousses para el cabello), sprays para el cabello, lociones para el cabello; aceites para el cabello, gels para el cabello, ceras para el cabello, cremas para estilizar el cabello, preparaciones colorantes para el cabello; aceites esenciales; cosméticos; dentífricos".

Ciertamente, se estima que la resolución impugnada no fue emitida con apego a derecho, ya que en la especie no se actualiza el supuesto de prohibición previsto en la fracción IV, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues tal y como ha sido afirmado, contrariamente a lo sostenido por la autoridad demandada, la denominación "**CLEARLY DEFINED**", no puede ser considerada como descriptiva de los productos per se, ni de la finalidad de aquellos que con la misma se pretenden proteger y que se encuentran incluidos en la Clase 03 Internacional, antes referenciada.

En efecto, de ninguna manera puede considerarse que el signo propuesto a registro, "**CLEARLY DEFINED**" resulta descriptivo o implique una idea evidente y directa de los diversos productos que con ella se pretenden amparar y que esencialmente consisten en "preparaciones para el cuidado del cabello, champúes, acondi-

cionadores para el cabello, espumas (mousses para el cabello), sprays para el cabello, lociones para el cabello; aceites para el cabello, gels para el cabello, ceras para el cabello, cremas para estilizar el cabello, preparaciones colorantes para el cabello; aceites esenciales; cosméticos; dentífricos".

Lo anterior es así, si atendemos al concepto que respecto de la acepción "describir" nos proporciona el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española[3], el cual a la letra señala:

[N.E. Se omite transcripción]

Acorde a la definición anterior, tenemos que la acción de describir implicar el delinear, definir, o figurar algo, representándolo de modo que se dé cabal idea de ello, circunstancia que en el caso que nos ocupa, de ninguna manera puede desprenderse del signo marcario "**CLEARLY DEFINED**", ya que en su idioma original (inglés), e incluso en su traducción al castellano, de ninguna manera delinean o definen a los productos que se pretenden amparar con dicho signo marcario y que corresponden a los incluidos en la Clase 03 Internacional.

Robustecen lo antes determinado, el precedente VI-P-SS-241, que ha sido sustentado por este Pleno, mismo que se encuentra publicado en la Revista que edita este Tribunal correspondiente a la Sexta Época, Año III, número 25, Enero 2010, página 7, mismo que en este fallo se **reitera,** y que es del tenor literal siguiente:

> "**MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO.- SI AL TRADUCIRSE NO SON DESCRIPTIVAS DE LOS PRODUCTOS QUE PRETENDE PROTEGER DEBEN REGISTRARSE.**" [N.E. Se omite transcripción]

[3] http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=describir

Es igualmente aplicable al caso, el criterio expuesto en la Tesis I.4o.A.659 A emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, página 1375:

> "**PROPIEDAD INDUSTRIAL. LOS ADJETIVOS (INCLUYENDO PALABRAS EXTRANJERAS) SON REGISTRABLES COMO MARCAS SI NO SE REFIEREN A LAS CUALIDADES ESENCIALES O PREDOMINANTES DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE DENOMINAN, AL TRATARSE DE SIGNOS EVOCATIVOS O SUGESTIVOS.**" [N.E. Se omite transcripción]

De igual forma se considera que contrario a lo sostenido por la autoridad demandada en la resolución que por esta vía se controvierte, el signo marcario propuesto a registro, "**CLEARLY DEFINED**", no resulta ser descriptivo de la finalidad de los productos que se pretende proteger, ya que contrario a lo afirmado por la autoridad demandada, dicha denominación, a juicio de los suscritos Magistrados, no resulta descriptiva de los beneficios o resultados que podrán ser obtenidos mediante el uso o empleo de los productos amparados por el citado registro marcario.

En efecto, si bien la denominación propuesta a registro, en su traducción al castellano, debe entenderse como "CLARAMENTE DEFINIDO", esa expresión no implica una descripción, definición o fijación de los efectos que podrán ser obtenidos con el empleo de los productos protegidos, ya que tal y como expresamente lo refirió la demandada en la resolución impugnada, lo que puede quedar claramente definido pueden ser las características del cabello, o bien del rostro, dependiendo del producto de que se trate.

En este contexto, es que a juicio de los suscritos Magistrados, el hecho de que mediante el signo marcario propuesto a registro, puede inferirse o anticiparse el resultado que el uso o empleo de esos productos podrá producir, no implica de modo alguno que el signo propuesto a registro sea descriptivo, y si por el contrario, puede

afirmarse que en todo caso, se trata de un signo **evocativo** respecto del cual no existe impedimento legal alguno para efectos de su registro.

A este respecto es importante el señalar que efectivamente, por disposición de Ley, se encuentra prohibido el registro de marcas que resulten descriptivas de los productos que pretenden protegerse, mas no así respecto de aquellos registros marcarios que en su integración exclusivamente contengan una evocación a los productos o finalidades de éstos.

Sobre este punto, es importante conceptualizar lo que debemos entender como **marca evocativa**, para lo cual, nos apoyaremos en las definiciones que respecto de ésta nos proporciona tanto la Doctrina, como la jurisprudencia.

En primer término, haremos referencia a la Doctrina, misma que válidamente puede servir de sustento para esta Juzgadora al emitir el fallo que nos ocupa, acorde a lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 2a. LXIII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, página 448, que es del tenor literal siguiente:

> "**DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS.**" [N.E. Se omite transcripción]

Establecido lo anterior, tenemos que la Doctrina define la marca evocativa en los siguientes términos:

[N.E. Se omite transcripción]

Por su parte, el Poder Judicial de la Federación ha emitido diversas tesis en las que define lo que ha de entenderse como "marca evocativa", siendo las más destacadas las siguientes:

"**MARCAS EVOCATIVAS Y NO DESCRIPTIVAS.**"[N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F., 109-114 Sexta Parte. Séptima Época. pág. 132]

"**MARCAS EVOCATIVAS Y DESCRIPTIVAS.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F., 115-120. Sexta Parte. Séptima Época. pág. 104]

"**MARCAS EVOCATIVAS. REGISTRO DE LAS.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F., Tomo X. Octava Época. Tesis: I.3o.A.484 A. pág. 374]

De la interpretación armónica de lo señalado por la Doctrina y por el Poder Judicial, válidamente puede afirmarse entonces, que las marcas "evocativas", no delinean, definen o describen de forma cabal y detallada un producto, exclusivamente generan la evocación o imaginación en la memoria del consumidor de alguna cosa, es decir, corresponden a denominaciones o figuras formadas de un modo arbitrario que despiertan la idea del producto o sugieren su naturaleza o utilidad, y que se relacionan de un modo remoto o indirecto con la mercancía, sin embargo, no conducen directa e inmediatamente a una característica del producto o servicio, pues designan o describen una cualidad o elemento secundario o accidental de éstos.

Es decir, tratándose de las marcas evocativas, evidentemente se exige al consumidor, para llegar a comprender qué producto o servicio ampara, hacer uso de la imaginación y del entendimiento, generándose así un proceso deductivo entre la marca y el producto o servicio.

De esta circunstancia, y considerando lo hasta este punto expuesto, es dable para esta Juzgadora el afirmar que contrario a lo determinado por la autoridad demandada, el registro del signo marcario "CLEARLY DEFINED" solicitado por la actora es plenamente procedente, ya que no se actualiza el supuesto de prohibición establecido por la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, habida cuenta que tal y como ha quedado analizado, no se trata de una marca descriptiva, sino que se trata de una marca de carácter evocativo, cuyo registro es permitido,

encontrándose por tanto satisfecha la exigencia señalada en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, conforme al cual se entiende como marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, como acontece en la especie, ya que el registro "**CLEARLY DEFINED**" tiene la calidad de distinguir productos de la Clase 03 Internacional de otros de la misma especie y clase en el mercado.

Corrobora la conclusión alcanzada el Precedente VI-P-SS-238 sustentado por este Pleno, publicado en la Revista 24, Sexta Época, Año II, Diciembre de 2009, página 197, mismo que en el presente fallo **se reitera,** y que es del tenor literal siguiente:

> "**MARCAS INDICATIVAS O DESCRIPTIVAS.- NO SE DA ESE SUPUESTO CUANDO SUS ELEMENTOS NO SON CARACTERÍSTICOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PRETENDE PROTEGER.**" [N.E. Se omite transcripción]

En consecuencia, y como corolario de lo hasta este punto expuesto, resulta **FUNDADO** el concepto de impugnación formulado por la actora, en cuanto a que la citada marca **NO** encuadra en los supuestos de prohibición previstos en la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, ni la fracción VI de dicho precepto invocada por la autoridad demandada.

Así, es evidente que la autoridad demandada al emitir la resolución impugnada apreció en forma equivocada los hechos que la motivaron y en contravención a las disposiciones aplicadas, de acuerdo a lo previsto por la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De ahí que se declara la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad, emita una nueva en la que, siguiendo los lineamientos plasmados en el presente fallo, otorgue el registro de marca al signo de referencia en la clase internacional 03.

[...]

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracciones I, II y IV, penúltimo párrafo y 52, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; así como en los artículos 14, fracciones XI y XIII, y 18, fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- Ha resultado **fundado** el estudio oficioso de la competencia de la autoridad emisora del oficio de impedimento legal con código de barras número **20060498653**, de trece de noviembre de dos mil seis, en términos del Considerando Tercero de este fallo.

II.- La parte actora **probó** los extremos de su pretensión, en consecuencia;

III.- Se **DECLARA LA NULIDAD** de la resolución impugnada, misma que quedó debidamente identificada en el resultando primero de este fallo, **PARA EL EFECTO** señalado en la parte final del Considerando último de esta sentencia.

IV.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de junio de 2010, por mayoría de 7 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola y Francisco Cuevas Godínez; y 2 votos en contra de los Magistrados Jorge Alberto García Cáceres y Alejandro Sánchez Hernández.

Los Magistrados Jorge Alberto García Cáceres y Alejandro Sánchez Hernández se reservaron su derecho para formular voto particular.

Encontrándose ausentes los Magistrados Juan Manuel Jiménez Illescas y Luis Carballo Balvanera.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Olga Hernández Espíndola, cuya ponencia se aprobó en sus términos.

Se formuló el presente engrose el día 03 de agosto de 2010, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción V y 47, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, firma el C. Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1035/08-EPI-01-9/22/10-PL-08-10

El Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, se reservó su derecho para formular voto particular en el presente asunto, el cual respetuosamente se manifiesta en los siguientes términos:

Para mejor comprensión del motivo de mi desacuerdo, expongo lo siguiente:

El fallo mayoritario en el Considerando Tercero, se analizó de oficio la fundamentación de la competencia de la autoridad que emitió el oficio de impedimento legal con código de barras 20060498653 de fecha 13 de noviembre de 2006, emitida por la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas “A”, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y concluyó que en dicho oficio no se encuentra debidamente fundada la competencia, ya que no cita el párrafo aplicable del artículo 6 del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el que se advierta que le fue delegada la competencia para emitir dicho acto

.

No comparto la sentencia mayoritaria, toda vez que se omitió el estudio oficioso de la fundamentación de la competencia de la autoridad que emitió la resolución impugnada contenida en el oficio con código de barras número 20070328813 MA/M/1985/0794543, de nueve de agosto de dos mil siete, emitida por la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas "B" de la Subdirección Divisional de Examen de Signos Distintivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante la cual se negó el registro de la marca "CLEARLY DEFINED"; la cual tiene el mismo vicio de legalidad que el oficio de impedimento analizado, esto es, que no se cita el párrafo aplicable del artículo 6 del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el que se advierta que le fue delegada la competencia para emitir dicho acto.

Lo anterior, es contrario a lo dispuesto por la fracción I y penúltimo párrafo del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con las jurisprudencias 2a./J. 218/2007 y 2a./J. 219/2007 emitidas por las Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (transcritas en la sentencia), en las que se establece la obligación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de analizar de oficio por ser una cuestión de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada, o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución, tal y como se desprende de la transcripción de dicho precepto legal.

> "**ARTÍCULO 51.-** Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:
> "**I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución**.
> "II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.

"III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada.
"IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto.
"V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.
"Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones II y III del presente artículo, se considera que no afectan las defensas del particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios siguientes:
"a) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden.
"b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba notificarse.
"c) Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento, siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el interesado o con su representante legal.
"d) Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitados.
"e) Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsa a terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados.
"f) Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el oficio de observaciones o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos efectos.

"**El Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución.**
"Los órganos arbitrales y de otra naturaleza, derivados de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de prácticas desleales, contenidos en tratados y convenios internacionales de los que México sea parte, no podrán revisar de oficio las causales a que se refiere este artículo."

En este orden de ideas, se debió analizar la fundamentación de la competencia de la autoridad que emitió la resolución impugnada, y al ser ilegal esta, la nulidad decretada en la sentencia, debió ser para el efecto de que la demandada emitiera una nueva resolución en la que fundara debidamente su competencia y otorgue el registro marcario, de lo contrario, al momento de que se emita la nueva resolución, la autoridad puede incurrir en el mismo vicio de legalidad dejado de analizar.

MAG. JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1035/08-EPI-01-9/22/10-PL-08-10

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, disiento del criterio aprobado por mayoría en el presente asunto, por las razones que enseguida expreso.

En el Considerando Cuarto del fallo mayoritario, se determina que son fundados los argumentos de la parte actora, pues la autoridad demandada, incorrectamente determinó que la marca propuesta a registro "**CLEARLY DEFINED**", es descriptiva de los productos que se pretenden amparar, correspondientes a la clase 03 internacional, consistentes en: preparaciones para el cuidado del cabello, champúes, acon-

dicionadores para el cabello, espumas (mousses para el cabello), sprays para el cabello, lociones para el cabello; aceites para el cabello, gels para el cabello, ceras para el cabello, cremas para estilizar el cabello, preparaciones colorantes para el cabello; aceites esenciales; cosméticos; dentífricos.

En esos términos, considero que, contrario a la conclusión mayoritaria, la marca cuyo registro solicita la parte actora, no es registrable pues, como quedó precisado en la propia resolución mayoritaria, la traducción al idioma español de las palabras "**CLEARLY DEFINED**", es: "**CLARAMENTE DEFINIDO**"; por tanto, es dable concluir que tal denominación es descriptiva de las características esenciales y particulares, especie, calidad y destino de los productos que pretende amparar, pues el objeto de las preparaciones, champúes, acondicionadores, sprays y demás productos para el cuidado del cabello, precisamente, es definirlo de manera clara en un estilo de peinado, color, textura y, en general, en su presentación.

Aunado a ello, considero que la marca cuyo registro solicita la parte actora, no es registrable pues se forma de palabras cuya traducción al idioma español -"**CLARAMENTE DEFINIDO**"-, constituye una construcción artificial de palabras no registrables, por ser de uso común.

Ciertamente, conforme al artículo 90, fracción VI, de la Ley de la Propiedad Industrial, fundamento invocado por la autoridad demandada para sustentar su actuación, no será registrable la traducción a otros idiomas de la construcción artificial de palabras no registrables; quedando así de manifiesto que, en el caso a estudio, se actualiza la hipótesis legal en cita, pues considero que no se debe otorgar el registro respecto de las palabras: CLARAMENTE y DEFINIDO, ya que, además de ser de uso común, la construcción de la denominación que se pretende registrar, carece de todo rasgo distintivo, como expresamente lo señaló la autoridad demandada, en las páginas 2 y 6 de la resolución impugnada, al expresar: "*por lo tanto, carece de distintividad, no pudiendo obtener el derecho exclusivo a su uso, ... dado que el signo propuesto carece de distintividad además de ser descriptivo de los productos a amparar*".

Es de hacer notar que, en la resolución mayoritaria, no se analiza la determinación de la autoridad demandada, en el sentido de que la marca que se pretende registrar "carece de distintividad"; conclusión que considero correcta, pues la expresión "**CLARAMENTE DEFINIDO**", no es en sí suficiente para considerar que la marca propuesta a registro, cumple con el requisito en mención, esto es, que sea distintiva.

Asimismo, cabe considerar que de otorgar el registro de marca solicitado por la actora, prácticamente, se estaría protegiendo a su favor, el uso exclusivo de dichas palabras, a través de una construcción artificial, que de ningún modo otorga carácter distintivo a los productos que se pretenden proteger.

De lo razonado, concluyo que, contrario a lo dispuesto en el artículo 90, fracciones IV y VI, de la Ley de la Propiedad Industrial, se ordena otorgar el registro de marca solicitado por la actora, no obstante que carece de distintividad y es descriptiva de los productos que pretende proteger.

MAG. ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

DECLINACIÓN DE VOTO PARTICULAR QUE REALIZA EL C. MAGISTRADO LUIS CARBALLO BALVANERA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 852/09-EPI-01-7/3036/09-PL-07-10

El suscrito en sesión del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, celebrada el día 24 de mayo de 2010, me reservé el derecho para formular voto particular en el presente asunto, mismo que declino.

MAG. LUIS CARBALLO BALVANERA

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-SS-380

LEGISLACIÓN DOMÉSTICA. SU APLICACIÓN NO PERMITE SUSTENTARSE EN CIRCUNSTANCIAS DE HECHOS RELATIVAS AL MERCADO OCURRIDAS EN EL EXTRANJERO.- De la interpretación conjunta y armónica a los artículos 1º, 2º, fracciones I y V, 87, 88, 89, fracción I, 90, fracción IV y 117, de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con lo previsto en el inciso 1), del artículo 6, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se arriba a la conclusión, que las circunstancias de hechos relativas al mercado acaecidas en el extranjero, precisadas en una página de Internet, no pueden apoyar la negativa de registro de un signo marcario, toda vez que tales circunstancias en que debe sujetarse la autoridad para tal negativa de registro marcario, o bien, de su concesión, es la imperante en el país y conforme a su legislación, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1391/08-EPI-01-7/2650/09-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de junio de 2010, por mayoría de 7 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 2 votos en contra .- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de junio de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

Precisado lo anterior y de la reproducción a los documentos exhibidos por el actor, se desprende que el siete de marzo de dos mil seis, la empresa hoy demandante, obtuvo de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América el Registro número 3,065,179, de la marca "CORD BLOOD REGISTRY", **para amparar los servicios de la clase 39 internacional, consistentes en** "**la transportación y el almacenaje de sangre, componentes de la sangre y células madre**", así como para amparar los servicios de la clase 44 internacional, consistentes en: Servicios médicos, especialmente, la recolección, prueba, procesamiento y preservación de sangre, componentes de la sangre y células madre; con una duración de diez años, a partir de la fecha en cita.

Asimismo, **se desprende que no se hace la reivindicación para el derecho exclusivo del uso de** "**CORD BLOOD**"**, aparte de la marca como está mostrada** "**CORD BLOOD REGISTRY**", lo que significa que, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, no otorga el uso exclusivo de tales palabras.

Lo anterior confirma que las palabras que componen la marca, se mantienen libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizadas por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado, tal como se anotó en líneas que anteceden.

Por tanto, resulta innegable que el supracitado signo "CORD BLOOD REGISTRY", en su traducción al español, "REGISTRO DE CORDÓN DE SANGRE", o como lo cita el actor "CORDÓN, SANGRE, REGISTRO" no encuadra en las hipótesis de prohibición previstas en las fracciones IV y VI, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, como tampoco en las señaladas en el apartado B, del artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, dado que no describe ninguna de las finalidades de los servicios a proteger.

Ilustra la determinación anterior, la jurisprudencia 431, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice 2000, Séptima Época, Tomo XI, página 476, que señala:

"**MARCAS DESCRIPTIVAS.**" [N.E. Se omite transcripción]

No pasa desapercibido para este Órgano Juzgador, que la autoridad señala que el signo describe principalmente que los servicios de almacenaje de sangre, componentes sanguíneos y células madre, es precisamente llevar un registro de toda la sangre de cordón umbilical que se almacena, por lo que no permite distinguir un servicio de otro de su misma clase, dado que cualquier otro prestador de los mismos servicios tendría la necesidad de hacer mención que una de la finalidades de dichos servicios es llevar un adecuado registro de sangre de cordón umbilical, lo cual no resulta correcto, ya que como se señaló anteriormente la autoridad introduce la palabra "umbilical", la cual no forma parte del signo de que se trata.

Además, porque los servicios que se pretenden amparar con el supracitado signo, no son ni controlar ni registrar, sino son servicios de transporte, almacenaje y distribución de sangre, componentes sanguíneos y células madre, razón por la que debió concederse el registro **tal cual es** registrado en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, con sustento en el Convenio de París.

Lo anterior, por que como ya se indicó, tal signo no describe ni la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, origen o época de producción de los servicios de que se trata, siendo evidente que fue el propio país de origen, quien no hizo reivindicación alguna para el derecho exclusivo del uso de "CORD BLOOD", aparte de la marca como está mostrada, por lo que contrario a lo aducido por la autoridad, es cierto que tal signo más que descriptivo, es evocativo de alguno de los servicios que con el mismo se pretenden proteger, tal como quedó precisado en párrafos que anteceden.

Por último, a consideración de esta Juzgadora, son **parcialmente fundados** los argumentos del actor, resumidos en el punto 4, pues respecto a que la autoridad señaló en el acto combatido, que al buscar en Internet las palabras "CORD BLOOD REGISTRY", aparecieron un sin número de direcciones con vínculos a sitios de

Internet, ello no es así, pues de la lectura integral a la resolución impugnada, esta Juzgadora no advierte lo manifestado al respecto.

Sin embargo, le **asiste la razón**, cuando aduce que la autoridad no puede basar la negativa del registro, en una página de Internet española, en la que se cita el, "Registro Español de Donantes de Medula Ósea (REDMO)", el cual no corresponde a la legislación doméstica, ya que dicho centro no existe en México.

En efecto, para comprender lo que aquí se resuelve, es necesario precisar lo señalado por la autoridad en el acto que se combate, lo cual es del tenor siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

La transcripción de cuenta, evidencia que en el acto impugnado la demandada, para negar el registro que se trata, hace la cita de la página http://www.aecientificos.es/empresas/ercientificos/intereshtml/cordonumbilical/cordonumbilical.htm., la cual refleja circunstancias de hecho relativos al mercado que ocurren en España y no en México, lo que resulta indebido, según se explica a continuación.

En principio, es conveniente establecer que las páginas de la Internet, no forman parte de la legislación doméstica, ya que éstas son un **medio de comunicación masivo** al que diariamente millones de personas acceden desde todas partes del mundo.

No obstante lo anterior, y conforme lo previsto por el artículo 50, párrafos primero y tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de resolver debidamente la pretensión del actor, deducida del agravio que se analiza, es de señalar que, es cierto que la autoridad se encuentra imposibilitada para sustentar la negativa de registro en las circunstancias de hecho, relativos al mercado, ocurridos en el extranjero, dado que conforme a la legislación doméstica, debe regirse conforme al mercado y situaciones de hecho ocurridos en México.

En efecto, sustenta tal determinación, lo previsto por los artículos 1º, 2º, fracciones I y V, 87, 88, 89, fracción I, 90, fracción IV y 117, de la Ley de la Propiedad Industrial, que en la parte conducente disponen:

[N.E. Se omite transcripción]

De la interpretación conjunta y armónica de los artículos transcritos, se tiene lo siguiente:

1. Que **las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial son** de orden público y de **observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido por los Tratados Internacionales de los que México sea parte**.

2. Que la Ley de la Propiedad Industrial, tiene por objeto, entre otros, proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de marcas;

3. Para tal objetivo, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, **podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten**, una vez que hayan **obtenido su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial**.

4. Que debe entenderse por marca, todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase **en el mercado**.

5. Que las denominaciones, que considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios tratan de protegerse como marcas, quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas **que en el comercio** sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.

6. Que podrá reconocerse derecho de prioridad, **cuando en México**, se solicite un registro de marca, dentro de los plazos que determinen los Tratados internacionales.

En aplicación a los artículos citados, se arriba a la conclusión, como ya se dijo, que las circunstancias de hecho acaecidas en el extranjero, precisadas en una página de Internet, no pueden apoyar la negativa del registro de que se trata, toda vez que las circunstancias o hechos de mercado en que debe sujetarse la autoridad para tal negativa de registro marcario, o bien en su caso, de su concesión, es la imperante en el país y conforme a su legislación, sin perjuicio de lo establecido en los Tratado Internacionales de los que México sea parte.

Ello se ve reforzado por el artículo 6, inciso 1), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en cuya parte conducente, establece:

[N.E. Se omite transcripción]

Conforme el artículo citado, se tiene, que las condiciones de registro de las marcas serán determinadas en cada país de la unión por su legislación nacional.

Luego entonces, acorde con lo previsto con dicho numeral del Convenio de París, en relación con los artículos antes transcritos de la Ley de la Propiedad Industrial, es inconcuso que la demandada para sustentar la negativa de registro del signo marcario solicitado, no debió citar la página de Internet de que se trata, toda vez que se encuentra constreñida a tomar en consideración la legislación de México, conforme la cual, como quedó apuntado con anterioridad, la sujeta a tomar en consideración para efectos de las solicitudes de un registro marcario, las circunstancias de hecho relativos al mercado que ocurrieron en el país.

Además, de que en el caso, se trata de una denominación, cuyo estudio comprende un enunciado, que por regla general, no es susceptible de ser probado, al no referirse a hechos, ya que para su análisis, el operador debe limitarse a realizar una operación mental, que jurídicamente se conoce como subsunción, a efecto de comprobar que el supuesto de hecho encuadra en el caso hipotético previsto por el legislador.

De esta manera, la autoridad está facultada para decidir sobre el registro marcario solicitado, atendiendo exclusivamente a las palabras o signos que integran la marca propuesta, y corroborar si éstas son descriptivas de los productos o servicios que tratan de ampararse como marcas, motivando debidamente su conclusión, aun ante la inexistencia de alguna de las pruebas permitidas por la ley.

Ello es así, pues sostener un criterio en contrario implicaría aceptar que el lenguaje está sujeto a prueba; es decir, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estuviera obligado a demostrar, con material probatorio, el significado de las palabras que forman una marca que se pretende registrar, para de esta manera estar en aptitud de resolver si son descriptivas o indicativas, lo cual es materialmente imposible.

Lo anterior, encuentra sustento en la aplicación de la tesis I.7o.A.448 A sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 2041, que dice:

> "**MARCAS DESCRIPTIVAS. PARA DETERMINAR QUE TIENEN ESE CARÁCTER, EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI), POR REGLA GENERAL, NO DEBE ALLEGARSE DE PRUEBAS.**" [N.E. Se omite transcripción]

De ello, se concluye que la autoridad apreció de forma equivocada el signo propuesto a registro, con la evidente violación a lo previsto por el artículo 6 quinquies, apartado A, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad industrial, dado que tal signo no se ubica en las hipótesis de prohibición establecidas en los artículos 90, fracción IV y VI, de la Ley de la Propiedad Industrial y apartado B, del referido artículo del Convenio citado, como indebidamente lo consideró la autoridad, por lo que se impone, declarar la nulidad de la resolución impugnada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracciones III y IV, 52, fracción III y segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,

para el efecto de que la autoridad emita una nueva resolución, dentro del plazo de cuatro meses, en la que otorgue el registro del signo "CORD BLOOD REGISTRY", siguiendo los lineamientos precisados en este fallo.

Por lo expuesto y fundado, así como con apoyo en los artículos 18, fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 49, 50, 51, fracciones III, IV y 52, fracción III, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- Resultó procedente el presente juicio, en el que la parte actora acreditó su pretensión, por tanto;

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, detallada en el Resultando 1° del presente fallo, para los efectos señalados en la parte final del Considerando tercero de esta sentencia.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada del presente fallo, devuélvanse los autos a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente asunto, y en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 28 de junio de 2010, por mayoría de 7 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Nora Elizabeth Urby Genel, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Olga Hernández Espíndola y Juan Manuel Jiménez Illescas; y 1 con los resolutivos del C. Magistrado Luis Carballo Balvanera y, 2 votos en contra de los CC. Magistrados Jorge Alberto García Cáceres y Silvia Eugenia Díaz Vega, reservándose esta última su derecho a formular voto particular. Estuvo ausente el C. Magistrado Francisco Cuevas Godínez

Fue Ponente el Magistrado Luis Caballo Balvanera, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 2 de agosto de 2010 y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30, fracción V y 47, fracción III de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

VI-P-SS-381

BENEFICIOS PREVISTOS EN LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SU INVOCACIÓN NO IMPLICA LA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES FISCALES.- Conforme al artículo 5° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los beneficios establecidos en los tratados para evitar la doble tributación que haya suscrito nuestro país, sólo serán aplicables a los contribuyentes que acrediten ser residentes en el país de que se trate, y cumplan con las disposiciones del propio tratado y de las demás disposiciones de procedimiento contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, de modo que la invocación de tales beneficios en una consulta planteada a las autoridades fiscales, en lugar de lo que establezca la legislación secundaria nacional, no puede considerarse un tema de interpretación o aplicación directa de algún precepto constitucional, y mucho menos un problema de jerarquía de las normas de un tratado internacional sobre las de la legislación secundaria, pues ese análisis es innecesario, en virtud de que la posibilidad de aplicar esos beneficios, bajo ciertos requisitos, está prevista en la propia Ley del Impuesto sobre la Renta.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19604/06-17-02-5/1436/08-PL-01-09.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de julio de 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 2 votos con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Andrés López Lara.
(Tesis aprobada en sesión de 5 de julio de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

CUARTO.- [...]

De lo antes resumido se desprende con claridad que, contrario a lo sostenido por la autoridad demandada, las hoy actoras no formularon planteamiento alguno relativo a la interpretación o aplicación directa de algún artículo de la Constitución Federal, sino que solamente formularon una consulta sobre una situación real y concreta, consistente en que se les confirmara el criterio de que los gastos a prorrata que erogaron a favor de Cofra Holding AG, sí resultan deducibles para la determinación del impuesto sobre la renta a su cargo, de conformidad con lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 22 del Convenio para evitar la Doble Imposición celebrado entre México y Suiza, por lo que pueden considerar dicha deducción al momento de determinar su resultado fiscal del ejercicio que corresponda.

Se afirma que la consulta formulada por las demandantes no consistió en la interpretación o aplicación directa de algún precepto constitucional, ni mucho menos en un problema de jerarquía de las normas de un tratado internacional sobre las de la legislación secundaria, en virtud de que lo que aquéllas hicieron valer es que el artículo 22 del Convenio para Evitar la Doble Imposición celebrado entre México y Suiza, contiene mayores beneficios que la legislación nacional, concretamente el artículo 32, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que al considerar que reúnen los requisitos establecidos en el citado convenio, tales beneficios les son aplicables.

Es decir, las hoy actoras no plantearon a la autoridad tema alguno de constitucionalidad ni de jerarquía de normas, aunque hayan citado en su consulta esta última expresión, sino que invocaron la aplicación de los beneficios que establece un tratado para evitar la doble tributación suscrito por nuestro país, lo cual está previsto en el primer párrafo del artículo 5° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mismo que a continuación se transcribe:

[N.E. Se omite transcripción]

Como se puede observar, el precepto transcrito establece que los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación sólo serán aplicables a los contribuyentes que acrediten ser residentes en el país de que se trate y cumplan con las disposiciones del propio tratado y de las demás disposiciones de procedimiento contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que las demandadas no plantearon a la autoridad demandada que interpretara si el artículo 22 del Convenio para Evitar la Doble Imposición celebrado entre México y Suiza, debe prevalecer sobre el artículo 32 de aquélla, sino que al considerar que el artículo 22 del citado convenio establece mayores beneficios fiscales que la legislación nacional de la materia, sometieron a consulta de la autoridad la confirmación del criterio de que ellas son receptoras y puede aplicar tales beneficios porque reúnen los requisitos necesarios para ello.

De modo que las enjuiciantes no le pidieron a la demandada que les interpretara el alcance o sentido del artículo 133 constitucional, como tampoco que les confirmara si los preceptos de un convenio internacional para evitar la doble tributación suscrito por nuestro país están por encima o son jerárquicamente superiores a los de una legislación secundaria federal, lo cual tampoco era necesario analizar, puesto que la posibilidad de aplicar esos beneficios, bajo ciertos requisitos, la prevé la propia Ley del Impuesto sobre la Renta, siendo por ello infundado que se actualizara el supuesto del segundo párrafo del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2004, el cual a la letra establece:

[N.E. Se omite transcripción]

Por las razones anotadas, como la consulta formulada por las hoy actoras no versó sobre la interpretación o aplicación de precepto alguno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino únicamente en la confirmación de que a las empresas enjuiciantes les son aplicables los beneficios previstos en el artículo 22 del Convenio para Evitar la Doble Imposición celebrado entre México y Suiza, porque estiman que reúnen los requisitos necesarios para ello y que, por tanto, pueden deducir gastos a prorrata erogados con un residente en el extranjero, es indudable que

la autoridad demandada sí estaba obligada a resolver esa consulta y, al no hacerlo, se puede configurar la negativa ficta prevista en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, por lo que la causal de improcedencia en estudio resulta **infundada**.

Una vez concluido lo anterior, se procede a determinar si existe o no la negativa ficta impugnada por las demandantes y, en consecuencia, si es fundada o no la otra causal de improcedencia planteada por la demandada al contestar la demanda.

Al respecto es necesario transcribir el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación vigente en el año 2004, por ser el año en el que las actoras formularon su consulta a la autoridad:

[N.E. Se omite transcripción]

Del precepto legal transcrito se deduce que la negativa ficta se configura cuando habiéndose formulado una petición o instancia, la autoridad no dicta y notifica legalmente la resolución correspondiente en un plazo de tres meses, por lo que el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió en sentido negativo su promoción e interponer los medios de defensa procedentes en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución expresa, o bien, esperar a que ésta se dicte.

Así también, que cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver su instancia o petición, el plazo antes mencionado comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido.

Ahora bien, como se precisó en el resultando 1° de este fallo, el acto impugnado es la negativa ficta recaída a la solicitud de confirmación de criterio presentada el 9 de noviembre de 2004 ante la Administración Central Jurídico Internacional y de Normatividad de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, en el sentido de que es procedente la deducción de los gastos a prorrata en que las

empresas demandantes incurrieron a favor de Cofra Holding AG, por los servicios que ésta les presta a las empresas demandantes. Dicha solicitud consta a fojas 58 a 66 y ya fue transcrita.

En respuesta al escrito antes citado, mediante oficio número 330-SAT-II-10127, del 29 de marzo de 2005, visible a fojas 67 a 69 de autos, el Administrador de Consultas y Autorizaciones "1", de la Administración Central Jurídico Internacional y de Normatividad de Grandes Contribuyentes, requirió a las demandantes que dentro del plazo de diez días exhibieran diversa documentación e información para estar en posibilidad de resolver la consulta que plantearon y en respuesta a dicho oficio, el 13 de mayo de 2005 las actoras presentaron un escrito, dando contestación al citado oficio de requerimiento.

Posteriormente, mediante oficio número 330-SAT-II-17556, del 11 de octubre de 2005, visible a fojas 5151[Sic] a 517 de autos, el Administrador de Consultas y Autorizaciones Internacionales "1", requirió a las actoras que dentro del plazo de diez días exhibieran información y documentación complementaria para resolver su consulta, siendo que el 26 de octubre de 2005 las actoras presentaron un escrito ante esa autoridad, dando respuesta al requerimiento formulado.

Por tanto, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, el plazo de tres meses para resolver la consulta que las actoras presentaron comenzó a computarse a partir del 26 de octubre de 2005, cuando dieron cumplimiento al segundo requerimiento que la autoridad demandada les hizo a través del oficio número 330-SAT-II-17556, y de esa fecha al 21 de junio de 2006, cuando se presentó la demanda ante la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal, resulta evidente que transcurrió en exceso el citado plazo, sin que la autoridad demandada acredite que se haya emitido y notificado legalmente a las enjuiciantes la resolución a su consulta dentro de dicho plazo, ni mucho menos que habiéndose emitido fuera de ese plazo se les haya notificado antes de que promovieran el presente juicio, por lo que debe considerarse plenamente acreditada la existencia de la negativa ficta impugnada.

Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia II-J-124, publicada en la Revista de este Tribunal, correspondiente a la Segunda Época, año IV, No. 28, abril de 1982, página 375, que es del tenor siguiente:

> "**NEGATIVA FICTA.- SE CONFIGURA SI LA AUTORIDAD NO NOTIFICA AL PROMOVENTE CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, LA RESOLUCIÓN EXPRESA.**" [N.E. Se omite transcripción]

La jurisprudencia antes citada es aplicable, aún y cuando en ella se interpreta el artículo 92 del anterior Código Fiscal de la Federación, pues lo relevantes es que la figura regulada en dicho precepto se contiene en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación vigente, en el que subsiste de igual forma la figura de la negativa ficta.

Por tanto, tomando en cuenta que la consulta presentada ante la autoridad demandada el 9 de noviembre de 2004 sí se formuló sobre una situación real y concreta, que no versó sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución Federal, lo que hacía que aquélla estuviera obligada a emitir una resolución sobre el fondo de lo solicitado y al no haber dado respuesta dentro del plazo de tres meses establecido en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, es indiscutible que sí se configuró la negativa ficta impugnada, siendo por ello infundada la causa de improcedencia invocada por la demandada y que está prevista en el artículo 8°, fracción XI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues contrario a su dicho, de las constancias de autos se desprende con claridad que sí existe el acto impugnado.

[…]

En virtud de todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104, 105 y 106 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de revisión R.F. 39/2010, se deja sin efectos la sentencia de fecha 8 de mayo de 2009.

II. Ha resultado infundada la causal de improcedencia planteada por la autoridad demandada y, en consecuencia, no se sobresee el juicio;

III. Las actoras no acreditaron los hechos constitutivos de su acción, en consecuencia:

IV. Se reconoce la validez de la resolución impugnada, descrita en el Resultando Primero de este fallo, por los motivos y fundamentos señalados en el último considerando del mismo.

V. Mediante atento oficio que se gire al Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remítase copia certificada de este fallo para que verifique el cumplimiento dado a la ejecutoria de fecha 31 de mayo de 2010, pronunciada en el recurso de revisión R.F. 39/2010, conexo con el D.A. 50/2010.

VI. NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión celebrada el día 5 de julio de 2010, por mayoría de ocho votos a favor de los Magistrados, Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Jorge Alberto García Cáceres, Alejandro Sánchez Hernández, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Juan Manuel Jiménez Illescas y Francisco Cuevas Godínez, más dos votos con los puntos resolutivos de los Magistrados Nora Elizabeth Urby Genel y Luis Carballo Balvanera, estando ausente el Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo.

Fue ponente en el presente asunto el Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 12 de julio de 2010 y con fundamento en los artículos 30, fracción V, y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-SS-382

COMPETENCIA DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- SE SURTE CUANDO EN LA DEMANDA SE INVOCA LA VIOLACIÓN A DISPOSICIONES CONTENIDAS EN UNA REGLA DE CARÁCTER GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS TRATADOS EN MATERIA COMERCIAL.- El artículo 18, fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que compete al Pleno de la Sala Superior resolver los juicios en los que la resolución impugnada se encuentre fundada en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se hubiere aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos. Ahora bien, si en una demanda, o en la resolución impugnada en el juicio se invoca una resolución por la que se establecen reglas de carácter general relativas a la aplicación de disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es competente el Pleno de la Sala Superior, en virtud de que si bien no se invoca el tratado respectivo sí se hace respecto de las reglas que sirven para interpretar, aplicar y administrar los capítulos respectivos del mismo, por lo que en ese sentido se surte la competencia aludida.

Juicio Contencioso Administrativo Num. 9362/09-17-01-4/497/10-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de agosto de 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de agosto de 2010)

PRECEDENTES:

VI-P-SS-292
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 16606/08-17-04-6/1474/09-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de octubre de 2009, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de octubre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 151

VI-P-SS-297
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 779/08-06-01-2/1085/09-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de septiembre de 2009, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de abril de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 7

VI-P-SS-298
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4249/08-07-01-8/3004/09-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de abril de 2010, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de abril de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 7

LEY ADUANERA

VI-P-SS-383

AGENTE ADUANAL.- EL ALCANCE DE SU RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.- El artículo 53, fracción II de la Ley Aduanera dispone que, los agentes aduanales y sus mandatarios autorizados son responsables solidarios del pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que se originen con motivo de las importaciones o exportaciones en cuyo despacho intervengan personalmente o por conducto de sus empleados autorizados. En esos términos, la responsabilidad del agente aduanal deriva del hecho mismo de haber intervenido personalmente o por conducto de sus empleados autorizados, en el despacho aduanero para la importación o exportación de mercancías, manteniéndose dicha responsabilidad por el periodo en el cual las autoridades aduaneras están en posibilidad legal de ejercer sus facultades de determinación de contribuciones y demás créditos fiscales, así como para sancionar el incumplimiento a la ley.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12306/07-17-01-6/815/09-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de septiembre de 2010, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Oscar Elizarrarás Dorantes.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de septiembre de 2010)

PRECEDENTES:

VI-P-SS-152
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 18730/07-17-11-7/2208/08-PL-07-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de marzo de 2009, por mayoría de 9 votos a favor y

1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 30 de marzo de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 18. Junio 2009. p. 279

VI-P-SS-324
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 770/08-18-01-8/363/09-PL-08-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de mayo de 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de mayo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 108

PRIMERA SECCIÓN

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-1aS-365

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO PLANTEADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DELEGACIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.- ES INFUNDADO SI LO SUSTENTA EN EL HECHO DE QUE AL SER OTRA AUTORIDAD LA FACULTADA PARA RESOLVER LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL ACTOR DEBE ATENDERSE A LA SEDE DE AQUÉLLA.- El artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dispone que las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón del territorio atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante. Por lo que si el Jefe de la Unidad Jurídica Delegacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, interpone incidente de incompetencia en razón del territorio, argumentando que la autoridad facultada para resolver la solicitud de la parte actora es la Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, y que la Sala Regional competente para conocer del juicio es la que se encuentre dentro de la circunscripción territorial de su sede, dicho argumento es infundado, toda vez que para determinar la competencia territorial cuando el acto controvertido versa sobre la asignación, revisión, incremento o modificación de la cuota diaria de pensión, reconsideración de la cuota compensatoria, y todo lo inherente a dicha materia, debe atenderse al domicilio fiscal de la parte actora, y no así a la sede de la autoridad facultada para resolver al respecto, ello en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Incidente de Incompetencia Núm. 3560/09-03-01-5/474/10-S1-05-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de agosto de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretario: Lic. Luis Alberto Placencia Alarcón.
(Tesis aprobada en sesión de 5 de agosto de 2010)

PRECEDENTES:

VI-P-1aS-351
Incidente de Incompetencia Núm. 3917/08-06-01-2/1273/09-S1-02-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de junio de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María del Consuelo Hernández Márquez.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de junio de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 32. Agosto 2010. p. 101

VI-P-1aS-352
Incidente de Incompetencia Núm. 3466/09-03-01-3/572/10-S1-04-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1° de julio de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz.
(Tesis aprobada en sesión de 1 de julio de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 32. Agosto 2010. p. 101

VI-P-1aS-360
Incidente de Incompetencia Núm. 2962/09-03-01-3/628/10-S1-05-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de julio de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con

los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de julio de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 33. Septiembre 2010. p. 17

VI-P-1aS-361
Incidente de Incompetencia Núm. 3711/09-03-01-3/691/10-S1-02-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de agosto de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
(Tesis aprobada en sesión de 5 de agosto de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 33. Septiembre 2010. p. 17

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-1aS-366

CASO EN EL QUE NO SE CONFIGURA EL REINICIO DE LA EJECUCIÓN.- De acuerdo a lo que dispone el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se considera que se reinicia la ejecución del acto controvertido, cuando una vez solicitada la suspensión y concedida la misma, la autoridad, la reinicia sin justificación legal; pero el caso en que la autoridad amplía un embargo, no puede considerarse como un reinicio de ejecución del acto controvertido, toda vez que está ejerciendo sus facultades relativas a la observancia de la suficiencia de la garantía del crédito fiscal, supuesto éste que evidentemente no constituye un reinicio de la ejecución del acto controvertido.

Recurso de Reclamación Núm. 295/09-18-01-9/1150/10-S1-02-05.- Resuelto por la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de agosto de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Beatriz Rodríguez Figueroa.
(Tesis aprobada en sesión de 12 de agosto de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

A juicio de esta Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los argumentos de la autoridad recurrente contenidos en el **inciso a)** relativos a que la Sala Instructora al dictar la sentencia interlocutoria

inobservó lo que dispone el artículo 28, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo resultan fundados, ya que en la especie no se advierte pronunciamiento alguno por parte de la Sala Regional del Golfo Norte, respecto a si la demandante solicitó previamente la suspensión del acto reclamado a la autoridad ejecutora y que ésta la hubiere negado, que se hubiere rechazado la garantía ofrecida o reiniciado la ejecución; en virtud de que, en términos del artículo 28, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo el demandante podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto controvertido, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución.

En ese sentido, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Del artículo 28, fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo transcrito, se desprende que por lo que hace específicamente a los actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, en la demanda, o en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia definitiva, se puede solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo ante la Sala de conocimiento del juicio; asimismo, de manera específica, el precepto en alusión dispone en su párrafo primero, que el demandante podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto controvertido siempre y cuando:

a).- La autoridad ejecutora niegue la suspensión;
b).- La autoridad ejecutora rechace la garantía ofrecida; o
c).- La autoridad ejecutora reinicie la ejecución.

Requisitos de procedencia señalados en el citado numeral, los cuales en el presente asunto no quedaron satisfechos, toda vez que del análisis realizado a los autos de la carpeta en que se actúa, no se advierte que la parte actora haya presentado

prueba alguna con la que acreditara, que al solicitar la suspensión ante este Tribunal, previamente hubiera solicitado la suspensión de los créditos controvertidos ante la autoridad ejecutora y ésta hubiera negado la suspensión, rechazado la garantía ofrecida o reiniciado la ejecución.

En este contexto, es claro que los requisitos anteriormente señalados, se exigen para la procedencia del otorgamiento de la suspensión; de tal forma que si la enjuiciante no exhibió las pruebas que acreditaran que cumplió con dichos requisitos, la consecuencia es que la medida cautelar ya concedida dejará de surtir sus efectos.

Lo anterior es acorde a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y contenido son del tenor siguiente:

> "**SUSPENSIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA CUANDO SE SOLICITA CONTRA ACTOS RELATIVOS A LA DETERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN, EJECUCIÓN O COBRO DE CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS DE NATURALEZA FISCAL.**" [N.E. Se omite trascripción, S.J.F., Novena Época. Tomo XXXI. Mayo de 2010. Tesis: 2a./J. 68/2010. pág. 843]

De la anterior jurisprudencia, la cual es obligatoria para este Órgano Jurisdiccional en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por contradicción de tesis, resolvió que para la procedencia de la suspensión contra actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, se debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 28, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, siendo entre otros, los siguientes:

1. Que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución

2. Que la solicitud de suspensión se acompañe de copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantía, la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora, la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución.

En esa tesitura, si bien es cierto, que la parte actora al solicitar la suspensión respecto del procedimiento administrativo de ejecución de los créditos fiscales H-157915, H-157916, H-157917, H-157918, H-157919, H-157920 y H-157921 señaló que la procedencia de la suspensión prevista en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se satisfacía plenamente, en virtud de que la autoridad embargó bienes que garantizaron el interés fiscal, reiniciando dicho embargo; también lo es, que la parte actora no presentó las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantía, la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora, la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o reinicio de la ejecución.

Aunado a lo anterior cabe precisar, que la autoridad ejecutora al realizar un segundo embargo por garantía insuficiente, no está reiniciando la ejecución de los créditos fiscales H-157915, H-157916, H-157917, H-157918, H-157919, H-157920 y H-157921, sino únicamente está continuando con el procedimiento administrativo de ejecución ya iniciado, actuación prevista en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

El precepto legal transcrito, se encarga de enunciar los diversos medios con los cuales los contribuyentes pueden garantizar el interés fiscal de los créditos fiscales adeudados; asimismo, en su párrafo tercero, establece que la autoridad será la encargada de vigilar que la garantía sea suficiente, tanto en el momento de su aceptación como con posterioridad y, si no lo fuere, exigirá su ampliación o procederá al secuestro o embargo de otros bienes, como aconteció en la especie.

En ese sentido, al ser la autoridad ejecutora quien debe calificar la garantía del interés fiscal, y quien debe vigilar si la misma es suficiente, tanto al momento de su aceptación, como posteriormente, siendo la propia autoridad ejecutora, quien incluso puede exigir su ampliación o proceder al embargo de más bienes para mantener garantizado el interés fiscal; y al advertirse que en la especie, la autoridad exactora procedió a ampliar embargo los días 20 de abril y 19 de junio de 2009 para garantizar el interés fiscal de los créditos fiscales que se combaten, al considerar que con el embargo practicado sobre bienes muebles propiedad de la parte actora el 19 de febrero de 2009, no se garantizaba debidamente el interés fiscal.

Por lo anterior, es evidente que dicha ampliación de embargo corresponde al procedimiento administrativo de ejecución iniciado para garantizar debidamente el interés fiscal de los créditos fiscales controvertidos, y no para efectos de reiniciar la ejecución, como erróneamente lo manifestó la parte actora en su escrito de solicitud de suspensión; lo anterior, toda vez que para que se configure el reinicio de la ejecución del procedimiento administrativo de ejecución; necesariamente el contribuyente debió previamente haber solicitado la suspensión ante la autoridad exactora, ésta conceder la suspensión y que no obstante ello, dicha autoridad exactora trabara nuevamente embargo.

[...]

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso numeral 23, fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en vigor a partir del día 07 de diciembre de 2007; se resuelve:

I.- Es **PROCEDENTE** y **FUNDADO,** el Recurso de Reclamación interpuesto por el C. Administrador Local Jurídico de Ciudad Victoria de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en consecuencia,

II.- Se **REVOCA** la sentencia interlocutoria dictada el 05 de noviembre de 2009 por la Sala Regional del Golfo Norte de este Órgano Jurisdiccional, al haber resultado improcedente la solicitud de suspensión de ejecución.

III.- Mediante atento oficio que se gire a la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, remítase copia certificada del presente fallo, para su conocimiento.

IV.- NOTIFÍQUESE. Con copia autorizada a las partes, para su conocimiento.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de **12 de agosto de 2010,** por **unanimidad de cinco votos a favor** de la ponencia de los CC. Magistrados Nora Elizabeth Urby Genel, Jorge Alberto García Cáceres, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alejandro Sánchez Hernández y Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada **Nora Elizabeth Urby Genel**, cuya ponencia se aprobó.

Se formuló el presente engrose el 24 de agosto de 2010, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III y 48, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 6 de diciembre de 2007, vigente a partir del día siguiente a su publicación, firma el Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Lic. Sonia Sánchez Flores, Secretaria Adjunta de Acuerdos que da fe.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-1aS-367

VALOR PROBATORIO DE LA COPIA CERTIFICADA DEL REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE, CUANDO OSTENTA LA LEYENDA: "EL PRESENTE DOCUMENTO ES ÚNICAMENTE PARA USO INTERNO DE LA S.H.C.P. Y CARECE DE VALIDEZ OFICIAL".- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, las copias o reproducciones que deriven de microfilm o discos ópticos de documentos que tengan en su poder las autoridades fiscales, tienen el mismo valor probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas copias o reproducciones sean certificadas por funcionario competente para ello, sin necesidad de cotejo con los originales. Por tanto, si en el incidente de incompetencia la demandada aporta copia certificada del reporte general de consulta de información de contribuyente, para demostrar cuál es el domicilio fiscal del demandante, dicha probanza tendrá pleno valor probatorio, aun cuando se señale que: "EL PRESENTE DOCUMENTO ES ÚNICAMENTE PARA USO INTERNO DE LA S.H.C.P. Y CARECE DE VALIDEZ OFICIAL", por tratarse de la reproducción de la información que deriva de los medios magnéticos, digitales y electrónicos que tiene en su poder la autoridad y que certificó en ejercicio de sus funciones, es decir, con apoyo en las facultades que le otorgan los artículos 9, primer párrafo, fracción V, 10, primer párrafo, fracción I, 14, fracción IV, 16 y 37, párrafo primero, apartado A, fracción XXVII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

Incidente de Incompetencia Núm. 7492/09-11-02-9/1003/10-S1-04-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de agosto de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de agosto de 2010)

PRECEDENTE:

VI-P-1aS-333
Incidente de Incompetencia Núm. 2186/09-11-02-8/2326/09-S1-05-06.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 25 de febrero de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.
(Tesis aprobada en sesión de 25 de marzo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 115

SEGUNDA SECCIÓN

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-597

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ESTÁ EXENTO DE OTORGAR GARANTÍA PARA OBTENER LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN SOLICITADA EN JUICIO.- De contenido de los artículos 1º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, así como 5º y 255 de la Ley del Seguro Social, se desprende que el Instituto Mexicano del Seguro Social se ubica dentro de un supuesto de excepción a la regla general contemplada en el artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y por tanto está exento de otorgar garantía para obtener la medida cautelar de suspensión de la ejecución solicitada en juicio, ya que conforme a los artículos primeramente mencionados, por una parte, las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, estarán exentos de prestar garantías, y por otra, al Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo público descentralizado de la Administración Pública de la Federación, se le considera de acreditada solvencia y no estará obligado, por tanto, a constituir depósitos o fianzas legales, ni aún tratándose del juicio de amparo.

Recurso de Reclamación Núm. 14013/09-17-01-7/2941/09-S2-06-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de junio de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de agosto de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

-Que se viola lo dispuesto en los artículos 145 y 151 del Código Fiscal de la Federación, los cuales facultan a la autoridad exactora a requerir de pago al deudor vía procedimiento administrativo de ejecución, y en caso de no acreditar en el desarrollo de la diligencia el entero del crédito fiscal previamente determinado, se procederá al embargo de bienes suficientes propiedad del contribuyente para posteriormente, por medio del remate de los mismos, hacer efectivo el importe del crédito insoluto y sus accesorios legales.

-Que en el caso la autoridad exactora no llegó a la etapa del embargo de bienes propiedad de la contribuyente, tan es así que no existe acta de embargo que se haya levantado al respecto, menos aún existe la relación de los bienes embargados propiedad de la actora, sino que únicamente existió el acto administrativo de requerimiento de pago efectuado el día 15 de diciembre de 2008, por lo que no se actualizó ninguno de los supuestos normativos previstos en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para conceder la suspensión definitiva de la ejecución de la multa impuesta, ya que el crédito fiscal número 903430, en cantidad de $808.11 a cargo del contribuyente, no se encuentra debidamente garantizado en ninguna de las formas previstas por el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación.

-Que si el ejecutor no embargó ningún bien propiedad de la actora al momento de desahogar el requerimiento de cobro, el crédito fiscal no se encuentra debidamente garantizado por alguna de las formas previstas en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, y por ende, no se actualizó ninguno de los supuestos normativos previstos en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, menos aún lo dispuesto en el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación,

para que la Sala Regional pudiera conceder la suspensión definitiva de la ejecución de la resolución combatida.

-Que el artículo 141, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía, norma que tiene el carácter de especial y que por tanto predomina sobre una ley de carácter general como lo son los artículos 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, 1º y 26 de la Ley Orgánica de este Tribunal, preceptos en los que se apoyó la Sala del conocimiento para otorgar la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado.

Teniendo presente lo antes expuesto, esta Segunda Sección considera que los argumentos vertidos por la autoridad recurrente resultan **INFUNDADOS**, en atención a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

El artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, preceptúa lo que a continuación se reproduce:

[N.E. Se omite transcripción]

De acuerdo a dicho precepto, tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

Ahora bien, en el caso el acto combatido lo constituye la resolución contenida en el oficio 600-26-2009-2270 de 5 de marzo de 2009, a través de la cual el Subadministrador, en suplencia por ausencia del Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal, tuvo por no interpuesto el recurso de revocación en contra del mandamiento de ejecución de 2 de diciembre de 2008, diligenciado el 15

de diciembre de 2008, mediante acta de requerimiento de pago, por el que se pretende hacer efectivo el crédito 903430 en cantidad de $807.11, por concepto de multa.

Por tanto, de acuerdo al acto que se combate en este juicio se actualiza lo dispuesto por el artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es decir, se trata de una solicitud de suspensión de la ejecución de actos relativos a la ejecución de créditos de naturaleza fiscal, por lo que la suspensión del acto reclamado surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

Sin embargo, la parte actora en la especie es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual, de conformidad con el artículo 5º de la Ley del Seguro Social, es un organismo descentralizado con personalidad y patrimonio propios, como se advierte de dicho artículo que se transcribe enseguida:

[N.E. Se omite transcripción]

Ahora bien, los artículos 1º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles y 255 de la Ley del Seguro Social, disponen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Los preceptos reproducidos establecen en la parte que interesa al caso, lo siguiente:

-Que a falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

-Que las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera, pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que el Código Federal de Procedimientos Civiles exija de las partes.

-Que el Instituto Mexicano del Seguro Social se considera de acreditada solvencia y no estará obligado, por tanto, a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose del juicio de amparo.

Del contenido de los artículos en cita se desprende claramente que el Instituto Mexicano del Seguro Social, parte actora en este juicio, se ubica dentro de un supuesto de excepción a la regla general contemplada en el artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, consistente en que la suspensión del acto reclamado surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, supuesto de excepción que se deriva del artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 1º de esta última ley, y que consiste en que las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, estarán exentos de prestar las garantías que el mencionado Código exija de las partes, supuesto de excepción que se actualiza en la especie en virtud de que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo descentralizado de la Administración Pública de la Federación, y por tanto se encuentra exento de prestar garantía para la obtención de la medida cautelar solicitada en juicio y otorgada por ello debidamente por la Sala Regional mediante la sentencia recurrida, sin la exigencia de la garantía del interés fiscal a que se refiere el artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, más aún cuando el artículo 255 de la Ley del Seguro Social establece que dicho Instituto se considera de acreditada sol-

vencia y no estará obligado, por tanto, a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose del juicio de amparo.

No es óbice para la determinación alcanzada lo argumentado por la autoridad incidentista en el sentido de que, si el ejecutor no embargó ningún bien propiedad de la actora al momento de desahogar el requerimiento de cobro, el crédito fiscal no se encuentra debidamente garantizado por alguna de las formas previstas en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, y por ende, no se actualizó ninguno de los supuestos normativos previstos en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que la Sala Regional pudiera conceder la suspensión definitiva de la ejecución de la resolución combatida.

No le asiste la razón a la autoridad en virtud de que, como ya ha quedado expuesto, si bien el artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece la obligación de que se constituya o se haya constituido garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora para que la suspensión de la ejecución surta sus efectos, también lo es que el Instituto Mexicano del Seguro Social, parte actora en este juicio, se ubica en un supuesto de excepción a la regla general establecida por el referido precepto legal, de conformidad con los artículos 1º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles y 255 de la Ley del Seguro Social, los cuales ya han quedado transcritos y comentados.

Igualmente, no es obstáculo para lo resuelto en este fallo lo que aduce la incidentista al argumentar que el artículo 141, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía, norma que tiene el carácter de especial y que por tanto predomina sobre una ley de carácter general como lo son los artículos 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, 1º y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, preceptos en los que se apoyó la Sala del conocimiento para otorgar la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado.

No se encuentra en lo cierto la autoridad en virtud de que, en cuanto a los artículos 1º y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Sala del conocimiento en ningún momento los invocó como fundamento de su determinación, lo cual puede constatarse de la lectura de la sentencia interlocutoria recurrida, cuya parte conducente ya ha quedado reproducida en este fallo, y por lo que hace al artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, contrariamente a lo señalado por la incidentista, no constituye en el caso una norma de carácter general, pues no debe perderse de vista que la materia de la sentencia interlocutoria consistió en determinar si en el juicio se otorgaba o no la suspensión definitiva de la ejecución del acto combatido, sin la exigencia del requisito de que se constituyera o se hubiera constituido garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora, por lo que la norma de carácter especial para resolver la cuestión mencionada es el 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y no así, como infundadamente pretende la autoridad, el 141, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

[...]

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 23, fracción VIII, de la Ley Orgánica de este Tribunal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, en vigor a partir del día siguiente, en relación con el diverso 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

R E S O L U T I V O S:

I.- Resultó procedente pero **INFUNDADO** el recurso de reclamación planteado por la autoridad demandada; por tanto:

II.- Se **CONFIRMA** la sentencia interlocutoria de 15 de julio de 2009 que concedió la suspensión definitiva solicitada por la demandante, por los fundamentos y motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.

III.- Remítase copia certificada del presente fallo a la Primera Sala Regional Metropolitana para los efectos legales que correspondan.

IV.- NOTIFÍQUESE a las partes, con copia certificada de la presente sentencia y, en su oportunidad, archívese el expediente del recurso de reclamación.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 15 de junio de 2010, por unanimidad de cuatro votos a favor de los Magistrados Olga Hernández Espíndola, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega y Juan Manuel Jiménez Illescas. Estuvo ausente el Magistrado Luis Carballo Balvanera.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado Alfredo Salgado Loyo, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 6 de julio de 2010 y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, en vigor a partir del día siguiente, firma el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Lic. Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos de la misma Sección, quien autoriza y da fe.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-2aS-598

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA UN REGISTRO MARCARIO. NO PROCEDE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE UN DERECHO DE PRELACIÓN.- Atendiendo al objeto primordial de la figura de la suspensión, si ésta es solicitada en un juicio en el que se demanda la nulidad de una resolución que negó el registro marcario, no resulta procedente concederla para el efecto de conminar a la autoridad administrativa a suspender o detener el procedimiento administrativo de solicitud de registro o para que se respete el derecho de prelación del artículo 121 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues interpretar lo contrario conllevaría una declaratoria constitutiva de derechos a favor del actor, que sólo podría tener lugar una vez analizado el fondo del asunto; ya que será hasta el momento en que el órgano juzgador determine lo que en derecho corresponda sobre la negativa de registro marcario, cuando pueda declararse un derecho a favor del peticionario para oponer frente a terceros la anterioridad de su solicitud de registro marcario.

Recurso de Reclamación Núm. 1259/09-EPI-01-1/1096/10-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de julio de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de julio de 2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-341
Recurso de Reclamación Núm. 1126/08-EPI-01-5/668/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

nistrativa, en sesión de 2 de julio de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de julio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 152

VI-P-2aS-556
Recurso de Reclamación Núm. 701/09-EPI-01-9/270/10-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de abril de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de abril de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 32. Agosto 2010. p. 130

VI-P-2aS-557
Recurso de Reclamación Núm. 1153/09-EPI-01-5/122/10-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de mayo de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de mayo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 32. Agosto 2010. p. 130

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-599

SUSPENSIÓN SOLICITADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA RESOLUCIO-

NES QUE NIEGUEN UN DERECHO POR SER DICHAS RESOLUCIONES DE NATURALEZA NEGATIVA.- El objetivo de la suspensión en el juicio contencioso administrativo conforme al artículo 24, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es mantener la situación de hecho existente que impida que la ejecución de la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo los casos en que se cause un perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. En ese orden de ideas, si se pretende la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada que niega el registro marcario, ello se traduce en la pretensión de suspensión de un acto administrativo de naturaleza negativa. Lo cual impide conceder la suspensión solicitada dado que esta tiene como finalidad mantener la situación de hecho existente que en ese caso sería mantener la negativa de registro marcario. Todo ello porque la suspensión sólo procede contra actos positivos que implican una acción, una orden, una privación o una molestia, dado que únicamente estos son aptos de paralización, no así los negativos que constituyen abstenciones, negativas simples o prohibiciones de las autoridades, a través de las cuales se rehúsan a hacer algo u omiten efectuar lo solicitado por los gobernados. De lo contrario la concesión de la suspensión en el juicio contencioso administrativo implicaría dar efectos restitutorios a dicha medida cautelar, los que son propios de la sentencia dictada en el juicio principal. Sin que sea óbice para lo anterior, que las autoridades administrativas puedan llevar a cabo otros actos tendentes a la ejecución, pues tales actos no son los impugnados en el juicio, sino la negativa de reconocimiento de un derecho.

Recurso de Reclamación Núm. 1259/09-EPI-01-1/1096/10-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de julio de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de julio de 2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-343
Recurso de Reclamación Núm. 1126/08-EPI-01-5/668/09-S2-07-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de julio de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de julio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 154

VI-P-2aS-511
Recurso de Reclamación Núm. 995/09-EPI-01-9/250/10-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de marzo de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de marzo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 29. Mayo 2010. p. 163

VI-P-2aS-558
Recurso de Reclamación Núm. 701/09-EPI-01-9/270/10-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de abril de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 13 de abril de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 32. Agosto 2010. p. 131

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-600

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO.- SUPUESTO EN QUE ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL ACTOR.- Interpretados armónicamente los artículos 13, primer párrafo y 30, quinto párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, resulta improcedente el incidente de incompetencia por razón de territorio promovido por el propio actor, ya que el primero de dichos preceptos lo obliga a presentar su demanda ante la Sala Regional competente, de donde se sigue que queda comprometido con ese planteamiento inicial manifestado con la presentación de su demanda, dado que es el momento oportuno que la ley le otorga para precisar la competencia territorial de la Sala ante la cual promueve para conocer del juicio que plantea. Considerar lo contrario daría margen a prácticas inconvenientes a una adecuada y pronta tramitación de los juicios, entre ellas la de permitir al actor que, a sabiendas de que no es la Sala competente por razón de territorio, presente su demanda ante ella y, posteriormente, con fines dilatorios o anulatorios de lo actuado, tuviera la oportunidad de interponer el incidente de incompetencia, provocando con ello un evidente perjuicio a las demás partes, quienes pudiesen haber sido ya emplazadas ante dicha Sala, pero además propiciando trastornos en el correcto funcionamiento del servicio de impartición de justicia administrativa a cargo del Tribunal, que como sabemos, está regido por los principios constitucionales de justicia pronta y expedita. En hipótesis distintas, el actor podrá interponer el incidente, como serían los supuestos en que, una vez presentada la demanda ante cierta sala regional que el propio actor hubiere considerado competente, dicho órgano jurisdiccional estimare lo contrario y lo remitiere a otra que, a su vez, aceptare la competencia, o bien, cuando por razones ajenas a la voluntad del actor, el juicio inicialmente radicado en una Sala sea trasladado a otra.

Incidente de Incompetencia Núm. 31254/09-17-02-1/629/10-S2-10-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

nistrativa, en sesión de 6 de julio de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de julio de 2010)

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-P-2aS-601

Incidente de Incompetencia Núm. 391/09-04-01-9/1925/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de agosto de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 12 de agosto de 2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-139
Incidente de Incompetencia Núm. 3442/07-07-03-4/211/08-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 2 de octubre de 2008, por unanimidad de 4 votos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 2 de octubre de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 14. Febrero 2009. p. 353

VI-P-2aS-444
Incidente de Incompetencia Núm. 6979/08-11-01-8/2004/09-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

nistrativa, en sesión de 10 de noviembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de noviembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 331

VI-P-2aS-485
Incidente de Incompetencia Núm. 34715/08-17-04-9/2743/09-S2-10-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de febrero de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de febrero de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 28. Abril 2010. p. 135

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-602

INSTITUCIONES AFIANZADORAS. PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES, DEBE ESTARSE AL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO POR LA FRACCIÓN I, INCISO a) DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE TRIBUNAL EN VIGOR.- El artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente a partir del 7 de diciembre de 2007, establece el criterio general que debe tomarse en consideración para fijar la competencia territorial de las Salas Regionales de este Tribunal, atiende al lugar donde se ubique el domicilio fiscal del demandante; sin embargo dicho precepto también prevé diversos supuestos de excepción, entre los que destaca el previsto por la fracción I, inciso a) del mencionado precepto legal y en el que se establece que, tratándose de las personas morales que en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, formen parte del Sistema Financiero Nacional, el criterio que debe tomarse en cuenta para tales efectos, corresponde al lugar en el que se ubique la sede de la autoridad emisora de la resolución impugnada. En esta tesitura, si en el juicio contencioso la parte actora lo es una institución afianzadora, que acorde a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, forma parte del Sistema Financiero Nacional, resulta incontrovertible que se actualiza el supuesto de excepción previsto por el mencionado artículo 34 fracción I, inciso a) antes referido, y la competencia territorial de las Salas Regionales de este Tribunal se surte en razón del lugar en el que se ubique la sede de la autoridad que haya emitido la resolución impugnada.

Incidente de Incompetencia Núm. 86/09-11-03-6/2645/09-17-07-1/950/10-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de agosto de 2010, por unanimidad de 5 votos

a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de agosto de 2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-138
Incidente de Incompetencia Núm. 870/08-15-01-9/14421/08-17-07-9/1242/08-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 25 de septiembre de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de octubre de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 14. Febrero 2009. p. 341

VI-P-2aS-293
Incidente de Incompetencia Núm. 3535/08-12-01-6/593/09-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 30 de junio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 21. Septiembre 2009. p. 222

VI-P-2aS-362
Incidente de Incompetencia Núm. 3644/08-12-03-5/1514/09-17-07-4/1888/09-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 3 se septiembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 215

VI-P-2aS-486

Incidente de Incompetencia Núm. 2343/09-06-01-3/2490/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de febrero de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.

(Tesis aprobada en sesión de 18 de febrero de 2010)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 28. Abril 2010. p. 137

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-603

INSTITUCIONES DE FIANZAS.- AL FORMAR PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, SE UBICAN EN EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- Del artículo 34 de la Ley Orgánica que rige la actuación de este Tribunal, se desprende como principio general, que el factor que debe ser tomado en consideración para determinar la competencia de las Salas Regionales es el lugar en el que se encuentre ubicado el domicilio fiscal del demandante. Como excepción se establecen aquellos casos en los que el promovente sea una persona moral que forme parte del sistema financiero, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; o bien, cuando dicha persona moral tenga el carácter de controladora o controlada y determine su resultado fiscal consolidado, en términos del ordenamiento legal antes referido, en cuyo caso, la norma establece que será competente la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que haya dictado la resolución impugnada. En este orden de ideas, si la actora es una institución de fianzas, la cual forma parte del sistema financiero, en términos del artículo 8º, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta citada, es evidente

que se ubica en el supuesto de excepción previsto por la fracción I, inciso a) del artículo 34, de la Ley Orgánica de este Tribunal, vigente a partir del 7 de diciembre de 2007; luego entonces, de conformidad con el supuesto señalado, la Sala Regional que debe conocer del asunto, es la que corresponde al lugar en donde se ubique la sede de la autoridad emisora de la resolución impugnada.

Incidente de Incompetencia Núm. 86/09-11-03-6/2645/09-17-07-1/950/10-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de agosto de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de agosto de 2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-300
Incidente de Incompetencia Núm. 2101/08-17-09-2/1250/08-16-01-2/1496/08-S2-09-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 25 de noviembre de 2008, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Thelma Semíramis Calva García.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de junio de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009. p. 113

VI-P-2aS-470
Incidente de Incompetencia Núm. 2687/08-15-01-8/437/09-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de enero de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Manuel Ángel Sánchez.
(Tesis aprobada en sesión de 26 de enero de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 28. Abril 2010. p. 101

VI-P-2aS-550

Incidente de Incompetencia Núm. 4426/09-06-02-3/141/10-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de mayo de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.

(Tesis aprobada en sesión de 20 de mayo de 2010)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 31. Julio 2010. p. 178

VI-P-2aS-586

Incidente de Incompetencia Núm. 5184/09-06-02-2/477/10-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de junio de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.

(Tesis aprobada en sesión de 15 de junio de 2010)

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 33. Septiembre 2010. p. 103

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-604

COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES.- NO PUEDE CONSIDERARSE DOMICILIO FISCAL PARA ESE EFECTO AQUÉL QUE SE CONTIENE EN EL ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL POR NO SER EL DOCUMENTO IDÓNEO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, último párrafo de la Ley Orgánica de este Tribunal, la regla general para determinar la competencia territorial de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo es el domicilio fiscal del demandante que se presume el señalado en la demanda, salvo que la parte demandada demuestre lo contrario. Por lo tanto, en aquellos casos en que la autoridad incidentista pretenda desvirtuar dicha presunción, no basta para la demostración de ello, el invocar el domicilio que se hubiere precisado en el acta de inspección en materia ambiental, ya que no es el documento idóneo para acreditar el domicilio fiscal a la fecha de presentación de la demanda, y ante esa situación deberá estarse a la presunción que señala el artículo invocado inicialmente.

Incidente de Incompetencia Núm. 10169/09-17-10-6/690/10-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de agosto de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de agosto de 2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-518
Incidente de Incompetencia Núm. 10167/09-17-01-9/2970/09-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, en sesión de 23 de marzo de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 23 de marzo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 173

VI-P-2aS-519
Incidente de Incompetencia Núm. 17345/09-17-06-9/33/10-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de marzo de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 23 de marzo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 173

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-605

COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES.- NO BASTA QUE LA AUTORIDAD INCIDENTISTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CUESTIONE EL DOMICILIO FISCAL DEL DEMANDANTE, SINO QUE DEBE ACREDITARLO FEHACIENTEMENTE.- Aun cuando el artículo 34, último párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa faculta a la autoridad demandada para controvertir la competencia territorial de una Sala Regional, asumida en consideración al domicilio señalado por la parte actora en su escrito de demanda, del contenido del mismo precepto se desprende que dicha facultad no puede ser ejercida de forma dogmática, sino que debe apoyarse en los medios de prueba idóneos para acreditar que no corresponde a la Sala Regional que asumió la competencia territorial, conocer del juicio interpuesto. Así entonces, si la autoridad demandada estima que el domicilio fiscal de la parte actora se ubica en un lugar distinto al señalado en la demanda, no basta con que bajo protesta de decir verdad así lo manifieste, sino que debe acreditarlo plenamente con las constancias de la situación de dicho domicilio en el Registro Federal de Contribuyentes al momento de interponerse la demanda, ya que el legislador federal utilizó específicamente la frase "salvo que la parte demandada demuestre lo contrario", con lo que resulta indubitable que la eficacia en el ejercicio de la facultad otorgada a la autoridad demandada, se encuentra condicionada a la satisfacción de un requisito de acreditación, y al no cumplirse con dicha carga procesal, debe prevalecer lo expresamente señalado por la parte actora.

Incidente de Incompetencia Núm. 22625/09-17-09-4/425/10-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de agosto de 2010, por unanimidad de 5 votos a

favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de agosto de 2010)

PRECEDENTES:

VI-P-2aS-514
Incidente de Incompetencia Núm. 878/09-15-01-5/36/10-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de febrero de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Manuel Ángel Sánchez.
(Tesis aprobada en sesión de 25 de marzo de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio 2010. p. 151

VI-P-2aS-591
Incidente de Incompetencia Núm. 1101/09-15-01-5/491/10-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de junio de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de junio de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 33. Septiembre 2010. p. 113

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-2aS-606

VISITA DOMICILIARIA.- CUANDO SE ACTUALICE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA, RESULTA VÁLIDO QUE EL VISITADOR ACTUANTE ASÍ LO HAGA CONSTAR EN EL ACTA DE VISITA CORRESPONDIENTE.- De lo establecido en el artículo 46, fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2005, cuyo contenido substancial es idéntico al actualmente en vigor, se desprende que el visitador designado para practicar una visita domiciliaria, se encuentra autorizado para levantar actas parciales o complementarias a fin de hacer constar en forma circunstanciada hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de la visita. Por su parte, el artículo 46-A del mismo Código establece los plazos máximos en que la autoridad debe concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal del contribuyente, así como los casos en que dichos plazos se suspenderán. De acuerdo con lo anterior, si el visitador al practicar una visita domiciliaria tiene conocimiento de que se ha actualizado alguno de estos casos por los que se suspende el plazo para concluirla, resulta válido que así lo haga constar en el acta de visita correspondiente, pues de esa manera se justifica el impedimento legal que tiene para continuar con el procedimiento de fiscalización, sin que sea necesario que para ello medie mandamiento escrito de alguna autoridad jurisdiccional o administrativa que así se lo ordene, pues amén de que no existe precepto legal alguno que así lo determine, es suficiente que se actualice la hipótesis normativa para que se suspenda el plazo para concluir la visita domiciliaria, ya que dicha suspensión opera por disposición expresa de la ley.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1421/07-12-02-9/1268/08-S2-10-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de agosto de 2010, por mayoría de 4 votos a

favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Oscar Elizarrarás Dorantes.
(Tesis aprobada en sesión del 10 de agosto de 2010)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-2aS-607

VISITA DOMICILIARIA. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA IMPIDE QUE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA CONTINÚE EJERCIENDO SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN.- De conformidad con lo establecido en el artículo 46-A, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2005, cuyo contenido substancial es similar al actualmente en vigor, establece que si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos. En tal virtud, si en el caso concreto se suspende el plazo para la conclusión de una visita domiciliaria, por haberse interpuesto un medio de defensa en contra de un acto o actividad que derivó del ejercicio de esa facultad de comprobación, es inconcuso que la autoridad se encuentra impedida jurídicamente para continuar practicando la visita y, por lo tanto, para levantar las actas parciales correspondientes y emitir la resolución determinante de créditos fiscales, pues para ello es necesario que previamente se dicte y notifique la resolución definitiva recaída al citado medio de defensa, pues es éste el momento en que el plazo para concluir la visita se reanuda por ministerio de ley y, a partir del cual, la autoridad puede continuar con la visita hasta su total conclusión. Ahora bien, considerar que la suspensión sólo se refiere al plazo para concluir la visita y no así a su práctica, implicaría permitir que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación durante todo el tiempo que dure la tramitación y resolución del

medio de defensa interpuesto, extendiéndose sin justificación alguna el tiempo que el legislador consideró prudente para concluir con la visita domiciliaria, con la consecuente trasgresión a las garantías de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio del contribuyente, consagradas en el artículo 16 constitucional y que en materia fiscal recoge el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1421/07-12-02-9/1268/08-S2-10-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de agosto de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Oscar Elizarrarás Dorantes.
(Tesis aprobada en sesión del 10 de agosto de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

QUINTO.- [...]

Ahora bien, sostiene la parte actora que es ilegal el **Acta Parcial número 10** de suspensión del plazo de conclusión de la visita domiciliaria, ya que en su opinión, no existe mandamiento alguno emitido por autoridad competente, debidamente fundado y motivado en el que se ordenara la suspensión del plazo para concluir la visita, por lo que la visitadora actuante se encontraba impedida para suspender *mutuo propio* dicho plazo, pues es evidente que carecía de facultades para ello.

Asimismo, sostiene la actora que la visitadora actuante no acreditó en poseer facultades suficientes para ordenar y levantar el acta de suspensión del plazo de la visita domiciliaria que le venía practicando, por lo que no puede considerarse cumplido el requisito de que exista un acto de autoridad competente que motive la causa legal del procedimiento.

Los argumentos de agravio que anteceden son infundados, porque los artículos 46 y 46-A del Código Fiscal de la Federación, vigentes en 2005, año en que la autoridad inició el ejercicio de sus facultades de comprobación, establecen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De lo establecido en el artículo 46, fracciones I y IV del Código Fiscal de la Federación, se desprende que el visitador designado para practicar una visita domiciliaria, se encuentra autorizado para levantar actas parciales o complementarias a fin de hacer constar en forma circunstanciada hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de la visita.

Por otra parte, el artículo 46-A del mismo Código establece los plazos máximos en que las autoridades deben concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes, así como los casos en que dichos plazos se suspenderán, siendo estos casos, la huelga, el fallecimiento del contribuyente, cuando éste desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o si no se le localiza en el que haya señalado; o bien, cuando el contribuyente visitado interpongan algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación.

De acuerdo con lo anterior, si el visitador al practicar una visita domiciliaria tiene conocimiento de que se ha actualizado alguno de estos casos por los que se suspende el plazo para concluirla, resulta válido que así lo haga constar en el acta de visita correspondiente, pues de esa manera se justifica el impedimento legal que tiene para continuar con el procedimiento de fiscalización, sin que sea necesario que para ello medie mandamiento escrito de alguna autoridad jurisdiccional o administrativa que así se lo ordene, pues amén de que no existe precepto legal alguno que así lo determine, es suficiente que se actualice la hipótesis para que se suspenda el plazo para concluir la visita domiciliaria, ya que dicha suspensión opera por disposición expresa de la ley.

En el caso que nos ocupa, a fojas 2817 a 2823 del expediente principal en que se actúa, se encuentra visible el **Acta Parcial número 10** de suspensión del plazo de conclusión de la visita domiciliaria, levantada por la visitadora adscrita a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala del Servicio de Administración Tributaria, documental a la que esta juzgadora le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; en relación con los diversos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por ser un documento público exhibido en original por la empresa actora como prueba de su parte y plenamente reconocido por el representante de la autoridad demandada al formular su contestación a la demanda.

El acta parcial de visita de referencia en la parte que interesa es del tenor literal siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

Como se advierte, en el **Acta Parcial número 10**, levantada el 17 de octubre de 2006, la C. Liliana Botis Flores, visitadora adscrita a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala del Servicio de Administración Tributaria, hizo constar, entre otros hechos, que en esa fecha hacía del conocimiento de Martha Beatriz Rodríguez Rodríguez, persona con la que entendió la diligencia y quien dijo ser contadora de la contribuyente visitada, que se suspendió el plazo de conclusión de la revisión, a partir del día 11 de octubre de 2006, fecha en que fue admitido el Recurso de Queja interpuesto por la contribuyente en contra de actos de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala, por considerarlos violatorios de la suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro del juicio de amparo 992/2006-J.

Asimismo, la visitadora actuante hizo constar que la suspensión del plazo para concluir la visita domiciliaria, surtiría sus efectos hasta en tanto el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, comunicara a la Administración Local de Auditoría

Fiscal de Tlaxcala, la resolución definitiva recaída al mismo de conformidad con el artículo 46-A penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación.

Las precisiones que anteceden, evidencian lo infundado de los argumentos de agravio en estudio, ya que si la contribuyente visitada interpuso un medio de defensa en contra de actos que derivaron del ejercicio de las facultades de comprobación que hasta entonces venía realizando la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala del Servicio de Administración Tributaria, resulta válido que la visitadora adscrita a dicha Administración y que fue designada para practicar la visita domiciliaria, haya hecho constar en el acta parcial número 10, que derivado de la admisión de ese medio de defensa, se suspendió el plazo de conclusión de la revisión hasta en tanto el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, notificara la resolución definitiva recaída al mismo.

La anterior es así, ya que como se señaló con antelación el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, obliga y a su vez autoriza al visitador designado para practicar una visita domiciliaria, para levantar actas parciales a fin de hacer constar en forma circunstanciada hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de la visita, por lo que si en la especie el visitador tuvo conocimiento de que se había actualizado el referido supuesto por el que se suspende el plazo para concluir la visita, resulta válido que así lo haya hecho constar en el acta de visita correspondiente, sin que haya sido necesario que para ello mediara mandamiento escrito de alguna autoridad jurisdiccional o administrativa que así se lo ordenara, como infundadamente lo pretende la hoy actora, ya que amén de que no existe precepto legal alguno que así lo determine, es suficiente que se actualice la hipótesis normativa para que se suspenda el plazo para concluir la visita domiciliaria, ya que dicha suspensión opera por disposición expresa de la ley.

Así, se concluye que el **Acta Parcial número 10** de suspensión del plazo de conclusión de la visita domiciliaria, levantada el 17 de octubre de 2006, se encuentra apegada a derecho, ya que contrario a lo sostenido por la actora, la visitadora adscrita a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala del Servicio de Adminis-

tración Tributaria, no suspendió *mutuo propio*, el plazo para concluir la visita domiciliaria, pues lo único que hizo fue comunicarle a la persona con la que entendió la diligencia, la suspensión de dicho plazo que se originó al haberse actualizado el supuesto contemplado en el penúltimo párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.

No obstante lo anterior, son **FUNDADOS** los argumentos de agravio de la actora, encaminados a sostener que la autoridad demandada violó en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 46-A, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación.

Para corroborar lo anterior, es importante señalar previamente que en términos de lo establecido en el artículo 42, fracción III del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales se encuentran facultadas para practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, a fin de comprobar que han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas; sin embargo, el ejercicio de esa facultad de comprobación debe estar acotado por un tiempo prudente para lograr el objetivo que con ella se pretende, pues de no ser así la visita se volvería en una molestia constante o en una permanente intromisión al domicilio de los particulares.

Por lo anterior, se justifica que el legislador en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, haya establecido como regla general que las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de 6 meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

Al respecto, es conveniente señalar que es criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la visita domiciliaria implica una excepción a la inviolabilidad del domicilio particular, que se justifica por el interés general que existe en verificar que los gobernados cumplan con los deberes que el legislador establece en relación con su obligación de contribuir para el gasto público en términos de lo

previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Sin embargo, en atención al principio de seguridad jurídica tutelado en el artículo 16 constitucional, la facultad de la autoridad administrativa para llevar a cabo visitas domiciliarias no significa que tenga potestad de intervenir ilimitada y permanentemente en el domicilio de los contribuyentes.

Así, para nuestro máximo Tribunal la visita domiciliaria debe estar delimitada temporalmente, es decir, estar acotada a un tiempo prudente a fin de que se logre el objetivo que con ellos se pretende, pues de no ser así la actuación de la autoridad se volvería molestia constante o permanente intromisión al domicilio, tornándose dicha facultad fiscalizadora en omnímoda, arbitraria o caprichosa, lo que es contrario a la protección que otorga el artículo 16 constitucional, por lo que es un deber ineludible de la autoridad concluir la visita en el plazo máximo que para tal efecto establece el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.

Los criterios que anteceden, son sustentados por nuestro máximo Tribunal, en las tesis de jurisprudencia que a continuación se exponen:

> "**VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE O DE ESCRITORIO. EL PLAZO MÁXIMO QUE ESTABLECE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA SU CONCLUSIÓN CONSTITUYE UN DEBER DE INELUDIBLE CUMPLIMIENTO.**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en el S.J.F. Novena Época. Tomo XIX. Enero de 2004. Tesis: 2a./J. 1/2004. pág. 268]

> "**VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER QUE, RESPECTO DE ALGUNAS CATEGORÍAS DE CONTRIBUYENTES, NO EXISTE PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1995).**" [N.E. Se omite transcripción, consultable en

el S.J.F. Novena Época. Tomo XIV. Diciembre de 2001. Tesis: 2a./J. 65/2001. pág. 340]

Precisado lo anterior, esta juzgadora considera que en el caso concreto la autoridad violó en perjuicio de la parte actora, lo dispuesto en el artículo 46-A, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, ya que dicho precepto establece claramente que si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos plazos **se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos**.

En el caso que nos ocupa, es un hecho que se desprende de las constancias que obran en autos y que es plenamente reconocido por las partes contendientes, que en el **Acta Parcial número 10** levantada el 17 de octubre de 2006, se hizo constar por la visitadora adscrita a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala, que el plazo para concluir la visita domiciliaria que se le venía practicando a la empresa actora, se suspendió al haberse actualizado el supuesto previsto en el penúltimo párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, con motivo del **recurso de queja** interpuesto por la hoy actora ante el Segundo Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala del Poder Judicial de la Federación, por violación a la suspensión concedida por dicho Juzgado dentro del juicio de garantías número 992/2006-J.

También se encuentra acreditado en autos, que no obstante que en el Acta Parcial número 10 se hizo constar la **suspensión** del plazo para concluir la visita, el personal autorizado por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala del Servicio de Administración Tributaria, se constituyó posteriormente en el domicilio fiscal de la empresa actora, a fin de continuar con la práctica de la visita domiciliaria, de tal suerte que los días 20 de octubre, 08 de noviembre, 09 de noviembre y 10 de noviembre, todos del año de 2006, se levantaron las actas parciales 11, 12, 13 y 14, respectivamente; el 15 de noviembre de 2006, el acta última parcial, el 14 de febrero

de 2007, el Acta Final de la visita domiciliaria, y el 23 de marzo de 2007, se emitió la resolución impugnada en el presente juicio, contenida en el oficio 324-SAT-29-I-A-985, a través de la cual, el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala, le determinó a la actora un crédito fiscal en cantidad total de $128'862,113.78, derivado precisamente de la referida visita domiciliaria que le fue practicada.

Las precisiones que anteceden, evidencian que la actuación de la autoridad fiscalizadora no se encuentra apegada a derecho, ya que como acertadamente lo sostiene la parte actora y que no fue controvertido ni mucho menos desvirtuado por la autoridad al producir su contestación, a la fecha en que se levantaron las referida actas de visita domiciliaria y la resolución determinante contenida en el oficio 324-SAT-29-I-A-985 de 23 de marzo de 2007, el Segundo Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala del Poder Judicial de la Federación, aún no resolvía el recurso de queja interpuesto por la actora dentro del juicio de garantías 992/2006-J, por lo que al encontrarse *sub júdice* el referido medio de defensa, es inconcuso que la autoridad se encontraba impedida jurídicamente para continuar con práctica de la visita domiciliaria.

En efecto, si en el caso concreto se suspendió el plazo para la conclusión de una visita domiciliaria, por haberse interpuesto un medio de defensa en contra de un acto o actividad que derivó del ejercicio de esa facultad de comprobación, es inconcuso que la autoridad se encuentra impedida jurídicamente para continuar practicando la visita y, por lo tanto, para levantar las actas parciales correspondientes y la resolución determinante de créditos fiscales, pues para ello era necesario que previamente el Segundo Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dictara y notificara la resolución definitiva recaída al citado medio de defensa, pues es éste el momento en que el plazo para concluir la visita se reanuda por ministerio de ley y, a partir del cual, la autoridad puede continuar con la visita hasta su total conclusión.

Considerar lo contrario, implicaría permitir que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación durante todo el tiempo que dure la tramitación y resolución del medio de defensa interpuesto, extendiéndose sin justificación alguna el tiempo que el legislador consideró prudente para concluir con la visita domiciliaria, con la conse-

cuente trasgresión a las garantías de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio del contribuyente, consagradas en el artículo 16 constitucional y que en materia fiscal recoge el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.

Luego entonces, es ilegal la actuación de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala, pues al haberse suspendido el plazo para concluir la visita domiciliaria, debió abstenerse de continuar ejerciendo sus facultades de comprobación, hasta en tanto se resolviera el medio de defensa interpuesto por la actora, lo que no hizo en la especie, pues se reitera, no existe constancia en autos que demuestre plenamente que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, haya emitido la sentencia en la que resolviera el recurso de queja interpuesto por la actora dentro del juicio de garantías 992/2006, sin embargo, la autoridad ilegalmente continuó ejerciendo sus facultades de comprobación, llevando a cabo el levantamiento de las actas parciales 11, 12, 13 y 14, el acta última parcial, el acta final y la liquidación contenida en el oficio 324-SAT-29-1-A-985 de 23 de marzo de 2007, que constituye la resolución impugnada en el presente juicio, por lo que es inconcuso que dichos actos no pueden surtir efecto legal alguno en perjuicio de la parte actora, al haberse emitido en contravención de lo establecido en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.

Sin que sea óbice a la determinación alcanzada, los argumentos de defensa de la autoridad demandada, ya que los mismos están encaminados a sostener que la suspensión prevista en el penúltimo párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, está referida únicamente al plazo para concluir la visita domiciliaria, no así al ejercicio de esta facultad de comprobación, y que si hubiese sido esa la voluntad del legislador así lo hubiera plasmado en la norma, lo que no acontece en la especie.

Los argumentos de defensa de la autoridad son infundados, porque es cierto que el penúltimo párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, únicamente alude a la suspensión del plazo para concluir la visita, sin señalar expresamente que dicha suspensión también lo es respecto al ejercicio de las facultades de comprobación, sin embargo, la autoridad pasa desapercibido que dicha consecuencia jurídica se infiere de la correcta interpretación teleológica que se realice de la disposi-

ción en comento, de donde se advierte que su finalidad es el cumplimiento de las garantías de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio fiscal de los particulares, al establecer el plazo máximo en que la autoridad está autorizada para practicar la visita, como lo ha establecido nuestro máximo Tribunal en las tesis de jurisprudencia referidas con antelación, finalidad que no se cumple si se interpreta el precepto legal en los términos en que lo propone la demandada.

Lo anterior es así, pues se reitera, considerar que la suspensión sólo se refiere al plazo para concluir la visita y no así a su práctica, implicaría permitir que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación durante todo el tiempo que dure la tramitación y resolución del medio de defensa interpuesto, extendiéndose sin justificación alguna el tiempo que el legislador consideró prudente para concluir con la visita domiciliaria, con la consecuente trasgresión a las garantías de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio del contribuyente, consagradas en el artículo 16 constitucional y que en materia fiscal recoge el citado artículo 46-A.

Cabe referir, que contrario a lo sostenido por la autoridad en su contestación, el tercer párrafo del citado artículo 46-A, no establece una excepción al límite temporal para concluir con la visita domiciliaria, por lo que es un deber ineludible de la autoridad concluir la visita en el plazo máximo que para tal efecto establece dicho precepto legal, y si bien ese plazo es susceptible de suspenderse, entre otros supuestos, por haberse interpuesto un medio de defensa en contra de un acto o actividad que derivó del ejercicio de las facultades de comprobación, ello no significa que la autoridad esté autorizada para concluir la visita en un plazo mayor al previsto en la ley, pues como lo acepta la propia autoridad demandada en su contestación, la intención del legislador al establecer un limite temporal para la conclusión de la visita domiciliaria, consiste en brindar seguridad jurídica al gobernado y así evitar que la autoridad fiscalizadora se exceda en el ejercicio de sus facultades de revisión.

En las relatadas consideraciones, se concluye que la resolución impugnada se dictó en contravención a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, lo que obliga a esta juzgadora a declarar su nulidad

lisa y llana con fundamento en los artículos 51, fracción IV y 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Toda vez que ha resultado fundado el concepto de impugnación en estudio, esta juzgadora estima innecesario entrar al análisis y resolución de los restantes que expresa la demandante en su escrito de demanda, ya que, cualquiera que sea su resultado no variaría el sentido del presente fallo.

[...]

En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 8, fracciones III, V, VII, VIII, 9, fracción II y último párrafo; y 31, fracción III, aplicados a *contrario sensu*, 48, fracción I, inciso a), 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; vigente, se resuelve:

I.- Han resultado infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada, en consecuencia;

II.- NO SE SOBRESEE en el presente juicio;

III.- La parte actora probó los extremos de su pretensión, en consecuencia;

IV.- SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, precisada en el resultando primero de esta sentencia, por los fundamentos y motivos precisados en el último de sus considerandos;

V.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada del presente fallo a las partes y una vez que haya quedado firme, archívese este expediente como concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el 10 de agosto de 2010, por mayoría de 4 votos a favor de los Magistrados Luis Carballo Balvanera, Alfredo

Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega y Juan Manuel Jiménez Illescas y un voto en contra de la Magistrada Olga Hernández Espíndola.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 18 de agosto de 2010 y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-608

INSTITUCIONES DE CRÉDITO.- PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES DEBE ESTARSE A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I, APARTADO A, DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA QUE RIGE LA ACTUACIÓN DE ESTE TRIBUNAL.- El artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente a partir del 7 de diciembre de 2007, dispone como regla general para fijar la competencia territorial de las Salas Regionales de este Tribunal, el que se tome en consideración el lugar donde se ubique el domicilio fiscal del demandante; asimismo, dicho dispositivo legal prevé diversos supuestos de excepción, entre los cuales se encuentra el previsto por la fracción I, apartado A, en el que se establece que, tratándose de las personas morales que formen parte del Sistema Financiero Nacional, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debe atenderse a la ubicación de la sede de la autoridad emisora de la resolución impugnada; consecuentemente, si en el juicio contencioso la parte actora es una Institución de Crédito, que de conformidad a lo establecido por el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, forma parte del Sistema Financiero Nacional, resulta inconcuso que se actualiza el supuesto de excepción previsto en el artículo 34 fracción I, apartado A antes referido, y por tanto, la competencia territorial de las Salas Regionales de este Tribunal se debe determinar por el lugar en el que se ubique la sede de la autoridad que haya emitido la resolución impugnada.

Incidente de Incompetencia Núm. 1963/09-11-03-5/7937/09-17-07-1/806/10-S2-09-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de agosto de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Thelma Semíramis Calva García.
(Tesis aprobada en sesión de 12 de agosto de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

En este orden de ideas y con relación a la cuestión a dilucidar en el presente conflicto, la actora en el juicio contencioso es BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, CAUSAHABIENTE A TÍTULO UNIVERSAL DE SPIRA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,[1] **persona moral que forma parte del sistema financiero**, en términos del artículo 8º, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

[N.E. Se omite transcripción]

En estas condiciones, si la actuante en el presente juicio lo es una persona moral que forma parte del sistema financiero mexicano en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es evidente que se ubica en el supuesto de excepción previsto por la fracción I, apartado a, del artículo 34, de la Ley Orgánica de este Tribunal, vigente a partir del 7 de diciembre de 2007; luego entonces, de conformidad con el supuesto señalado, es que *la competencia de la Sala Regional que debe conocer del asunto corresponde a aquel lugar en donde se ubique la sede de la autoridad emisora de la resolución impugnada*.

En este orden de ideas, la **sede de una autoridad**, en principio, debe estar determinada en una Ley, Reglamento o norma de carácter general que haya sido pu-

[1] De la compulsa hecha por el Notario Público 138 del Distrito Federal, en el apartado de Antecedentes, visible a foja 36 de autos, se desprende que en la escritura pública número 157,391, de fecha 23 de febrero de 1994, se hizo constar que BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, tiene por objeto la Prestación del servicio de banca y crédito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito.

blicada en el Diario Oficial de la Federación para efecto de su conocimiento público, lo que *no deja lugar a dudas de su ubicación*; y que sólo de no ser el caso, la misma se determinará por el lugar de expedición de la resolución impugnada, ya que por regla general, la autoridad emite sus actos en la ubicación de su sede, pues dado el caso, a estos elementos, cuando no existe evidencia en contrario, debe dárseles pleno valor y tenerse como sede de la autoridad, el indicado en la resolución impugnada.

En este sentido, se estima conveniente precisar que, de conformidad con lo previsto por la fracción II, inciso a), del artículo 3° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tiene el carácter de autoridad demandada aquélla que haya dictado la resolución impugnada.

Ahora bien, en el caso concreto, la **resolución controvertida** es la contenida en el oficio PFC.TLA.B.3/3949-2006, de fecha 14 de agosto de 2006, emitida por el **Jefe del Departamento de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor**, **adscrito a la Delegación Tlalnepantla**.

En dicho tenor, a fin de determinar la sede de la autoridad en comento, se estima conveniente citar la normatividad aplicable vigente, como lo es la Ley Federal de Protección al Consumidor,[2] el Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor[3] y el Acuerdo que establece la Circunscripción Territorial de las Delegaciones y Subdelegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor,[4] vigentes:

[N.E. Se omite transcripción]

De la interpretación armónica a los dispositivos antes transcritos, se tiene que la Procuraduría Federal del Consumidor cuenta para el cumplimiento de sus atribu-

---

[2] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992.
[3] Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2006.
[4] Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2004.

ciones con diversas unidades administrativas, como lo son las delegaciones, mismas que han sido establecidas en todas las entidades federativas del país, a fin de que sus servidores públicos adscritos ejerzan las atribuciones conferidas; y es el Estatuto Orgánico de la Procuraduría el ordenamiento que prevé la denominación y sede de cada una de las delegaciones con que cuenta dicha Institución.

En el caso que interesa, la sede de la Delegación Tlalnepantla, se ubica en la **ciudad de Tlalnepantla**, **Estado de México**, conforme lo dispuesto en el artículo 14, fracción XIV, del Estatuto en comento, es decir, la sede de la autoridad emisora de la resolución impugnada, demandada en el juicio contencioso administrativo, es Tlalnepantla; hecho que se corrobora del contenido del oficio PFC.TLA.B.3/3449-2006, en el que se observa que ésta fue emitida en dicho lugar, tal y como se desprende de la foja 41 de autos y que, para su mejor comprensión, a continuación se reproduce:

[N.E. Se omite imagen]

Bajo las anteriores consideraciones, si la **sede de la autoridad demandada se ubica en Tlalnepantla, Estado de México**, es evidente que la Sala Regional que resulta competente para conocer y resolver el juicio interpuesto, lo es la **Tercera Sala Regional Hidalgo-México** de este Tribunal, al contar con jurisdicción en el Estado de México, atento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente a partir del 07 de diciembre de 2007, en relación con lo previsto en los artículos 31 y 32 de la misma, y las fracciones XI, de los artículos 21 y 22, del Reglamento Interior del citado Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2009, numerales que son del tenor siguiente:

[...]

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 29, fracción I y 30, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los di-

versos 23, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 21, fracción XI y 22, fracción XI, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- Es **procedente** y **fundado** el incidente de incompetencia planteado por la Séptima Sala Regional Metropolitana; en consecuencia;

II.- Es competente por razón de territorio para conocer del juicio contencioso administrativo en que se actúa, la **Tercera Sala Regional Hidalgo-México**.

III.- Remítanse los autos del juicio, con copia certificada de esta sentencia a la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Hidalgo-México, para que la Sala antes mencionada substancie el procedimiento y en su momento emita el fallo correspondiente.

IV.- Envíese copia certificada del presente fallo a la Séptima Sala Regional Metropolitana para su conocimiento.

V.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de agosto de 2010, por unanimidad de 05 votos a favor de los Magistrados Luis Carballo Balvanera, Olga Hernández Espíndola, Alfredo Salgado Loyo, Silvia Eugenia Díaz Vega y Juan Manuel Jiménez Illescas.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el engrose el día 26 de agosto de 2010 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Juan Manuel

Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-609

INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA. CASO EN EL QUE PARA SU RESOLUCIÓN LE SON APLICABLES LAS DISPOSICIONES VIGENTES AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- El artículo Primero Transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que la misma entrará en vigor el 1º de enero del 2006. Por su parte el artículo Cuarto Transitorio de dicha Ley dispone que los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor la Ley mencionada, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de presentación de la demanda. Ahora bien, la total resolución del juicio a que se refiere el artículo anterior, comprende no sólo la emisión del fallo definitivo respectivo, sino también su notificación y en su caso la tramitación y resolución de los medios de defensa establecidos para controvertir dicha notificación. Por lo cual, el incidente de nulidad de notificación de la sentencia forma parte del propio juicio y debe regirse por las disposiciones vigentes en el momento de la presentación de la demanda.

Incidente de Nulidad de Notificaciones Núm. 733/04-20-01-9/197/06-S2-10-04-NN.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de agosto de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de agosto de 2010)

PRECEDENTE:

V-P-2aS-708
Incidente de Nulidad de Notificaciones Núm. 2204/03-05-01-1/657/04-S2-07-04-NN.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de abril de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de mayo de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 78. Junio 2007. p. 226

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-610

INSTITUCIONES DE SEGUROS.- PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES, DEBE ESTARSE A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I, INCISO a) DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL EN VIGOR.- El artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente a partir del 7 de diciembre de 2007, dispone como regla general para fijar la competencia territorial de las Salas Regionales de este Tribunal, el que se tome en consideración el lugar donde se ubique el domicilio fiscal del demandante; asimismo, dicho dispositivo legal prevé diversos supuestos de excepción, entre los cuales se encuentra el previsto por la fracción I, inciso a) en el que se establece que, tratándose de las personas morales que formen parte del Sistema Financiero Nacional, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debe atenderse a la ubicación de la sede de la autoridad emisora de la resolución impugnada. Consecuentemente, si en el juicio contencioso la parte actora lo es una Institución de Seguros, que de conformidad a lo establecido por el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, forma parte del Sistema Financiero Nacional, resulta inconcuso que se actualiza el supuesto de excepción previsto en el artículo 34 fracción I, inciso a) antes referido, y la competencia territorial de las Salas Regionales de este Tribunal se rige por el lugar en el que se ubique la sede de la autoridad que haya emitido la resolución impugnada.

Incidente de Incompetencia Núm. 4304/08-06-01-8/2511/09-S2-06-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de agosto de 2010, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de agosto de 2010)

PRECEDENTE:

VI-P-2aS-437
Incidente de Incompetencia Núm. 18302/08-17-08-2/5805/08-06-01-1/770/09-S2-10-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 30 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretario: Lic. Luis Edwin Molinar Rohana.
(Tesis aprobada en sesión de 27 de noviembre de 2009)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010. p. 271

TERCERA PARTE

CRITERIOS AISLADOS DE SALA SUPERIOR Y DE SALAS REGIONALES

SALA SUPERIOR

PLENO

GENERAL

VI-TASS-47

CONTRADICCIÓN DE SENTENCIAS.- QUEDA SIN MATERIA SI UNO DE LOS FALLOS SEÑALADOS COMO CONTRADICTORIOS QUEDÓ INSUBSISTENTE.- Si por razones de lógica fundamental sólo puede haber contradicción entre tesis opuestas, basta que una de ellas deje de existir para que con ella se extinga todo antagonismo; por ende, no procede el estudio de una contradicción si una de las sentencias que se señalaron como contradictorias quedó insubsistente en cumplimiento de una ejecutoria dictada por el Poder Judicial, por lo que la misma quedará sin materia.

Contradicción de Sentencias Núm. 105/07-16-01-2/Y OTRO/629/09-PL-06-01.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de abril de 2010, por mayoría de 4 votos a favor, 2 votos con los puntos resolutivos y 4 votos en contra .- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
(Tesis aprobada en sesión de 12 de abril de 2010)

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- Establecida la procedencia de la denuncia de contradicción de sentencias, este Pleno de la Sala Superior estima que dicha contradicción **HA QUEDADO SIN MATERIA**.

En efecto, en el caso de la denuncia de contradicción de sentencias alude, como ya ha quedado indicado en el resultando 1° de este fallo, a la sentencia dictada el 5 de febrero de 2009 por la Sala Regional Chiapas-Tabasco, al resolver el juicio contencioso administrativo 845/08-19-01-8, y a la sentencia dictada el 15 de mayo de 2007 por la Sala Regional Peninsular, al resolver el juicio contencioso administrativo número 105/07-16-01-2.

Ahora bien, la sentencia dictada el 15 de mayo de 2007 por la Sala Regional Peninsular, al resolver el juicio contencioso administrativo número 105/07-16-01-2, fue revocada mediante ejecutoria de 30 de enero de 2008 por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, en la revisión fiscal 152/2007, como se desprende de la parte relativa de la sentencia de 3 de marzo de 2008, a través de la cual la Sala Regional Peninsular dio cumplimiento a la referida ejecutoria, sentencia visible a fojas 24 a 51 del expediente de contradicción de sentencias:

[N.E. Se omiten imágenes]

Por otra parte, el artículo 77 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone lo que sigue:

[N.E. Se omite transcripción]

Del precepto legal apenas transcrito se advierte que, **en el caso de contradicción de sentencias**, cualquiera de los Magistrados de este Tribunal o las partes en los juicios en las que tales tesis se sustentaron, podrán denunciarla ante el Presidente del propio Tribunal para que este haga del conocimiento de este Pleno de la Sala Superior, el cual con un quórum mínimo de diez Magistrados, decidirá por mayoría de siete la que debe prevalecer, constituyendo jurisprudencia, y que la resolución que pronuncie el referido Pleno, en los casos a que el artículo en cita se refiere, sólo tendrá efectos para fijar jurisprudencia y no afectará las resoluciones dictadas en los juicios correspondientes.

Esto es, la finalidad de la denuncia de contradicción de sentencias, atento al texto del artículo que ha quedado transcrito, es que este Pleno de la Sala Superior decida cuál de las tesis sustentadas en los fallos contradictorios debe prevalecer, y por tanto si una de las sentencias que se señalaron como contradictorias fue revocada por ejecutoria dictada por el Poder Judicial de la Federación, la contradicción de sentencias deja de existir, quedando por ende sin materia.

[...]

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 77 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 18, fracción XVI, de la Ley Orgánica de este Tribunal, se resuelve:

I.- Es procedente la denuncia de contradicción de sentencias formulada por el **Magistrado César Octavio Irigoyen Urdapilleta**, en su carácter de Titular de la Segunda Ponencia de la **Sala Regional Chiapas-Tabasco**, y que se precisa en el resultando 1° de este fallo.

II.- Se declara **SIN MATERIA** la contradicción de sentencias referida en el resolutivo anterior, por las razones que han quedado indicadas en el último considerando de esta sentencia.

III.- Envíese copia de esta sentencia a la **Sala Regional Chiapas-Tabasco** y a la **Sala Regional Peninsular** para su conocimiento.

IV.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de la presente resolución al **Magistrado César Octavio Irigoyen Urdapilleta**.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 12 de abril de 2010, por mayoría de cuatro votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Jorge Alberto García Cáceres, Alfredo Salgado Loyo y Juan Manuel Jiménez Illescas, más dos

votos con los resolutivos de las Magistradas Nora Elizabeth Urby Genel y Olga Hernández Espíndola, y cuatro votos en contra de los Magistrados Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alejandro Sánchez Hernández, Silvia Eugenia Díaz Vega, quien se reservó su derecho para formular voto particular, y Luis Carballo Balvanera. Estuvo ausente el Magistrado Francisco Cuevas Godínez.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado Alfredo Salgado Loyo, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 7 de mayo de 2010 y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30, fracción V, y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, en vigor a partir del día siguiente, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Lic. Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA C. MAGISTRADA SILVIA EUGENIA DÍAZ VEGA EN LA CONTRADICCIÓN DE SENTENCIAS NÚM. 105/07-16-01-2/Y OTRO/629/09-PL-06-01

La C. Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, se aparta del criterio de la mayoría por las siguientes consideraciones:

En efecto, la suscrita no comparte las consideraciones sustentadas por la mayoría de los señores Magistrados para resolver el caso concreto, pues el artículo 77 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que, en caso de contradicción de sentencia cualquiera de los Magistrados del Tribunal o las partes en el juicio podrán denunciar dicha contradicción el Presidente de este Tribunal, para que éste lo haga del conocimiento del Pleno, quien con quórum mínimo de

diez Magistrados decidirá por mayoría de siete criterios cual debe prevalecer, constituyendo jurisprudencia.

La facultad así otorgada al Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, tiene como propósito establecer los criterios que han de regir la actuación jurisdiccional de la propia sala superior, así como orientar el criterio que habrán de seguir las Salas Regionales en casos similares.

Es decir, a través de la resolución que resuelva la contradicción de sentencias habrá de superarse la divergencia de criterios que sobre un mismo tema o problema sostengan las salas integrantes de este Tribunal, de tal forma que al resolverse la contradicción y fijarse el criterio que debe prevalecer se da a los justiciables la certeza jurídica de que las controversias que en lo futuro se suciten sobre cuestiones semejantes habrán de resolverse de manera uniforme.

El hecho de que, alguna de las sentencias motivo de la controversia hubieren sido impugnadas por la parte afectada ante los Tribunales de Alzada, ello no puede impedir que el Pleno de esta Sala Superior cumpla con la facultad establecida en el artículo 77 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que contrario a lo sostenido por la mayoría de los señores Magistrados, no puede constituir un requisito de procedencia el que las sentencias denunciadas hubieran adquirido firmeza, pues como ya se dijo el criterio que este Pleno adopte en la resolución de las sentencias denunciadas está dirigido particularmente a las Salas que integran este Tribunal, para que en lo futuro rijan su actuación con dicho criterio.

En los términos antes expuestos considero que debió declararse procedente la contradicción de sentencias denunciadas y consecuentemente proceder a la resolución correspondiente.

MAG. SILVIA EUGENIA DÍAZ VEGA.

SALAS REGIONALES

QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-V-15

FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL FUERA DE UNA VISITA DOMICILIARIA.- NOTIFICACIÓN DE SU EJERCICIO, TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES.- Debe distinguirse la fecha en la que se practique la notificación correspondiente, para determinar si es válida o no la forma en que se efectuó la misma, toda vez que el artículo 48, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en su texto vigente hasta el veintiocho de junio del año dos mil seis, constituía una norma de derecho excepcional, que obligaba a las autoridades fiscales a notificar sus resoluciones tratándose del ejercicio de sus facultades de comprobación fuera de una visita domiciliaria, precisamente ante el domicilio manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes de la persona a quien va dirigida; por tanto, la reforma de la fracción I, del precepto citado en vigor a partir del veintinueve de junio de dos mil seis, obliga a las autoridades fiscales a notificar sus resoluciones en los términos de lo dispuesto por el artículo 136 del ordenamiento legal invocado, disposición que autoriza que la práctica de la notificación personal se efectúe en el domicilio convencional designado para tal efecto al iniciar alguna instancia o en el curso de un procedimiento.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30346/06-17-05-9.- Resuelto por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,

el 12 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Francisco Cárdenas Elizondo.- Secretaria: Lic. Alicia Hernández Saavedra.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-V-16

NORMA DE DERECHO EXCEPCIONAL. LO ES, EL ARTÍCULO 48, FRACCIONES I Y IX DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO VIGENTE HASTA EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL SEIS.- Si bien es cierto que el segundo párrafo, del artículo 136, del Código Fiscal de la Federación establece la posibilidad de que las notificaciones personales se realicen en el domicilio convencional designado para tal efecto, cuando el particular lo haya señalado así al iniciar alguna instancia o en el curso de un procedimiento, no menos cierto es que el artículo 48, fracciones I y IX del Código Tributario antes indicado contiene normas específicas para la práctica de las notificaciones a las personas morales, cuando se esté en el supuesto del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal fuera de una visita domiciliaria. En efecto, como es de explorado derecho las normas de derecho excepcional o particular, como la contenida en el último de los preceptos antes mencionados, constituyen una desviación o derogación al principio general contenido en la norma de derecho, en este caso, la relativa a las notificaciones personales de los actos administrativos contemplada en el artículo 136, al haber establecido el legislador que, tratándose de personas morales, la notificación del ejercicio de las facultades de comprobación fuera de una visita domiciliaria, deberá efectuarse al contribuyente en el domicilio manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes por la persona a quien va dirigida, más aun si con toda claridad se determinó por el legislador en la fracción IX, del artículo 48 del ordenamiento legal invocado, que precisamente la notificación se deberá efectuar cumpliendo con lo ordenado en la fracción I y en el lugar especificado en dicha disposición, esto es, en el domicilio fiscal de la persona moral, cuando se trate de resoluciones que determinen contribuciones o aprovechamientos omitidos, en el su-

puesto de que no se corrija totalmente la situación fiscal conforme al oficio de observaciones o no se desvirtúen los hechos u omisiones consignados en dicho documento. En estos términos, la característica de la norma de derecho excepcional consiste en traducirse en un verdadero privilegio en beneficio de determinadas personas, o bien, en una mayor limitación de las facultades concedidas de manera general a todos los demás, es decir, una restricción o un agravamiento establecido por razones excepcionales. Así pues, la ventaja o restricción constituyen el efecto que deriva de la norma, en tanto que su carácter excepcional se desprende de la comparación con los principios generales a los que la norma de derecho singular deroga.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30346/06-17-05-9.- Resuelto por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Francisco Cárdenas Elizondo.- Secretaria: Lic. Alicia Hernández Saavedra.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-V-17

AMPLIACIÓN DE DEMANDA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Si bien es cierto literalmente la norma alude a: "las cuestiones que se introduzcan con motivo de la contestación" y el primer párrafo señala que se podrá ampliar la demanda dentro de los veinte días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la contestación, ello no implica que únicamente en dichos casos se podrá dar plazo para ampliar la demanda, pues una debida inteligencia de la norma permite darle un alcance o sentido amplio conforme al propósito que el legislador implícitamente plasmó en dicho precepto legal, consistente en dar oportunidad al particular de tener una plena defensa en el juicio contencioso administrativo en contra de los actos de autoridad que combata,

con el propósito fundamental de no permitir un estado de indefensión ante un acto de autoridad que puede trascender en el resultado del fallo y, por tanto, garantizar una adecuada impartición de justicia, ante una cuestión introducida por parte de la autoridad demandada que le es desconocida a la actora. En consecuencia cuando se introducen cuestiones al momento de la contestación a la ampliación de demanda que son desconocidas por la actora al presentar la demanda, se debe otorgar plazo para una nueva ampliación únicamente respecto a dichas cuestiones, y de esta manera se conservará el principio de igualdad en el proceso, pues se dará lugar para que una parte pueda ampliar y la otra contestar gozando de un término idéntico (veinte días) para presentar la ampliación o contestación correspondiente.

Recurso de Reclamación Núm. 6402/08-17-05-9.- Resuelto por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 8 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Francisco Cárdenas Elizondo.- Secretaria: Lic. Alicia Hernández Saavedra.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-V-18

DEMANDA SUPUESTO EN QUE PROCEDE CONCEDER TÉRMINO PARA UNA SEGUNDA AMPLIACIÓN.- Cuando con motivo de la contestación de la ampliación de demanda se introduzcan cuestiones que sean desconocidas por la actora al momento de presentar su demanda, procede conceder término para una segunda ampliación en relación con dichas cuestiones desconocidas, para evitar dejarlo en estado de indefensión respecto de los argumentos y pruebas que fueron expuestos y aportadas por su contraria. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no debe interpretarse literalmente, ni desvinculado de la dinámica del proceso postulatorio y probatorio derivado del esquema que plantean los artículos 16, 17, 20, fracción VI, y 21, frac-

ción V y antepenúltimo párrafo del mismo ordenamiento legal. En efecto, si la ley autoriza a la demandada para aportar las pruebas que estime pertinentes en la contestación y en la contestación a la ampliación de demanda, con el objeto de que pueda demostrar sus excepciones y defensas, y en uso de tal derecho introduce al formular la contestación a la ampliación una cuestión desconocida por el actor, es obvio que no se puede ni debe coartar el derecho de éste para argumentar y probar en contra de la misma, aun cuando el artículo 17 no lo diga expresamente, toda vez que se vulneraría el principio de igualdad procesal de las partes y se produciría un estado de indefensión que pudiera trascender al resultado del fallo.

Recurso de Reclamación Núm. 6402/08-17-05-9.- Resuelto por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 8 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Francisco Cárdenas Elizondo.- Secretaria: Lic. Alicia Hernández Saavedra.

DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA

LEY ADUANERA

VI-TASR-XXI-46

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CANCELACIÓN DE PATENTE DE AGENTE ADUANAL, ES PROCEDENTE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO EL ORIGEN DE LA IRREGULARIDAD SE BASA EN UN PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN.- Si bien es cierto que en la Ley Aduanera no se prevé requisitos, condiciones o términos para el ejercicio de las facultades de la autoridad aduanera respecto del inicio del procedimiento de cancelación de patente aduanal, también lo es, que establece los supuestos de cancelación de una patente de agente aduanal y en su artículo 1 la supletoriedad del Código Fiscal de la Federación, ahora bien, el artículo 67 del Código Tributario señala que las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales se extinguen en el plazo de cinco años, sin que haga referencia a la sanción meramente administrativa, lo cual podría dar lugar a considerar que tratándose del procedimiento administrativo de cancelación de patente de agente aduanal, al no determinar contribuciones o aprovechamientos no resultaría aplicable el mencionado precepto fiscal, sin embargo, no se debe perder de vista el origen del procedimiento administrativo de cancelación de patente de agente aduanal, dado que en el supuesto caso de que si el origen se encontrare en un pedimento de importación, resulta aplicable el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, ello en virtud de que un pedimento de importación, en términos del artículo 36 de la Ley Aduanera, es el formato utilizado por quienes importen o exporten mercancías del territorio nacional, consecuentemente, el pedimento tiene la naturaleza de una autodeclaración fiscal en materia de comercio exterior, en el que se

determina contribuciones al comercio exterior por la entrada y salida de mercancías a territorio nacional, en esa tesitura, si el origen del procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal, surgió por motivo de la revisión practicada por la autoridad aduanera de dicha autodeclaración fiscal en materia de comercio exterior, es totalmente aplicable el Código Fiscal de la Federación, amén de que la propia legislación en la que se apoya la autoridad permite tal supletoriedad.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3794/10-17-10-2.- Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Yolanda Vergara Peralta.- Secretario: Lic. Samuel Mithzael Chávez Marroquín.

SALA REGIONAL DEL NOROESTE II

LEY ADUANERA

VI-TASR-VII-47

RESARCIMIENTO ECONÓMICO. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY ADUANERA NO ESTABLECE EL SUPUESTO DEL PAGO DE INTERESES A CARGO DEL FISCO FEDERAL.- El artículo 157 de la Ley Aduanera, únicamente prevé que el resarcimiento económico es el pago del valor de la mercancía y su actualización, sin que contemple en forma o de manera alguna, el concepto del pago de intereses en términos de los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación; pues lo cierto, es que, dichos numerales no son de aplicación supletoria en la materia, en tanto que, el procedimiento para tal devolución se encuentra en la norma específica en comento; por tanto, si hubiese sido la intención del legislador que procediera el pago de intereses en materia de resarcimiento económico, entonces así lo hubiese plasmado en el artículo 157 de la Ley Aduanera, que es la norma específica aplicable y que regula la devolución, sin embargo, en dicho numeral, se advierte que el legislador solo contempló la actualización de la cantidad a pagar, de ahí, que resulte infundado que se pretenda aplicar de manera supletoria lo dispuesto por los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación, cuando no existe disposición legal que así lo disponga.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 900/09-02-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de febrero de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretario: Lic. David Gustavo Bustos Pérez.

LEY DE COMERCIO EXTERIOR

VI-TASR-VII-48

NORMAS OFICIALES MEXICANAS. SON CONSIDERADAS POR LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR, COMO UNA REGULACIÓN Y RESTRICCIÓN NO ARANCELARIA.- Atendiendo al contenido del artículo 26 de la Ley de Comercio Exterior, las Normas Oficiales Mexicanas son disposiciones de normalización a la importación, circulación o tránsito de mercancías que se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa, las que autoridades aduaneras deban hacer cumplir en el punto de entrada de la mercancía al país. Por su parte, del artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior, se conoce que, las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación e importación de mercancías, consistirán en permisos previos, cupos máximos, marcado de país de origen, certificaciones, cuotas compensatorias y los demás instrumentos que se consideren adecuados para los fines de dicha Ley, por lo que, si bien es cierto, en dicho precepto, la Ley de Comercio Exterior, no hace referencia expresa a las Normas Oficiales Mexicanas de manera literal, también lo es que, dicho precepto, no debe interpretarse de manera limitada, en cuanto que, de una interpretación sistemática al mismo, en relación con el capitulado de la Ley en cita, se conoce que podrán establecerse otras medidas al respecto; como lo son las Normas Oficiales Mexicanas, al encontrarse contenidas en el TÍTULO IV denominado "ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACIÓN Y RESTRICCIÓN NO ARANCELARIAS DEL COMERCIO EXTERIOR", CAPÍTULO II, denominado "MEDIDAS DE REGULACIÓN Y RESTRICCIÓN NO ARANCELARIAS", Sección Tercera "Otras medidas de regulación al comercio exterior y normas oficiales mexicanas"; por tanto, debe considerarse que dichas normas forman parte de las regulaciones y restricciones no arancelarias.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 987/09-02-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de

junio de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretario: Lic. David Gustavo Bustos Pérez.

SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO I

LEY ADUANERA

VI-TASR-XXX-62

MÉTODO DE VALORACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN ADUANAS. NO ES SUFICIENTE CON SEÑALAR LOS FUNDAMENTOS LEGALES QUE RIGEN LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN PREVISTOS EN LA LEY ADUANERA.- De los artículos 64 y 65 de la Ley Aduanera se desprende que por regla general la base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías, debiéndose entender por éste el valor de transacción de las mismas, es decir, el precio que se paga por éstas. Sin embargo, cuando no se pueda determinar la base gravable del impuesto general de importación conforme al valor de transacción de las mercancías que se importaron en términos del artículo 64 del referido precepto legal, o no derive de una compraventa para la exportación con destino a territorio nacional, se determinará conforme a métodos de valuación contenidos en el artículo 71 del ordenamiento legal citado, en orden sucesivo y por exclusión. Por tanto, si la autoridad aduanera utiliza como método para determinar el valor de un vehículo extranjero, el previsto en el artículo 74 del ordenamiento en cita, esto es, conforme al valor de precio unitario de venta, no resulta suficiente que fundamente el método de valoración utilizado, así como que precise que el valor lo determinó con base en el Nacional Automobile Dealers Asociation (N.A.D.A), sino que resulta necesario que haga mención dentro de la resolución aduanera, de dónde obtuvo los elementos que conforme al artículo 74 de la ley en cita tomó en consideración para determinar el valor de las mercancías a importar, es decir, cuáles fueron las mercancías que sirvieron como punto de comparación para determinar el valor en aduanas de las mercancías embargadas, así como para establecer que son idénticas o similares, en qué tipo de mercado se comercializan, con base a qué precios estimó su valor, establecer con precisión cuál es

el valor unitario a que se vende la mayor cantidad total de las mercancías importadas, después de su transformación a personas del territorio nacional que no tengan vinculación con los vendedores de las mercancías, etc.; circunstancias que al no ser especificadas conforme a derecho en la resolución, disminuyen la fundamentación y motivación del método de valoración.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2013/08-04-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del Norte-Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de marzo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Rosa Anabel Rangel Rocha.- Secretaria: Lic. Yazmín Rodríguez Mendoza.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

VI-TASR-XXX-63

DIRECTOR GENERAL DE UN CENTRO SCT. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 8 DE ENERO DE 2009, ES AUTORIDAD COMPETENTE PARA TRAMITAR MAS NO PARA RESOLVER, LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE CORRESPONDE APLICAR A DICHA SECRETARÍA DE ESTADO.- Con fecha 8 de enero de 2009, entró en vigor el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El artículo 10 de dicho ordenamiento legal, señala las facultades con que cuentan los Titulares de Unidad y los Directores Generales; encontrándose entre estas, la señalada en la fracción XV, de dicho numeral que le otorga la competencia a los Directores Generales, cargo que ostentan, los Directores de los Centros SCT, de tramitar los recursos administrativos que establezcan las leyes y reglamentos que corresponde aplicar a la Secretaría, competencia de la Dirección General a su cargo, mas no le

otorga la atribución de resolverlos, ya que para este último efecto, debe someterlos al superior jerárquico competente para su resolución. En esta tesitura, el Director General, un Centro SCT, no es autoridad competente para emitir resolución a los recursos referidos, por lo que si lo hace, es evidente que estamos ante una autoridad incompetente para ese efecto.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2236/09-04-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Norte-Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de febrero de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Pablo Chávez Holguín.- Secretario: Lic. Ernesto Alonso García Rodríguez.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

VI-TASR-XXX-64

DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. EL CONTRIBUYENTE TIENE DERECHO A SOLICITARLA MEDIANTE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA, POSTERIOR A LA DECLARACIÓN ANUAL PRESENTADA POR EL RETENEDOR, SIEMPRE Y CUANDO NO SE INICIE EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN.- Si en cumplimiento de las obligaciones fiscales, el retenedor presenta ante las autoridades correspondientes la declaración anual del ejercicio fiscal a que se refiere el artículo 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentando el contribuyente, de manera posterior, una declaración complementaria que origina saldo a favor, solicitando además la devolución del mismo, no resulta procedente que la autoridad demandada niegue la devolución de dicho saldo, arguyendo que se debió haber presentado el escrito a que alude el artículo 117, fracción III, inciso b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que la contribuyente actuó en ejercicio del derecho que le otorga el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que las declaraciones que se presenten serán definitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de

comprobación. Por tanto, el contribuyente válidamente puede presentar declaración complementaria a la anual presentada por su retenedor, toda vez que no existe ley o prohibición expresa para ello, ya que puede presentar su declaración siempre y cuando la misma derive de un saldo a favor como consecuencia de la aplicación de las deducciones previstas por las fracciones I ó II del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 168/10-04-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del Norte-Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de mayo de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alfredo Ureña Heredia.- Secretaria: Lic. Yazmín Rodríguez Mendoza.

REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

VI-TASR-XXX-65

SUBADMINISTRADOR "1" DE DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL. ES INEXISTENTE AL NO ENCONTRARSE PREVISTO EN EL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2007.- El artículo 19, último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de octubre de 2007, prevé que las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal estarán a cargo de un Administrador Local, quien será auxiliado en el ejercicio de las facultades conferidas en dicho artículo, entre otros funcionarios, por los Subadministradores Locales de Auditoría Fiscal "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7" y "8". Atento a lo anterior, si dentro del referido artículo reglamentario, únicamente se prevé dentro de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, la existencia de los Subadministradores "1" al "8", y por el contrario, no se encuentra prevista la figura

del Subadministrador "1" de Devoluciones y Compensaciones, dentro de la estructura de las citadas administraciones, ello trae como consecuencia su inexistencia y por ende, su incompetencia para actuar en auxilio del Administrador Local de Auditoría Fiscal respectivo, por lo que la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que hubiera sido emitida por el mencionado Subadministrador, deberá declararse ilegal al actualizarse la causal prevista en el artículo 51 fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que fue emitida por una autoridad inexistente.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 453/10-04-01-7.- Resuelto por la Sala Regional del Norte-Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de junio de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Pablo Chávez Holguín.- Secretario: Lic. Ernesto Alonso García Rodríguez.

TERCERA SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO II

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXVII-143

MULTA PREVISTA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 76 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN LA RESOLUCIÓN QUE SE DETERMINA NO ES NECESARIO QUE SE CITE DISPOSITIVO LEGAL ADICIONAL QUE PREVEA EXPRESAMENTE DETERMINADA CONDUCTA COMO INFRACCIÓN.- El referido párrafo del artículo 76 en cita establece que cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones, y sea descubierto por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicará una multa del 55% al 75% de las contribuciones omitidas, y de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 71 del Código Fiscal de la Federación, se puede concluir que una infracción se puede actualizar no solo por actualizarse la hipótesis prevista que se considera como tal en un dispositivo normativo, sino por la omisión del cumplimiento de obligaciones previstas en las disposiciones legales, razón por la cual las autoridades fiscales al imponer una multa con fundamento en el artículo 76 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, no es necesario que, además de dicho precepto, se cite el dispositivo legal que prevé expresamente determinada conducta como infracción, sino que es suficiente que en el apartado correspondiente de la liquidación quede debidamente fundada y motivada la omisión del pago de contribuciones al no cumplir con las obligaciones previstas en la ley respectiva que establece como obligación dicho pago.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6924/09-05-03-3.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Adolfo Rosales Puga.- Secretario: Lic. Carlos Javier García González.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXVII-144

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. NO ES GENÉRICA SI SE ASIENTA QUE SERÁ EN EL LUGAR SEÑALADO EN ESA ORDEN.- El hecho que en el texto de la orden de visita se hubiere asentado que la visita se llevaría a cabo en el lugar señalado en esa orden, no la vuelve genérica o ilegal, si al inició de dicho documento se advierte que se encuentra dirigido al contribuyente precisando su domicilio, toda vez que resulta evidente que ese es el lugar donde debía efectuarse la visita, pues ahí se contienen los elementos que permiten al visitador ubicar específicamente la dirección y, por ende, el lugar señalado para su práctica, el cual corresponde al domicilio fiscal del contribuyente, por lo que se debe concluir que cumple con los requisitos establecidos en los artículos 16 constitucional y 43, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en lo que se refiere a la precisión del lugar o lugares en los cuales habrá de efectuarse.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6924/09-05-03-3.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Adolfo Rosales Puga.- Secretario: Lic. Carlos Javier García González.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXVII-145

VISITA DOMICILIARIA. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITORES ANTE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDA LA DILIGENCIA, DEBE EFECTUARSE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA ORDEN Y NO ANTES.- Del análisis concatenado de los artículos 42, antepenúltimo párrafo y 44, fracciones I, II y III, ambos del Código Fiscal de la Federación, pode-

mos concluir que al momento de constituirse los visitadores en el domicilio donde se efectuará la visita señalada en la orden respectiva, en primer término, deben requerir la presencia del visitado o su representante legal, y en caso de que no estuviera, dejarle citatorio para una hora determinada del día hábil siguiente, luego, en caso de que el interesado o su representante legal no hubieran atendido el citatorio, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado, lo cual ocurre con la entrega o notificación de la orden de visita, instante en el cual se debe considerar que inician las facultades de la autoridad fiscal y por ende la visita domiciliaria, por lo que si la fracción III del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, ordena que al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervienen se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, los auditores deben proceder a identificarse inmediatamente después de la entrega de la orden y no antes, pues en el momento previo a la entrega de la orden no se puede considerar formalmente que ha iniciado la visita, lo cual es necesario para que surja la obligación de identificarse por parte de los visitadores.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6924/09-05-03-3.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Adolfo Rosales Puga.- Secretario: Lic. Carlos Javier García González.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXXVII-146

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, INFUNDADA.- Resulta infundada la causal de improcedencia invocada por la autoridad al contestar la demanda prevista en la fracción XI del artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo a saber, de que no existe el acto reclamado, pues reconoce que dicha autoridad, puede emitir uno o más créditos por un mismo período siempre que se trate de

trabajadores distintos o por diferencias de dicho patrón. Lo infundado de dicha manifestación, se actualiza porque la autoridad pasa por alto la obligación consignada en el artículo 20, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismo que establece que "*El demandado en su contestación y en la contestación de la ampliación de la demanda, se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso*." Ya que el actor con fundamento en el artículo 16, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, manifestó desconocer la resolución administrativa que pretende impugnar, estando obligado por disposición expresa de dicho precepto legal a señalar únicamente: la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. Lo que se cumplió cabalmente en el caso, al haber precisado la autoridad demandada; el bimestre de cotización y el importe. De ahí que no existe el estado de indefensión aludido por la autoridad, ya que con sus argumentos deja entrever que sí existen créditos fiscales a cargo del demandante por el periodo demandado y que debió dar a conocer al contestar la demanda, por lo que resulta infundado que no exista el acto impugnado y por tanto resulta improcedente decretar el sobreseimiento en el juicio.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2333/10-05-03-7.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Manuel Bravo Hernández.- Secretaria: Lic. Norma Santacruz González.

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

VI-TASR-XXXVII-147

AUTORIDADES ESTATALES. EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, DEBE REGIRSE POR LA LEGISLACIÓN FEDERAL.- Si la Dirección Gene-

ral de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, se encuentra adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y ejerce facultades a que se refiere el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 04 de Octubre de 2006, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, dicha autoridad estatal debe ser considerada como una autoridad federal y sus actuaciones deben apegarse a las disposiciones fiscales federales y no estatales, pues además así se acordó en el último párrafo de la Cláusula Cuarta del referido Convenio, al establecerse que para "*Para el ejercicio de las facultades conferidas, la Secretaría y la entidad convienen en que ésta las ejerza en los términos de la legislación federal aplicable*".

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1706/10-05-03-3.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Adolfo Rosales Puga.- Secretario: Lic. Carlos Javier García González.

LEY ADUANERA

VI-TASR-XXXVII-148

EXENCIÓN DE IMPUESTOS DE ADUANA, DERECHOS DE INSPECCIÓN Y OTROS IMPUESTOS O GRAVÁMENES NACIONALES. EL CONVENIO SOBRE TRANSPORTES AÉREOS ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ESTABLECE LA.- El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, *serán la Ley Suprema de la Unión.* En este

sentido, el Convenio sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 1962, establece en el artículo 7º, inciso b), que a fin de impedir prácticas discriminatorias y para asegurar la igualdad de tratamiento, ambas partes acuerdan *entre otras cosas,* la exención a base de reciprocidad de los impuestos de aduana, derechos de inspección y otros impuestos o gravámenes nacionales, en tratándose de combustible, aceites lubricantes, materiales técnicos fungibles, piezas de repuesto, equipo corriente y provisiones introducidas en el territorio de una parte por la otra parte, o por sus nacionales para uso exclusivo de las aeronaves de dicha parte. En este orden de ideas, si bien es cierto como lo estableció la autoridad al resolver el recurso administrativo de revocación, la Ley Aduanera expresamente establece como impuestos al comercio exterior, el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación y los supuestos de exención de dichos impuestos, no obstante ello, pasa por alto que el Convenio Internacional celebrado por este País con Estados Unidos de América y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de julio de 1962, además de la exención de los impuestos de aduana (impuesto general de importación e impuesto general de exportación) se refiere a los derechos de inspección y otros impuestos o gravámenes nacionales - impuesto al valor agregado-, que se causa con motivo de la importación de bienes o servicios. En consecuencia, debe estimarse que la importación efectuada al amparo del Convenio Bilateral sobre Transportes Aéreos, se encuentra exenta tanto del pago del impuesto general de importación como del impuesto al valor agregado, por lo que resulta ilegal la determinación de la autoridad aduanera y por tanto debe declararse su nulidad.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1794/10-05-03-7.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Manuel Bravo Hernández.- Secretaria: Lic. Norma Santacruz González.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-XXXVII-149

CUOTAS ENTERADAS INDEBIDAMENTE ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- PROCEDE SU DEVOLUCIÓN CON EL PAGO DE INTERESES Y NO SÓLO ACTUALIZADAS AL SER APLICABLE EN FORMA SUPLETORIA AL RESPECTO EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN SUS ARTÍCULOS 22 Y 22-A.- Tomando en consideración que el artículo 9 de la Ley del Seguro Social dispone que a falta de norma expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, y previendo que la Ley del Seguro Social establece la institución jurídica relativa a la devolución de cuotas enteradas indebidamente, pero en tal Ley no se reglamenta la forma en que deban calcularse los intereses causados por el pago indebido realizado por el gobernado; por lo anterior sí procede aplicar supletoriamente el Código Fiscal de la Federación, porque la supletoriedad debe operar cuando en el ordenamiento de la materia hay alguna deficiencia que es necesario subsanar, pues no se trata de implantar en un cuerpo legal, sistemas ajenos, sino de llenar lagunas de la ley.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1402/10-05-03-6.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Adolfo Rosales Puga.- Secretario: Lic. Gabriel Carlos Sánchez Mauleón.

REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

VI-TASR-XXXVII-150

COMPETENCIA MATERIAL DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL PARA IMPONER MULTAS. NO SE FUNDA ADE-

CUADAMENTE CUANDO, SÓLO SE INVOCA EL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN XXXI, EN RELACIÓN CON EL 10, FRACCIÓN I, AMBOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007.- Para que la Administración Local de Auditoría Fiscal en el texto de la resolución funde debidamente su competencia material al aplicar la multa en controversia, resulta indispensable que además de mencionar la disposición normativa genérica (fracción XXXI artículo 9 en mención), invocara también la específica que establezca como la materia de la competencia de la Administración Local de Auditoría Fiscal la relativa a requerir determinada información o documentación con el propósito de verificar las contribuciones por pagar dictaminadas, en el dictamen formulado sobre sus estados financieros de la empresa actora, aspecto este último que en el texto de la resolución combatida omitió fundar la autoridad, pues para ello resulta indispensable que se cite la fracción correspondiente del artículo 17 del Reglamento Interior en mención, en relación con el 19 del mismo ordenamiento legal, que faculte a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal para ejercer dicha facultad material, aspecto que en el caso omitió fundar la enjuiciada.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2008/10-05-03-9.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de agosto de 2010, por mayoría de votos.- Magistrado Instructor: Adolfo Rosales Puga.- Secretario: Lic. Gabriel Carlos Sánchez Mauleón.

PRIMERA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE

LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

VI-TASR-X-6

REQUERIMIENTO DE PAGO DE PÓLIZA DE FIANZA.- RESULTA ILEGAL QUE LA AUTORIDAD EXIJA EL MONTO TOTAL DE LA CANTIDAD GARANTIZADA, SIN DISMINUIR LOS PAGOS PARCIALES DEL CRÉDITO EFECTUADOS POR EL OBLIGADO DIRECTO, E INCLUYENDO CONCEPTOS NO GARANTIZADOS EXPRESAMENTE.- En las pólizas de fianza expedidas para garantizar el cumplimiento de la concesión otorgada para el pago en parcialidades de un crédito fiscal y, ante el reconocimiento de la autoridad de que el obligado directo efectuó enteros parciales, resulta ilegal que la autoridad señale que en virtud de que el saldo insoluto del crédito excede el importe de la póliza, se limitó a exigir el monto total del importe de la misma; toda vez que, por una parte, al tratarse de una obligación accesoria de carácter divisible que estriba en garantizar el entero de una cantidad dividida en determinadas parcialidades, los pagos realizados por la obligada directa debieron disminuirse del monto total del adeudo garantizado y, por ende, requerir a la afianzadora únicamente el monto restante y; por la otra, al estar incluidos en el convenio los recargos y actualización derivados del entero en parcialidades del crédito a cargo de la fiada, es improcedente que se le pretenda exigir el pago de los conceptos de actualización y recargos por financiamiento, por mora y, de origen, en razón de que la afianzadora no se obligó expresamente a garantizarlos y, por tanto, no corresponden a condiciones pactadas en la póliza, siendo que, de conformidad con lo establecido por los artículos 78 del Código de Comercio y 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, las afianzadoras sólo asumirán las obligaciones convenidas en las pólizas de fianza y las partes deben estarse a las condiciones pactadas en las mismas.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3835/08-07-01-3.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 26 de enero de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Miguel Ángel García Padilla.- Secretaria: Lic. Edith Marcela Bárcenas Corona.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-X-7

COMPENSACIÓN DECLARADA POR ERROR EN LUGAR DE ACREDITAMIENTO Y CORREGIDA MEDIANTE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA, NO EXIME AL CONTRIBUYENTE DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EL AVISO CORRESPONDIENTE, NI DE LA INFRACCIÓN POR SU OMISIÓN.- En el supuesto de que en una declaración normal del periodo de que se trate, se haya manifestado una compensación y no un acreditamiento del impuesto, deviene en que el contribuyente está obligado a presentar el aviso correspondiente en el término del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación; obligación que, de no ser atendida, deriva en la comisión de la infracción a la citada disposición, actualizando la hipótesis prevista en el artículo 81, fracción I, del Ordenamiento legal en cita, que es sancionada conforme al diverso numeral 82, fracción I, inciso c), del propio Código; sin que sea motivo legal para eximir al contribuyente de la imposición de la multa como consecuencia de la omisión de la presentación del aviso de compensación, que se hubiere incurrido en error al presentar la declaración normal del periodo al manifestar la compensación del impuesto a cargo, en lugar del acreditamiento de saldo a favor de periodos anteriores y, que tal error fuese corregido mediante declaración complementaria, toda vez que, aun tomando en cuenta que la declaración complementaria sea presentada y, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 del Código Tributario Federal, los contribuyentes puedan modificar hasta en 3 ocasiones sus declaraciones; del texto de tal dispositivo no se desprende la consecuencia de que se tenga a la declaración complementaria supliendo en todos sus efectos a la anterior, en mérito de que las declaraciones presentadas

son definitivas y solo son objeto de modificaciones, mas no de suplencia; ni está previsto que sea causa de excepción para la imposición de la aludida sanción, el error en que incurra el contribuyente en la declaración definitiva y que sea subsanado posteriormente mediante declaración complementaria, en mérito de que la única hipótesis prevista en el Ordenamiento legal en cita, por el que es procedente eximir de la imposición de la multa está contemplada en el numeral 73, del Código en comento, referida a que se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o, cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito; siendo que, aún en el supuesto de que al aviso correspondiente a la compensación presentado fuera de los plazos establecidos en la Ley de la materia, se asimile a la presentación de la declaración complementaria por la que se modifica lo manifestado en relación con la compensación consignada en la declaración normal; no es dable concederle la calidad de cumplimiento espontáneo en términos de la mencionada disposición, en virtud de que la misma se condiciona a que no se actualicen diversos supuestos, entre los que se encuentra el relativo a que la omisión sea descubierta por las autoridades fiscales, por ende, no existe espontaneidad en el caso de que la presentación de la declaración complementaria ocurra con posterioridad a la fecha en que se emita y notifique la resolución por la que se impone la sanción y, en la que la autoridad descubre la omisión de presentar el aviso, derivado de la compensación manifestada en la declaración normal.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1637/08-07-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de julio de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Miguel Ángel García Padilla.- Secretaria: Lic. Martha Evangelina Lujano Cortés.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-X-8

CAPITAL CONSTITUTIVO.- LA FACULTAD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA CUANTIFICAR LOS RUBROS QUE LO INTEGRAN, NO QUEDA A SU ARBITRIO.- La cuantificación de los rubros que integran los capitales constitutivos que determina el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el incumplimiento de los patrones de sus obligaciones en materia de seguridad social, no constituye una facultad arbitraria, sino que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley del Seguro Social, se encuentra sujeta a las bases y procedimientos establecidos en tal numeral, no sólo en cuanto a los conceptos que comprenden, sino en lo que respecta al procedimiento o mecanismo que el Instituto debe seguir para cuantificar su monto; requisitos que se satisfacen en el supuesto de que en el capital constitutivo se precisen las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración el Instituto para emitirlo, expresando para tal efecto el nombre del trabajador al cual el Instituto le otorgó las prestaciones, la fecha del riesgo de trabajo sufrido por tal trabajador, así como el hecho de que el patrón presentó el aviso de modificación de salario con posterioridad al momento en que aconteció el accidente de trabajo, además de precisar el procedimiento aplicado para determinar el monto de los subsidios otorgados y, su debida identificación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4814/08-07-01-3.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de julio de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Miguel Ángel García Padilla.- Secretaria: Lic. Edith Marcela Bárcenas Corona.

SEGUNDA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE

LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE

VI-TASR-XXVIII-9

LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. SUS DISPOSICIONES RESULTAN INAPLICABLES A LAS MULTAS NO FISCALES IMPUESTAS POR LA OTRORA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA. LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 1º DE JUNIO DE 2009.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en relación con los razonamientos dados en la exposición de motivos de dicho ordenamiento legal, debe concluirse que éste regula los derechos y garantías básicas de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales. Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1º, 2 y 3 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, se colige que dicha autoridad es eminentemente administrativa, no fiscal; por ende, sus relaciones con los gobernados no tienen carácter tributario, sino administrativo. Así, en atención a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 99/2006, con rubro: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO" y por la Segunda Sala de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CXCVI/2002, con rubro: "MULTAS POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA. NO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL", ha de concluirse que a las sanciones impuestas por aquella autoridad administrativa, no le serán aplicables las prerrogativas contenidas en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pues no derivan de una contribución u obligación tributaria,

sino que corresponden a una manifestación de la potestad punitiva del Estado. Sin que sea óbice para lo anterior, el hecho de que tales multas se consideren aprovechamientos, en razón de que esto es insuficiente para darles carácter tributario, ya que, estas multas son eminentemente administrativas, no fiscales.

Recurso de Reclamación Núm. 5312/08-07-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 6 de mayo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero.- Secretario: Lic. José Limón Gallegos.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXVIII-10

NEGATIVA FICTA. ES IMPROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN EN JUICIO DE NULIDAD SI ÉSTA SE CONFIGURA RESPECTO A UNA CONSULTA PLANTEADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2007.- Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del 1º de enero de 2007, a los razonamientos dados en la exposición de motivos del decreto por el que se reformó el citado numeral y, a los dictámenes que sobre el mismo emitieron las Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, se advierte que el objetivo perseguido con dicha reforma es evitar litigios entre los particulares y la autoridad fiscal, así como respetar el principio de autodeterminación de las contribuciones. Por ende, las respuestas recaídas a las consultas planteadas por los contribuyentes en términos de lo previsto por el citado artículo no podrán ser impugnadas en la vía contenciosa administrativa. En ese entendido, la negativa ficta que en términos del artículo 37, del Código Fiscal de la Federación, llegue a configurarse respecto de una consulta planteada por la contribuyente, tampoco podrá controvertirse en juicio de nulidad, en virtud de que dicha resolución ficta y la expresa comparten la misma naturaleza sustancial y, por

ende, las hipótesis de procedencia de las instancias correspondientes debe sujetarse a las mismas reglas y limitantes previstas en el artículo 34, del citado Código.

Recurso de Reclamación Núm. 3971/09-07-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de octubre de 2009, por mayoría de votos.- Magistrado Instructor: Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero.- Secretario: Lic. José Limón Gallegos.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXVIII-11

LITIS ABIERTA. NO ES APLICABLE ESTA FIGURA CUANDO EL RECURSO ADMINISTRATIVO ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE.- Atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 1º, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el hecho de que la parte actora acredite la ilegalidad del motivo por el cual la autoridad demandada tuvo por no presentado o desechó el recurso administrativo incoado, no siempre será suficiente para que la Sala estudie la legalidad del acto o actos recurridos en sede administrativa, en razón de que para que opere la figura de la litis abierta consagrada en dicha porción normativa, es menester que la Sala Regional determine la procedencia de aquel medio de defensa. Por ende, si del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte de manera patente que el recurso administrativo planteado es notoriamente improcedente, la Sala deberá abstenerse de estudiar la legalidad de los actos recurridos; por el contrario, ha de declarar insuficientes los conceptos de impugnación planteados en contra de la resolución impugnada y reconocer la validez de ésta, acorde con lo previsto por el artículo 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 746/08-07-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de octubre de 2008, por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Instructor: Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero.- Secretario: Lic. José Limón Gallegos.

SALA REGIONAL DEL CENTRO I

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXIX-65

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS. PROCEDE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2005, CUANDO LOS CONTRIBUYENTES NO LLEVEN EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL INVENTARIO DE SUS MERCANCÍAS PREVISTO EN LA LEY.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 133, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 28, fracción IV y 55, fracción IV ambos del Código Fiscal de la Federación, ordenamientos vigentes en 2005, los contribuyentes personas físicas que realicen actividades empresariales tendrán la obligación de llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, debiendo tener un control de sus inventarios. Por lo anterior, es procedente la determinación presuntiva de ingresos por faltante de inventarios, cuando los contribuyentes no lleven el procedimiento de control de inventarios previsto en Ley, es decir, cuando no lleven un registro que permita identificar por unidades, por productos, por concepto y por fecha, los aumentos y disminuciones en dichos inventarios, así como las existencias de aquéllos al inicio y al final de cada ejercicio. Por tanto, no es suficiente que la actora cuente con una relación analítica del Inventario por Unidades y del Inventario por Cantidades, cuando de dicha relación no se desprende la especificación de la fecha de entrada y salida de cada uno de los artículos con los que se estuvo operando en el ejercicio sujeto a revisión (2005); por lo que, se considera procedente el actuar de la autoridad fiscalizadora, al determinar de manera presuntiva ingresos por faltante de inventarios, toda vez que el inventario proporcionado por la actora no cumplió con los requisitos de las disposiciones fiscales referidas.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 626/09-08-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de octubre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Miguel Ángel Luna Martínez.- Secretaria: Lic. María Rosaura Alvarado Garza.

LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE

VI-TASR-XXIX-66

CARTA DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE AUDITADO. NO ES UN ACTO ADMINISTRATIVO DE NATURALEZA CONSTITUTIVA, Y POR ENDE, NO REQUIERE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- Los actos administrativos en general se clasifican, desde el punto de vista de los efectos que producen en la esfera del gobernado, en constitutivos o declarativos. Los primeros crean una situación jurídica que tendrá consecuencias de índole legal respecto de su destinatario, modificando sus derechos subjetivos, y los declarativos, a su vez, reflejan el contenido de la ley y se limitan a interpretar su contenido, sin que ello implique que, por sí mismos, generan derechos u obligaciones a favor o a cargo de los particulares. Tal es el caso de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado, cuya existencia se encuentra regulada por lo dispuesto en el artículo 2, fracción XII, segundo párrafo, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que esencialmente constituye un instrumento jurídico mediante el cual las autoridades fiscales hacen del conocimiento de los contribuyentes sus prerrogativas y cargas durante el desarrollo de las facultades de comprobación de los propios órganos fiscalizadores, los cuales se encuentran consignados en la legislación tributaria aplicable y recopilados en el ordenamiento específico que se cita. En ese orden de ideas, es inconcuso que no puede exigirse que la carta de mérito reúna los requisitos previstos por el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de constituirse sólo como una guía de ayuda para los sujetos revisados

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1278/09-08-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de noviembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretario: Lic. Roberto Ruvalcaba Guerra.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXIX-67

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE EJERCICIOS DISTINTOS AL SUJETO A FISCALIZACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN. CASO EN QUE NO SE CAUSA PERJUICIO AL CONTRIBUYENTE NI ES CONTRARIO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Si bien es cierto que el Poder Judicial de la Federación ha establecido en reiterados criterios que en el acto por el que se inicien las facultades de comprobación debe señalarse de forma precisa el objeto de la revisión, que se compone básicamente de las contribuciones y periodos a fiscalizar, así como el fin de llevar a cabo el procedimiento, ello no implica que durante el desarrollo de sus facultades discrecionales las autoridades se encuentren impedidas para revisar el contenido de la documentación comprobatoria de operaciones realizadas en ejercicios distintos al revisado. Un ejemplo de lo expuesto se presenta cuando la autoridad utiliza el procedimiento señalado por el artículo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2004 para calcular el factor de actualización de los actos o actividades gravados a la tasa del 0%, en el cual requiere el monto referido tanto del ejercicio por el cual pagaría el impuesto como el del ejercicio inmediato anterior, por lo que, para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente en esa materia específica resulta evidente que le es necesaria la información relativa a un año diferente al fiscalizado. Lo anterior, aunado a que el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación refiere, en su primer párrafo, que la determinación de contribuciones que la autoridad emita se da con base en los hechos u omisiones conocidos durante la práctica de la visita domiciliaria

o revisión de gabinete realizadas por la unidad tributaria competente, el artículo 63 del propio ordenamiento fiscal permite a las autoridades allegarse de la información con que cuente en los expedientes abiertos a nombre de los contribuyentes, por lo que, interpretando de forma sistemática ambos preceptos, en aras de lograr una justicia completa y partiendo de la base de que las leyes se crean para cumplirse, se concluye que el contenido de ambas normas no es contradictorio sino incluyente, pues precisamente con el propósito de que las facultades de comprobación puedan lograr su objetivo inmediato, que es verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, cuestión que sin lugar a dudas es de orden público e interés social por la trascendencia del sistema estatal empleado en la República Mexicana para su organización, no es dable que se limite a las autoridades fiscales a determinar la situación jurídica del contribuyente, sino que por el contrario, ésta será mejor definida si la revisora cuenta con mayores elementos para establecerla, tomando en cuenta los límites de lo razonable y dentro del marco constitucional delimitado por el artículo 16 de la Carta Magna de nuestro país.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1278/09-08-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de noviembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretario: Lic. Roberto Ruvalcaba Guerra.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VI-TASR-XXIX-68

COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA. NO RESULTA NECESARIA LA CITA DE PRECEPTO ALGUNO CUANDO LA LEGISLACIÓN QUE LA REGULA NO DELIMITA SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN ESPACIAL.- La Sala Superior de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sostiene como criterio que las autoridades centrales de la Administración Pú-

blica Federal están constreñidas a citar en las resoluciones que de ellas emanen, el precepto que contenga su competencia territorial, en atención a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuestión que puede advertirse de la jurisprudencia número VI-J-SS-34, que lleva la voz: "*COMPETENCIA TERRITORIAL DE AUTORIDADES CENTRALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA*". Sin embargo, cuando la legislación que rige a la dependencia del Poder Ejecutivo, como es el caso de la Secretaría de Energía, y de forma específica, el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2004, no limita en su texto el territorio en el que se encuentra facultada para actuar, y por otra parte tener la característica de organismo federal, se concluye que los actos que emita en su carácter de autoridad administrativa no requieren que se cite fundamento legal alguno que delimite su ámbito espacial de actuación, lo que se traduce en que tampoco las unidades administrativas que la compongan deban sujetarse a invocar una norma que es inexistente, lo que desde luego no resulta jurídicamente posible, sin que con ello se viole lo señalado por la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se refiere de forma específica a las autoridades centrales, que sí tienen una regulación especial respecto del tópico abordado, y de forma ulterior, lo previsto por el artículo 16 constitucional, en virtud de que, como se ha indicado, si no existe precepto que limite su competencia territorial, la autoridad administrativa de que se trate no está obligada a citarlo dada la imposibilidad legal descrita.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1287/09-08-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de abril de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretario: Lic. Roberto Ruvalcaba Guerra.

SALA REGIONAL DEL CENTRO III

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XI-1

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR.- CASO EN QUE NO SE SURTE LA EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 43, FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- De acuerdo con el artículo 43, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente en 2008, establece que cuando se está en presencia de la expedición de órdenes de visita domiciliaria, estas deberán contener impreso el nombre del visitado, excepción hecha cuando se trate de órdenes de verificación en materia de comercio exterior y se ignore el nombre del mismo; de modo que para estos casos, los elementos que permitan su identificación podrán ser obtenidos inclusive, cuando se esté llevando a cabo la verificación por los visitadores. Por otra parte, si de autos aparece la orden dirigida al "Propietario, poseedor o tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio" que en la misma se precisa, así como la copia certificada de la forma R-1 "SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES", con fecha de recepción anterior a la de emisión de la orden de visita domiciliaria, cuyo domicilio coincide con el señalado en ésta, significa que a la fecha en que emitió el mandamiento de revisión, la fiscalizadora no desconocía al contribuyente ubicado en el domicilio designado en la orden, de modo que en la especie, no se surtió la hipótesis de excepción a que se refiere el artículo 43, fracción III del Código Fiscal de la Federación, máxime cuando consta que la determinación del crédito fiscal fue destinada a un contribuyente en particular y que es el mismo que acreditó estar inscrito.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 256/09-10-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de junio

del 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Beatriz Rodríguez García.- Secretario: Lic. Gerardo Caldera Pérez.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XI-2

CITATORIO.- DEBE DEJARSE CUANDO NO SE ENCUENTRE AL DESTINATARIO EN LA PRIMERA BÚSQUEDA, CONFORME AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- Conforme al segundo y tercer párrafos del artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando deba notificarse personalmente al interesado en su domicilio, el notificador deberá: a) Entenderla con la persona que deba ser notificada o su representante legal; b) A falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente; c) Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato; d) Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. Esto significa que la entrega del citatorio constituye una formalidad esencial de la notificación cuando el notificador no encuentra al interesado en la primera búsqueda, pues con ello se procura que el destinatario tenga conocimiento personal del acto administrativo, por lo que dada su trascendencia, no puede omitirse; de modo que al no existir en una diligencia de tal naturaleza el citatorio de por medio, conduce a que la notificación que en su caso se practique con un tercero sin observar tal formalidad, sea ilegal.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1982/08-10-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de junio de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Beatriz Rodríguez García.- Secretario: Lic. Gerardo Caldera Pérez.

SEGUNDA SALA REGIONAL HIDALGO-MÉXICO

REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

VI-TASR-XII-II-58

COMPETENCIA.- PARA FUNDAR LA FACULTAD MATERIAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA CONSIGNAR HECHOS Y OMISIONES EN EL OFICIO DE OBSERVACIONES DEBE CITAR LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 22 DE OCTUBRE DE 2007.- Conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia 2a./J. 57/2001 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO." La autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo, se encuentra obligada a citar la fracción exactamente aplicable que le faculte para hacer constar hechos y omisiones en el oficio de observaciones, ya que conforme al artículo 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria existen dos fracciones que prevén tal facultad; a saber, la fracción X que contempla la atribución para emitir los oficios de observaciones: y, la diversa fracción XVIII que es más específica y que faculta para hacer constar hechos y omisiones en el mismo, en cuyo caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de

molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Así debe tenerse en cuenta que en términos del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación durante una revisión de gabinete pueden surgir diversas hipótesis al emitir el oficio de observaciones, la primera relativa al hecho de que no hubiera observaciones, en cuyo caso la autoridad fiscalizadora lo comunicará al contribuyente o responsable solidario mediante oficio, conforme a la fracción V; y, la segunda hipótesis, en términos de la fracción IV, cuando se deben dar a conocer en forma circunstanciada los hechos y omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales. Por lo que si en el oficio de observaciones claramente resultaron consignados hechos y omisiones al actor, e incluso se le dio la oportunidad procesal de desvirtuarlos atendiendo a la citada exigencia de exactitud y precisión, es indispensable que la autoridad cite la norma especial que le da competencia para consignar en forma específica hechos y omisiones siendo por tanto insuficiente la cita de la fracción X, ya que en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5959/09-11-02-6.- Resuelta por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de junio de 2010.- Sentencia: por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Tesis: por mayoría de votos.- Magistrado Instructor: Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández.- Secretario: Lic. Tulio Antonio Salanueva Brito.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XII-II-59

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.- SI DICHA PRUEBA SE OFRECIÓ DESDE EL ESCRITO INICIAL DE LA DEMANDA POR EL ACTOR Y SU EXHIBICIÓN INCOMPLETA SE PRETENDE SUBSANAR AL CONTESTAR LA AMPLIACIÓN DE LA MISMA, ARGUMENTANDO QUE ELLO SE DEBE A QUE SUS CONSTANCIAS SON MATERIA DE LA PRUEBA PERICIAL CONTABLE, TAL MANIFESTACIÓN CARECE DE EFICACIA JURÍDICA.- Atendiendo a la figura jurídica de preclusión procesal, no resulta válido que las demandadas exhiban a su contestación de demanda en forma incompleta el expediente administrativo, al faltar las documentales que el actor ha presentado en sede administrativa como parte de su contabilidad, pues es evidente que ya podían exhibirlas desde la citada contestación y en consecuencia se deben tener por ciertos los hechos que les imputa la actora a las autoridades demandadas al tenor de lo dispuesto por el artículo 19, de la Ley citada, sin que sea óbice a lo anterior, que la autoridad oficiante dependiente del Servicio de Administración Tributaria señale que se excusa de exhibir el expediente administrativo que le fue requerido argumentando que el mismo es materia de la prueba pericial contable que debe desahogar, pues ello no es obstáculo a que las demandadas deban presentar dicho expediente completo desde su contestación, pues el hecho de que se desahogue la prueba pericial implica precisamente que tanto el perito de la actora como el de las demandadas tengan a la vista las documentales que dieron origen a la fiscalización y ante su omisión deja en una clara desventaja procesal a su contraria, al no permitirle a su perito dictaminar conforme a las constancias que tuvo a la vista al momento de llevar a cabo la autoría fiscal originaria.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5959/09-11-02-6.- Resuelta por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de junio de 2010.- Sentencia: por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con

los puntos resolutivos.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández.- Secretario: Lic. Tulio Antonio Salanueva Brito.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XII-II-60

OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PARA EXHIBIR EN FORMA COMPLETA EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL CUAL DERIVA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA CUANDO ÉSTE INCLUYE LAS DOCUMENTALES PRIVADAS QUE EL ACTOR OFRECIÓ EN SEDE ADMINISTRATIVA, NO PUEDE SUBSANARSE AL CONTESTAR LA AMPLIACIÓN A LA DEMANDA.- Es de explorado derecho que el juicio contencioso administrativo se integra por etapas procesales que se desarrollan en forma sucesiva, mediante la culminación definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos o consumados; por lo que si la autoridad demandada exhibe hasta la contestación a la ampliación de la demanda las pruebas consistentes en los escritos presentados por el actor en sede administrativa durante la etapa de fiscalización que forman parte del expediente administrativo, ello es extemporáneo y, por ende dichos escritos carecen de eficacia jurídica, pues ello debe ser realizado a su contestación a la demanda, pues en aquel momento ya obraban jurídicamente en su poder y así los había ofrecido el actor desde su memorial de demanda.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5959/09-11-02-6.- Resuelta por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de junio de 2010.- Sentencia: por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández.- Secretario: Lic. Tulio Antonio Salanueva Brito.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XII-II-61

REVISIÓN DE GABINETE.- ES ILEGAL CUANDO SU OBJETO SE CIRCUNSCRIBE A REVISAR AL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EN EL OFICIO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE LA ORIGINA SE LE SOLICITA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON SUS OBLIGACIONES SOLIDARIAS COMO RETENEDOR.- Si el objeto de la revisión de gabinete girada a un contribuyente es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado exclusivamente como sujeto directo, es ilegal que en dicho oficio de requerimiento de información se soliciten las retenciones de dicho impuesto, pues dicho objeto va más allá de lo ordenado, pues es de explorado derecho que las retenciones son una obligación solidaria, por lo que el oficio de solicitud de información es contradictorio, pues por una parte se le requiere como sujeto directo del impuesto sobre la renta, pero también se le solicita en su carácter de retenedor diversa documentación, lo cual hace ilegal la orden en cuestión, toda vez que al realizar un requerimiento relacionado con las retenciones del particular en materia de sueldos y salarios, es claro que no está requiriendo impuesto sobre la renta a cargo de la contribuyente en relación con gravámenes propios pues el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación establece que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran, y que en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los retenedores o las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más tardar el día diecisiete del mes de calendario inmediato posterior al de terminación del periodo de la retención o de la recaudación respectiva; en cuyo caso por retenedor debe entenderse aquella persona auxiliar de la hacienda pública, que tiene la obligación de recaudar el impuesto causado por un tercero que realizó el hecho imponible y enterarlo al erario público; en otras palabras, el retenedor es aquella persona que a pesar de que no realiza el hecho imponible tiene el imperativo legal de cumplir con las obligaciones derivadas de su realización que

consiste en recaudar y enterar el tributo del contribuyente que realiza el hecho imponible, pero no lo hace como sujeto directo, por lo que si la autoridad pretendía requerir al actor esa contribución debía indicar en la orden que revisaría el impuesto sobre la renta como retenedor o responsable solidario también y si no lo hizo el referido documento es contradictorio y por ende ilegal, al violar la garantía de seguridad jurídica, relacionada con su obligación de fundar y motivar su acto de autoridad.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5959/09-11-02-6.- Resuelta por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de junio de 2010.- Sentencia: por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández.- Secretario: Lic. Tulio Antonio Salanueva Brito.

PRIMERA SALA REGIONAL DE ORIENTE

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-XIII-53

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PROCEDE EL REEMBOLSO DE GASTOS A LOS PARTICULARES, SI EL ACTOR DEMUESTRA DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN TÉRMINOS DE LOS CONVENIOS ENTRE ELLOS CELEBRADOS.- Es jurídicamente incorrecto que el Instituto aludido califique de improcedente una queja respecto al reembolso de cantidades erogadas a favor del trabajador, por concepto de atención médica y quirúrgica particular, cuando el origen de tal actuación se actualizó en la deficiencia en el servicio de salud que el Instituto estaba obligado a proporcionar a la actora, en términos de los convenios entre ellas celebrados. Entonces, si el demandante logra demostrar en el juicio de nulidad la existencia del supuesto previsto en tales convenios que daría lugar al reembolso de cantidades erogadas a los particulares con motivo de servicios médicos particulares, hipótesis consistente en la prestación de un servicio deficiente, el Instituto estaba obligado a calificar la solicitud de reembolso respectiva, como procedente. No obstante, si la autoridad dicta una resolución en sentido contrario, debe considerarse ilegal, al existir omisión en los requisitos formales que señalan las leyes, y en consecuencia, debe declararse su nulidad, para el efecto de que la autoridad la deje insubsistente y en su lugar emita otra, en la que declare procedente la solicitud de reembolso respectiva, y conforme a sus atribuciones, a los documentos necesarios, y a los convenios de prestación de servicios celebrados entre el Instituto y el particular reclamante, determine el monto de los gastos por los cuales sea procedente efectuar la devolución, ya que el ejercicio de tal atribución corresponde exclusivamente al Instituto demandado y no a este Tribunal por no ser parte de sus potestades.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4302/07-12-01-3.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de mayo de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Ana Elena Suárez López.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-54

MARCAS.- NO SON BIENES INEMBARGABLES POR LO QUE NO SE UBICAN EN EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, 127, PRIMER PÁRRAFO, Y 157, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 18/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, del rubro "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. POR REGLA GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006" sostuvo que las violaciones cometidas durante la sustanciación del procedimiento administrativo de ejecución, anteriores al remate, podrán impugnarse mediante juicio contencioso administrativo, sólo hasta que se publique la convocatoria respectiva, estableciendo como excepciones los actos de ejecución sobre bienes inembargables o los de imposible reparación material. Conforme al contenido del artículo 157, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, los bienes exceptuados de embargo son los siguientes: "*IV. La maquinaria, enseres y semovientes de las*

negociaciones, en cuanto fueren necesarios para su actividad ordinaria a juicio del ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la negociación en su totalidad si a ella están destinados"; luego entonces, el hecho de que los bienes embargados, sean las marcas registradas a nombre de la contribuyente, dichos bienes no pueden quedar exceptuados de embargo por no ubicarse en los supuestos del artículo en comento, de igual forma tampoco el gravamen recaído sobre los registros marcarios, son de imposible reparación material, ya que con dicho embargo no se encuentra afectando la actividad empresarial desarrollada por el contribuyente al momento de la obligación tributaria que pretenda hacer efectiva la autoridad a través del embargo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1136/09-12-01-5.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika Elizabeth Ramm González.- Secretaria: Lic. Cristina Mireya Juárez Ruiz.- Tesis: Lic. Edith Suárez Zamudio.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XIII-55

CADUCIDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ES APLICABLE PARA LOS ACTOS DE LAS DELEGACIONES ESTATALES DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN.- La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es la que regula el procedimiento instaurado por el Delegado en el Estado de Puebla, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que culmina con la imposición de multas por violaciones a dicha ley y a los reglamentos materia de su competencia. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en atención a que la autoridad que emitió la resolución impugna-

da y que inició el procedimiento del cual deriva ésta, es parte de la Administración Pública Federal Centralizada. Por tanto, los procedimientos iniciados por dicha autoridad, son susceptibles de caducar, conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1197/09-12-01-8.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika Elizabeth Ramm González.- Secretario: Lic. Ricardo Vaquier Ramírez.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

VI-TASR-XIII-56

PENSIÓN POR VIUDEZ. DE EXISTIR UNA CAUSA DE INCOMPATIBILIDAD, DE LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 51, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, OCASIONA SU SUSPENSIÓN.- De conformidad con el texto legal invocado, una persona que goce de una pensión podrá tener acceso al otorgamiento de otras pensiones o incluso desempeñar un trabajo remunerado, bajo las condiciones establecidas en dicho numeral. En específico, en tratándose de pensiones por viudez, éstas serán compatibles con los siguientes supuestos: a) pensión por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada o por invalidez, que derive de derechos propios de esa persona como trabajador; b) pensión por riesgo de trabajo, ya sea por derecho propio o que tengan origen en derechos como cónyuge o concubinario del trabajador o pensionista; y c) el desempeño de un trabajo remunerado, siempre y cuando éste no implique la incorporación al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En consecuencia, si la autoridad detecta que el sujeto pensionario aparece como trabajador en activo, y que ello implica una incorporación al Régimen del Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es correcto concluir que tal sujeto no tenía el derecho a percibir la pensión por viudez generada por el fallecimiento de su cónyuge, como trabajador que tenía derecho a originar la pensión de mérito, ya que existía un motivo de incompatibilidad previsto en el texto legal, y que se actualizaba por el desempeño de un trabajo remunerado que implicaba una incorporación al régimen de protección de la ley de la materia, razón suficiente para declarar la suspensión del pago por viudez respectiva. Entonces, la resolución administrativa que declare la suspensión de la pensión por viudez es emitida conforme a derecho, al estar en presencia de un supuesto legal de incompatibilidad, en virtud de que la demandante gozaba de una pensión por viudez (concedida por causa de muerte del trabajador, en su calidad de esposo), pero desempeñaba un trabajo remunerado que implicaba la incorporación al régimen de protección de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contemplado como causa de incompatibilidad de pensiones, y que evidentemente conducía a la suspensión de ésta, en estricto apego a lo ordenado por el numeral 51, fracción II, inciso C) de dicho ordenamiento legal.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1366/09-12-01-3.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia fiscal y Administrativa, el 29 de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Ana Elena Suárez López.

LEY DE AMPARO

VI-TASR-XIII-57

JURISPRUDENCIA ESTABLECIDA AL RESOLVER CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS. SUS EFECTOS RESPECTO DE SENTENCIAS DICTADAS CON ANTERIORIDAD QUE DECIDEN CON APOYO EN EL CRITERIO DESAUTORIZADO.- El artículo 197-A de la Ley de Amparo, prevé que la contradicción de tesis tiene por objeto el de preservar la unidad de interpretación de las normas, decidiendo los criterios que deben prevalecer

cuando existe oposición entre los que sustenten los órganos jurisdiccionales en torno a un mismo problema legal; sin que se afecten las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen emitido dichos criterios. De lo anteriormente manifestado, se concluye que con motivo de una jurisprudencia pronunciada conformada por una contradicción de criterios, no es posible analizar de nueva cuenta para efectos de la cobertura de las cuotas del seguro de riesgos de trabajo, primas que ya constituyen cosa juzgada por este Tribunal, ya que, lo prohíbe expresamente el segundo párrafo del citado numeral.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1331/09-12-01-2.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de septiembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika Elizabeth Ramm González.- Secretario: Lic. Francisco Antonio Aguirre Gutiérrez.

LEY ADUANERA

VI-TASR-XIII-58

ARTÍCULO 157 DE LA LEY ADUANERA. EL PLAZO DE DOS AÑOS QUE ESTABLECE SU PÁRRAFO CUARTO, NO ESTATUYE NINGUNA SANCIÓN CUANDO SE SOLICITE AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LA DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCÍA, O EN SU CASO, EL PAGO DEL VALOR DE LA MERCANCÍA FUERA DE ESE TÉRMINO.- El párrafo cuarto, del artículo 157 de la Ley Aduanera, establece la opción para el particular en el caso de que obtenga una resolución administrativa o judicial firme, que ordene la devolución o el pago de la mercancía o, en su caso, que declare la nulidad de la resolución que determinó que la mercancía pasó a propiedad del Fisco Federal, para solicitar al Servicio de Administración Tributaria la devolución de la mercancía, o en su caso, el pago del valor de la misma, dentro del plazo de dos años, sin embargo, el numeral aludido es una norma imperfecta, ya que no estatuye sanción alguna contra el particular por no solicitar el resarcimiento de las mercancías dentro del plazo aludi-

do, por ello, aun cuando no se hubiera presentado la solicitud en ese plazo, dicha circunstancia no puede traer como consecuencia la pérdida del derecho del actor para hacerlo, pues el artículo invocado no establece cuál será el efecto de una solicitud presentada fuera del plazo de los dos años, y por tal motivo la autoridad demandada al precluir el derecho de la demandante pretende darle un alcance diverso al cuarto párrafo de ese numeral.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1494/09-12-01-9.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de octubre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Georgina Yañez Arroyo.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-XIII-59

RECTIFICACIÓN A PRIMA MEDIA.- PARA CONSIDERARSE LEGAL DEBE ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA.- Cuando en la rectificación a prima media, el Instituto Mexicano del Seguro Social, únicamente señale que la empresa no eligió ninguna de las opciones relativas al Seguro de Riesgos de Trabajo que le corresponde conforme a lo establecido en los artículos 72, último párrafo y 73 de la Ley del Seguro Social, ubicándolo en alguna de las clases contenidas en el último de los preceptos citados, sin que al efecto señale de manera clara y precisa el motivo por el cual consideró que la empresa se ubica en la clase señalada, la rectificación a prima media no puede considerarse legal, pues incumple con lo preceptuado en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, que prevé que todo acto de autoridad, debe encontrarse debidamente fundado y motivado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1676/09-12-01-5.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el

30 de octubre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika Elizabeth Ramm González.- Secretaria: Lic. Cristina Mireya Juárez Ruiz.- Tesis: Lic. Edith Suárez Zamudio.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-60

MULTAS FISCALES. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 75, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO DOS CONDUCTAS DISTINTAS INFRINGEN LA MISMA DISPOSICIÓN.- El artículo 75, fracción V del Código Fiscal de la Federación, dispone que cuando por un solo acto o una sola omisión, se infrinjan diversas disposiciones fiscales de carácter formal a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor; sin embargo, tal supuesto no se actualiza cuando con dos conductas distintas se infrinja la misma disposición, como es el caso de la multa impuesta por no cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales y la multa por cumplir los requerimientos fuera de los plazos señalados en los mismos, pues estas conductas pueden ser sancionadas en forma separada e independiente por la autoridad, sin que se viole lo dispuesto por el artículo antes citado. Lo anterior es así en virtud de que el artículo 75, fracción V del Código Fiscal de la Federación, lo que tiende a evitar es excesos en la represión, cuya base primaria se encuentra en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el infractor no debe ser sancionado dos o más veces por la misma conducta (acción u omisión), siendo que tal supuesto no se actualiza cuando el infractor realiza dos conductas distintas que infringen un mismo precepto legal.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3023/09-12-01-4.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30

de octubre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretaria: Lic. Gloria Ma. de la C. Escobar Arrona.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-XIII-61

MULTA IMPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 304 A, FRACCIÓN IX DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, ES PROCEDENTE AUN CUANDO SE CUMPLA PARCIALMENTE UN REQUERIMIENTO HECHO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO.- Cuando se le requiere al patrón para que proporcione los elementos a que se refiere el artículo 18 en cita, se debe cumplir con ese requerimiento en su totalidad, pues de lo contrario el Instituto está facultado para aplicar el procedimiento de determinación presuntiva y considerar que se cometió la infracción de no proporcionar elementos, para determinar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones, ya que el hecho de que el patrón proporcionara parte de la documentación requerida, no le excluye de la multa, sobre todo que no se acredita en el presente juicio que haya expresado la razón por la que no entregó la totalidad requerida, siendo que si la autoridad le dio a conocer cuáles son los documentos que no proporcionó, le corresponde la carga de la prueba a la parte actora, ya que al saber cuáles son los documentos que omitió, puede señalar cuál es el error u omisión de la autoridad, o bien establecer que sin esos documentos, la autoridad puede conocer que no hay obligación omitida; por lo que de no hacer ese señalamiento, no hay elementos para considerar ilegal la multa.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1492/09-12-01-1.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27

de noviembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretaria: Lic. María Aurora Ayala Rodríguez.

REGLAMENTO DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA

VI-TASR-XIII-62

BOLETA DE INFRACCIÓN. EN ELLA SE DEBE PRECISAR EL PRECEPTO O PRECEPTOS LEGALES QUE PREVEAN LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA COMISARÍA DE SECTOR.- El artículo 7° de la Ley de la Policía Federal Preventiva prevé que las relaciones jerárquicas en la Institución, sus estructuras normativas y operativas, su organización territorial, las demás atribuciones de mando, dirección y disciplina, así como otros componentes del régimen interno de la Policía Federal Preventiva, serán determinados en el Reglamento Interior que el Ejecutivo expida. Sin embargo, no es suficiente que en la boleta de infracción se cite el artículo 25 del Reglamento de la Policía Federal Preventiva para tener por satisfecho el requisito de la debida fundamentación en cuanto a la competencia territorial de la comisaría de sector, emisora del acto controvertido, pues al efecto el artículo 25 antes citado, si bien es cierto refiere que la Institución proporcionará cobertura en el territorio nacional, también lo es que el diverso 29 del propio Reglamento dispone que las comisarías de sector, dependen de las comandancias regionales y ejercerán sus atribuciones en las áreas que estas últimas determinen. Así las cosas, para que la boleta de infracción se considere debidamente fundada en cuanto a la competencia territorial de la comisaría de sector, emisora del acto combatido, resulta necesario que se cite el dispositivo legal en el que la comandancia regional determine el área de atribuciones de las comisarías de sector.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 843/09-12-01-5.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de noviembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika

Elizabeth Ramm González.- Secretaria: Lic. Cristina Mireya Juárez Ruiz.- Tesis: Lic. Edith Suárez Zamudio.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-63

ASUNTOS NO DILIGENCIADOS, DEBIDAMENTE CIRCUNSTANCIADOS.- Si en el informe de asuntos no diligenciados, se precisa por parte del notificador la denominación o razón social de la persona moral a notificar, el domicilio en que se constituyó, existiendo constancia con el croquis, que se cercioró que ese era el domicilio; la justificación pormenorizada del por qué no pudo realizar la notificación, que es que el lugar estaba vacío, que llamó varias veces y nadie abrió, incluso que los vecinos no dan información, esto indica que el notificador no puede materialmente obtener el nombre de los vecinos, pues si éstos se niegan a dar información, entre la que se encuentra su nombre, el notificador carece de medios de coacción para obtener esa información. Aunado a que si precisamente lo que se dice en esos informes de asuntos no diligenciados, es que está cerrado, nadie abre al llamar y está vacío, es innegable que esos hechos son suficientes para considerar que fue abandonado por la hoy parte actora. De ahí que esos informes de asuntos no diligenciados se encuentran debidamente circunstanciados y pueden ser el sustento para determinar que el particular actualiza lo dispuesto en la fracción III del artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, por lo que la autoridad válidamente puede notificar por estrados.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1172/09-12-01-1.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de noviembre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretaria: Lic. María Aurora Ayala Rodríguez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-64

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS. NO SE ACTUALIZA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 59 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO SE APORTAN LOS LIBROS SOCIALES PARA ACREDITAR EL ORIGEN DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS.- El artículo antes citado, establece que las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no corresponda a registros de su contabilidad, son ingresos por los que se deben pagar contribuciones. Sin embargo, cuando el contribuyente aporta como prueba en el juicio contencioso administrativo, el libro de actas en donde consta el aumento de su capital social y éste tiene como propósito acreditar el origen de diversos depósitos bancarios, debe tenerse por desvirtuada esta presunción legal porque dichos libros constituyen parte de la contabilidad del contribuyente en los términos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2712/09-12-01-2.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de noviembre de 2009.- Sentencia: por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika Elizabeth Ramm González.- Secretario: Lic. Francisco Antonio Aguirre Gutiérrez.

GENERAL

VI-TASR-XIII-65

PRUEBA TESTIMONIAL.- NO ES FACTIBLE DESCALIFICARLA DE PLANO, POR EL SOLO HECHO DE QUE LOS TESTIGOS GUARDAN PARENTESCO CON LA DEMANDANTE. DEBE EFECTUARSE EL ANÁLI-

SIS DE SUS MANIFESTACIONES, ATENDIENDO AL CASO PARTICULAR.- La circunstancia de que los testigos que fueron señalados por la parte demandante, quien ofreció dicha prueba en el juicio, sean los hijos de la actora, pudiera conducir a que declararon con la intención de favorecerla; pero ello no puede ser apreciado aisladamente y descalificar el testimonio, en virtud de que la actora intenta demostrar la propiedad y posesión de diversos bienes muebles ubicados en un bien inmueble, en el cual viven o es visitado periódicamente por esos testigos, precisamente por la razón de ser los hijos de la demandante, por lo que es indispensable analizar las manifestaciones vertidas por los comparecientes y si de sus testimonios rendidos no se desprenden manifestaciones inverosímiles, incongruentes, o que tiendan a la parcialidad, es procedente tomar en consideración sus declaraciones, de manera adminiculada con las pruebas documentales aportadas por el demandante, pues el caso particular así lo requiere.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1302/09-12-01-8.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 5 de enero de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika Elizabeth Ramm González.- Secretario: Lic. Ricardo Vaquier Ramírez.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

VI-TASR-XIII-66

JEFE DE PROYECTO DE LA UNIDAD JURÍDICA EN LA DIRECCIÓN LOCAL PUEBLA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, NO TIENE COMPETENCIA PARA CONTESTAR LA DEMANDA EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Los artículos 9 fracción II, 11 inciso c), fracción III, 86, 87 fracciones II, III, VII, VIII, XIII y XXVI, artículo Cuarto Transitorio fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, establecen que esa Comisión, tiene diversos funcionarios, con la delimitación

de que unos corresponden al nivel nacional, otros al nivel regional Hidrológico-Administrativo y por último los que están en las Entidades Federativas. Sin embargo, de los preceptos citados, no se desprende ni se puede inferir legalmente que el Titular de la Unidad Jurídica sea el denominado "Jefe de Proyecto", ya que la denominación de este cargo público, está citado en los funcionarios que tiene la Comisión a nivel nacional, sin que se mencionen de entre los funcionarios que corresponden a las Entidades Federativas. Por tanto, si en el Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Agua, sólo se establece que en las entidades federativas habrá jefes de distrito, jefes de departamento y titulares de oficinas; sin que se mencione a un Jefe de Proyecto, pues esta denominación está limitada a funcionarios de nivel central; se tiene que si bien las Unidades Jurídicas existen legalmente y pueden representar en juicio a las Direcciones Locales, al no haber un señalamiento en el Reglamento de que en esas Unidades Jurídicas de las Direcciones Locales, pueda haber un Jefe de Proyecto, este funcionario no tiene existencia legal en las Entidades Federativas, por lo que su nombramiento crea de hecho un cargo que en el Reglamento no está contemplado, por lo que no puede legalmente presentar contestación de demanda en el juicio de nulidad.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1418/09-12-01-1.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 6 de enero de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretaria: Lic. María Aurora Ayala Rodríguez.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-67

NO EXISTE CUMPLIMIENTO ESPONTÁNEO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI AL PRESENTAR LOS PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, NO SE ENVIÓ LA INFORMACIÓN RELATIVA AL LISTADO DE CONCEPTOS Y DICHA OBLIGACIÓN FUE REQUERIDA POR

LAAUTORIDAD.- De la interpretación sistemática que se realice a los artículos 1 y 9 primer párrafo de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, artículos 20, séptimo y penúltimo párrafo, y 31 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, y regla 2.14.7 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2007, se debe concluir que para que se considere cumplida la obligación en la presentación de los pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio, debe enviarse también la información del listado de conceptos que se contiene en la página de Internet del SAT, y que sirvió de base para determinar el impuesto, por ello, aun cuando la parte actora presentó la declaración informativa de razones por las cuales no se realizó el pago, de acuerdo con la regla de mérito, debió haber enviado la información del listado de conceptos que sirvió de base para calcular dicho impuesto, por lo que al dar cumplimiento a la obligación incumplida después de que la autoridad le notificó el requerimiento de referencia, debe concluirse que no existió un cumplimiento espontáneo en la presentación de las declaraciones relativas y por ende, no le es aplicable el beneficio contemplado en el primer párrafo del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, que dispone que no se impondrán multas cuando se cumpla en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2772/09-12-01-9.- Resuelta por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de enero de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Georgina Yañez Arroyo.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-XIII-68

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CUOTAS OMITIDAS TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEM-

PO DETERMINADO. NO PROCEDE SI EL PATRÓN DIO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO.- El artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, dispone en la parte que nos interesa lo siguiente: "Cuando los patrones no cumplan con las obligaciones a su cargo previstas en la Ley y en sus reglamentos, serán notificados por el Instituto, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación respectiva, le proporcionen los elementos necesarios para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados y salarios devengados que permitan precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones incumplidas.- Transcurrido dicho plazo sin que el patrón haya entregado tales elementos, el Instituto, en ejercicio de sus facultades, fijará en cantidad líquida los créditos cuyo pago se haya omitido, aplicando en su caso, los datos con los que cuente y los que de acuerdo con sus experiencias considere como probables, siguiendo a tal efecto, el procedimiento que a continuación se detalla...". De lo anterior, se observa claramente que el único supuesto en el cual el Instituto Mexicano del Seguro Social puede determinar presuntivamente las obligaciones a cargo de los patrones con relación a sus trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado, es cuando no se haya dado cumplimiento al requerimiento que al efecto se notifique, por tanto si la actora acredita en el juicio contencioso administrativo que proporcionó la información y documentación requerida por dicho Instituto, dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del requerimiento, es evidente que es improcedente la aplicación del procedimiento presuntivo, por lo que, se actualiza la causal de anulación prevista en la fracción IV, del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2426/09-12-01-4.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de enero de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Lic. Gilberto Luna Hernández.- Secretaria: Lic. Gloria Ma. de la C. Escobar Arrona.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

VI-TASR-XIII-69

COSTO DE LAS MERCANCÍAS ENAJENADAS, DEBE PRECISARSE DETALLADAMENTE EL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 45-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- El artículo 45-A, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que el costo de las mercancías que se enajenan, así como las que integren el inventario final del ejercicio se determinara con el sistema de costeo absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados y dicho costo se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que se deriven de la enajenación de los bienes de que se trate. Por ello, para determinar el costo de las mercancías, al final se deben deducir los ingresos que deriven de la enajenación de bienes de que se trata, en el ejercicio en el que se acumule, pero para ello la autoridad no puede dejar ninguna cantidad para que se "infiera", ya que con eso se deja en estado de indefensión a la parte actora, al no poder combatir la mecánica o procedimiento seguido por la autoridad.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1576/09-12-01-1.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 21 de enero de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretaria: Lic. María Aurora Ayala Rodríguez.

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

VI-TASR-XIII-70

PENSIÓN JUBILATORIA. EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SE ENCUENTRA OBLIGADO A PROBAR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRA-

TIVO QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CORRESPONDIENTE CONSIDERÓ EL MONTO DE LA COMPENSACIÓN GARANTIZADA EN LA BASE SALARIAL PARA SU CÁLCULO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 41/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 240, que lleva por rubro "PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA COMPENSACIÓN GARANTIZADA INTEGRA LA BASE SALARIAL PARA SU CÁLCULO, CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CORRESPONDIENTE LA CONSIDERÓ PARA CUBRIR EL MONTO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES EFECTUADAS AL ISSSTE (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)", precisó que las aportaciones y cuotas que cubrió, por cada trabajador, la Dependencia o Entidad correspondiente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deben considerarse para fijar el monto de la pensión jubilatoria, sin embargo, en dicho criterio no se establece que el pensionado deba acreditar que su empleadora retuvo y enteró al citado organismo el monto de la compensación para efectos de la determinación de la cuota pensionaria, cuando afirma que cotizó por ese concepto, puesto que tal obligación corresponde al referido Instituto.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1489/09-12-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 22 de enero de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretario: Lic. Gilberto Arturo Gómez Aguirre.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XIII-71

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. QUEDA SIN MATERIA CON EL PAGO DEL CRÉDITO FISCAL.- La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi-

nistrativo regula, en su artículo 28, las reglas para la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuya fracción VI establece que en el caso de que se impugnen los actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales. Por lo tanto, el pago de un crédito fiscal, hace que el efecto directo sea la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, en la inteligencia de que no se puede ejercer en contra del contribuyente, ningún medio de coacción para hacer efectivo el cobro, al haber sido cubierto el monto del crédito fiscal determinado, en términos de lo establecido por los artículos 65 y 145 de la ley en cita; por lo que con el pago efectuado el incidente de suspensión queda sin materia.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3090/09-12-01-2.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de febrero de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Erika Elizabeth Ramm González.- Secretario: Lic. Francisco Antonio Aguirre Gutiérrez.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-XIII-72

MOTIVACIÓN.- MULTAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- De acuerdo a la jurisprudencia VI-J-SS-7, sustentada por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, cuyo rubro es: "CÉDULA DE LIQUIDACIÓN POR DIFERENCIAS EN EL PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y CÉDULA DE LIQUIDACIÓN POR CONCEPTO DE MULTA. SU NOTIFICACIÓN CONJUNTA NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN", el Instituto Mexicano del Seguro Social puede notificar en forma conjunta la cédula de

liquidación de cuotas obrero patronales y la cédula de liquidación por concepto de multa, luego entonces, al emitirse esta última no es requisito para que se considere que se encuentra debidamente motivada el que se reiteren los datos que le fueron dados a conocer desde la emisión de la cédula de liquidación de cuotas que dio origen a dicha multa, pues son de su pleno conocimiento.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2385/09-12-01-4.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 17 de febrero de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretaria: Lic. Gloria Ma. de la C. Escobar Arrona.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

VI-TASR-XIII-73

OTROS INGRESOS ACUMULABLES DE LAS PERSONAS FÍSICAS. CONFORME AL ARTÍCULO 167, FRACCIÓN XVI DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO LO SON AQUELLAS CANTIDADES QUE PAGUEN LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS A LOS ASEGURADOS O A SUS BENEFICIARIOS, QUE NO SE CONSIDEREN INTERESES NI INDEMNIZACIONES, SI LA PRIMA FUE PAGADA POR EL ASEGURADO.- De conformidad con el artículo aludido, las instituciones de seguros deberán efectuar una retención aplicando la tasa del 20% del impuesto sobre la renta, sobre el monto de las cantidades pagadas, sin deducción alguna, respecto de las cantidades que dichas Instituciones paguen a los asegurados o a sus beneficiarios, que no se consideren intereses ni indemnizaciones a que se refiere la fracción XVII del artículo 109 y el artículo 158 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, independientemente del nombre con el que se les designe, siempre que la prima haya sido enterada por el empleador, así como las que correspondan al excedente determinado conforme al segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 109 de dicho ordenamiento. En esa virtud, si en el juicio contencioso administrativo, el contribuyente liquidado acredita

que, en su carácter de contratante-beneficiario, cubrió el importe de la prima que originó el pago de una cantidad por parte de la Institución de Seguros, es inconcuso que tal cantidad no puede ser considerada como ingreso acumulable de la persona física, ya que se ubica en el supuesto de excepción establecido en el artículo 167 fracción XVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3448/09-12-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de febrero de 2010, por mayoría de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretario: Lic. Gilberto Arturo Gómez Aguirre.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-74

NO PRESENTAR AVISO DE COMPENSACIÓN A REQUERIMIENTO DE AUTORIDAD, CUANDO DE ANTEMANO SE COMPENSÓ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN DECLARACIÓN PRESENTADA ANTE AUTORIDAD FISCAL, ES UNA INFRACCIÓN SANCIONABLE CON MULTA.- Conforme a los artículos 23, primer y segundo párrafo, 41 primer párrafo, fracción III, 81, fracción I del Código Fiscal de la Federación, es un derecho de los contribuyentes, compensar las cantidades que tengan a su favor, siempre que se cumplan ciertos requisitos, como es presentar un aviso de compensación, con la documentación en formato oficial. Por lo que si el particular compensa el impuesto al valor agregado en una declaración presentada ante la autoridad fiscal, desde ese momento está obligado a presentar un aviso de compensación, por lo que de no presentarlo, la autoridad fiscal está plenamente facultada, conforme a los artículos citados para requerirle la presentación de los avisos de compensación, en un plazo de quince días, de ahí que de no haber cumplido con los requerimientos que al efecto le hizo la autoridad, cometió la infracción que la autoridad sancionó con las multas impugna-

das, adecuándose los supuestos normativos contenidos en los preceptos citados a la conducta realizada por la parte actora.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3149/09-12-01-1.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 8 de marzo de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretaria: Lic. María Aurora Ayala Rodríguez.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

VI-TASR-XIII-75

DOCUMENTO IDÓNEO PARA ACREDITAR LA CALIDAD DE SOCIO EN UNA SOCIEDAD COOPERATIVA.- La exhibición en juicio de instrumentos notariales a través de los cuales se protocolizan actas de asamblea extraordinaria de las sociedades cooperativas, constituye un medio de convicción idóneo para demostrar que sus miembros no son trabajadores, si del análisis que de ellos se haga, se advierte sin lugar a dudas que las personas listadas en la resolución administrativa dictada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que finca un crédito fiscal por concepto de aportaciones y amortizaciones omitidas, tenían la calidad de socios, ya sea por constituir la sociedad cooperativa con antelación (asistiendo entonces a las asambleas celebradas con esa calidad) o precisamente porque a través de esas actuaciones ingresaban a ella, a través de la alusión expresa a su Registro Federal de Contribuyentes, su domicilio, lugar y fecha de nacimiento, grado de preparación. Otorga mayor certeza el contenido de dichos instrumentos, si de ellos se advierte que una vez analizada y votada la admisión de nuevos socios (con el consiguiente listado de éstos), los asambleístas hicieron constar el nuevo capital social, ordenando su actualización en función de las modificaciones aprobadas en cada asamblea, para finalmente listar de manera detallada el nombre del socio, su Registro Fede-

ral de Contribuyentes, su domicilio, lugar y fecha de nacimiento, el grado de preparación, el número de certificado que como socio le correspondía y el importe relativo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 83/09-12-01-3.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de marzo de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Ana Elena Suárez López.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XIII-76

RECURSO DE REVOCACIÓN. ES LEGAL TENERLO POR NO INTERPUESTO AL NO ACREDITARSE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, CONTABA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA EJERCER EL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Fiscal de la Federación, el promovente deberá acompañar, entre otros documentos, al escrito en que se interponga el recurso, los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de personas morales. Ahora bien, al establecerse en el acta constitutiva de una sociedad anónima, la limitante para desempeñar el cargo de administrador único de una sociedad mercantil, la autorización expresa del Instituto Nacional de Migración, para interponer el recurso de revocación respectivo, la representación de esa sociedad, debe acreditar la existencia de tal autorización, en cumplimiento con los estatutos establecidos en el acta constitutiva, en los términos de los artículos 5º y 10, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, conforme a los cuales, las sociedades se constituirán ante notario y en la misma forma se harán constar con sus modificaciones; así como, la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador, quien podrá realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la Ley y el contrato social. En consecuencia, si al interponer el recurso de revocación, el repre-

sentante legal de una sociedad mercantil no demuestra la autorización expresa del Instituto Nacional de Migración para desempeñar el cargo de administrador único, es legal la determinación de la autoridad administrativa de tener por no interpuesto el medio de defensa de referencia.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2604/09-12-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de marzo de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Leticia Cordero Rodríguez.

REGLAMENTO INTERIOR DEL INFONAVIT

VI-TASR-XIII-77

ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL EN LA CUAL EJERCERÁN SUS FACULTADES LAS AUTORIDADES FISCALES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 22 DE OCTUBRE DE 2008), INCUMPLE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5° DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INFONAVIT, EN MATERIA DE FACULTADES COMO ORGANISMO FISCAL AUTÓNOMO, AL NO DEMOSTRARSE POR LA AUTORIDAD DEMANDADA LA EXISTENCIA DE LA PROPUESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL MENCIONADO INSTITUTO.- Del análisis al segundo párrafo del artículo 5º del Reglamento aludido publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2008, se desprende que los Delegados Regionales, los Representantes de la Dirección General, el Gerente de Fiscalización del Distrito Federal, los Subgerentes de Recaudación Fiscal en las Delegaciones Regionales, y el Subgerente de Área Jurídica en las Delegaciones Regionales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ejercerán sus facultades dentro de la circunscripción territorial que determine el Consejo de Administración a propuesta del

Director General del propio Instituto, en tal virtud, si el promovente del juicio de nulidad niega lisa y llanamente en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que para la emisión del Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus facultades las autoridades fiscales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (tomado en sesión ordinaria número 687 celebrada el día 31 de julio de 2008, resolución RCA-2283-07/08), que es invocado en la resolución controvertida, haya existido propuesta del Director General en la que se plantee al Consejo de Administración la circunscripción territorial de las mencionadas autoridades fiscales, y no obstante la carga probatoria trasladada, la autoridad demandada no demuestra que exista la propuesta de trato, resulta inconcuso que el Acuerdo aludido no se ajusta a derecho, al haberse emitido sin observar el procedimiento expresamente establecido en el citado artículo 5° del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3025/09-12-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 24 de marzo de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- Secretario: Lic. Gilberto Arturo Gómez Aguirre.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

VI-TASR-XIII-78

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. AYUDA DE RENTA DE CASA, EL PAGO DE LA. LIBERA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE ENTERAR APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 136 y Tercero Transitorio de la Ley Federal del Trabajo, toda empresa de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por lo que deberán aportar al

Fondo Nacional de la Vivienda el 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio. Igualmente, que los contratos de trabajo colectivos que establezcan beneficios en favor de los trabajadores, superiores a los que esa ley les concede, continuaran surtiendo efectos. Ahora bien, al abonar la Comisión Federal de Electricidad, a sus trabajadores de base a su servicio un 39% sobre su salario tabulado y tiempo extraordinario constante, por concepto de renta de casa, que constituye un beneficio mayor al establecido en el artículo 136, de la Ley Federal del Trabajo -5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio-, la Comisión Federal de Electricidad no está obligada al pago en materia de aportaciones patronales por créditos para vivienda al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23/10-12-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de abril de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Leticia Cordero Rodríguez.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-XIII-79

GASTOS MÉDICOS DE PENSIONADOS. NO DEBE CUBRIRSE LA CUOTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, SI EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO NO SE CONCEDEN PRESTACIONES SUPERIORES A LAS QUE PREVÉ LA LEY.- El artículo 25 de la Ley del Seguro Social, regula el monto de las aportaciones a cubrir al Instituto Mexicano del Seguro Social, por concepto de prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, sin embargo, el numeral aludido solo puede entenderse en función del caso a que se contrae el artículo 23, del ordenamiento legal citado, esto es, cuando las relaciones laborales están reguladas por un contrato colectivo de trabajo, y se concedan

prestaciones superiores a las que prevé la Ley, en este contexto, si en el contrato colectivo de trabajo se pactó el aseguramiento de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que en el mismo se establecieran prestaciones mayores a las establecidas en la Ley, entonces el patrón no debe cubrir la aportación correspondiente que establece el primer numeral invocado, para financiar las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad para aquellos trabajadores y sus beneficiarios que obtengan una pensión en los términos de la Ley del Seguro Social, ya que el aseguramiento al régimen obligatorio, comprende el seguro de enfermedades y maternidad, mismo que de acuerdo a los artículos 84, 91, 93 del ordenamiento legal citado, ampara al pensionado en las prestaciones en especie de asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, por ello, el patrón no se encuentra obligado a pagar las cuotas obrero patronales por concepto de gastos médicos de pensionados de acuerdo con el artículo 25 invocado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 127/10-12-01-9.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de mayo de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Georgina Yañez Arroyo.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-XIII-80

GASTOS MÉDICOS A PENSIONADOS. ES PROCEDENTE SU DEVOLUCIÓN AL ACREDITARSE QUE SE CUBRIERON LAS PRESTACIONES EN ESPECIE DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, MISMO QUE TIENE INTEGRADO DICHO CONCEPTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones aportarán una cuota

de 1.05% sobre el salario base de cotización. Ahora bien, al demostrarse que la empresa tributa en el régimen obligatorio del seguro social a que alude el artículo 11, de la Ley del Seguro Social vigente; y que cubre las cuotas correspondientes al seguro de enfermedades y maternidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 y 107 de la Ley del Seguro Social, seguro que tiene integrado el concepto de gastos médicos a pensionados, es inconcuso que la empresa patronal realizó pagos de lo indebido, al no tener la obligación de cubrir las cuotas por dicho concepto, en términos de los artículos 23 y 25 de la Ley del Seguro Social; y por ende, es procedente su devolución.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 120/10-12-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de mayo de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos Castañeda.- Secretaria: Lic. Leticia Cordero Rodríguez.

SEGUNDA SALA REGIONAL DEL GOLFO

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

VI-TASR-XL-34

RÉGIMEN INTERMEDIO DE PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES. LOS CONTRIBUYENTES QUE TRIBUTEN BAJO ESE RÉGIMEN ESTÁN OBLIGADOS A LLEVAR SU CONTABILIDAD EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 133, FRACCIÓN II Y 134, FRACCIÓN I, AMBOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEBIENDO CUMPLIR ADEMÁS CON LAS OBLIGACIONES QUE AL EFECTO SEÑALE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN LA GUÍA DE OBSERVACIONES QUE AL EFECTO EXPIDA.- De una correcta interpretación de los artículos 133, fracción II y 134, fracción I, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se advierte que los contribuyentes sujetos a la Sección II, del Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales, no están exentas de llevar contabilidad, sino que tienen la facilidad de llevar un solo libro de ingresos, egresos y de registro de inversiones y deducciones, en lugar de llevar la contabilidad a que se refiere la fracción II del artículo 133 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sujeta a las exigencias y formalidades previstas en el Código Fiscal de la Federación y en su Reglamento. De manera que si la autoridad solicitó, entre otra documentación, la consistente en la declaración anual, pagos provisionales, libro de ingresos, egresos y registro de inversiones y deducciones, estados de cuenta bancarios, contratos celebrados con clientes y proveedores de bienes y/o servicios incluyendo anexos y estimaciones, al formar parte todos ellos de la contabilidad del contribuyente, éste se encontraba obligado a exhibirlos de conformidad con las disposiciones legales precisadas.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2635/09-13-02-7.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19

de abril de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Juana Griselda Dávila Ojeda.- Secretaria: Lic. Olivia Gómez Toral.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XL-35

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DERIVADO DE DOS JUICIOS DE NULIDAD EN LOS QUE SE IMPUGNÓ LA MISMA RESOLUCIÓN. FORMA DE HACERLO.- Si la autoridad demandada emite una resolución en la que determina la situación en materia de comercio exterior de una empresa importadora y un agente aduanal en cumplimiento a una sentencia dictada en un juicio de nulidad en la que no fue parte dicho agente, toda vez que en el mismo únicamente intervino la empresa importadora como parte demandante, la autoridad aduanera contraviene lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la autoridad tiene la obligación de cerciorarse que los antecedentes de su determinación, es decir, la sentencia emitida por este Tribunal, fue hecha del conocimiento de las partes involucradas, en este caso, del agente aduanal. Por lo que, si la autoridad al determinar la situación fiscal del agente aduanal, pasó por alto que éste no tenía conocimiento de los antecedentes en que apoyó el acto de molestia, es decir, de la sentencia emitida por el Tribunal, ya que la misma deriva de un juicio promovido por persona distinta a él, es evidente que se viola el contenido del artículo 52 fracciones III y IV, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues de acuerdo a dicho numeral, las sentencias emitidas por este Tribunal, en las que se declare la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, deberán cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que las sentencias queden firmes, independientemente de la relación que se pueda dar entre varios juicios al tener como origen la misma resolución impugnada, ya que la autoridad atento a lo establecido por el artículo antes mencionado, debe emitir una resolución en cumplimiento a cada sentencia, aun y cuando en las

mismas se haya declarado la nulidad del mismo acto de autoridad, pues puede suceder, como aconteció en la especie, que tanto la empresa importadora como el agente aduanal promovieron por separado juicio de nulidad en contra de la misma resolución, dando como resultado dos sentencias declaratorias de nulidad para determinados efectos, y en ese sentido, la autoridad debió emitir una resolución en cumplimiento a cada una de las sentencias y no así, una sola resolución haciendo alusión a ambos juicios, pues ello deja en completo estado de indefensión a la parte que no intervino en el juicio del que derivó el acto combatido.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1951/09-13-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de junio de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Juana Griselda Dávila Ojeda.- Secretaria: Lic. Claudia Selene Sagrero Rosas.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VI-TASR-XL-36

CONCEPTOS PREVISTOS DENTRO DE LA FRACCIÓN II, INCISO H), DEL ARTÍCULO 2-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA LA APLICACIÓN DE LA TASA DEL 0%. EL SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN.- El artículo 2-A, fracción II, inciso h) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que establece una tasa excepcional del 0% para efectos del cálculo del impuesto al valor agregado, es de aplicación estricta en términos del artículo 5° del Código Fiscal de la Federación; por eso, cuando la autoridad demandada en el acto combatido señale que los únicos servicios que se encuentran afectos a la tasa del 0% corresponden a los de suministro de agua para uso doméstico, lo cual es la aplicación de agua nacional para el uso particular de las personas y del hogar, riego de los jardines y de árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de animales domésticos, su apreciación es contraria a derecho, al no considerar que los servicios de conexión, reconexión,

venta y reparación de medidores, reparación de tuberías, saneamiento, alcantarillado y drenaje, también se encuentran previstos dentro de la fracción II, inciso h), del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y por consiguiente, están gravados a la tasa excepcional del 0% del impuesto al valor agregado, ya que no existe precepto legal alguno en el que se establezca que los servicios de conexión, reconexión, venta y reparación de medidores, reparación de tuberías, saneamiento, alcantarillado y drenaje, no correspondan a los servicios de suministro de agua para uso doméstico y por el contrario, el artículo 3, fracciones L y LVI de la Ley de Aguas Nacionales, prevé que por sistema de agua potable y alcantarillado se entenderá al conjunto de obras y acciones que permiten la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento, entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas residuales y por uso doméstico, a la aplicación de agua nacional para el uso particular de las personas y del hogar, riego de sus jardines y de árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de animales domésticos que no constituya una actividad lucrativa, en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego entonces, si el citado artículo de la Ley de Aguas Nacionales, señala que el suministro de agua para uso doméstico implica la realización de varias acciones que consisten —entre otras— en la conexión del servicio, la instalación de medidores, la elaboración de contratos, la instalación y utilización de infraestructura (drenaje y alcantarillado), pues sin estos servicios sería imposible realizar el suministro de agua potable para dicho fin, resulta inconcuso que los servicios de conexión, reconexión, venta y reparación de medidores, reparación de tuberías, saneamiento, alcantarillado y drenaje, forman parte del concepto ”los servicios de suministro de agua potable” a que alude el artículo 2-A, fracción II, inciso h) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y, en consecuencia, se encuentran gravados a la tasa del 0% del impuesto al valor agregado.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 743/10-13-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de julio de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Juana Griselda Dávila Ojeda.- Secretaria: Lic. Claudia Selene Sagrero Rosas.

SALA REGIONAL PENINSULAR

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VI-TASR-XVI-50

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO EN EL EXTRANJERO DE SERVICIOS PRESTADOS POR RESIDENTES EN EL PAÍS, PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA TASA DEL 0%.- El artículo 29, fracción IV, inciso a), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten; que para los efectos de dicha ley, se considera exportación de bienes o servicios, entre otros, el aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes en el país, el cual comprende como objeto del impuesto, entre otros supuestos, la asistencia técnica, servicios técnicos relacionados con ésta e informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. Por su parte, el artículo 58 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2006, establece en su primer párrafo, que para los efectos del artículo 29, fracción IV, de la citada ley, el aprovechamiento en el extranjero comprende tanto los que se presten en el territorio nacional como los que se proporcionen en el extranjero; y en su segundo párrafo señala que se entiende que los servicios a que se refiere la fracción IV antes indicada, se aprovechan en el extranjero cuando sean contratados y pagados por un residente en el extranjero sin establecimiento en el país, siempre que se paguen mediante cheque nominativo o transferencia de fondos a las cuentas del prestador del servicio en instituciones de crédito o casas de bolsa y el pago provenga de cuentas de instituciones financieras ubicadas en el extranjero. Por lo que de una interpretación sistemática de los preceptos anteriores, se concluye que para que los servicios prestados por residentes en el país, se consideren aprovechados en el

extranjero, debe atenderse primero a que este concepto comprende dos tipos de servicios: los prestados en territorio nacional y los prestados en el extranjero; es decir, que el objeto del gravamen se verificará cuando los actos o actividades se realicen no únicamente en el extranjero, sino también en territorio nacional; hipótesis que guarda estrecha relación con el cumplimiento de los tres requisitos enunciados en el segundo párrafo del artículo 58 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de que se considere que los servicios prestados fueron aprovechados en el extranjero.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14/10-16-01-9.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Virginia Pétriz Herrera.- Secretaria: Lic. Martha Beatriz Dorantes Cardeña.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

VI-TASR-XVI-51

CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO. PARA QUE OPERE DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LOS PLAZOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 164, 167 Y 168 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.- Para el cómputo de la caducidad prevista en el artículo 60, tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria, conforme a una interpretación sistemática de los artículos 164, 167 y 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que regulan el procedimiento de inspección y vigilancia en materia de equilibrio ecológico, debe tomarse en consideración no sólo el plazo de cinco días con que cuenta la persona con la que se levantó el acta de inspección para hacer observaciones y ofrecer pruebas previsto en el artículo 164, sino también el

plazo de quince días otorgado al interesado por la autoridad ordenadora, a partir de que ésta reciba el acta de inspección, para exponer lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes, sumando a dichos plazos el de tres días para que presente por escrito sus alegatos y el término de veinte días que tiene la autoridad para dictar la resolución respectiva, de acuerdo con los artículos 167 y 168 de la Ley General citada.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 481/10-16-01-8.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Ana Luz Brun Iñárritu.- Secretario: Lic. Rigoberto Jesús Zapata González.

LEY GENERAL DE POBLACIÓN

VI-TASR-XVI-52

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. PARA IMPONER LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, DEBE INSTRUIR PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- Los artículos 55, primer párrafo, y 57, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, establecen que el Instituto Nacional de Migración es un órgano técnico desconcentrado de dicha Secretaría de Estado, la cual forma parte de la Administración Pública Centralizada, que tiene por objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como el ejercicio de la coordinación con las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que concurren en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia; y que una de sus atribuciones es la de imponer las sanciones previstas por la Ley General de Población. Asimismo, el artículo 140 de este ordenamiento legal señala que toda infracción

administrativa a dicha ley o a sus reglamentos en materia migratoria, fuera de los casos previstos en el Capítulo VIII, denominado "Sanciones", del referido cuerpo normativo, se sancionará con multa hasta de un mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, según la gravedad de las violaciones cometidas a juicio de la Secretaría de Gobernación, o bien con arresto hasta de treinta y seis horas si no pagare la multa. Por su parte, el artículo 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que para imponer una sanción, la autoridad administrativa deberá notificar previamente al infractor, el inicio del procedimiento, para que éste dentro de los quince días siguientes exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso aporte las pruebas con que cuente. De esta manera se concluye que, tomando en consideración que a los actos, resoluciones y procedimientos del Instituto Nacional de Migración, les resulta aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por ser un órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, para imponer la multa a que se refiere el artículo 140 de la Ley General de Población, se encuentra obligado a instruir previamente el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones a que alude el artículo 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con la finalidad de respetar la garantía de audiencia y debido proceso legal, prevista en el segundo párrafo del artículo 14 Constitucional.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 204/10-16-01-9.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Virginia Pétriz Herrera.- Secretaria: Lic. Martha Beatriz Dorantes Cardeña.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XVI-53

INFORMES DE ASUNTOS NO DILIGENCIADOS. NO SE REQUIERE DEJAR CITATORIO PREVIO A SU LEVANTAMIENTO, EN LOS CASOS

DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Del análisis del artículo 137, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se observa que la finalidad de dejar citatorio en el domicilio del contribuyente se justifica sólo en las notificaciones de tipo personal, cuando el notificador se constituye en el domicilio de la persona a notificar y se le informa que no se encuentra en ese momento, lo que implica que sí es localizable en el lugar en donde se realiza la diligencia aunque está ausente en forma temporal. Situación que no se configura en el levantamiento de los informes de asuntos no diligenciados en los que se apoya la autoridad fiscal para ordenar la práctica de las notificaciones por estrados, a que se refiere el artículo 134, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 29 de junio de 2006, ya que en dichos informes el notificador asienta que la persona a quien debe notificarse no es localizable en el domicilio que hubiera señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes; que se ignora su domicilio o el de su representante; que desapareció o se opuso a la diligencia de notificación, entre otros supuestos jurídicos previstos en la citada norma. Por lo que es claro que en estos casos, la imposibilidad de realizar la notificación de manera personal se debe a conductas atribuibles al contribuyente buscado, no imputables a la autoridad fiscal. De esta manera se concluye que el hecho de que el notificador no deje citatorio previo para levantar el día hábil siguiente los informes de asuntos no diligenciados, no constituye un vicio de ilegalidad de dichas actuaciones, ya que el hecho de que el notificador asiente en ellos la razón circunstanciada por la que se acredite que el contribuyente no es localizable en dicho domicilio, o desapareció o se opuso a la diligencia, entre otros supuestos jurídicos previstos en el artículo 134, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, resulta suficiente para ordenar la práctica de la notificación por estrados.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1872/09-16-01-6.- Resuelto por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Virginia Pétriz Herrera.- Secretario: Lic. Juan Carlos Cámara Maldonado.

SALA REGIONAL DEL CARIBE

LEY ADUANERA

VI-TASR-XXXVI-113

EJECUCIÓN DE UNA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE.- LA EXIGENCIA DEL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA RESPECTIVA NO SE CONVALIDA CON LA EXISTENCIA DEL PARTE INFORMATIVO ELABORADO POR EL PERSONAL QUE LA CUMPLIMENTA.- En el supuesto referido al rubro, el personal actuante se encuentra conminado a notificar la orden respectiva, a identificarse debidamente ante la persona con quien entienda la diligencia, a requerirle que acredite la legal estancia de la mercancía en el lugar en que ocurrieron los hechos, verbigracia, en la vía pública donde se detuvo el vehículo que conducía, así como a levantar acta debidamente circunstanciada de lo anterior, además de los hechos que ocurran hasta que sean puestos a disposición de la autoridad aduanera la persona, la mercancía de procedencia extranjera, y en su caso, el medio de trasporte respectivo; sin que pueda subsanarse tal cuestión con motivo del parte informativo elaborado por el personal que ejecutó la orden de verificación en la vía pública, ya que constituye un documento de carácter interno mediante el cual, el inspector, de forma unilateral y sin que medie el conocimiento o participación de la persona a la que se atribuyen los hechos ilícitos, hace del conocimiento de la autoridad correspondiente lo que bajo su apreciación, constituyen los hechos ocurridos; máxime cuando no exista constancia alguna de que el mismo se hizo del conocimiento del presunto infractor; por lo cual, deviene ilegal la actuación de la autoridad, si constituye un hecho aceptado por las partes, que la mercancía inicialmente se encontraba en transporte en la vía pública, que posteriormente fue trasladada junto con el vehículo y su conductor a las instalaciones de una Garita, donde se llevó a cabo la verificación de la mercancía, y que finalmente se trasladaron a las instalaciones de la

Aduana; sin que al efecto obre acta donde se brindara la certeza jurídica al gobernado, sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar acaecidas desde el momento en que se detuvo en tránsito al vehículo que transportaba la mercancía, hasta que finalmente la autoridad aduanera procedió contra el presunto infractor.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 976/09-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXVI-114

DERECHO DEL CONTRIBUYENTE A NO APORTAR LOS DOCUMENTOS QUE YA OBREN EN PODER DE LA AUTORIDAD FISCAL.- SUPUESTO EN EL CUAL NO SE ACTUALIZA.- Acorde a los cardinales 30 y 45 del Código Fiscal de la Federación, las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla en su domicilio fiscal y con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, debe mantenerse a su disposición, lo que constituye la regla general sobre la cuestión de trato, cuya excepción, prevista en el artículo 2, fracción VI, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, relativa a la posibilidad de que el contribuyente no esté obligado a proporcionar nuevamente la documentación de mérito, implica necesariamente que la aportada en una primera ocasión se encuentre física y jurídicamente disponible para la autoridad, es por ello que si en un primer procedimiento fiscalizador ésta se allegó de determinada documentación, pero con motivo de un medio de defensa se dejó sin efectos el propio acto determinante, así como la totalidad de las actuaciones de las que derivó, por tratarse de actos viciados desde su origen; resulta inconcuso que no sería apegado a derecho que la autoridad sustentara la legalidad de una diversa resolución administrativa, bajo las constancias y hechos inherentes al previo procedimiento fiscalizador que fue anulado en los términos antes referidos,

atento a que si bien la documentación cuestionada, en su momento le fue físicamente entregada, no lo es menos que jurídicamente ya no se encontraba bajo la libre disposición de la fiscalizadora, al anularse plenamente el procedimiento mediante el cual se allegó de la misma.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1102/09-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de agosto de 2010, por 1 voto a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García. Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXVI-115

MULTA POR REINCIDENCIA.- RESULTA ILEGAL SI LA PRIMERA RESOLUCIÓN EN QUE SE SUSTENTA SE ENCUENTRA *SUB JUDICE*.- De la interpretación sistemática del cardinal 75, fracción I, incisos a) y b), del Código Fiscal de la Federación, se desprenden diversos elementos de interés relativos a la reincidencia, a saber: 1.- Se prevén dos rubros, verbigracia, las conductas que conlleven la omisión en el pago de contribuciones y las que no impliquen tal circunstancia; 2.- Para ambos casos, se requiere la existencia previa de una resolución sancionadora y la existencia de una nueva conducta infractora; 3.- En todos los casos, se establece un límite temporal de cinco años para retomar la anterior conducta infractora, que funja como base para la sanción por reincidencia.- Por otra parte, es oportuno retomar el concepto de reincidencia, previsto por el Diccionario de Derecho de Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, Editorial Porrúa, vigésimo novena edición, México, año 2000, página 438, donde se establece: “REINCIDENCIA. Comisión de un delito de igual o de la misma especie después del cumplimiento total o parcial o de la remisión de la pena impuesta por otro anteriormente cometido, supuesto que desde el cumplimiento o remisión de la pena anterior hasta la comisión del nuevo delito no

haya transcurrido cierto tiempo que haga como rota la relación jurídico-penal entre ambos actos...”; de tal forma, se tiene que la reincidencia parte de la base de la comisión de una primera conducta infractora, que la misma haya sido sancionada por la autoridad respectiva y que sin transcurrir el tiempo que establezca la norma aplicable, se cometa una nueva conducta infractora; por otra parte, cuando un determinado acto de autoridad es impugnado en tiempo y forma a través del medio de defensa legalmente establecido se produce un estado *sub judice* sobre su legalidad, que acorde al diccionario antes citado, en su página 464, se define como: “Expresión con la que se hace referencia a una cuestión que se encuentra pendiente de decisión judicial.”; siendo así, el hecho de que la literalidad del cardinal no establezca que la resolución que sustente la declaratoria de reincidencia debe encontrarse firme, no obsta para dejar de considerar tal circunstancia como elemento esencial para tales efectos, por lo cual, resulta ilegal la actuación de la enjuiciada si la multa en la que se sustenta para declarar la reincidencia controvertida, no se encuentra firme a la fecha de emisión del acto controvertido, con motivo de su impugnación en un diverso juicio, que se encuentra pendiente de resolución.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1102/09-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de agosto de 2010, por 1 voto a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO

VI-TASR-XXXVI-116

OPOSICIÓN DE UN TERCERO AL EMBARGO TRABADO CONTRA DIVERSO CONTRIBUYENTE SOBRE UN BIEN INMUEBLE.- SUPUESTO EN EL QUE NO SE ACREDITA SU INTERÉS JURÍDICO PARA TALES EFECTOS.- Si bien los artículos 3179 y 3181 del Código Civil para el Estado de

Quintana Roo, prevén determinados supuestos donde se confieren efectos retroactivos a la inscripción de la escritura respectiva, entre otros, desde la fecha de presentación del primer aviso preventivo si hubiere sido dado, o en caso contrario desde la fecha y hora de presentación del segundo y con arreglo a su número de entrada, no lo es menos, que en todos los casos, se requiere la efectiva inscripción para que surta plenos efectos; motivo por el cual, si la promovente fue omisa en acreditar la efectiva inscripción de la escritura de referencia ya sea en forma previa al embargo realizado, o bien, incluso con posterioridad a éste, resulta inconcuso que no se demuestra plenamente su interés jurídico para oponerse al embargo trabado sobre el inmueble de mérito, para garantizar el adeudo a cargo de un diverso contribuyente, ya que si bien, la escritura que el fedatario público otorga con motivo de un contrato de compra venta donde se transmite la propiedad y dominio sobre un bien inmueble, constituye un documento público que ostenta valor probatorio pleno, no lo es menos que, acorde a la legislación vigente, aplicable en el Estado de Quintana Roo, se supedita su perfeccionamiento y que surta plenamente sus efectos legales, hasta que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad, otorgándole a dicha inscripción efectos constitutivos.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 29/10-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

VI-TASR-XXXVI-117

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.- SE COMPRENDE EN EL SISTEMA CONSTITUTIVO EN TRATÁNDOSE DE LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD Y DOMINIO SOBRE UN INMUEBLE.- Con relación a los efectos que produce la inscripción

en el Registro Público de la Propiedad de los documentos registrables, se conocen tres sistemas, a saber: 1.- El sustantivo, en el cual la inscripción en el Registro Público de la Propiedad es un elemento de existencia para adquirir el dominio de los bienes inmuebles; 2.- El constitutivo, en el que el derecho nace con el contrato o acto jurídico, pero para su perfección es necesaria su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; en este sistema, la inscripción no es potestativa sino obligatoria; y, 3.- El declarativo, en el cual la transmisión de la propiedad se verifica por mero efecto del contrato sin necesidad de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, y sólo se inscribe si se desea que el contrato o acto jurídico surta efectos frente a terceros.- Ahora bien, de la interpretación armónica de los artículos 26 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo; 2548, 2598, 3158, 3159, 3162, 3168, 3171, 3177, 3178, 3179 y 3181 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, en lo que respecta a los convenios y contratos por los cuales se adquiere, transmite, modifica o extingue el dominio de bienes raíces o una hipoteca, se tendrán por perfeccionados y surtirán plenamente efectos hasta que se registren; aunado a que mediante el contrato de compraventa una de las partes transfiere a la otra la propiedad de un bien, a cambio de un precio cierto y en dinero, que para su validez no requiere formalidad alguna especial, salvo cuando recae sobre un inmueble, en cuyo caso el contrato se perfeccionará y surtirá plenamente sus efectos, hasta que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad; motivo por el cual, resulta inconcuso que en tratándose del acuerdo de voluntades bajo el cual se transmite la propiedad de un bien inmueble, comprendiendo incluso el dominio sobre el mismo, la legislación aplicable supedita su perfeccionamiento y que surta plenamente sus efectos legales, hasta que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad, por lo cual sobre dicha cuestión, el citado registro se comprende en el sistema constitutivo antes referido.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 29/10-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXVI-118

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE UN ACTO DE AUTORIDAD.- NO SE SUPEDITA SU PROCEDENCIA A LOS CASOS LITERALMENTE PREVISTOS POR LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 134 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Acorde al artículo citado al rubro, se establecen una diversidad de supuestos bajo los cuales la autoridad fiscal está en legal aptitud de llevar a cabo una notificación mediante estrados, verbigracia, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, empero, los supuestos enunciados en su texto no son limitativos, por el contrario, en su parte final se establece que de igual forma procederá en los demás casos que señale el Código Fiscal de la Federación; sobre dicha base, se tiene que el propio cardinal 129, fracción II, del código en cita, prevé que si el interesado no señala en el escrito de recurso de revocación el nombre de la persona facultada para recibir la resolución recurrida, la autoridad dará a conocer el acto y la notificación por estrados; de tal forma, si la autoridad sustentó la notificación por estrados en el último supuesto legal en comento, que no constituye un hecho expresamente impugnado y consecuentemente desvirtuado por la actora, resulta inconcuso que sobre dicho tópico prevalece en la especie la presunción de legalidad del acto controvertido y con ello, la legalidad de la notificación por estrados ordenada.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1146/09-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXVI-119

EMBARGO ADMINISTRATIVO PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL.- NO BASTA CON SU SIMPLE OFRECIMIENTO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.- Debe distinguirse en la especie entre el embargo coactivo llevado a cabo por la autoridad para obtener el entero del interés fiscal insoluto, una vez transcurrido el plazo de ley para el pago o garantía del mismo; y el embargo en la vía administrativa como opción prevista por el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, para que los contribuyentes constituyan la garantía de mérito; ciertamente, se ha establecido una presunción legal en el sentido de que el embargo coactivo llevado a cabo por la autoridad es suficiente para tener por constituida la garantía del interés fiscal, salvo que la exactora acredite lo contrario, empero, dicha presunción no opera bajo el diverso supuesto de la declaración unilateral de voluntad del contribuyente de ofrecer a la autoridad un determinado bien para que se constituya sobre éste el embargo en la vía administrativa; motivo por el cual, si la suspensión provisional se otorgó bajo la condicionante de que se constituyera la garantía del interés fiscal en el plazo previsto en ley, no basta para tenerla por satisfecha, el simple ofrecimiento respectivo por parte de la actora para que se trabara embargo en la vía administrativa sobre determinado bien presuntamente de su propiedad, sin que sea dable conceder una prórroga, hasta en tanto la autoridad recaudadora califique y acepte la garantía ofrecida por su parte, toda vez que el segundo párrafo del cardinal 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es categórico al establecer que si la garantía no se constituye dentro del plazo conferido, la medida cautelar de trato deja de tener efecto, por lo cual, lo conducente es negar en definitiva la suspensión planteada, sin detrimento de que en el momento en que el interesado acredite cumplir no sólo con los requisitos de procedencia para el incidente de trato sino a su vez igualmente con el de eficacia (si su pretensión radica en la declaratoria de la plena eficacia de dicha suspensión), pueda solicitar nuevamente la suspensión respectiva, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva en el juicio respectivo.

Incidente de Suspensión Núm. 631/10-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXXVI-120

NOTIFICACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA MEDIDA DE APREMIO.- ES LEGAL SI SE REALIZA EN FORMA PERSONAL EN EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL INTERESADO, CON INDEPENDENCIA DE QUE HAYA DESIGNADO IGUALMENTE UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA TALES EFECTOS.- De la interpretación armónica de los cardinales 104 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se desprenden los siguientes elementos de interés: 1.- Tratándose de determinados actos, por disposición de la ley, la autoridad se encuentra constreñida a llevar a cabo su notificación en forma personal; y, 2.- Previo consentimiento por escrito del interesado, los actos diversos señalados en las fracciones del citado artículo 104 y aún las señaladas en las mismas, se podrán llevar a cabo por cualquier otro medio fehaciente autorizado legalmente.- En esa tesitura, tomando en consideración que acorde al artículo 104, fracción IV, de la primer ley en mención, la resolución sancionadora citada al rubro, debe ser notificada en forma personal en el domicilio designado por el interesado y si éste proporciona uno para tales efectos, resulta inconcuso que la autoridad no se encuentra conminada a llevar a cabo la notificación del mismo en forma irrestricta, a través de medios electrónicos, sino que válidamente puede llevarlo a cabo en forma personal en el domicilio designado para tal finalidad.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1001/09-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de

agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXVI-121

FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA EXIGIR EN UNA VISITA DOMICILIARIA LA EXHIBICIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE.- DEBE FUNDARSE DEBIDAMENTE EN EL ACTO DE MOLESTIA.- Con independencia de que cada procedimiento fiscalizador en particular conlleva sendas particularidades y formalidades que deben observarse para su legalidad, en todos los casos tienen como premisa afín, la facultad de la autoridad para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente, que no conllevan *per se* una potestad general a su favor para exigir toda la documentación que estime necesaria para tales efectos, toda vez que precisamente, lo inherente a las cuentas bancarias del contribuyente, no constituye en estricto sentido información contable, prevista por el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, tal como lo ha establecido nuestra máxima instancia de justicia mediante la jurisprudencia con número de registro 169610; sin que ello implique que se haga nugatoria la posibilidad de que la autoridad fiscal se allegue de dicha información, por el contrario, conlleva a establecer que, deriva en una cuestión relacionada a su competencia, tal como lo asentó en la diversa jurisprudencia con número de registro 164694; cabe precisar, que la circunstancia de que en las referidas jurisprudencias se haya utilizado la expresión "facultad", al referirse a la posibilidad de que la autoridad requiera al contribuyente para que le proporcione dicha cuestión, no debe interpretarse como una expresión disímil de la diversa "competencia", lo anterior es así, toda vez que acorde al Diccionario de Derecho de Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, Editorial Porrúa, vigésimo novena edición, páginas 172, 285 y 286 se define a facultad como: "...Atribución fundada en una norma del derecho positivo vigente..."; y por su parte, se conceptualiza a competencia

como: "...Potestad de un órgano de jurisdicción para ejercerla en un caso concreto... Idoneidad reconocida a un órgano de autoridad para dar vida a determinados actos jurídicos."; en esa tesitura, no es dable estimar que dicha exigencia, únicamente es aplicable cuando lleve a cabo la revisión de escritorio, lo anterior, atento a dos motivos esenciales, a saber: 1.- La revisión de escritorio, al igual que la visita domiciliaria, encuentran el elemento afín de que ambas constituyen modalidades de facultades de comprobación de la autoridad, que conllevan la revisión de la contabilidad del contribuyente; y, 2.- Nuestra máxima instancia de justicia ha delimitado lo que debe comprender la expresión "contabilidad", donde ha excluido la información relacionada a las cuentas bancarias del contribuyente, lo que permite advertir que la esencia de dicho concepto es una misma, con independencia del tipo de facultad de comprobación que en específico ejerza la autoridad; de tal forma, no sería dable aceptar que cuando la autoridad lleve a cabo una revisión de escritorio, donde revise la contabilidad y demás papeles del contribuyente, debe fundar su competencia para exigirle la exhibición de la información y documentación relacionada con sus cuentas bancarias y, en contraposición a ello, cuando lleve a cabo una visita domiciliaria, que igualmente conlleva la revisión de lo referido, no se encuentre conminada a fundar su facultad para exigir su exhibición; es por ello que aun de asumir que en tratándose de una visita domiciliaria, se encontrara inmersa en el texto del cardinal 45 del referido código, la debida fundamentación del acto de molestia no se satisface bajo su cita genérica, que comprende en su texto seis párrafos y nueve fracciones.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 654/09-20-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de septiembre de 2010.- Sentencia: por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Tesis: por mayoría de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Edgar Alan Paredes García.

CUARTA PARTE

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES APROBADOS DURANTE LA QUINTA ÉPOCA

PRIMERA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE.- LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE LA DECLARA Y QUE ORDENA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS, NO ESTÁ SUJETA AL TÉRMINO DE TRES MESES.- El plazo de tres meses previsto por el artículo 41-A del Código Fiscal de la Federación, no tiene aplicación en el supuesto de que la autoridad determine declarar improcedente la compensación solicitada y requiera al contribuyente la presentación de la declaración complementaria en la que efectúe el pago del impuesto compensado indebidamente, en virtud de que no corresponde a un requerimiento formulado al contribuyente para que proporcione información o datos para aclarar alguna declaración o, bien, el aviso de compensación relativo, que es la hipótesis que contempla el mencionado numeral; sino que está referido a un supuesto diferente que estriba en el cumplimiento de obligaciones relativo a la determinación de la autoridad que declara que una compensación fue indebida, con la finalidad de que el contribuyente corrija su situación fiscal.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3899/06-07-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de junio de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Miguel Ángel García Padilla.- Secretaria: Lic. Martha Evangelina Lujano Cortés.

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES PUBLICADOS DURANTE 2010

Metropolitanas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Primera (SR-I)	0	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	6
Segunda (SR-II)	3	8	0	0	1	5	0	1	0	0	0	0	18
Tercera (SR-III)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Cuarta (SR-IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quinta (SR-V)	0	0	0	6	0	0	2	3	0	4	0	0	15
Sexta (SR-VI)	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	8
Séptima (SR-XVIII)	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Octava (SR-XIX)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Novena (SR-XX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décima (SR-XXI)	6	4	0	0	1	1	4	0	0	1	0	0	17
Décima Primera (SR-XXII)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Décima Segunda*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12	16	3	7	8	6	12	4	0	5	0	0	73

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES PUBLICADOS DURANTE 2010

Foráneas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Primera Noroeste I (Tijuana) (SR-XXV)	0	13	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	16
Segunda Noroeste I* (Tijuana)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noroeste II (Cd. Obregón) (SR-VII)	0	11	0	0	6	16	0	0	9	2	0	0	44
Noroeste III (Culiacán) (SR-XXXI)	0	2	0	0	0	9	7	0	3	0	0	0	21
Norte – Centro I (Chihuahua) (SR-XXX)	0	0	0	0	0	6	11	1	0	4	0	0	22
Primera del Norte – Centro II (Torreón) (SR-VIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segunda del Norte – Centro II (SR-XXXII)	0	10	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	14
Tercera del Norte – Centro II (SR-XXXVII)	8	12	7	12	4	9	10	2	0	8	0	0	72
Primera del Noreste (Monterrey) (SR-IX)	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7
Segunda del Noreste (Monterrey) (SR-XXIV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Primera de Occidente (Guadalajara) (SR-X)	0	0	0	0	0	0	7	0	0	4	0	0	11
Segunda de Occidente (Guadalajara) (SR-XXVIII)	1	1	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	9
Tercera de Occidente (Guadalajara) (SR-XXXVIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES PUBLICADOS DURANTE 2010 (continuación)

Foráneas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Centro I (Aguascalientes) (SR-XXIX)	6	5	0	12	0	4	0	0	2	4	0	0	33
Centro II (Querétaro) (SR-XXIII)	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	28
Centro III (Celaya) (SR-XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Primera Hidalgo – México (Tlalnepantla) (SR-XII-I)	1	7	2	0	5	0	1	1	2	0	0	0	19
Segunda Hidalgo – México (Tlalnepantla) (SR-XII-II)	0	0	0	7	6	4	3	0	0	4	0	0	24
Tercera Hidalgo – México (Tlalnepantla) (SR-XXXIII)	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5
Primera de Oriente (Puebla) (SR-XIII)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	60
Segunda de Oriente (Puebla) (SR-XXVI)	0	1	1	1	0	0	0	23	1	0	0	0	27
Tercera de Oriente (Puebla) (SR-XXXIX)	0	0	0	2	4	2	8	5	4	0	0	0	25
Primera del Golfo (Jalapa) (SR-XXVII)	0	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Segunda del Golfo (Jalapa) (SR-XL)	0	2	3	1	1	0	4	0	3	3	0	0	17
Pacífico (Acapulco) (SR-XVII)	5	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	10

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES PUBLICADOS DURANTE 2010
(continuación)

Foráneas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Sureste (Oaxaca) (SR-XV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peninsular (Mérida) (SR-XVI)	1	8	0	5	0	2	1	4	5	4	0	0	30
Golfo – Norte (Cd. Victoria) (SR-XXXIV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiapas – Tabasco (Tuxtla Gutiérrez) (SR-XXXV)	1	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8
Caribe (Cancún) (SR-XXXVI)	5	13	2	8	8	6	6	0	0	9	0	0	57
Pacífico Centro (Morelia) (SR-XLI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad Intelectual (D.F.) (SR-EPI)	27	75	51	21	49	0	17	0	0	0	0	0	240
TOTAL	100	186	66	76	89	61	103	39	34	75	0	0	829

QUINTA PARTE

RESOLUCIONES Y VOTOS PARTICULARES DE SALA SUPERIOR

PRIMERA SECCIÓN

VI-RyVP-1aS-10

Recurso de Reclamación Núm. 35527/07-17-02-9/750/10-S1-05-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 de julio de 2010, por mayoría de 3 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretario: Lic. Luis Alberto Placencia Alarcón.
[Suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado.- Es una especie de las medidas cautelares reguladas por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo]

C O N S I D E R A N D O :

[...]

TERCERO.- [...]

En opinión de este Órgano Jurisdiccional, los agravios expresados por la autoridad resultan **infundados**, por las siguientes consideraciones jurídicas.

Inicialmente, es preciso señalar que la Segunda Sala Regional Metropolitana a través de la sentencia combatida de 19 de junio de 2009, determinó lo siguiente:

1. Otorgar la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado, respecto a la sanción económica impuesta al C. Adrián Padilla Flores por la cantidad de $658,605.80.

2. Negar la medida cautelar en relación a la sanción administrativa de inhabilitación por el término de diez años.

Ahora bien, la autoridad recurrente se duele del otorgamiento de la suspensión definitiva respecto al acto detallado en el numeral 1 precitado; de ello que *la controversia planteada en la instancia que se resuelve, se limita exclusivamente a la concesión de la suspensión de la sanción económica*, que es lo que controvierte expresamente la demandada; en consecuencia, subsiste la decisión de la Segunda Sala Regional Metropolitana de negar la suspensión definitiva de la ejecución de la sanción administrativa de inhabilitación, habida cuenta que no le está permitido a este Órgano Jurisdiccional, pronunciarse sobre actos no impugnados de manera expresa conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Precisado lo anterior, resulta conveniente señalar que el Capítulo III, del Título II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece las medidas cautelares que puede otorgar este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y específicamente en el artículo 28, se prevén las reglas para la suspensión de la ejecución del acto impugnado, siendo importante destacar que esa suspensión *es tan sólo una de las medidas cautelares procedentes en el juicio contencioso administrativo, cuya finalidad es la de mantener la situación de hecho existente, para evitar que con la ejecución del acto quede sin materia el proceso*; por tal motivo, para interpretar el numeral 28 de la referida ley, debe partirse del hecho de que las medidas cautelares en el juicio contencioso administrativo, se dictan según deriva de los artículos 24 y 25 del mismo ordenamiento legal.

En virtud de lo anterior, en opinión de este Cuerpo Colegiado resulta indudable que la hipótesis de la fracción VI, del artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, debe ser analizado de manera conjunta con el numeral 24 del ordenamiento aludido.

Así, los artículos 24, primer párrafo y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, disponen lo siguiente:

[N.E. Se omite transcripción]

De una interpretación armónica y sistemática que se realiza a las disposiciones legales transcritas, se advierte que las medidas cautelares que se decretan en el juicio contencioso administrativo tienen la finalidad de mantener la situación de hecho existente a fin de evitar que con la ejecución del acto impugnado quede sin materia el proceso, por tanto, teniendo en consideración, que la suspensión de la ejecución del acto controvertido es una especie de las medidas cautelares que proceden en la presente instancia, es factible concluir que la medida suspensiva, tiene la misma finalidad.

Cobra aplicación, la jurisprudencia V-J-1aS-15, de esta Primera Sección de la Sala Superior, visible en la Revista de este Tribunal número 77, Quinta Época, Año VII, mayo de 2007, página 31, cuyo texto es el siguiente:

"**SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.- ES UNA ESPECIE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES REGULADAS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO".** [N.E. Se omite transcripción]

Ahora bien, a través de la resolución dictada en el expediente administrativo número R-013/2006, de 8 de octubre de 2007 -acto materia de juicio-, la autoridad demandada impuso al C. Adrián Padilla Flores una sanción económica por la cantidad total de $658,605.80, la cual constituye un **crédito fiscal**, el cual se hace efectivo mediante el procedimiento económico coactivo, a la luz de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mismo que prevé:

[N.E. Se omite transcripción]

Por su parte, la fracción VI del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece la procedencia de la suspensión tratándose de la determinación, liquidación, ejecución y cobro de contribuciones o de créditos fiscales -como acontece en la especie-, condicionada a que se haya constituido o se constituya la garantía del interés fiscal a través de cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; consecuentemente, el otorgamiento de la garantía del interés fiscal, no constituye un requisito de procedencia de la suspensión, sino en todo caso, de eficacia de la medida cautelar.

Por lo anterior, legalmente no es dable condicionar la procedencia de la suspensión de la ejecución de la sanción económica impugnada, a que esté garantizado el interés fiscal, como **infundadamente** lo pretende la autoridad recurrente, ya que tal exigencia haría nugatoria la referida medida cautelar, pues la finalidad de la suspensión es evitar que con la ejecución del acto controvertido quede sin materia el proceso, motivo por el que se puede conceder la suspensión de la ejecución del acto impugnado aunque no se haya garantizado el interés fiscal al momento de solicitarla, pero la medida suspensiva estará condicionada a que se otorgue garantía suficiente ante la autoridad ejecutora.

Es aplicable al caso, la jurisprudencia VI-J-1aS-2, sustentada por esta Primera Sección de esta Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en la Revista número 9, Sexta Época, Año I, septiembre de 2008, página 7, que a la letra dice:

> "**SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES.- EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍA NO ES REQUISITO DE PROCEDENCIA SINO DE EFICACIA**". [N.E. Se omite transcripción]

En el mismo tenor, se invoca por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 74/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Sema-

nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 330, que a la letra señala:

> "**SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001)".** [N.E. Se omite transcripción]

En concordancia con lo anterior, deviene en infundado lo manifestado por la autoridad recurrente en relación a que la Sala Regional no realizó la calificación de la garantía ofrecida por el demandante, ni hizo referencia a ésta; en atención a que solamente la autoridad ejecutora tiene atribuciones para calificar la garantía del interés fiscal conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación.

[...]

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- Es procedente, pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada; en consecuencia:

II.- Se confirma la sentencia interlocutoria dictada el 19 de junio de 2009, por la Segunda Sala Regional Metropolitana.

III.- Remítase copia certificada del presente fallo a la Sala Regional de referencia, para su conocimiento.

IV.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de **1º de julio de 2010**, por mayoría de 3 votos a favor de los CC. Magistrados Nora Elizabeth Urby Genel, Alejandro Sánchez Hernández y Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez; 1 voto con los puntos resolutivos del Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, y 1 voto en contra del Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, quien se reservó su derecho para formular voto particular.

Fue Ponente el Magistrado Alejandro Sánchez Hernández, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el **5 de julio de 2010**, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción III y 48, fracción III de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Sonia Sánchez Flores, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN NÚM. 35527/07-17-02-9/750/10-S1-05-05

El Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, se reservó su derecho para formular voto particular en el presente asunto, el cual respetuosamente se manifiesta en los siguientes términos:

V O T O P A R T I C U L A R

El motivo para votar en contra se debe a que en el caso se dejó de aplicar la jurisprudencia **2a./J. 68/2010**, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en el mes

de mayo de 2010, siendo que en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, la Jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta de aplicación obligatoria; el artículo de referencia establece lo siguiente:

> "**ARTÍCULO 192**.- LA JURISPRUDENCIA QUE ESTABLEZCA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, FUNCIONANDO EN PLENO O EN SALAS, ES OBLIGATORIA PARA ESTAS EN TRATÁNDOSE DE LA QUE DECRETE EL PLENO, Y ADEMÁS PARA LOS TRIBUNALES UNITARIOS Y COLEGIADOS DE CIRCUITO, LOS JUZGADOS DE DISTRITO, LOS TRIBUNALES MILITARES Y JUDICIALES DEL ORDEN COMÚN DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, Y TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS Y DEL TRABAJO, LOCALES O FEDERALES."

De lo anterior, tenemos que el artículo 192 de la Ley de Amparo en su primer párrafo dispone: "La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal y Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales", por lo que siendo el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa un tribunal administrativo, es claro que está obligado a acatar la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, tal como expresamente lo ordena el precepto de referencia.

Luego entonces, se debió observar dicho pronunciamiento de la Corte al momento de resolver sobre las medidas cautelares, toda vez que el Juzgador se encuentra obligado a atender los criterios Jurisprudenciales sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia XIV.1o. J/7 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el mes de septiembre de 2001 cuyos contenido es el siguiente:

"**Localización:**
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XIV, Septiembre de 2001
"Página: 1207
"Tesis: XIV.1o. J/7
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común

"**JURISPRUDENCIA. AL RESULTAR OBLIGATORIA PARA LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ÉSTAS DEBERÁN RESOLVER LA CUESTIÓN PLANTEADA SI SE APOYA EN TEMAS YA DEFINIDOS JURISPRUDENCIALMENTE.** Si bien los aspectos de constitucionalidad deben ser dirimidos y resueltos en la vía de amparo, lo cierto es que a la responsable nada le impide pronunciarse sobre la validez de un razonamiento específico, cuando tal planteamiento se apoya en una tesis de jurisprudencia exactamente aplicable a la hipótesis concreta sometida a su consideración, de donde sólo puede entenderse cumplida su función jurisdiccional al llevar al caso a estudio el razonamiento propio del criterio invocado declarando así su nulidad, sin que tal subsunción normativa pueda considerarse como un pronunciamiento de constitucionalidad; lejos de ello, tan sólo significaría que observó el contenido del numeral 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, es claro que la vigencia de esta disposición no puede quedar supeditada a la consideración de la responsable de que aun y cuando cierto aspecto jurídico haya sido abordado por la jurisprudencia o incluso, declarada inconstitucional una disposición legal, decidiera no pronunciarse bajo la premisa de que al hacerlo invadiría facultades que le están vedadas; al contrario, su función jurisdiccional se reduce a declarar la nulidad del acto que fue combatido, simplemente con la aplicación del criterio jurisprudencial al asunto sometido a su decisión, esto es, sin evasivas de la litis resolverá la cuestión efectivamente planteada mediante la comprobación de que

el tema ya definido por la jurisprudencia, coincide o no con el punto en controversia, tarea que de ninguna manera significa asumir directamente el conocimiento de apreciar la constitucionalidad de un acto concreto, pues sobre ese tema no emitirá opinión alguna."

En el caso se debe ponderar que la parte actora solicitó directamente ante este Tribunal la suspensión del acto impugnado, tal y como se desprende del resultando Primero del presente fallo, sin que haya demostrado lo contrario el demandante, siendo que en el caso de solicitar la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, se debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, consistentes en:

1. Que la autoridad ejecutora niegue la suspensión; rechace la garantía ofrecida, o reinicie la ejecución (párrafo primero).

2. Exige acompañar copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de garantía; a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad **ejecutora**; la negativa de la suspensión; el rechazo de la garantía, o el reinicio de la ejecución (fracción III).

3. La eficacia de la suspensión se sujeta a que se haya constituido o se constituya el interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales (fracción VI).

Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia **2a./J. 68/2010** en cuestión, sustentada por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se reproduce:

"**SUSPENSIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA CUANDO SE SOLICITA CONTRA ACTOS RELATIVOS A LA DETERMINACIÓN, LIQUIDA-**

CIÓN, EJECUCIÓN O COBRO DE CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS DE NATURALEZA FISCAL. De la interpretación gramatical del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en congruencia con la voluntad externada por el legislador durante el proceso legislativo, se advierte que el primer párrafo de dicho numeral contiene el presupuesto general requerido para la procedencia de la suspensión en todos los casos en los que se solicite esa medida, esto es, que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los demás requisitos enlistados a continuación en la norma, respecto de los cuales el legislador especificó algunos tratándose del cobro de contribuciones. De ahí que para la procedencia de la suspensión contra actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, concurren los siguientes requisitos: 1. Precisa que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución; 2. Exige acompañar copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantía, la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora, la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución; y, 3. La eficacia de la suspensión se sujeta a que se haya constituido o se constituya el interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales. En ese sentido, resultan inaplicables los requisitos previstos en las fracciones IV, V, VII y IX del propio artículo 28 y la Sala Regional carece de discrecionalidad para otorgarla; pero sí está facultada para reducir el importe de la garantía si el monto de los créditos excede la capacidad económica del actor y si se trata de tercero distinto al sujeto obligado directa o solidariamente al pago del crédito.

"Contradicción de tesis 489/2009.- Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.- 12 de mayo de 2010.- Cinco votos.- Ponente: Luis María Aguilar Morales.- Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán.

"Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de mayo del dos mil diez."

En ese sentido, me apartó de lo resuelto por la mayoría, toda vez que en el presente asunto, se resuelve confirmar la sentencia dictada por la Segunda Sala Regional Metropolitana el 19 de junio de 2009, a través de la cual se concede la suspensión definitiva del acto impugnado, no obstante como ya se adelantó, dejó de aplicarse la jurisprudencia 2a./J. 68/2010 en cuestión, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que además de ser de observancia obligatoria, el estudio de su aplicación es una cuestión de orden público, por encontrarnos en el caso de medidas cautelares cuya procedencia debe ser analizada antes de verificar los requisitos de eficacia, aspecto que la Sala de origen no tomó en cuenta y esta Primera Sección no puede dejar de ponderar.

Sobre el particular me permito destacar la existencia de la jurisprudencia y tesis del Poder Judicial de la Federación que enseguida invocaré, mismas que abonan en el sentido que deben verificarse los requisitos de procedencia y como consecuencia de esto es aplicable la referida jurisprudencia 68/2010, pues versa sobre un tema de orden público como es la procedencia de las medidas cautelares.

"No. Registro: 178,665
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXI, Abril de 2005
"Tesis: 1a./J. 25/2005
"Página: 576

"**PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL**

FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, **debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente**, **en cualquier momento de la contienda**, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente.

"Contradicción de tesis 135/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito y la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 9 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza."

"Tesis de jurisprudencia 25/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dos de marzo de dos mil cinco."

"No. Registro: 182,392
"Tesis aislada
"Materia(s): Civil, Común
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XIX, Enero de 2004
"Tesis: I.3o.C.445 C
"Página: 1539

"**INTERÉS JURÍDICO. PARA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA ES UN REQUISITO QUE DEBE ANALIZARSE DE OFICIO EN SEGUNDA INSTANCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO.-** En contra de las interlocutorias que niegan o conceden la suspensión definitiva procede el recurso de revisión según lo dispuesto por el artículo 83, fracción II, inciso a), en relación con el 85, fracción I, de la Ley de Amparo. El recurso es el instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función judicial; no es un medio de control constitucional autónomo, como sí lo es el juicio de garantías, sino tan sólo un medio de impugnación que es un remedio para el error judicial, que abre la segunda instancia y que, aun cuando tiene su origen en el juicio de amparo que versó sobre la violación a las garantías individuales, su objetivo no es en forma alguna proteger constitucionalmente a las partes de actos contrarios a la Carta Magna; de ahí que su propósito no es anular el fallo impugnado sino confirmarlo, revocarlo o modificarlo, a diferen-

cia del juicio de garantías, que persigue destruir al acto reclamado. Esas reglas son aplicables no sólo al juicio principal sino también a las resoluciones incidentales que deciden la procedencia del otorgamiento o negativa de la suspensión definitiva, porque los Tribunales Colegiados de Circuito, por medio del recurso de revisión, asumen la facultad de confirmación, modificación o revocación, al abrirse la segunda instancia dentro de la cual el tribunal de alzada con amplias facultades vuelve a examinar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta al emitir su resolución, y al analizar los agravios el tribunal ad quem se sustituye al Juez en el conocimiento de las cuestiones planteadas por las partes en el incidente de suspensión, y esta sustitución se da si éste dejó de analizar o analizó indebidamente la existencia de los actos reclamados o no valoró ni examinó debidamente la procedencia de la medida cautelar en el caso concreto. Además, si el tribunal ad quem puede analizar de oficio la procedencia del juicio de garantías por ser de orden público, igual razón existe para estudiar de oficio la procedencia de la suspensión, aunque la segunda instancia se haya abierto por el quejoso, atento el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, por lo que de oficio es posible analizar la procedencia de la suspensión definitiva, puesto que por encima del bienestar e interés particular se encuentra el interés público, que es inherente a la paz social y seguridad jurídica de la colectividad; por tanto, si el interés jurídico en la obtención de la suspensión es una cuestión de orden público y de estudio preferente, debe analizarse de oficio al igual que los demás requisitos que para la concesión de esa medida cautelar prevé el artículo 124 de la citada ley y determinar lo conducente.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo en revisión 277/2003. Estela Morfín Macías de Moctezuma. 29 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gabriel Montes Alcaraz. Secretario: Mario Rodríguez Ortiz."

MAG. JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES

SEXTA PARTE

ACUERDOS GENERALES

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/17/2010

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA N° VI-J-SS-66

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 18, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al haberse resuelto la contradicción de sentencias 23034/06-17-02-8/Y OTRO/2062/09-PL-04-01, el 16 de junio de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra, se fija la jurisprudencia N° VI-J-SS-66, bajo los siguientes rubro y texto:

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ES INCOMPETENTE PARA IMPONER SANCIONES.- Si bien el artículo 78 de la Ley General de Educación otorga a la "autoridad educativa responsable" la facultad de sancionar a los infractores de las normas legales aplicables, y del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, se desprende que la Dirección General de Operación de Servicios Educativos tiene facultades para imponer sanciones a las instituciones registradas o incorporadas por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, lo cierto es que el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, que nos ocupa, no resulta ser el instrumento idóneo para otorgar competencia a las unidades administrativas adscritas a la citada Administración Federal, en virtud de que no constituye un reglamento expedido por el Ejecutivo Federal en ejercicio de la facultad reglamentaria conferida por el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni un acuerdo delegatorio de facultades, consecuentemente, la citada Dirección General de Operación de Servicios Educativos resulta incompetente para imponer sanciones.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día dieciséis de junio de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/7/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Recursos de Reclamación, cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-36, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-36

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. TRATÁNDOSE DE LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN EN LA CAPTACIÓN DE RECURSOS DEL PÚBLICO EN GENERAL, IMPUESTA POR VIOLACIÓN A LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA.- En términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, podrá otorgarse la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo, siempre y cuando con dicho otorgamiento no se afecte al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; es por ello entonces que, tratándose de aquellas sanciones que sean impuestas a las Sociedades Cooperativas con apoyo en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de manera específica las de suspender la captación de recursos de sus socios o del público en general, no son susceptibles de ser suspendidas en cuanto a su ejecución, ya que no debe pasar inadvertido que la legislación que regula esas sociedades tiene como finalidad la de proteger y dar seguridad al destino de los recursos económicos obtenidos a partir del desprendimiento que hacen los particulares de una parte

de su patrimonio y su aportación a un fondo común, aspecto que evidentemente constituye una cuestión de interés general.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-136
Recurso de Reclamación 1778/07-17-10-4/1044/08-S2-08-05, interpuesto por Jorge Francisco Javier Solva Villalobos, representante legal de Caja Popular 9 de Agosto Salamanca S.C.L. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 18 de septiembre de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretaria: Licenciada Claudia Lucía Cervera Valeé. Precedente aprobado en la sesión privada ordinaria celebrada el jueves 2 de octubre de 2008 y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 14. Febrero 2009. Página 332.

VI-P-2aS-137
Recurso de Reclamación 31423/06-17-02-2/1128/07-S2-10-05, interpuesto por Esteban Luis Ramírez Bautista, representante legal de Sistema Corporativo 15 de Agosto, S.C. de R.L. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 30 de octubre de 2008, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, Secretaria: Licenciada Isabel Messmacher Linartas. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 14. Febrero 2009. Página 332.

VI-P-2aS-205
Recurso de Reclamación 31436/06-17-06-6/1537/08-S2-06-05, interpuesto por Graciela Anguiano Pérez, representante legal de Caja Popular 28 de Marzo, S.C. de R.L. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 10 de marzo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Alfredo Salgado Loyo, Secretario: Licenciado Pedro Martín Ibarra Aguilera. Prece-

dente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 17. Mayo 2009. Página 389.

VI-P-2aS-336
Recurso de Reclamación 1173/07-17-08-6/278/09-S2-10-05, interpuesto por Carlos Alberto Ávila Canela, representante legal de Cooperativa de Consumo Caja Popular Jiménez S.C.L. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 2 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, Secretaria: Licenciada Gabriela Badillo Barradas. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 23. Noviembre 2009. Página 131.

VI-P-2aS-396
Recurso de Reclamación 19281/07-17-04-4/1414/09-S2-07-05, interpuesto por Cruz Catalina Sánchez Gómez, representante legal de Caja Popular Metropolitana de Guadalajara, S.C. de R.L. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 15 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada María Elda Hernández Bautista. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 138.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes tres de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/8/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Recursos de Reclamación, cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-37, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-37

RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES OPORTUNO EL QUE SE DEPOSITA EN EL SERVICIO POSTAL MEXICANO PARA SU ENVÍO DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- El segundo párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que, cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse por el Servicio Postal Mexicano, mediante correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante. En los términos expuestos, es apegado a derecho y a la equidad considerar que, también existe a su favor la posibilidad de presentar por correo certificado todas las promociones o recursos que sean necesarios para ejercer plenamente su derecho. Por lo anterior, resulta procedente el envío del recurso de reclamación a través del Servicio Postal Mexicano mediante correo certificado con acuse de recibo, siempre que el promovente tenga su domicilio fiscal fuera de la sede de la Sala Regional, y que el depósito se realice dentro del plazo legal establecido.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

V-P-2aS-760
Recurso de Reclamación 3758/06-13-01-2/496/07-S2-07-05, interpuesto por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica, promovido por Antonio Caballero Fonseca. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 26 de junio de 2007, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Quinta Época. Año VII. Número 80. Agosto 2007. Página 98.

V-P-2aS-808
Recurso de Reclamación 6335/06-12-02-5/945/07-S2-07-05, interpuesto por Rubén Rugerio González. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 8 de noviembre de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Quinta Época. Año VII. Número 84. Diciembre 2007. Página 130.

VI-P-2aS-7
Recurso de Reclamación 487/07-03-01-3/781/07-S2-07-05, interpuesto por Esteban Laveaga Contreras. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 15 de enero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año I. Número 3. Marzo 2008. Página 95.

VI-P-2aS-176
Recurso de Reclamación 33237/06-17-09-2/1398/08-S2-07-05, interpuesto por el demandante Juan Carlos Moguel González. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 29 de enero de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 16. Abril 2009. Página 231.

VI-P-2aS-412
Recurso de Reclamación Núm. 5/09-19-01-3/1933/09-S2-07-05, interpuesto por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, promovido por Constructora Rubio Solís, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 27 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 203.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes tres de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/9/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Recursos de Reclamación, cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-38, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-38

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD Y NO AL PARTICULAR DEMOSTRAR LA INSUFICIENCIA DEL VALOR REAL DE LOS BIENES EMBARGADOS MEDIANTE EL AVALÚO CORRESPONDIENTE.- El artículo 175, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación dispone que, la base para enajenación de los bienes inmuebles embargados será el de avalúo y para negociaciones, el avalúo pericial, ambos conforme a las reglas que establezca el Reglamento del Código Fiscal de la Federación; que en los demás casos, dicha base será la que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado, en un plazo de seis días contados a partir de la fecha en que se hubiera practicado el embargo; que a falta de acuerdo, la autoridad practicará el avalúo pericial, y que, en todos los casos, la autoridad notificará personalmente al embargado el avalúo practicado. Por tal razón, si la autoridad considera que el embargo practicado en el procedimiento administrativo de ejecución no garantiza suficientemente el interés fiscal, corresponde a dicha autoridad y no al particular acreditar con el avalúo correspondiente que, el valor de los bienes embargados es insuficiente y por ello se requiere de una garantía adicional.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-286
Recurso de Reclamación 27017/07-17-02-9/172/09-S2-07-05, interpuesto por el Titular de la Administración Local Jurídica del Norte del Distrito Federal, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, promovido por Manuel González Peña. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 11 de junio de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 21. Septiembre 2009. Página 187.

VI-P-2aS-363
Recurso de Reclamación 28684/08-17-02-1/1272/09-S2-09-05, interpuesto por Jorge Joaquín Ignacio Serrano Limón. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 3 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Secretaria: Licenciada Karla Guadalupe Magallón Cuevas. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 23. Noviembre 2009. Página 217.

VI-P-2aS-422
Recurso de Reclamación 9238/06-11-03-4/123/09-S2-07-05, interpuesto por el Subadministrador de la Administración Local Jurídica de Naucalpan, en el Estado de México, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, promovido por Imprentor, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 1 de octubre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 26. Febrero 2010. Página 236.

VI-P-2aS-423
Recurso de Reclamación 10797/06-11-03-6/1988/09-S2-07-05, interpuesto por el Administrador Local Jurídico de Naucalpan, en el Estado de México, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, promovido por Imprentor, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 1 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 26. Febrero 2010. Página 236.

VI-P-2aS-424
Recurso de Reclamación 22384/08-17-02-7/420/09-S2-07-05, interpuesto por el Subgerente de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, promovido por Carlos Medina Partida. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 1 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 26. Febrero 2010. Página 236.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes tres de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/10/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Recursos de Reclamación, cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-39, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-39

GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL.- NO LA CONSTITUYE EL EMBARGO PRECAUTORIO DE MERCANCÍAS DE IMPORTACIÓN, PRACTICADO CONFORME AL ARTÍCULO 151 DE LA LEY ADUANERA.- El objeto del embargo precautorio establecido en el artículo 151 de la Ley Aduanera es impedir que se posean, transporten o manejen mercancías de importación o exportación prohibidas o aquellas respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país, o el debido cumplimiento de regulaciones o restricciones que para su tenencia, transporte o manejo exijan las disposiciones legales respectivas, es decir, a través de esta medida cautelar se embargan mercancías materia de infracción a las disposiciones legales aduaneras que, en algunos casos, pueden incluso pasar a ser propiedad del fisco federal. Por lo tanto, dicha medida no tiene por objeto asegurar el pago de las contribuciones al comercio exterior, sino primordialmente impedir que se continúe la transgresión a las disposiciones en materia aduanera protegiendo con ello el orden público y el interés social. En consecuencia el embargo precautorio que practiquen las autoridades con apoyo en la disposición citada no garantiza el inte-

rés fiscal y por ende, no puede dar lugar al otorgamiento de la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-13
Recurso de Reclamación 1029/07-14-01-5/1352/07-S2-10-05, interpuesto por el Administrador Local Jurídico de Acapulco, en el Estado de Guerrero, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, promovido por Silvia Reyes Ceballos. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 5 de febrero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, Secretaria: Licenciada Isabel Margarita Messmacher Linartas. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año I. Número 3. Marzo 2008. Página 126.

VI-P-2aS-14
Recurso de Reclamación 9054/06-11-02-2/1265/07-S2-07-05, interpuesto por Chung Kwan Lee, representante legal de la demandante Moduni, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 7 de febrero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada Adriana Domínguez Jiménez. Precedente aprobado en esa misma sesión de la Sexta Época. Año I. Número 3. Marzo 2008. Página 126.

VI-P-2aS-61
Recurso de Reclamación 2085/07-14-01-1/429/08-S2-07-05, interpuesto por el Administrador Local Jurídico de Acapulco, en el Estado de Guerrero, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, promovido Anel Reyes Rebolledo. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 6 de mayo de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado

José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año I. Número 7. Julio 2008. Página 164.

VI-P-2aS-167
Recurso de Reclamación 707/08-14-01-8/1807/08-S2-07-05, interpuesto por el Administrador Local Jurídico de Acapulco, en el Estado de Guerrero, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, promovido por Juan José Valle Romero. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 27 de enero de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada María Elda Hernández Bautista. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 15. Marzo 2009. Página 426.

VI-P-2aS-431
Recurso de Reclamación 17816/07-17-09-2/1902/08-S2-09-05, interpuesto por el Administrador Local Jurídico del Norte del Distrito Federal, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, promovido por Vivian Masri de Michan. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el viernes 27 de noviembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Secretaria: Licenciada Thelma Semíramis Calva García. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 26. Febrero 2010. Página 246.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes tres de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/11/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Recursos de Reclamación, cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-40, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-40

PRESUNCIÓN LEGAL DEL DOMICILIO FISCAL PARA FIJAR LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES.- LA AUTORIDAD DEMANDADA PUEDE DESVIRTUARLA MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN IDÓNEA COMO LO SERÍA EL REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE.- Conforme al artículo 34, último párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la omisión de especificar el domicilio fiscal por la actora, establece la presunción legal de que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal; sin embargo, tal presunción puede ser desvirtuada por la autoridad demandada con la exhibición de los documentos idóneos, como lo es la copia certificada del Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente emitido por la Administración Local de Recaudación correspondiente con fecha posterior a la presentación de la demanda, toda vez que dicha probanza resulta ser la idónea para acreditar de manera fehaciente el domicilio fiscal del contribuyente, al tratarse de un documento expedido por la autoridad fiscal; certificación que además se formula por autoridad competente para ello como lo es la Administración Local de Servicios

al Contribuyente, en términos de lo dispuesto en los artículos 16, primer párrafo y 14, fracción XII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, máxime si no lo desvirtúa el actor al correrse traslado con el incidente de incompetencia.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-271
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 5770/08-11-02-9/2030/08-S2-07-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Miguel Ángel Zepeda Lugo. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 28 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada Adriana Domínguez Jiménez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 21. Septiembre 2009. Página 160.

VI-P-2aS-311
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 19952/08-17-10-9/220/09-S2-08-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Clovar, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 28 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretario: Licenciado Juan Manuel Ángel Sánchez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 22. Octubre 2009. Página 172.

VI-P-2aS-359
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 2732/08-07-03-1/1472/08-S2-08-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Yazmín Rodríguez Aguilar. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 3 de septiembre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto más con los resolutivos. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretaria: Li-

cenciada Claudia Lucía Cervera Valeé. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 23. Noviembre 2009. Página 211.

VI-P-2aS-360

Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 21103/08-17-05-9/682/09-S2-09-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Servicios Opcionales de Antequera, S.C. de R.L. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 3 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Secretaria: Licenciada María Teresa Martínez García. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 23. Noviembre 2009. Página 211.

VI-P-2aS-421

Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 2066/09-11-03-3/1401/09-S2-08-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Unión Force, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 22 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretario: Licenciado Juan Manuel Ángel Sánchez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 26. Febrero 2010. Página 233.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el jueves cinco de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/12/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Incidentes de Incompetencia en Razón del Territorio, cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-41, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-41

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL.- CUANDO NO SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS EXCEPCIONES PREVISTAS, EN EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA VIGENTE, DEBERÁ ESTARSE A LA REGLA GENERAL CONTENIDA EN EL PROPIO ARTÍCULO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, primer párrafo, de la Ley Orgánica de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por regla general la competencia territorial de las Salas Regionales para conocer de un juicio contencioso administrativo se fija atendiendo al domicilio fiscal del demandante. El propio artículo 34, en sus fracciones I, II y III establece como excepción que, deberá atenderse a la sede de la autoridad demandada, tratándose de personas morales que formen parte del sistema financiero, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o tengan el carácter de controladoras o controladas, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, y determinen su resultado fiscal consolidado; que el demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país; y que se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes

Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por las unidades administrativas adscritas a dicha Administración General. Por lo anterior, cuando en el caso no se actualice alguno de los supuestos de excepción, debe estarse a la regla general establecida en el artículo 34, primer párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el cual se dispone que, las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-224
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 809/08-09-01-3/1149/08-S2-07-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 31 de marzo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 18. Junio 2009. Página 613.

VI-P-2aS-367
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 635/09-18-01-8/415/09-21-01-9/1977/09-S2-08-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Rafael Anaya Picena. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 10 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretario: Licenciado Juan Carlos Perea Rodríguez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 23. Noviembre 2009. Página 230.

VI-P-2aS-388
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 710/09-05-03-1/1677/09-06-01-1/2070/09-S2-08-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Servicios Inteligentes de Outsourcing S.C. de R.L. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 22 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente Magistrada: Olga Hernández Espíndola, Secretario: Licenciado Juan Carlos Perea Rodríguez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 113.

VI-P-2aS-389
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 1274/09-09-01-9/1060/09-10-01-4/2163/09-S2-08-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Carhartt de México, S, de R.L. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 22 septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretario: Licenciado Juan Carlos Perea Rodríguez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 113.

VI-P-2aS-390
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 2737/08-15-01-4/1343/09-S2-08-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Unillantas de Juchitan, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 15 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretario: Licenciado Juan Carlos Perea Rodríguez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 113.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el jueves

cinco de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/13/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Incidentes de Incompetencia en razón del Territorio, cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-42, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-42

COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES, SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LO PACTADO POR LAS PARTES EN UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente en enero de 2008, el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece su Ley Orgánica, entre las que se contemplan las dictadas sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, es decir lo que es materia de dicho juicio es la legalidad de la resolución administrativa combatida, y no así la validez o legalidad del contrato en cuestión. Por ende, si las partes que lo celebraron acuerdan someterse a Tribunales Federales con determinada jurisdicción, renunciando a la que les correspondería en razón de su domicilio que tengan al momento de contratar o uno futuro, para efecto de la interpretación, ejecución y cumplimiento del citado contrato, ello no signifi-

ca que tal acuerdo de voluntades determine la competencia territorial de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que ésta deriva de la Ley Orgánica mencionada, que fija las bases para determinar la competencia territorial de dichas Salas, sin que se contemple la posibilidad de renuncia a la jurisdicción que corresponda.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-71
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 1523/07-14-01-8/1109/07-S2-10-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Raúl Francisco Leyva Reyes, representante legal de Constructora Scorpio e Instalaciones Especializadas, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 29 de enero de 2008, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra. Ponente: Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, Secretaria: Licenciada Claudia Palacios Estrada. Precedente aprobado en la sesión privada ordinaria celebrada el martes 6 de mayo de 2008 y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año I. Número 9. Septiembre 2008. Página 306.

VI-P-2aS-143
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 2049/07-13-01-5/387/08-S2-06-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por CBC Edificaciones del Golfo S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 16 de octubre de 2008, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos. Ponente: Magistrado Luis Malpica y de Lamadrid, Secretario: Licenciado Pedro Martín Ibarra Aguilera. Precedente aprobado en la sesión privada ordinaria celebrada el jueves 16 de octubre de 2008 y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 14. Febrero 2009. Página 376.

VI-P-2aS-144
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 2889/07-13-01-9/411/08-S2-10-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Fibras y Re-

sinas del Istmo, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 16 de octubre de 2008, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos. Ponente: Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, Secretaria: Licenciada Claudia Palacios Estrada. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 14. Febrero 2009. Página 376.

VI-P-2aS-236

Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 4166/08-11-02-5/2200/08-S2-09-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Consejo de Seguridad Privada, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 7 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Secretaria: Licenciada María Teresa Martínez García. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 19. Julio 2009. Página 253.

VI-P-2aS-380

Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 1058/08-06-02-6/146/09-S2-10-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por International Building Systems de México, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 3 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, Secretaria: Licenciada Claudia Palacios Estrada. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 99.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el jueves cinco de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/14/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Incidentes de Incompetencia en Razón del Territorio cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-43, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-43

COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS SALAS REGIONALES.- CASO EN EL QUE SE INDICAN DOS DOMICILIOS EN LA DEMANDA.- Conforme al artículo 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal, en vigor a partir del 7 de diciembre de 2007, para determinar la Sala Regional que conocerá del juicio en razón del territorio, debe atenderse al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante o bien, su domicilio particular cuando no cuente con aquel, y se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal, salvo que la parte demandada demuestre lo contrario, de lo cual se deriva que para el caso en que la actora señale como suyos, en cualquier parte de la demanda, dos domicilios, y respecto de uno de ellos especifique que es para oír y recibir notificaciones, si ambos se encuentran comprendidos en diferentes jurisdicciones de las Salas Regionales, el domicilio que debe presumirse como el domicilio fiscal para efectos de determinar la competencia de la Sala Regional que conocerá del juicio por razón de territorio, es el diverso al señalado específicamente para oír y recibir notificaciones.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-332
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 21661/08-17-03-9/222/09-S2-09-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Adelina Salgado Salgado. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 14 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Secretaria: Licenciada María Delfina Moreno Flores. Precedente aprobado en la sesión privada ordinaria celebrada el jueves 2 de julio de 2009 y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 23. Noviembre 2009. Página 122.

VI-P-2aS-333
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 1576/08-10-01-5/4660/08-06-01-8/1073/09-S2-06-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Tostiricas Nieto, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 9 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Alfredo Salgado Loyo, Secretario: Licenciado Pedro Martín Ibarra Aguilera. Precedente aprobado en la sesión privada ordinaria celebrada el jueves 2 de julio de 2009 y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 23. Noviembre 2009. Página 122.

VI-P-2aS-334
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 635/09-18-01-8/415/09-21-01-9/1977/09-S2-08-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Rafael Ayala Picena. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 10 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretario: Licenciado Juan Carlos Perea Rodríguez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 23. Noviembre 2009. Página 122.

VI-P-2aS-371
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 287/09-11-03-1/3858/09-17-08-5/1470/09-S2-08-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Agustín Galindo Espinoza. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 30 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretaria: Licenciada Claudia Lucía Cervera Valeé. Precedente aprobado en la sesión privada ordinaria celebrada el jueves 29 de octubre de 2009 y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 48.

VI-P-2aS-506
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 1547/08-02-01-7/26382/09-17-10-3/125/10-S2-09-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Grupo Signac, S. de R.L. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 4 de marzo de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Secretario: Licenciado David Alejandro Alpide Tovar. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 29. Mayo 2010. Página 153.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes treinta y uno de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/15/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Incidentes de Incompetencia en Razón del Territorio cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-44, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-44

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL. LOS DOCUMENTOS CERTIFICADOS DE PANTALLA DEL SISTEMA DE CÓMPUTO DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, SON MEDIOS DE CONVICCIÓN PARA LOGRAR DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN LEGAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 34, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- Del referido precepto, en sus párrafos primero y último, se desprende que las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, debiendo presumirse que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal, salvo que la parte demandada demuestre lo contrario. En este sentido, si la autoridad para desvirtuar dicha presunción legal, ofrece como prueba un documento certificado de pantalla del sistema de cómputo del Registro Federal de Contribuyentes, denominado "REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE", tal documento, valorándose en términos de lo dispuesto por los artículos 46, fracción I y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencio-

so Administrativo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, logra desvirtuar la citada presunción legal, si del mismo se advierte que la demandante tenía manifestado el domicilio fiscal respectivo ante el Servicio de Administración Tributaria al momento de presentarse la demanda, que esa información consta en medios electrónicos y fue impresa para ofrecerse como medio de convicción en el juicio, estimándose fiable el método en que fue generada y archivada en razón de la certificación contenida en la copia exhibida, y que la información relativa es accesible para su ulterior consulta, al obrar en la base de datos de la referida dependencia.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-339

Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 30361/08-17-03-5/444/09-S2-06-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Casa del Sweter Fino S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 23 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Alfredo Salgado Loyo, Secretario: Licenciado Ernesto Christian Grandini Ochoa. Precedente aprobado en la sesión privada ordinaria celebrada el jueves 3 de septiembre de 2009 y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 23. Noviembre 2009. Página145.

VI-P-2aS-340

Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 2496/08-11-02-8/780/09-S2-06-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Ge Capital Cef de México, R.L. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 29 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Alfredo Salgado Loyo, Secretario: Licenciado Ernesto Christian Grandini Ochoa. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 23. Noviembre 2009. Página 145.

VI-P-2aS-391
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 851/09-12-01-7/1031/09-S2-07-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Fletes de Puebla, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 29 de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada Adriana Domínguez Jiménez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 116.

VI-P-2aS-392
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 31317/08-17-02-9/1787/09-S2-06-06, promovido por Catalina Colín Antonio. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 8 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Alfredo Salgado Loyo, Secretario: Licenciado Carlos Augusto Vidal Ramírez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 116.

VI-P-2aS-476
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 13117/09-17-04-8/2851/09-S2-06-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Ferretería Euzkadi S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 9 de febrero de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los resolutivos. Ponente: Magistrado Alfredo Salgado Loyo, Secretario: Licenciado Ernesto Christian Grandini Ochoa. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 28. Abril 2010. Página 117.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes treinta y uno de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, Magistrado Juan

Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/16/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Recursos de Reclamación cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-45, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-45

MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISIS DEL NEXO ENTRE LA MATERIA DEL JUICIO PRINCIPAL Y LA MEDIDA ESPECÍFICA SOLICITADA.- El artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que pueden decretarse las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor; por lo que siendo estos sus objetivos y finalidades resulta claro que tales medidas cautelares guardan una relación estrecha con la materia de la controversia principal de la cual constituyen una cuestión accesoria, por lo que al momento de examinar y resolver sobre su otorgamiento, debe analizarse el nexo entre la materia del juicio y la suspensión solicitada, en la medida en que su dictado sólo tiene sentido si contribuye a preservar esa materia para el efecto de que pueda ejecutarse la sentencia definitiva que llegue a dictarse; y en el supuesto de que no sea así, carece de sustento decretarlas, sin que baste el mero hecho de haber sido solicitadas y estar prevista legalmente la facultad jurisdiccional de concederlas.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-64
Recurso de Reclamación 38930/06-17-10-3/44/08-S2-09-05, en el juicio contencioso administrativo promovido por Sergio Luis Olivares Rodríguez, representante legal de LTS Lohmann Therapie Systeme GMBH. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 27 de marzo de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Luis Carballo Balvanera, Secretaria: Licenciada Mónica Guadalupe Osornio Salazar. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año I. Número 8. Agosto 2008. Página 152.

VI-P-2aS-347
Recurso de Reclamación 1941/08-18-01-4/723/09-S2-08-05, interpuesto por el Administrador Local Jurídico de Ciudad Victoria, en el Estado de Tamaulipas, en el juicio contencioso administrativo promovido por Oscar Ruvalcaba Maciel. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 11 de agosto de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretario: Licenciado Juan Carlos Perea Rodríguez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 23. Noviembre 2009. Página 192.

VI-P-2aS-348
Recurso de Reclamación 10883/08-17-09-1/817/09-S2-07-05, en el juicio contencioso administrativo promovido por Alfonso M. López Melih, representante legal de Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 11 de agosto de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada María Elda Hernández Bautista. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 23. Noviembre 2009. Página 192.

VI-P-2aS-400
Recurso de Reclamación 5183/07-17-03-8/670/09-S2-08-05, interpuesto por la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el juicio contencioso administrativo promovido Paquime Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 22 de octubre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretario: Licenciado Juan Carlos Perea Rodríguez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 157.

VI-P-2aS-456
Recurso de Reclamación 24662/06-17-02-6/1406/07-S2-08-05, en el juicio contencioso administrativo interpuesto por Yuriko Arita Tapia, representante legal de la tercero interesada Arni, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 28 de enero de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretaria: Licenciada Claudia Lucía Cervera Valeé. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 27. Marzo 2010. Página 358.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes treinta y uno de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/17/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Recursos de Reclamación cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-46, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-46

VIOLACIÓN PROCESAL EN LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE PETICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. CASO EN QUE LA OMISIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR DE REQUERIR UN INFORME A LA AUTORIDAD A QUIEN SE IMPUTE EL ACTO ADMINISTRATIVO, ES INSUFICIENTE PARA REVOCAR LA SENTENCIA COMBATIDA VÍA RECURSO DE RECLAMACIÓN.- En términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción VIII de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la suspensión solicitada por la parte actora se tramitará por cuerda separada y con arreglo a las disposiciones del Capítulo III de la propia ley, relativo a las Medidas Cautelares y en el cual se encuentra inserto el artículo 25, cuyo primer párrafo establece que en auto admisorio del incidente, el Magistrado Instructor ordenará correr traslado a quien se impute el acto administrativo, para que rinda un informe en el plazo de tres días, transcurrido el cual con informe o sin él, la Sala Regional deberá dictar la resolución definitiva dentro del plazo de cinco días. En esa virtud, si se dicta la resolución sin requerirse a la autoridad para que rinda su informe relativo, ello constituye una violación procesal, sin embargo, por sí sola, no es suficiente

para revocar la sentencia interlocutoria combatida vía recurso de reclamación, si el único efecto de tal determinación sería que se repusiera el procedimiento para que la Sala Regional considerara el informe que, en su caso, hubiera rendido la autoridad, toda vez que las Secciones de la Sala Superior pueden resolver tanto los planteamientos en él contenidos, así como los vertidos en el recurso y, según proceda, confirmar o revocar la interlocutoria cuestionada por algún aspecto sustantivo propio de la medida cautelar que se hubiere otorgado.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-387
Recurso de Reclamación 33216/07-17-02-1/1089/09-S2-06-05, interpuesto por el Administrador Local Jurídico del Sur del Distrito Federal, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el juicio contencioso administrativo promovido IMT DE México, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 22 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 108.

VI-P-2aS-425
Recurso de Reclamación 22384/08-17-02-7/420/09-S2-07-05, interpuesto por el Subgerente de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el juicio contencioso administrativo promovido por Carlos Medina Partida. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 1° de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 26. Febrero 2010. Página 239.

VI-P-2aS-426
Recurso de Reclamación 31868/08-17-08-1/2209/09-S2-06-05, interpuesto por el Subgerente de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el juicio contencioso administrativo promovido Consultoría Especializada de Servicios, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 20 de octubre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrado Alfredo Salgado Loyo, Secretario: Licenciado Ernesto Christian Grandini Ochoa. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 26. Febrero 2010. Página 240.

VI-P-2aS-427
Recurso de Reclamación 34337/08-17-02-7/2587/09-S2-06-05, interpuesto por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno del Control en la Comisión para Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), en el juicio contencioso administrativo promovido José David Castro Ramírez. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 19 de noviembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrado Alfredo Salgado Loyo, Secretario: Licenciado Carlos Augusto Vidal Ramírez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 26. Febrero 2010. Página 240.

VI-P-2aS-446
Recurso de Reclamación 23053/08-17-10-7/2022/09-S2-09-05, interpuesto por el Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el juicio contencioso administrativo promovido Soluciones y Administración de Recursos, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 24 de noviembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Secretaria: Licenciada Thelma Semíramis Calva García. Precedente aprobado en esa misma sesión y

publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 27. Marzo 2010. Página 340.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes treinta y uno de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/18/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Recursos de Reclamación cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-47, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-47

SUSPENSIÓN EN MATERIA DE REGISTRO MARCARIO.- NO PROCEDE SOBRE RESERVA DE DERECHOS DE PRELACIÓN.- Cuando el demandante en el juicio contencioso administrativo solicita la medida cautelar con el propósito de que la fecha de presentación de su solicitud de registro marcario, que fue negada en la resolución impugnada, sea citada y oponible como anterioridad a las solicitudes de registros de terceros en términos del artículo 121 de la Ley de Propiedad Industrial, no procede otorgarla en virtud de que implicaría que fuese declarada la restitución de un derecho preexistente a la emisión del acto materia del juicio, atento a que la suspensión no tiene otro efecto que el de mantener la situación de hecho existente antes de la interposición de la demanda ante el Tribunal.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-213
Recurso de Reclamación 4015/06-17-03-3/1824/08-S2-08-05, en el juicio contencioso administrativo promovido Manuel Martín Soto Gutiérrez, represen-

tante legal de Sherwood Ag. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada martes 27 de enero de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretario: Licenciado Juan Carlos Perea Rodríguez. Precedente aprobado en la sesión privada ordinaria celebrada el jueves 19 de mazo de 2009 y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 18. Junio 2009. Página 472.

VI-P-2aS-255

Recurso de Reclamación 37717/06-17-07-5/2176/08-S2-10-05, en el juicio contencioso administrativo promovido Manuel Martín Soto Gutiérrez, representante legal de The North Face Apparel Corp. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada jueves 23 de abril de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra. Ponente: Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, Secretaria: Licenciada Gabriela Badillo Barradas. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 21. Septiembre 2009. Página 113.

VI-P-2aS-312

Recurso de Reclamación 29048/06-17-06-7/1933/09-S2-09-09-05(actual 323/08-EPI-01-4), en el juicio contencioso administrativo promovido Manuel Martín Soto Gutiérrez, representante legal de Astrazeneca AB. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada martes 2 de junio de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto más con los resolutivos. Ponente: Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Secretaria: Licenciada Karla Guadalupe Magallón Cuevas. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 22. Octubre 2009. Página 174.

VI-P-2aS-342

Recurso de Reclamación 1126/08-EPI-01-5/668/09-S2-07-05, en el juicio contencioso administrativo promovido Consuelo González Rodríguez, representante legal de Koninklijke Philips Electronics N.V. Resuelto en la sesión pública

ordinaria celebrada el jueves 2 de julio de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada Adriana Domínguez Jiménez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 23. Noviembre 2009. Página 152.

VI-P-2aS-459

Recurso de Reclamación 1350/08-EPI-01-9/994/09-S2-07-05, en el juicio contencioso administrativo promovido Saúl Santoyo Orozco, representante legal de Pepsico, Inc. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada jueves 28 de enero de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada Adriana Domínguez Jiménez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 27. Marzo 2010. Página 364.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes treinta y uno de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/19/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Recursos de Reclamación cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-48, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-48

SUSPENSIÓN CONTRA EL CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE NEGARSE, CUANDO ÉSTE SE DECRETE POR EL USO A TRAVÉS DE INSTALACIONES QUE ALTEREN O IMPIDAN EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL O DE MEDIDA.- Los artículos 1°, 2°, 7°, 8°, y 21 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, establecen que es una actividad exclusiva del Estado generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica; que todos los actos relacionados con el servicio público de energía eléctrica son de orden público y que la prestación de tal servicio público se realiza a través de la Comisión Federal de Electricidad, quien deberá mantener sus instalaciones en forma adecuada, para la prestación del servicio en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad. A su vez, el artículo 26, fracción II de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en relación con el artículo 35, fracción II de su Reglamento, prevén la procedencia del corte de suministro de energía eléctrica, cuando su uso se efectúe a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida. Por lo anterior, si el corte del suministro de energía eléctrica

ordenado en la resolución impugnada tiene sustento en la alteración de las instalaciones de los instrumentos de medida de dicho servicio, a que se refieren los artículos 26, fracción II y 35, fracción II aludidos, con arreglo a lo dispuesto por el diverso 29, fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe negarse la suspensión solicitada, pues de lo contrario se causaría perjuicio al interés social, ya que la sociedad está interesada en que el servicio público de energía eléctrica, cuyos ingresos constituyen parte de la riqueza nacional, se preste por el Estado con estricto apego a las normas técnicas y de seguridad que lo regulan; además, se contravendrían disposiciones de orden público, como son las relacionadas con el servicio de energía eléctrica.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-225
Recurso de Reclamación 2003/08-03-01-8/2144/08-S2-07-05, en el juicio contencioso administrativo promovido José Luis Delgado Vega, autorizado de Roberto Ortiz Jiménez. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada martes 14 de abril de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 18. Junio 2009. Página 618.

VI-P-2aS-260
Recurso de Reclamación 1651/08-06-01-9/518/09-S2-08-05, en el juicio contencioso administrativo promovido Jesús Landa Olivares. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada jueves 21 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretaria: Licenciada Claudia Lucía Cervera Valeé. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 21. Septiembre 2009. Página 142.

VI-P-2aS-261
Recurso de Reclamación 2667/08-03-01-3/825/09-S2-06-05, en el juicio contencioso administrativo promovido José Manuel Arredondo Lara, representante legal de Nieves Rivera Aguirre. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada jueves 11 de junio de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrado Alfredo Salgado Loyo, Secretario: Licenciado Carlos Augusto Vidal Ramírez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 21. Septiembre 2009. Página 142.

VI-P-2aS-324
Recurso de Reclamación 1318/08-19-01-2/402/09-S2-10-05, en el juicio contencioso administrativo promovido Víctor Manuel Mendoza De la Cruz. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada martes 11 de agosto de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, Secretario: Licenciado Luis Edwin Molinar Rohana. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 22. Octubre 2009. Página 198.

VI-P-2aS-483
Recurso de Reclamación 1730/09-03-01-8/2961/09-S2-07-05, en el juicio contencioso administrativo promovido José Manuel Arredondo Lara, autorizado de José Arreola Morales. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada martes 16 de febrero de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretaria: Licenciada María Elda Hernández Bautista. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 28. Abril 2010. Página 130.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes treinta y uno de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, indicar nombre del

Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/20/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Recursos de Reclamación cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-49, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-49

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.- ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO EXENTO DE LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL.- Si en el juicio contencioso administrativo promovido por el organismo público descentralizado PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN en contra de la determinación de un crédito fiscal, se solicita la suspensión de su ejecución, la Sala del conocimiento debe conceder la medida cautelar sin exigir a la actora la presentación de garantía del interés fiscal; sin perjuicio de lo previsto en los artículos 141, 142 y 144 del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior, por virtud de que la empresa actora es un organismo descentralizado de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de acuerdo al artículo 3° de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; que en términos del artículo 14 del propio ordenamiento, queda exceptuado de otorgar la garantía que los ordenamientos legales le exijan, aun en los casos de controversias judiciales.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-369
Recurso de Reclamación 26187/08-17-09-3/752/09-S2-10-05, interpuesto por el Director General de Delitos Federales contra el Medio Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el juicio contencioso administrativo promovido por Pemex Exploración y Producción. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 18 de junio de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, Secretaria: Licenciada Gabriela Badillo Barradas. Precedente aprobado en la sesión privada ordinaria celebrada el jueves 3 de septiembre de 2009, y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 43.

VI-P-2aS-370
Recurso de Reclamación 26691/08-17-02-3/1780/09-S2-09-05, interpuesto por el Director General de Delitos Federales contra el Medio Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el juicio contencioso administrativo promovido por Pemex Exploración y Producción. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 6 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Secretaria: Licenciada Thelma Semíramis Calva García. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 43.

VI-P-2aS-428
Recurso de Reclamación 26683/08-17-09-9/1111/09-S2-09-05, interpuesto por la Directora General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el juicio contencioso administrativo promovido por Pemex Exploración y Producción. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 10 de noviembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Juan Manuel Jiménez

Illescas, Secretaria: Licenciada Karla Guadalupe Magallón Cuevas. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 26. Febrero 2010. Página 242.

VI-P-2aS-429
Recurso de Reclamación 26687/08-17-09-3/1378/09-S2-08-05, interpuesto por la Directora General de Delitos Federales Contra el Ambiente y Litigio, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el juicio contencioso administrativo promovido por Pemex Exploración y Producción. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 10 de noviembre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretario: Licenciado Juan Manuel Ángel Sánchez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 26. Febrero 2010. Página 242.

VI-P-2aS-469
Recurso de Reclamación 4282/08-17-03-7/384/09-S2-08-05, interpuesto por la Directora General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el juicio contencioso administrativo promovido por Pemex Exploración y Producción. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 21 de enero de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretaria: Licenciada Claudia Lucía Cervera Valeé. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 28. Abril 2010. Página 99.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes treinta y uno de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/21/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Recursos de Reclamación cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-50, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-50

SUSPENSIÓN. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, TRATÁNDOSE DE INFRACCIONES GRAVES O CASOS DE REINCIDENCIA.- En el caso de que se solicite la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada consistente en la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el sector público, a partir de un año, y en tal resolución se precisa que el servidor público es reincidente, para la determinación de la procedencia o no de la concesión de la medida suspensiva, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el cual señala en su último párrafo, que no procederá la suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando se trate de infracciones graves o casos de reincidencia, por lo que de otorgarse la suspensión solicitada, en estos dos supuestos, se contravendrían disposiciones de orden público, ante la prohibición expresa de la norma legal aplicable al caso concreto; esto es, si se surte la hipótesis legal, se tiene que aplicar la consecuencia jurídica ahí prevista, que en el caso es, que no se

otorgue la suspensión de la ejecución de la resolución que impone una sanción, cuando se trate de infracciones graves o sea reincidente el servidor público; de ahí que al configurarse esta última hipótesis, el actor tiene la carga probatoria para desvirtuar la afirmación de la autoridad de que es reincidente. De acuerdo con lo anterior, si el actor es reincidente en la imposición de una infracción administrativa, es evidente que debe negarse la medida cautelar solicitada.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-108
Recurso de Reclamación 29337/06-17-07-4/212/08-S2-09-05, en el juicio contencioso administrativo promovido por Alejandro Mañon. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 1º de julio de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Luis Carballo Balvanera. Ponencia asumida por el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Secretaria: Licenciada Mónica Guadalupe Osornio Salazar. Precedente aprobado en la sesión privada ordinaria celebrada el martes 12 de agosto de 2008 y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año I. Número 11. Noviembre 2008. Página 548.

VI-P-2aS-374
Recurso de Reclamación 2778/08-06-02-6/935/09-S2-08-05, en el juicio contencioso administrativo promovido por Martín Jaime Pacheco Mendoza. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 11 de agosto de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretario: Licenciado Juan Carlos Perea Rodríguez. Precedente aprobado en sesión privada ordinaria celebrada el jueves 24 de septiembre de 2009 y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 77.

VI-P-2aS-375
Recurso de Reclamación 2510/08-13-02-8/1531/09-S2-07-05, en el juicio contencioso administrativo promovido por Carlos Roberto Jacobo Ramírez. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 1º de septiembre de 2009, por mayoría de 4 votos a favor y un voto en contra. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 77.

VI-P-2aS-376
Recurso de Reclamación 26265/06-17-04-6/2100/08-S2-08-05, interpuesto por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, en el juicio contencioso administrativo promovido por Carlos Gerardo Mariño Díaz. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 10 de septiembre de 2009, por unanimidad de 4 votos. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretaria: Licenciada Claudia Lucía Cervera Valeé. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 77.

VI-P-2aS-499
Recurso de Reclamación 22808/08-17-11-7/1013/09-S2-10-05, en el juicio contencioso administrativo promovido por Juan Pablo Muñoz Morales. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 21 de enero de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, Secretaria: Licenciada Claudia Palacios Estrada, Encargado del engrose: Magistrado Luis Carballo Balvanera. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 29. Mayo 2010. Página 127.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes

treinta y uno de agosto de dos mil diez.- Firman para constancia, Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/22/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Recursos de Reclamación cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-51, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-51

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.- CASO EN QUE SURTE TODOS SUS EFECTOS, SI EL INTERESADO ACREDITA HABER MANIFESTADO GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA Y ÉSTA NO CALIFICA SU PROCEDENCIA.- Los artículos 141 y 142, fracción I, del Código Fiscal de la Federación posibilitan a los causantes de un crédito fiscal, acudir ante la autoridad exactora a solicitar la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, siempre y cuando garanticen el interés fiscal mediante alguna de las formas establecidas en el primero de los mencionados preceptos, y cumplan los requisitos que para cada una de esas formas establece el reglamento de dicho código. El artículo 68 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación establece que ante el ofrecimiento de la garantía del interés fiscal, cualquiera que fuese su naturaleza, la autoridad fiscal debe calificarla, en su caso aceptarla, y tramitarla. Ahora bien, si en el juicio contencioso administrativo el interesado en obtener la medida cautelar suspensiva a que se refiere el artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, acredita que ofreció la garantía del interés fiscal ante la autoridad competente en

los términos ordenados por el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, sin que la citada autoridad acredite haber dado cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 68 antes referido, la suspensión de la ejecución del acto impugnado surte todos sus efectos desde que el fallo que la concede es notificado a las partes. De pretender lo contrario se limitaría la efectividad de la medida cautelar suspensiva, atendiendo a causas que no resultan imputables al solicitante y sobre las cuales no tiene control alguno.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-287
Recurso de Reclamación 17477/08-17-09-4/451/09-S2-08-05, interpuesto por Armando Aguirre Luna, autorizado de Repeticiones Gráficas, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 11 de junio de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretario: Licenciado Juan Manuel Ángel Sánchez. Precedente aprobado en la sesión privada ordinaria celebrada el martes 30 de junio de 2009, y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 21. Septiembre 2009. Página 191.

VI-P-2aS-368
Recurso de Reclamación 29591/07-17-10-4/2126/09-S2-07-05, interpuesto por Gustavo Casa Anaya, autorizado de Peregrino & Aguilar, S.C. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 15 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 24. Diciembre 2009. Página 209.

VI-P-2aS-433
Recurso de Reclamación 1446/08-17-09-6/891/09-S2-09-05, interpuesto por José Francisco Pria Fernández, representante legal de Maajik, S.A. de C.V.

Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el viernes 27 de noviembre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Secretaria: Licenciada Thelma Semíramis Calva García. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 26. Febrero 2010. Página 251.

VI-P-2aS-454

Recurso de Reclamación 13802/08-17-04-9/2816/09-S2-09-05, interpuesto por Moisés Bialostocky Ainbinder, representante legal de Fábrica de Artículos Metálicos, S.A. de C.V. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 19 de enero de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra. Ponente: Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Secretario: Licenciado David Alejandro Alpide Tovar. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 27. Marzo 2010. Página 354.

VI-P-2aS-521

Recurso de Reclamación 36139/07-17-11-9/1773/09-S2-06-05 interpuesto por Luis Miguel Aguijosa Cortés. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 8 de abril de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto más con los puntos resolutivos. Ponente: Magistrado Alfredo Salgado Loyo, Secretario: Licenciado Carlos Augusto Vidal Ramírez. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 30. Junio 2010. Página 183.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el jueves nueve de septiembre de dos mil diez.- Firman para constancia, Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SALA SUPERIOR
SEGUNDA SECCIÓN
ACUERDO G/S2/23/2010

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, segundo párrafo, y 76, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y 18, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al haberse aprobado en los correspondientes Incidentes de Incompetencia en Razón del Territorio cinco precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario, se fija la Jurisprudencia VI-J-2aS-51, correspondiente a la Sexta Época, cuyo tenor es el siguiente:

JURISPRUDENCIA VI-J-2aS-52

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA. EL DOMICILIO CONTENIDO EN LA CREDENCIAL EMITIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, NO DESVIRTÚA LA PRESUNCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- El primer párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal dispone que, las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante. A su vez, el último párrafo del propio artículo 34 dispone que, se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal salvo que la parte demandada demuestre lo contrario. En esos términos, no es ajustado a derecho que, las Salas Regionales se declaren incompetentes para conocer del juicio considerando para ello que, del contenido de la credencial para votar se desprende el domicilio fiscal del demandante, ya que este documento se expide por el Instituto Federal Electoral para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, de conformidad con los artículos 176 y 180 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se emite conforme al domicilio señalado

por los ciudadanos, mientras que, el domicilio fiscal de las personas físicas se determina en el artículo 10, fracción I del Código Fiscal de la Federación en los siguientes términos: a) si la persona física realiza actividades empresariales, se considera domicilio fiscal el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios; b) cuando la persona física no realice actividades empresariales, se considera domicilio fiscal el local utilizado para el desempeño de sus actividades; c) por último, en los casos en que la persona física realice las actividades anteriores sin contar con un local, se considera que su domicilio fiscal se localiza en su casa habitación. Por tanto, ante la omisión del demandante de precisar en la demanda su domicilio fiscal, debe considerarse el domicilio señalado en la demanda para efectos de determinar la competencia de la Sala que debe conocer del juicio, conforme a la presunción iuris tantum establecida en el último párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal Federal.

PRECEDENTES PUBLICADOS:

VI-P-2aS-266
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 24906/08-17-09-3/257/09-08-01-7/834/09-S2-07-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Antonio Campos Salas y Otros. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el martes 26 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 21. Septiembre 2009. Página 149.

VI-P-2aS-304
Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 20136/08-17-06-7/8445/08-11-02-7/2134/08-S2-08-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Heriberto Carrasco González. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 26 de marzo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretaria: Licenciada Claudia

Lucía Cervera Valeé. Precedente aprobado en la sesión privada ordinaria celebrada el jueves 4 de junio de 2009 y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 22. Octubre 2009. Página 161.

VI-P-2aS-305

Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 3359/08-01-01-4/417/09-02-01-9/1417/09-S2-07-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Arturo Chavarría Mendivíl. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 6 de agosto de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año II. Número 22. Octubre 2009. Página 161.

VI-P-2aS-404

Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 15282/09-17-10-3/2391/09-S2-08-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Francisca Lina Suárez Pérez. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 22 de octubre de 2009, por unanimidad de 4 votos a favor. Ponente: Magistrada Olga Hernández Espíndola, Secretaria: Licenciada Claudia Lucía Cervera Valeé. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 164.

VI-P-2aS-405

Incidente de Incompetencia en Razón del Territorio 42/09-17-04-5/1471/09-13-02-4/2250/09-S2-07-06, en el juicio contencioso administrativo promovido por Ramón Juárez Sánchez y Estanislao Vargas Perales. Resuelto en la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 29 de octubre de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor. Ponente: Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, Secretario: Licenciado José de Jesús González López. Precedente aprobado en esa misma sesión y publicado en la Revista de este Tribunal de la Sexta Época. Año III. Número 25. Enero 2010. Página 164.

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes catorce de septiembre de dos mil diez.- Firman para constancia, Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

SÉPTIMA PARTE

ÍNDICES GENERALES

ÍNDICE ALFABÉTICO DE JURISPRUDENCIAS DE SALA SUPERIOR

COMPETENCIA territorial de las Salas Regionales.- Caso en el que se indican dos domicilios en la demanda. VI-J-2aS-43 36

COMPETENCIA territorial de las Salas Regionales, se rige por las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, independientemente de lo pactado por las partes en un contrato de obra pública. VI-J-2aS-42 33

DIRECCIÓN General de Operación de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación Pública, es incompetente para imponer sanciones. VI-J-SS-66 7

GARANTÍA del interés fiscal.- No la constituye el embargo precautorio de mercancías de importación, practicado conforme al artículo 151 de la Ley Aduanera. VI-J-2aS-39 24

INCIDENTE de incompetencia. El domicilio contenido en la credencial emitida por el Instituto Federal Electoral, no desvirtúa la presunción a que se refiere el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. VI-J-2aS-52 63

INCIDENTE de incompetencia territorial.- Cuando no se actualice alguna de las excepciones previstas, en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente, deberá estarse a la regla general contenida en el propio artículo. VI-J-2aS-41 30

INCIDENTE de incompetencia territorial. Los documentos certificados de pantalla del sistema de cómputo del Registro Federal de Contribuyentes, son medios de convicción para lograr desvirtuar la presunción legal establecida en

el artículo 34, último párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.VI-J-2aS-44 39

MEDIDAS cautelares. Análisis del nexo entre la materia del juicio principal y la medida específica solicitada. VI-J-2aS-45 42

PEMEX Exploración y Producción.- Es un organismo público descentralizado exento de la obligación de garantizar el interés fiscal. VI-J-2aS-49 54

PRESUNCIÓN legal del domicilio fiscal para fijar la competencia territorial de las Salas Regionales.- La autoridad demandada puede desvirtuarla mediante la documentación idónea como lo sería el Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente. VI-J-2aS-40 27

RECURSO de reclamación. Es oportuno el que se deposita en el Servicio Postal Mexicano para su envío dentro del plazo de cinco días a que se refiere el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. VI-J-2aS-37 18

SUSPENSIÓN contra el corte de suministro de energía eléctrica. Debe negarse, cuando éste se decrete por el uso a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida. VI-J-2aS-48 51

SUSPENSIÓN de la ejecución de la resolución impugnada. Tratándose de la sanción de suspensión en la captación de recursos del público en general, impuesta por violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, es improcedente concederla. VI-J-2aS-36 15

SUSPENSIÓN de la ejecución del acto impugnado.- Caso en que surte todos sus efectos, si el interesado acredita haber manifestado garantizar el interés

fiscal ante la autoridad exactora y ésta no califica su procedencia. VI-J-2aS-51 60

SUSPENSIÓN de la ejecución del acto impugnado. Corresponde a la autoridad y no al particular demostrar la insuficiencia del valor real de los bienes embargados mediante el avalúo correspondiente. VI-J-2aS-38 21

SUSPENSIÓN en materia de registro marcario.- No procede sobre reserva de derechos de prelación. VI-J-2aS-47 48

SUSPENSIÓN. No procede otorgarla respecto de responsabilidades de los servidores públicos, tratándose de infracciones graves o casos de reincidencia. VI-J-2aS-50 57

VIOLACIÓN procesal en la tramitación del incidente de petición de medidas cautelares. Caso en que la omisión del magistrado instructor de requerir un informe a la autoridad a quien se impute el acto administrativo, es insuficiente para revocar la sentencia combatida vía recurso de reclamación. VI-J-2aS-46 45

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRECEDENTES DE SALA SUPERIOR

ADMINISTRACIÓN Central de Auditoría Fiscal Internacional de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, cuenta con facultades para llevar a cabo el procedimiento de verificación de origen de los bienes importados a territorio nacional. VI-P-SS-335 112

AGENTE aduanal.- El alcance de su responsabilidad solidaria. VI-P-SS-383 373

AGRAVIOS inoperantes.- Tienen esta naturaleza aquellos que no se refieren a los razonamientos fundamentales de la resolución impugnada. VI-P-SS-363 283

ARTÍCULO 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, su texto original publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, no derogó tácitamente los artículos 3, fracción III y 4 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. VI-P-SS-336 117

BENEFICIOS previstos en los Tratados para Evitar la Doble Tributación suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. Su invocación no implica la interpretación o aplicación de la Constitución Federal por parte de las autoridades fiscales. VI-P-SS-381 363

CARGA de la prueba.- La tiene el titular del registro marcario para acreditar la fecha de primer uso asentada en la solicitud de registro. VI-P-SS-346 196

CASO en el que no se configura el reinicio de la ejecución. VI-P-1aS-366 .. 378

CIRCULAR *CONSAR 28-16* de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. La imagen del árbol con la leyenda "*en tu afore siembra y cosecha*", así como el ícono "*www.e-sar.com.mx*", no corresponden a ninguno de los elementos que deben contener los formatos de solicitud de registro y constancia de registro para el traspaso de cuentas individuales de los trabajadores. VI-P-SS-338 127

CIRCULAR *CONSAR 28-16* de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Tiene el carácter de norma autoaplicativa, toda vez que su cumplimiento es obligatorio a partir de su publicación, sin encontrarse condicionado a la emisión de un acto concreto de la Comisión. VI-P-SS-339 128

CIRCULARES de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Por tratarse de actos administrativos diversos a los reglamentos, son impugnables a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. VI-P-SS-340 129

CLASIFICACIÓN arancelaria inexacta de mercancía importada bajo el trato arancelario preferencial de un tratado de libre comercio.- Corresponde al agente aduanal o al importador desvirtuar dicha inexactitud con las pruebas idóneas correspondientes. VI-P-SS-357 268

COMPETENCIA del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Se surte cuando en la demanda se invoca la violación a disposiciones contenidas en una regla de carácter general para la aplicación de diversas disposiciones de los tratados en materia comercial. VI-P-SS-382 371

COMPETENCIA reservada del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Supuesto en el que no se actualiza. VI-P-SS-354 248

COMPETENCIA territorial de las Salas Regionales.- No basta que la autoridad incidentista, bajo protesta de decir verdad, cuestione el domicilio fiscal del demandante, sino que debe acreditarlo fehacientemente. VI-P-2aS-605 .. 408

COMPETENCIA territorial de las Salas Regionales.- No puede considerarse domicilio fiscal para ese efecto aquél que se contiene en el acta de visita de inspección en materia ambiental por no ser el documento idóneo. VI-P-2aS-604 406

CONSULTAS fiscales.- Es improcedente el juicio contencioso administrativo intentado en contra de las resoluciones recaídas a éstas. VI-P-SS-366 301

CONTRADICCIÓN de sentencias.- No se produce cuando uno de los criterios se emitió en cumplimiento de ejecutoria. VI-P-SS-370 333

DECRETO por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales publicado el 27 de

febrero de 2003.- Es improcedente su impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. VI-P-SS-368 322

DENOMINACIÓN descriptiva no registrable como marca.- Caso en el que no está formada de palabras que sirven en el comercio para designar el destino de los productos que pretenden protegerse. VI-P-SS-364 285

DERECHO de prioridad contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial.- Sólo se actualiza cuando se trata de solicitudes de registro de una misma marca. VI-P-SS-333 83

ERRORES mecanográficos de poca importancia. Deben ser corregidos por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aplicando analógicamente el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. VI-P-SS-332 79

FACULTAD de interpretar una ley, reglamento o disposición administrativa de carácter general, hasta fijar jurisprudencia. VI-P-SS-337 118

IMPORTACIÓN temporal de bienes realizada por residentes en el extranjero. VI-P-SS-356 263

INCIDENTE de incompetencia por razón de territorio.- Supuesto en que es improcedente el promovido por el actor. VI-P-2aS-600 398

INCIDENTE de incompetencia por razón del territorio planteado por el Jefe de la Unidad Jurídica Delegacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Es infundado si lo sustenta en el hecho de que al ser otra autoridad la facultada para resolver la solicitud planteada por el actor debe atenderse a la sede de aquélla. VI-P-1aS-365 375

INCIDENTE de nulidad de notificación de una sentencia. Caso en el que para su resolución le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de presentación de la demanda. VI-P-2aS-609 430

INSTITUCIONES afianzadoras. Para determinar la competencia territorial de las Salas Regionales, debe estarse al supuesto de excepción previsto por la fracción I, inciso a) del artículo 34 de la Ley Orgánica de este Tribunal en vigor. VI-P-2aS-602 401

INSTITUCIONES de crédito.- Para determinar la competencia territorial de las Salas Regionales debe estarse a lo dispuesto por la fracción I, apartado A, del artículo 34 de la Ley Orgánica que rige la actuación de este Tribunal. VI-P-2aS-608 424

INSTITUCIONES de fianzas.- Al formar parte del Sistema Financiero Mexicano, se ubican en el supuesto de excepción previsto por el artículo 34, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. VI-P-2aS-603 403

INSTITUCIONES de seguros.- Para determinar la competencia territorial de las Salas Regionales, debe estarse a lo dispuesto por la fracción I, inciso a) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal en vigor. VI-P-2aS-610 432

INSTITUTO Mexicano del Seguro Social. Está exento de otorgar garantía para obtener la medida cautelar de suspensión de la ejecución solicitada en juicio. VI-P-2aS-597 386

JUICIO de nulidad con características especiales.- Competencia de la Sala Superior para revisar de oficio las violaciones substanciales al procedimiento. VI-P-SS-359 279

LEGALIDAD. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer de violaciones a dicho principio respecto de actos administrativos de carácter general, limitado el análisis a la competencia del emisor de dichos actos, no así respecto de infracciones constitucionales.
VI-P-SS-341 131

LEGISLACIÓN doméstica. Su aplicación no permite sustentarse en circunstancias de hechos relativas al mercado ocurridas en el extranjero.
VI-P-SS-380 354

LEY de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Establece la facultad a la Secretaría del ramo para establecer las condiciones de peso, dimensiones y capacidad con las que deben cumplir los vehículos de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, mediante reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas. VI-P-SS-334 94

MARCAS. Caso en el que no se describe una cualidad o característica del producto. VI-P-SS-367 312

MARCAS en idioma extranjero. Es facultad de la autoridad competente, llevar a cabo su traducción para establecer, si considerada en su conjunto, es o no registrable. VI-P-SS-350 210

MARCAS en idioma extranjero.- Si al traducirse no son descriptivas de los productos que pretende proteger deben registrarse. VI-P-SS-361 281

MARCAS en idioma extranjero.- Si al traducirse no son descriptivas de los servicios que pretende proteger deben registrarse. VI-P-SS-372 334

MARCAS evocativas. VI-P-SS-371 334

MARCAS evocativas. Su registro. VI-P-SS-342 168

MARCAS indicativas o descriptivas.- No se da ese supuesto cuando sus elementos no son característicos de los productos o servicios que pretende proteger. VI-P-SS-375 336

MARCAS innominadas.- No son registrables cuando reproduzcan escudos oficiales de ciudades y no se cuente con la autorización correspondiente. VI-P-SS-347 198

MARCAS propuestas a registro en idioma extranjero. No existe impedimento legal para que la autoridad sustente su estudio en definiciones o traducciones obtenidas de la Internet. VI-P-SS-351 211

PATENTE. Cuando la solicitud sea imprecisa u oscura, se debe requerir se precise, aclare o subsane conforme al artículo 50 de la Ley de la Propiedad Industrial y no en términos del artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. VI-P-SS-345 183

PEDIMENTO de importación y certificado de origen. Procede la rectificación del primero y se considera válido el segundo, siempre que la descripción de la mercancía corresponda con las importadas. VI-P-SS-358..... 269

PRECLUSIÓN en el juicio contencioso administrativo federal. Oportunidad para formular agravios, en contra de la notificación del acto impugnado. VI-P-SS-331 69

REGULARIZACIÓN del procedimiento.- Es procedente cuando el emplazamiento al tercero interesado no se realiza en términos del artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano tratándose de notificaciones por correo certificado con acuse de recibo. VI-P-SS-365 294

REPRESENTACIÓN legal de una empresa otorgada por conducto de un extranjero.- Debe acreditarse que el otorgante cuenta con las facultades co-

rrespondientes y con la autorización de la Secretaría de Gobernación para desarrollar esa actividad. VI-P-SS-355 254

SOBRESEIMIENTO del juicio.- Procede respecto de los decretos emitidos por el Presidente de la República en ejercicio de su facultad reglamentaria, al equipararse a un reglamento. VI-P-SS-369 323

SOLICITUD de registro de marca. Debe analizarse tomando en cuenta si la marca está inscrita en un país extranjero. VI-P-SS-353 226

SUSPENSIÓN de la ejecución de la resolución que niega un registro marcario. No procede respecto de la solicitud de suspensión de un derecho de prelación. VI-P-2aS-598 394

SUSPENSIÓN solicitada en el juicio contencioso administrativo. Es improcedente concederla contra resoluciones que nieguen un derecho por ser dichas resoluciones de naturaleza negativa. VI-P-2aS-599 395

VALOR probatorio de la copia certificada del reporte general de consulta de información de contribuyente, cuando ostenta la leyenda: “el presente documento es únicamente para uso interno de la S.H.C.P. y carece de validez oficial”. VI-P-1aS-367 384

VIOLACIÓN sustancial del procedimiento.- Cuando no se emplaza al tercero en el juicio. VI-P-SS-343 180

VIOLACIÓN sustancial del procedimiento.- Cuando no se emplaza al tercero en el juicio en el caso de que la resolución impugnada deriva de la aplicación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. VI-P-SS-344 181

VISITA domiciliaria.- Cuando se actualice alguno de los supuestos de suspensión del plazo para concluirla, resulta válido que el visitador actuante así lo haga constar en el acta de visita correspondiente. VI-P-2aS-606 410

VISITA domiciliaria. La suspensión del plazo para concluirla impide que la autoridad fiscalizadora continúe ejerciendo sus facultades de comprobación. VI-P-2aS-607 411

ÍNDICE ALFABÉTICO DE CRITERIOS AISLADOS DE SALA SUPERIOR

CONTRADICCIÓN de sentencias.- Queda sin materia si uno de los fallos señalados como contradictorios quedó insubsistente. VI-TASS-47 437

ÍNDICE ALFABÉTICO DE CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES

ACUERDO por el que se determina la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus facultades las autoridades fiscales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de octubre de 2008), incumple lo dispuesto en el artículo 5° del Reglamento Interior del INFONAVIT, en materia de facultades como organismo fiscal autónomo, al no demostrarse por la autoridad demandada la existencia de la propuesta del Director General del mencionado Instituto. VI-TASR-XIII-77 509

AMPLIACIÓN de demanda. Interpretación del artículo 17, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. VI-TASR-V-17 444

ARTÍCULO 157 de la Ley Aduanera. El plazo de dos años que establece su párrafo cuarto, no estatuye ninguna sanción cuando se solicite al Servicio de Administración Tributaria la devolución de la mercancía, o en su caso, el pago del valor de la mercancía fuera de ese término. VI-TASR-XIII-58 491

ASUNTOS no diligenciados, debidamente circunstanciados.
VI-TASR-XIII-63 496

AUTORIDADES estatales. El ejercicio de sus facultades de fiscalización en materia de contribuciones federales, debe regirse por la legislación federal.
VI-TASR-XXXVII-147 460

BOLETA de infracción. En ella se debe precisar el precepto o preceptos legales que prevean la competencia territorial de la comisaría de sector.
VI-TASR-XIII-62 495

CADUCIDAD del procedimiento de inspección y vigilancia en materia de equilibrio ecológico. Para que opere deben tomarse en consideración los plazos previstos en los artículos 164, 167 y 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. VI-TASR-XVI-51 519

CADUCIDAD prevista en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es aplicable para los actos de las Delegaciones Estatales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
VI-TASR-XIII-55 488

CAPITAL constitutivo.- La facultad del Instituto Mexicano del Seguro Social para cuantificar los rubros que lo integran, no queda a su arbitrio.
VI-TASR-X-8 468

CARTA de los Derechos del Contribuyente Auditado. No es un acto administrativo de naturaleza constitutiva, y por ende, no requiere cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación. VI-TASR-XXIX-66 474

CAUSAL de improcedencia, infundada. VI-TASR-XXXVII-146 459

CITATORIO.- Debe dejarse cuando no se encuentre al destinatario en la primera búsqueda, conforme al artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. VI-TASR-XI-2 479

COMISIÓN Federal de Electricidad. Ayuda de renta de casa, el pago de la. Libera al organismo público descentralizado de enterar aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. VI-TASR-XIII-78 510

COMPENSACIÓN declarada por error en lugar de acreditamiento y corregida mediante declaración complementaria, no exime al contribuyente de la obligación de presentar el aviso correspondiente, ni de la infracción por su omisión. VI-TASR-X-7 466

COMPENSACIÓN improcedente.- La resolución administrativa que la declara y que ordena la presentación de declaraciones complementarias, no está sujeta al término de tres meses. 537

COMPETENCIA.- Para fundar la facultad material del Servicio de Administración Tributaria para consignar hechos y omisiones en el oficio de observaciones debe citar la fracción XVIII del artículo 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de octubre de 2007. VI-TASR-XII-II-58 480

COMPETENCIA material de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal para imponer multas. No se funda adecuadamente cuando, sólo se invoca

el artículo 9, fracción XXXI, en relación con el 10, fracción I, ambos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007.
VI-TASR-XXXVII-150 463

COMPETENCIA territorial de la Dirección de Operación y Supervisión de la Secretaría de Energía. No resulta necesaria la cita de precepto alguno cuando la legislación que la regula no delimita su ámbito de actuación espacial. 476
VI-TASR-XXIX-68 .....

CONCEPTOS previstos dentro de la fracción II, inciso h), del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para la aplicación de la tasa del 0%. El suministro de agua para uso doméstico se ubica en los supuestos de excepción. VI-TASR-XL-36 516

COSTO de las mercancías enajenadas, debe precisarse detalladamente el procedimiento del artículo 45-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
VI-TASR-XIII-69 502

CUMPLIMIENTO de sentencia derivado de dos juicios de nulidad en los que se impugnó la misma resolución. Forma de hacerlo. VI-TASR-XL-35 .. 515

CUOTAS enteradas indebidamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.- Procede su devolución con el pago de intereses y no sólo actualizadas al ser aplicable en forma supletoria al respecto el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 22 y 22-A. VI-TASR-XXXVII-149 463

DEMANDA supuesto en que procede conceder término para una segunda ampliación. VI-TASR-V-18 445

DERECHO del contribuyente a no aportar los documentos que ya obren en poder de la autoridad fiscal.- Supuesto en el cual no se actualiza. VI-TASR-XXXVI-114 524

DETERMINACIÓN presuntiva de cuotas omitidas tratándose de trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. No procede si el patrón dio cumplimiento al requerimiento. VI-TASR-XIII-68 500

DETERMINACIÓN presuntiva de ingresos. No se actualiza la fracción III del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, cuando se aportan los libros sociales para acreditar el origen de los depósitos bancarios. VI-TASR-XIII-64 497

DETERMINACIÓN presuntiva de ingresos. Procede con fundamento en el artículo 55, fracción IV del Código Fiscal de la Federación vigente en 2005, cuando los contribuyentes no lleven el procedimiento de control del inventario de sus mercancías previsto en la ley. VI-TASR-XXIX-65 473

DEVOLUCIÓN de saldo a favor. El contribuyente tiene derecho a solicitarla mediante declaración complementaria, posterior a la declaración anual presentada por el retenedor, siempre y cuando no se inicie el ejercicio de las facultades de comprobación. VI-TASR-XXX-64 454

DIRECTOR General de un Centro SCT. En términos de lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de enero de 2009, es autoridad competente para tramitar mas no para resolver, los recursos administrativos que establezcan las leyes y reglamentos que corresponde aplicar a dicha secretaría de estado. VI-TASR-XXX-63 453

DOCUMENTO idóneo para acreditar la calidad de socio en una sociedad cooperativa. VI-TASR-XIII-75 507

EJECUCIÓN de una orden de verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte.- La exigencia del levantamiento del acta circunstanciada respectiva no se convalida con la existencia del parte informativo elaborado por el personal que la cumplimenta. VI-TASR-XXXVI-113 523

EMBARGO administrativo para garantizar el interés fiscal.- No basta con su simple ofrecimiento para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado. VI-TASR-XXXVI-119 530

EXENCIÓN de impuestos de aduana, derechos de inspección y otros impuestos o gravámenes nacionales. El Convenio sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, establece la. VI-TASR-XXXVII-148 461

EXPEDIENTE administrativo.- Si dicha prueba se ofreció desde el escrito inicial de la demanda por el actor y su exhibición incompleta se pretende subsanar al contestar la ampliación de la misma, argumentando que ello se debe a que sus constancias son materia de la prueba pericial contable, tal manifestación carece de eficacia jurídica. VI-TASR-XII-II-59 482

FACULTAD de la autoridad para exigir en una visita domiciliaria la exhibición de la información y documentación de las cuentas bancarias del contribuyente.- Debe fundarse debidamente en el acto de molestia.
VI-TASR-XXXVI-121 532

FACULTADES de comprobación de la autoridad fiscal fuera de una visita domiciliaria.- Notificación de su ejercicio, tratándose de personas morales.
VI-TASR-V-15 442

GASTOS médicos a pensionados. Es procedente su devolución al acreditarse que se cubrieron las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, mismo que tiene integrado dicho concepto. VI-TASR-XIII-80 . 512

GASTOS médicos de pensionados. No debe cubrirse la cuota prevista en el artículo 25 de la Ley del Seguro Social, si en el Contrato Colectivo de Trabajo no se conceden prestaciones superiores a las que prevé la ley.
VI-TASR-XIII-79 511

IMPUESTO al valor agregado. Concepto de aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes en el país, para efectos de la aplicación de la tasa del 0%. VI-TASR-XVI-50 518

INCIDENTE de suspensión. Queda sin materia con el pago del crédito fiscal.
VI-TASR-XIII-71 503

INFORMES de asuntos no diligenciados. No se requiere dejar citatorio previo a su levantamiento, en los casos de notificación por estrados, previstos en el artículo 134, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.
VI-TASR-XVI-53 521

INSTITUTO Mexicano del Seguro Social. Procede el reembolso de gastos a los particulares, si el actor demuestra deficiencia en la prestación del servicio de salud en términos de los convenios entre ellos celebrados.
VI-TASR-XIII-53 486

INSTITUTO Nacional de Migración. Para imponer la multa a que se refiere el artículo 140 de la Ley General de Población, debe instruir previamente el procedimiento administrativo en materia de imposición de sanciones establecido en el artículo 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
VI-TASR-XVI-52 520

JEFE de Proyecto de la Unidad Jurídica en la Dirección Local Puebla de la Comisión Nacional del Agua, no tiene competencia para contestar la demanda en el procedimiento contencioso administrativo. VI-TASR-XIII-66 498

JURISPRUDENCIA establecida al resolver contradicción de tesis de Tribunales Colegiados. Sus efectos respecto de sentencias dictadas con anterioridad que deciden con apoyo en el criterio desautorizado. VI-TASR-XIII-57 490

LEY Federal de los Derechos del Contribuyente. Sus disposiciones resultan inaplicables a las multas no fiscales impuestas por la otrora Policía Federal Preventiva. Legislación vigente hasta el 1º de junio de 2009. VI-TASR-XXVIII-9 469

LITIS abierta. No es aplicable esta figura cuando el recurso administrativo es notoriamente improcedente. VI-TASR-XXVIII-11 471

MARCAS.- No son bienes inembargables por lo que no se ubican en el supuesto de excepción para la procedencia del juicio contencioso administrativo conforme a lo previsto por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 127, primer párrafo, y 157, fracción IV del Código Fiscal de la Federación. VI-TASR-XIII-54..... 487

MÉTODO de valoración de vehículos de procedencia extranjera en aduanas. No es suficiente con señalar los fundamentos legales que rigen los métodos de valoración previstos en la Ley Aduanera. VI-TASR-XXX-62 452

MOTIVACIÓN.- Multas del Instituto Mexicano del Seguro Social. VI-TASR-XIII-72..... 504

MULTA impuesta con fundamento en el artículo 304 A, fracción IX de la Ley del Seguro Social, es procedente aun cuando se cumpla parcialmente un requerimiento hecho dentro del procedimiento, que se establece en el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. VI-TASR-XIII-61..... 494

MULTA por reincidencia.- Resulta ilegal si la primera resolución en que se sustenta se encuentra *sub judice*. VI-TASR-XXXVI-115 525

MULTA prevista en el primer párrafo del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación. En la resolución que se determina no es necesario que se cite dispositivo legal adicional que prevea expresamente determinada conducta como infracción. VI-TASR-XXXVII-143 457

MULTAS fiscales. No se actualiza el supuesto previsto en el artículo 75, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, cuando dos conductas distintas infringen la misma disposición. VI-TASR-XIII-60 493

NEGATIVA ficta. Es improcedente su impugnación en juicio de nulidad si ésta se configura respecto a una consulta planteada en términos del artículo 34, del Código Fiscal de la Federación. Legislación vigente a partir del 1º de enero de 2007. VI-TASR-XXVIII-10 470

NO EXISTE cumplimiento espontáneo en términos del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, si al presentar los pagos provisionales del impuesto empresarial a tasa única, no se envió la información relativa al listado de conceptos y dicha obligación fue requerida por la autoridad. VI-TASR-XIII-67 499

NO PRESENTAR aviso de compensación a requerimiento de autoridad, cuando de antemano se compensó el impuesto al valor agregado en declaración presentada ante autoridad fiscal, es una infracción sancionable con multa. VI-TASR-XIII-74 506

NORMA de derecho excepcional. Lo es, el artículo 48, fracciones I y IX del Código Fiscal de la Federación, en su texto vigente hasta el veintiocho de junio de dos mil seis. VI-TASR-V-16 443

NORMAS Oficiales Mexicanas. Son consideradas por la Ley de Comercio Exterior, como una regulación y restricción no arancelaria. VI-TASR-VII-48 450

NOTIFICACIÓN de una resolución que impone una medida de apremio.- Es legal si se realiza en forma personal en el domicilio señalado por el interesado, con independencia de que haya designado igualmente una dirección de correo electrónico para tales efectos. VI-TASR-XXXVI-120 531

NOTIFICACIÓN por estrados de un acto de autoridad.- No se supedita su procedencia a los casos literalmente previstos por la fracción III del artículo 134 del Código Fiscal de la Federación. VI-TASR-XXXVI-118 529

OMISIÓN de la autoridad para exhibir en forma completa el expediente administrativo del cual deriva la resolución impugnada cuando éste incluye las documentales privadas que el actor ofreció en sede administrativa, no puede subsanarse al contestar la ampliación a la demanda. VI-TASR-XII-II-60 483

OPOSICIÓN de un tercero al embargo trabado contra diverso contribuyente sobre un bien inmueble.- Supuesto en el que no se acredita su interés jurídico para tales efectos. VI-TASR-XXXVI-116 526

ORDEN de visita domiciliaria en materia de comercio exterior.- Caso en que no se surte la excepción del artículo 43, fracción III del Código Fiscal de la Federación. VI-TASR-XI-1 478

ORDEN de visita domiciliaria. No es genérica si se asienta que será en el lugar señalado en esa orden. VI-TASR-XXXVII-144 458

OTROS ingresos acumulables de las personas físicas. Conforme al artículo 167, fracción XVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no lo son aquellas cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o a sus

beneficiarios, que no se consideren intereses ni indemnizaciones, si la prima fue pagada por el asegurado. VI-TASR-XIII-73 505

PENSIÓN jubilatoria. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se encuentra obligado a probar en el juicio contencioso administrativo que la dependencia o entidad correspondiente consideró el monto de la compensación garantizada en la base salarial para su cálculo. VI-TASR-XIII-70 502

PENSIÓN por viudez. De existir una causa de incompatibilidad, de las previstas en el artículo 51, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ocasiona su suspensión. VI-TASR-XIII-56 489

PROCEDIMIENTO administrativo de cancelación de patente de agente aduanal, es procedente la aplicación supletoria del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, cuando el origen de la irregularidad se basa en un pedimento de importación o exportación. VI-TASR-XXI-46 447

PRUEBA testimonial.- No es factible descalificarla de plano, por el solo hecho de que los testigos guardan parentesco con la demandante. Debe efectuarse el análisis de sus manifestaciones, atendiendo al caso particular. VI-TASR-XIII-65 497

RECTIFICACIÓN a prima media.- Para considerarse legal debe encontrarse debidamente fundada y motivada. VI-TASR-XIII-59 492

RECURSO de revocación. Es legal tenerlo por no interpuesto al no acreditarse que el representante legal de la empresa, contaba con la autorización de la Secretaría de Gobernación para ejercer el cargo de administrador único. VI-TASR-XIII-76 508

RÉGIMEN intermedio de personas físicas con actividades empresariales. Los contribuyentes que tributen bajo ese régimen están obligados a llevar su contabilidad en términos de los artículos 133, fracción II y 134, fracción I, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debiendo cumplir además con las obligaciones que al efecto señale el Servicio de Administración Tributaria en la guía de observaciones que al efecto expida. VI-TASR-XL-34 514

REGISTRO Público de la Propiedad en el Estado de Quintana Roo.- Se comprende en el sistema constitutivo en tratándose de la transmisión de la propiedad y dominio sobre un inmueble. VI-TASR-XXXVI-117 527

REQUERIMIENTO de pago de póliza de fianza.- Resulta ilegal que la autoridad exija el monto total de la cantidad garantizada, sin disminuir los pagos parciales del crédito efectuados por el obligado directo, e incluyendo conceptos no garantizados expresamente. VI-TASR-X-6 465

RESARCIMIENTO económico. El previsto en el artículo 157 de la Ley Aduanera no establece el supuesto del pago de intereses a cargo del fisco federal. VI-TASR-VII-47 449

REVISIÓN de documentación de ejercicios distintos al sujeto a fiscalización durante el desarrollo de facultades de comprobación. Caso en que no se causa perjuicio al contribuyente ni es contrario a lo dispuesto por el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación. VI-TASR-XXIX-67 475

REVISIÓN de gabinete.- Es ilegal cuando su objeto se circunscribe a revisar al contribuyente como sujeto directo en materia de impuesto sobre la renta y en el oficio de requerimiento de información que la origina se le solicita documentación relacionada con sus obligaciones solidarias como retenedor. VI-TASR-XII-II-61 484

SUBADMINISTRADOR “1” de devoluciones y compensaciones de la Administración Local de Auditoría Fiscal. Es inexistente al no encontrarse previsto en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de octubre de 2007. VI-TASR-XXX-65 455

VISITA domiciliaria. La identificación de los auditores ante la persona con quien se entienda la diligencia, debe efectuarse inmediatamente después de la entrega de la orden y no antes. VI-TASR-XXXVII-145 458

ÍNDICE ALFABÉTICO DE RESOLUCIONES Y VOTOS PARTICULARES

RESOLUCIÓN correspondiente al Recurso de Reclamación Núm. 35527/07-17-02-9/750/10-S1-05-05. [Suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado.- Es una especie de las medidas cautelares reguladas por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo].
VI-RyVP-1aS-10 545

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ACUERDOS GENERALES

SE FIJA la jurisprudencia Núm. VI-J-SS-66. G/17/2010 561

SE FIJA la jurisprudencia Núm. VI-J-2aS-36. G/S2/7/2010 563

SE FIJA la jurisprudencia Núm. VI-J-2aS-37. G/S2/8/2010 566

SE FIJA la jurisprudencia Núm. VI-J-2aS-38. G/S2/9/2010 569

SE FIJA la jurisprudencia Núm. VI-J-2aS-39. G/S2/10/2010 572

SE FIJA la jurisprudencia Núm. VI-J-2aS-40. G/S2/11/2010 575

SE FIJA la jurisprudencia Núm. VI-J-2aS-41. G/S2/12/2010 578

SE FIJA la jurisprudencia Núm. VI-J-2aS-42. G/S2/13/2010 582

SE FIJA la jurisprudencia Núm. VI-J-2aS-43. G/S2/14/2010 585

SE FIJA la jurisprudencia Núm. VI-J-2aS-44. G/S2/15/2010 588

SE FIJA la jurisprudencia Núm. VI-J-2aS-45. G/S2/16/2010 592

SE FIJA la jurisprudencia Núm. VI-J-2aS-46. G/S2/17/2010 595

SE FIJA la jurisprudencia Núm. VI-J-2aS-47. G/S2/18/2010 599

SE FIJA la jurisprudencia Núm. VI-J-2aS-48. G/S2/19/2010 602

SE FIJA la jurisprudencia Núm. VI-J-2aS-49. G/S2/20/2010 606

SE FIJA la jurisprudencia Núm. VI-J-2aS-50. G/S2/21/2010 609

SE FIJA la jurisprudencia Núm. VI-J-2aS-51. G/S2/22/2010 613

SE FIJA la jurisprudencia Núm. VI-J-2aS-52. G/S2/23/2010 616

DIRECTORIO DE LA REVISTA

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA:
Mag. Francisco Cuevas Godínez

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA:
Lic. Minko Eugenio Arriaga y Mayés

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Lic. Juan Carlos Ramírez Villena

Compilación, clasificación, ordenación y revisión de tesis, elaboración de índices, corrección tipográfica y vigilancia de la edición:

Lic. Ana Lidia Santoyo Avila
C. Elba Carolina Anguiano Ramos
C. María Goreti Álvarez Cadena

PUBLICACIÓN OFICIAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Certificado de Licitud de Título No. 3672
Certificado de Licitud de Contenido No. 3104
Número de Reserva al Título en Derechos de Autor: 04-2001-012517410700-102
Distribuidor principal: Fideicomiso para Promover la Investigación del Derecho Fiscal y Administrativo, Insurgentes Sur 881 Torre 'O', Colonia Nápoles, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03810, México , D.F.
Impresión:Talleres Gráficos de México. Secretaría de Gobernación, Av. Canal del Norte No. 80, Col. Felipe Pescador, C.P. 06280, México D.F.
Insurgentes Sur No. 881, Torre 'O', Col. Nápoles, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F.

Las obras podrán adquirirse en la Dirección de Publicaciones, en las Librerías Jurídicas Especializadas y en las Salas Regionales Foráneas, en página web o bien, por correo, enviando cheque a nombre del **Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa**, a la siguiente dirección:

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

Torres Adalid No. 21, Piso 2, Col. Del Valle Norte
Deleg. Benito Juárez. C.P. 03100
México, D.F.
Tel. 50-03-70-00 Ext. 3219
Mail: mangeles.gonzalez@tfjfa.gob.mx

PÁGINA WEB:

www.tfjfa.gob.mx/publicaciones

LIBRERÍAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS

METROPOLITANAS

SUCURSAL INSURGENTES
AV. INSURGENTES SUR No. 881,
MEZANINE COL. NÁPOLES
DELEG. BENITO JUÁREZ
C.P. 03810 MÉXICO, D.F.
TEL.(55) 50 03 70 00 Ext. 4144
FAX: (55) 50 03 74 02
Mail: libreria.insurgentes@mail.tfjfa.gob.mx

SUCURSAL TLALNEPANTLA
AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
No. 18 - P.B.
COL. CENTRO, C.P. 54000
TLALNEPANTLA
ESTADO DE MÉXICO
TEL. (55)53 84 05 44
Mail: libreria.tlalnepantla@mail.tfjfa.gob.mx

LIBRERÍAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS

FORÁNEAS

SUCURSAL TORREÓN
BLVD. DIAGONAL REFORMA
No. 2984 ZONA CENTRO,
C.P. 27000, TORREÓN, COAH.
TEL. (871) 7 93 89 39
7 93 90 54 EXT. 240
FAX: (871) 7 93 89 37
Mail: libreria.torreon@mail.tfjfa.gob.mx

SUCURSAL CELAYA
EJE VIAL MANUEL J. CLOUTHIER
(NORPONIENTE) No. 508 FRACCIÓN
DE LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA
HACIENDA SAN JUANICO
COL. LOS PINOS (FRENTE A LOS
JUZGADOS CIVILES)
C.P. 38020 CELAYA, GTO.
TEL. (461) 6 14 20 89
Mail: libreria.celaya@gmail.com

SUCURSAL OAXACA
AV. PINO SUÁREZ 700 INTERIOR 16-B
COL. CENTRO
C.P. 68000 OAXACA, OAX.
TEL. (951) 5 13 78 99
Mail: libreriajuridicaoax@prodigy.net.mx

SUCURSAL CULIACÁN
PASEO NIÑOS HÉROES No. 520
ORIENTE, P.B. COL. CENTRO
C.P. 80000 CULIACÁN, SIN
TEL. (667) 7 12 90 39
Mail: libreria.culiacan@mail.tfjfa.gob.mx

SUCURSAL ACAPULCO
AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN No. 63-2° PISO
LOCALES C-1 Y C-2 FRACC. CLUB DEPORTIVO
INTERIOR DEL CENTRO DE CONGRESOS COPACABANA
C.P. 33690, ACAPULCO, GRO.
TEL. (744) 4 81 36 39
Mail: libreria.acapulco@mail.tfjfa.gob.mx

DIRECTORIO

SALAS REGIONALES FORÁNEAS

PRIMERA SALA REGIONAL DE ORIENTE
AV. OSA MENOR 84
DE LA RESERVA ATLIXCAYOTL,
CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI.
CP:72810
CHOLULA, PUEBLA
TEL. 01 (222) 237 7860, 243 2341, 243 2549

SALA REGIONAL PENINSULAR
CALLE 56-A No. 483B,
(PASEO DE MONTEJO)
ESQ. CON CALLE 41, COL. CENTRO
C.P. 97000
MÉRIDA, YUCATÁN
TEL 01 (999) 9 23 21 22 DTO.
9 28 04 19 EXT. 210

PRIMERA SALA REGIONAL DEL GOLFO
AV. CIRCUITO CRISTOBAL COLÓN No. 5,
OCTAVO Y DÉCIMO PISOS.
COL. JARDINES DE LAS ÁNIMAS,
SECCIÓN "TORRE ÁNIMAS"
C.P. 91190
JALAPA, VERACRUZ
TEL. 01 (228) 812 56 31

SALA REGIONAL DEL NOROESTE I
AV. PASEO DE LOS HÉROES 9691,
FRACC. DESARROLLO URBANO
DEL RÍO TIJUANA
C.P. 22320
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE
TEL. 01 (664) 684 84 61

SALA REGIONAL DEL NOROESTE II
CALLE CHIHUAHUA No. 133 NTE.
ENTRE CALLES HIDALGO Y ALLENDE
COL. CENTRO
C.P. 85000
CD. OBREGÓN, SONORA
TEL. 01 (644) 414 70 05

PRIMERA Y SEGUNDA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE
AV. AMÉRICAS No. 877
ENTRE COLOMOS Y FLORENCIA
COL. PROVIDENCIA, SECTOR HIDALGO
C.P. 44620
GUADALAJARA, JALISCO
TEL. 01 (33) 38 17 15 25 Y 38 17 73 35

DIRECTORIO

SALAS REGIONALES FORÁNEAS

SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO I
AV. ZARCO No. 2656
COL. FRANCISCO ZARCO
C.P. 31020
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL. 01 (614) 418 80 57 EXT. 214

SALA REGIONAL DEL CENTRO I
AV. LÓPEZ MATEOS, PLAZA KRYSTAL
TORRE "A" 1001
ESQ. HÉROE DE NACOZARI SUR
COL. SAN LUIS
C.P. 20250
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL. 01 (449) 915 29 12

SALA REGIONAL DEL GOLFO-NORTE
AV. HIDALGO No. 260
ESQ. MIER Y TERÁN
COL. CENTRO
C.P. 87000
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
TEL. 01 (834) 315 59 82

SALA REGIONAL DEL CARIBE
SUPER MANZANA 36,
MANZANA 2, LOTE 2
LOCALES B-4, B-8 AL B-21
CENTRO PLAZA LAS PALMAS
ENTRE AV. XCARET Y AV. COBA,
ESQ. LA COSTA
COL. BENITO JUÁREZ
C.P. 77500
CANCÚN, QUINTANA ROO
TEL. 01 (998) 898 08 93

SALA REGIONAL CHIAPAS-TABASCO
PRIMERA CALLE PONIENTE NORTE No. 152
ESQUINA PRIMERA CALLE NORTE PONIENTE
COL. CENTRO
C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL. 01 (961) 612 07 09 EXT. 5528
612 06 61 DTO.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

El Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa

Revista Digital

La revista PRAXIS DE LA JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, *se edita en forma electrónica dentro de la página web del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,* con el objeto de aportar y difundir los estudios e investigaciones de los Magistrados, Secretarios, colaboradores académicos y especialistas sobre los temas que comprenden todas las especialidades inherentes a la Administración Pública, incluyendo nuevos aspectos del Derecho Informático que estudia y desarrolla todas las áreas del derecho, y que domina las actividades en el actual siglo XXI.

Las opiniones que se aportan son de estricta responsabilidad personal de los autores y no reflejan el criterio oficial del Tribunal, sin embargo, enriquecen el medio académico y científico aportando nuevos enfoques y análisis de los principales temas en diversas ramas del derecho.





Consúltala en: www.tfjfa.gob.mx



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa

Revista de Investigaciones y Estudios Jurídicos



Revista Número 3



Revista Número 4

Artículos Publicados en la Revista Número 3

●Cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Mag. María Teresa Olmos Jasso

●Origen y antecedentes legislativos de la Jurisprudencia.
Mag. María Concepción Martínez Godínez

●Ruta crítica para la aplicación de la informática en los Tribunales.
Mtro. Noé Adolfo Riande Juárez

●El Desacato y el Carácter Obligatorio de la Jurisprudencia.
Lic. Verónica Roxana Rivas Saavedra

● De la Inconstitucionalidad del Artículo 6, Fracción II, Inciso H), del nuevo Reglamento del CFF.
Lic. Juan Manuel Ángel Sánchez

● ¿Es el control difuso de la Constitución un instrumento para la integración de un orden constitucional?
Lic. Xochitl Garmendia Cedillo

● La Argumentación Jurídica a la luz del Maestro Manuel Atienza.
Lic. Héctor Lerma González

Artículos Publicados en la Revista Número 4

●La Jurisprudencia en el Juicio Contencioso Administrativo.
Mag. Doctor Sergio Martínez Rosaslanda

●Las Aguas Nacionales como Patrimonio del Estado.
Mag. Maestra Adriana Cabezut Uribe
Lic. Norma Tienda Díaz

●La Concesión Administrativa. Algunos aspectos Teóricos y Análisis de un caso práctico.
Mag. Maestra Luz María Anaya Domínguez
Mag. Maestra María Concepción Martínez Godínez
Mag. Maestra María Teresa Olmos Jasso

●Patrimonio Nacional. Islas, Territorio Insular Mexicano.
Maestra Xochitl Garmendia Cedillo

●"Regulación del Espectro radioeléctrico en México" Análisis de la Derogada Ley Televisa.
Maestro Miguel Ángel Pérez Martínez
Maestro Fernando Pardo Hernández
Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mezquita

●La explicación de la fecha del Bicentenario ante el Derecho Internacional, México y la Doctrina Uti Possidetis.
Doctor Juan de Dios Gutiérrez Baylón

●Aplicación del principio "*Non Bis In Ídem*" en el Ámbito Fiscal.
Doctor José Ramón Morales Hernández

●La (In) Definición del Derecho.
Maestro Alfonso E. Ochoa Hofmann

●Los Derechos Fundamentales y la Impartición de Justicia.
Doctor Raymundo Gil Rendón

●El Poder Judicial Electrónico en Iberoamérica en el 2009, Estado del Arte.
Doctor José Miguel Busquets

Consúltala en: www.tfjfa.gob.mx

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA



La Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se publica mensualmente para dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 75 y 78 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 26, fracción XXV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Su objetivo es el difundir los criterios establecidos en las tesis de jurisprudencia, precedentes o criterios aislados que surgen al resolver los juicios planteados ante el propio Tribunal. Además de las tesis y la parte relativa de la sentencia que la motivó, se publica una selección de jurisprudencia y tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia fiscal y administrativa.

La suscripción anual comprende 12 ejemplares que van de enero a diciembre del mismo año en impreso; y para 2010 se incluye, además, en CD. También la puede adquirir por semestre que comprende de enero a junio o de julio a diciembre, o por ejemplar suelto.

$330.00* ***Ejemplar suelto**

SUSCRIPCIÓN ANUAL

ENERO A DICIEMBRE 2010 $ 3,650.00 Incluye Revista con disco compacto

ENERO A DICIEMBRE 2009	$ 3,650.00
ENERO A DICIEMBRE 2008	$ 3,500.00
ENERO A DICIEMBRE 2007	$ 3,100.00
ENERO A DICIEMBRE 2006	$ 3,100.00
ENERO A DICIEMBRE 2005	$ 2,915.00

SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL

ENERO A JUNIO 2010 $ 1,880.00
JULIO A DICIEMBRE 2010 $ 1,880.00

ENERO A JUNIO 2009	$ 1,880.00
ENERO A JUNIO 2008	$ 1,800.00
ENERO A JUNIO 2007	$ 1,670.00
ENERO A JUNIO 2006	$ 1,670.00
ENERO A JUNIO 2005	$ 1,574.00

NOVEDADES

DISCOS COMPACTOS

PROPIEDAD INTELECTUAL
(compendio legislativo en CD)



Contiene

Jurisprudencia

Jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y criterios aislados de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual; con diversos índices para su búsqueda y localización.

Legislación Federal, Tratados Internacionales y Legislación Histórica.

ISBN 9786079509613

$100.00

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
(compendio legislativo en CD)



Reúne en un solo disco todo lo necesario para analizar un problema en materia de protección al consumidor:

Legislación histórica y actualizada en versión HTML, PDF y Word.

Incluye una compilación de jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con opción de búsqueda alfabética, por materia, cronológica o por código de voz.

ISBN 9786079509613

$30.00

DVD

"JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 2010"

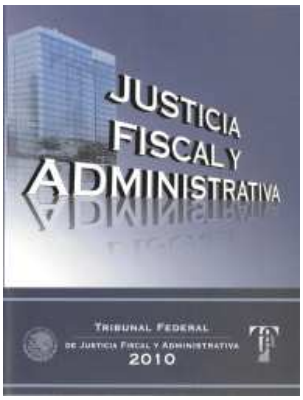
Contiene:

Jurisprudencia, tesis aisladas, ejecutorias y votos que ha emitido y publicado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de enero de 1937 a diciembre de 2009 (Primera a Sexta Época).

Noticia Histórica sobre la creación, evolución y competencia otorgada a dicho Tribunal.
Catálogo de claves

Requerimientos técnicos necesarios:

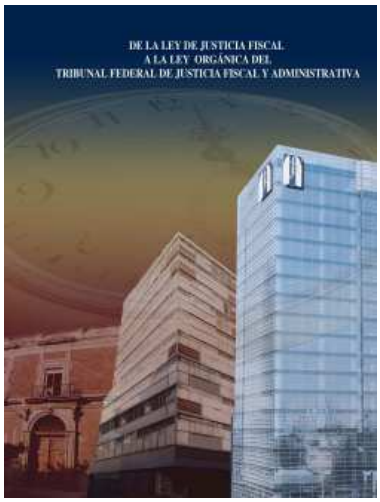
- 1.0 GB de memoria RAM
- 1.0 GB de espacio en disco duro
- Computadora personal con sistema basado en procesador x86 Sistema operativo Windows XP con SP 2 (service pack 2) o superior; Windows Vista Home Premium o superior
- Monitor a color, configuración 1024 x 768 (mínimo)
- Mouse indispensable



ISBN 9786074681703

$150.00

COMPILACIÓN



ISBN 968-7626-48-8

$290.00

DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL A LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Muestra con un sentido histórico la memoria legislativa del Tribunal, las huellas de un largo camino de evolución constante y modernización del Contencioso Administrativo Federal inserto en la realidad nacional.

Temas: Antecedentes Legislativos del modelo Contencioso Administrativo en México, Notas periodísticas relativas al inicio de labores del Tribunal Fiscal de la Federación, Ley de Justicia Fiscal (D.O.F. 31 de agosto de 1936), Código Fiscal de la Federación (D.O.F. 31 de diciembre de 1938), Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (D.O.F. 19 de enero de 1967), Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (D.O.F. 2 de febrero de 1978), Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (D.O.F. 15 de diciembre de 1995), así como las Reformas que se hicieron a estos Ordenamientos.

COMPILACIÓN DE TESIS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y EL PODER JUDICIAL FEDERAL EN MATERIA DE LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, TRATADOS INTERNACIONALES, PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR

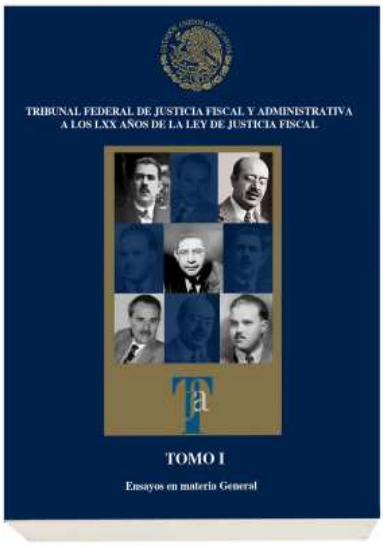
Incluye las tesis publicadas en las Revistas de este Tribunal de enero de 1994 a octubre de 2004 y las publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de enero de 1994 a agosto de 2004.

$350.00



ISBN 968-7626-49-6

OBRAS CONMEMORATIVAS DE LOS ANIVERSARIOS DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL



ISBN 968-7626-57-7

$ 1,350.00

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA A LOS LXX AÑOS DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL EN CINCO TOMOS

En el marco de la conmemoración del LXX aniversario de la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal, fue presentada esta magna obra que constituye el testimonio de lo que actualmente es la justicia fiscal y administrativa, vista por sus propios actores. A partir de la valiosa colaboración de destacados juristas nacionales y extranjeros se desarrollan, en cinco tomos, temas de trascendencia para el contencioso administrativo, tales como: Ensayos en materia General (Tomo I); Cuestiones constitucionales, control de legalidad de los actos de la Administración Pública y nuevas perspectivas para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Tomo II); Recursos administrativos, juicio contencioso administrativo y responsabilidad patrimonial del Estado y de los servidores públicos (Tomo III); Tratados internacionales en materia económica y tributaria; ensayos en materia fiscal, aduanera y comercio exterior (Tomo IV); y Seguridad social, propiedad intelectual, protección al consumidor, aguas nacionales y bioseguridad de organismos genéticamente modificados (Tomo V).



ISBN 968-7626-60-7

$ 150.00

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN) MAGISTRADOS PRESIDENTES DEL TRIBUNAL 1937-2006 TESTIMONIOS Y SEMBLANZAS

En el LXX aniversario de la creación del hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se hace un homenaje a los hombres y mujeres que han tenido a su cargo dirigir los destinos de este Tribunal, a través de esta obra que incluye el testimonio de los licenciados Antonio Carrillo Flores y Guillermo López Velarde, Magistrados Fundadores, quienes en dos artículos relataron las circunstancias en que fue creado este Órgano Jurisdiccional, y sus primeros años de vida; los discursos pronunciados por los Presidentes de la República y por los Presidentes del Tribunal con motivo de diversos aniversarios de la Promulgación de la Ley de Justicia Fiscal; la trayectoria de los Presidentes de este Órgano de impartición de justicia; y un apartado fotográfico.

OBRAS CONMEMORATIVAS DE LOS ANIVERSARIOS DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL

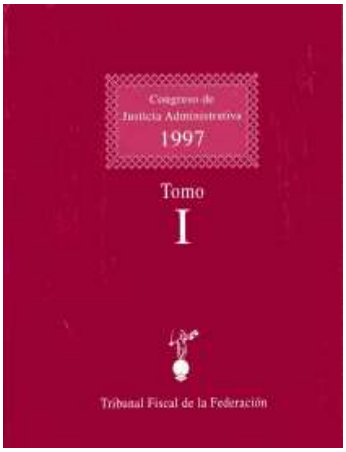


TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA A LOS LXV AÑOS DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL 2001 EN SEIS TOMOS

Al cumplir 65 años el Tribunal, se edita una obra que reune a grandes tratadistas nacionales y extranjeros, los ensayos relativos se incluyen en los tres primeros tomos de la obra. También en los tomos IV y V se presenta una compilación de las tesis emitidas por el Tribunal, durante los últimos cinco años, que comprenden en su totalidad la cuarta época de la revista, dichas tesis se clasifican según la instancia emisora, el tipo de tesis y dentro de esta clasificación, en orden alfabético. El tomo VI contiene un índice temático en el que aparecen los rubros de las tesis identificando los preceptos jurídicos que fueron señalados en cada una de ellas, así como la materia correspondiente a dicho precepto y los preceptos de otros ordenamientos jurídicos que se correlacionaron en dicha tesis.

ISBN 968-7626-29-1

$1,200.00



CONGRESO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 1997 LXI ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN DOS TOMOS

En 1997 se conmemora el 61 aniversario de la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal, celebrándose el Congreso de Justicia Administrativa 1997, con la participación nuevamente de algunos de los Presidentes de los Tribunales Fiscales de países de América Latina y España, de los Magistrados del propio Tribunal y de eminentes juristas nacionales y extranjeros. Se tratan temas de gran importancia y trascendencia para nuestro país, tales como: “Cuotas Compensatorias; Alcances de la Declaración de Inconstitucionalidad por el Poder Judicial Federal; y La Suspensión en Materia de Responsabilidades de Servidores Públicos”.

ISBN 968-7626-11-9

$425.00

MEMORIAS DE LAS REUNIONES NACIONALES

MEMORIA DEL XVII CONGRESO NACIONAL DE MAGISTRADOS "VISIÓN DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL ANTE LOS RETOS DEL CAMBIO SOCIAL"



Realizado en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, del 27 al 29 de agosto de 2008, este Congreso se dividió en cuatro temas de disertación: “Cambios en el Contencioso Administrativo”; “Misión y Visión de la Junta de Gobierno y Administración”; “Nuevas Competencias del Tribunal”; y “La Justicia Pronta y Expedita en el Contencioso Administrativo. Juicio en Línea”; temas magistralmente expuestos en sesiones plenarias, a las cuales sucedieron ocho mesas de trabajo, divididas a su vez en subtemas, marco ideal de discusión de los tópicos tratados, y cuyo testimonio se recoge en esta Memoria.

ISBN 978-607-95096-0-6

$80.00

"LA COMPETENCIA ACTUAL Y LAS NUEVAS COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PROBLEMÁTICA Y POSIBLES SOLUCIONES"

XVI REUNIÓN ANUAL DE MAGISTRADOS QUERÉTARO, QUERÉTARO, AGOSTO 2007

La Reunión se dividió en dos grandes rubros: en el primero, se trató la competencia del Tribunal, incluyéndose la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; la impugnación de actos administrativos de carácter general diversos a los Reglamentos; medidas cautelares y suspensión de la ejecución del acto impugnado; entre otros. El segundo tema incluyó las reflexiones realizadas en torno a las nuevas competencias del Tribunal, tratándose temas como las implicaciones de la promulgación de su nueva Ley Orgánica y su autonomía presupuestaria.



Disco Compacto

ISBN 9789689468011

$80.00



ISBN. 968-7626-61-5

$450.00

MEMORIAS DEL TERCER CONGRESO DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (PERSPECTIVA DEL DERECHO FISCAL Y ADMINISTRATIVO EN AMÉRICA Y EUROPA EN LA PRIMERA PARTE DEL SIGLO XXI EN DOS TOMOS

Congreso celebrado en la ciudad de México del 24 al 28 de agosto de 2006. Los temas abordados recorrieron todas las materias del ámbito de competencia del Tribunal, manifestados en la visión de los juristas participantes respecto de las “Perspectivas del Derecho Fiscal y Administrativo en América y Europa en la primera parte del Siglo XXI”.

OBRAS DE LAS REUNIONES

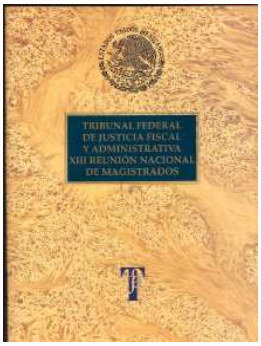
ANTE LOS RETOS DEL FUTURO, VALORES Y CAPACIDADES DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL XIV REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2005)

Temas tratados: Ética y Valores, Nuevas formas de controversia del Contencioso Administrativo Federal, responsabilidad patrimonial del Estado, Evolución de la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, su proyección hacia el futuro y la búsqueda de nuevas fórmulas de controversia, al encuentro de un sistema renovado del Contencioso Administrativo Federal, La responsabilidad del Estado, Reflexiones en torno al Acceso de la Justicia Administrativa en materia de Responsabilidad Patrimonial del Estado, Interpretación constitucional en materia patrimonial del Estado.



$290.00

ISBN 968-7626-54-2



ISBN 968-7626-53-4

$370.00

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA XIII REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2004)

Temas tratados: El Contencioso Administrativo a la luz de un sistema integral y coherente de impartición de justicia en el Estado Mexicano, Aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA XII REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2003)

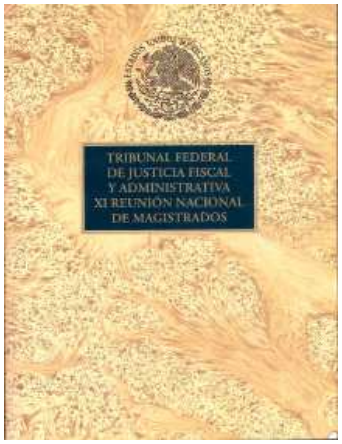
Temas tratados: La Supresión del Contencioso Administrativo en México, Estado actual del Contencioso Administrativo en Europa, en América Latina y el Contencioso Administrativo Federal en México evolución y situación actual, iniciativa de la Ley Federal de Justicia Administrativa en la Función Pública, Nuevo Esquema en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos.



ISBN 968-7626-47-X

$130.00

OBRAS DE LAS REUNIONES



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA XI REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2002)

Temas tratados: Demanda, Suspensión, Pruebas, Alcances de la Sentencia y su Impugnación, Efectividad, Obligatoriedad de la Jurisprudencia, ISR, Aspectos de la Reforma Fiscal, Ley del IMSS, Iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones.

ISBN 968-7626-42-9

$260.00



CONTROL DE LEGALIDAD EN EL MODERNO ESTADO DE DERECHO EN AMÉRICA Y EUROPA X REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2001)

Esta obra contiene los trabajos presentados con motivo del Segundo Congreso Internacional de Justicia Fiscal y Administrativa, celebrado con motivo del 65 aniversario de la expedición de la Ley de Justicia Fiscal, en el que participaron el Vicepresidente del Consejo de Estado de Francia **Sr. Renaud Denoix de Saint Marc**, el Presidente de la Corte de Impuestos de Canadá **Alban Garon**, el Presidente del Consejo de Tribunales Administrativos de Canadá **Lic. Murray Walter Chitra**, y en representación de la Asociación Iberoamericana de Tribunales Fiscales y Administrativos, participaron el **Dr. Manuel Urueta Ayola**, Presidente del Consejo de Estado de Colombia y el **Dr. Luis Rodríguez Picado,** Presidente del Tribunal Fiscal Administrativo de Costa Rica; representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo **Ministro Juan Díaz Romero**, **Senador Fauzi Handam** y el Procurador Fiscal de la Federación **Lic. Gabriel Reyes Orona**; por los Tribunales Administrativos Estatales **Magistrada Teresita Rendón Huerta** presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo de Guanajuato; así como de la Academia Mexicana del Derecho Fiscal y Magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del propio Tribunal.

ISBN 968-7626-37-2

$210.00

OBRAS DE LAS REUNIONES

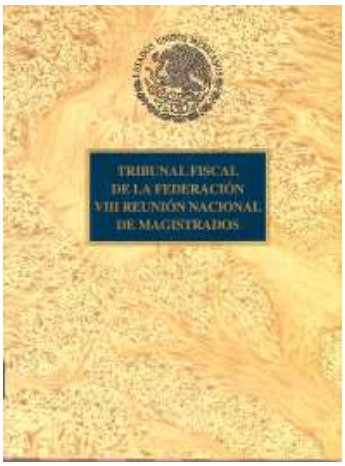
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN IX REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2000)

Temas tratados: Validez Actual del Contencioso Administrativo en México, Competencia del Tribunal Fiscal de la Federación, Eficacia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Local, Principios Fundamentales del Procedimiento Contencioso Administrativo, Cumplimiento y Ejecución de Sentencias, Análisis de Derecho Comparado, Contencioso Objetivo y Subjetivo de Anulación, El Procedimiento Contencioso Administrativo.



ISBN 968-7626-27-5

$210.00



TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIII REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (1999)

En 1999 se realiza la VIII Reunión Nacional, con la presentación de trabajos presentados por Magistrados, los cuales se enmarcan en importantes temas de Derecho Procesal Fiscal: Competencia prorrogada o prórroga de competencia y validación de actos de autoridades incompetentes; Problemática de Competencia territorial entre dos Salas con Sede en diferentes Estados; Notificaciones por correo certificado; Improcedencia; Resoluciones que dejan sin efectos los créditos recurridos; Impugnación de actos de ejecución; Idoneidad de la prueba; Problemas en la admisión, desahogo y valoración de la prueba pericial; La prueba de inspección judicial; La prueba confidencial en materia de comercio exterior internacional y precios de transferencia; Los efectos de las sentencias del Tribunal; Las sentencias que se dictan en 24 horas; Formación de jurisprudencia; Regulación de la queja, violación del plazo de cumplimiento de la sentencia; y diversos trabajos sobre el Procedimiento Administrativo y Derecho Sustantivo.

ISBN 968-7626-18-6

$130.00

COLECCIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN MÉXICO

La manipulación de las condiciones en que los miembros de un mismo grupo de interés pactan las operaciones entre sí genera importantes problemas recaudatorios, que impactan como un factor determinante en la vida de los gobiernos, de las empresas multinacionales y de sus operaciones internacionales.

Ante esta manipulación de precios de transferencia, la OCDE ha recomendado medidas "antídoto", adoptadas en gran medida por México, pero ¿Son estas medidas congruentes con nuestro sistema constitucional?

En este libro, el Maestro Mario Barrera Vázquez realiza un análisis serio de la regulación mexicana sobre los precios de transferencia, desde un punto de vista estrictamente jurídico, brindando al lector una herramienta de consulta indispensable para conocer o profundizar en este tema, lo que le valió ser acreedor al "Premio de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa", otorgado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.



ISBN 607-950-964-4

$ 310.00

LA MUERTE DEL INFRACTOR COMO FORMA DE EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL POR INFRACCIONES A LAS LEYES FISCALES FEDERALES



ISBN 607-950-963-7

$ 310.00

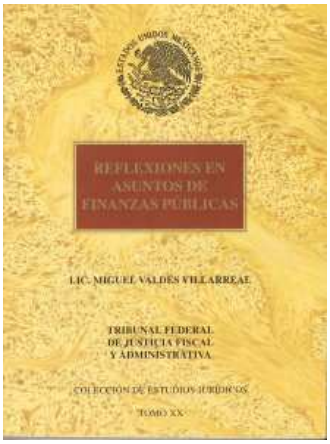
¿Es la muerte causa de extinción de obligaciones fiscales derivadas de la imposición de una sanción? De acuerdo con el criterio del Fisco Federal, la obligación subsiste.

La muerte, lo único cierto que sabemos nos va a suceder, tiene implicaciones en diversos ámbitos, incluido por supuesto el fiscal. La finitud del ser humano implica la de sus derechos y obligaciones; sin embargo, estas le trascienden, por un tiempo al menos.

Es de todos conocido que el patrimonio se transmite por herencia, tanto en activo como en pasivo, pero en el caso de las multas, conservando sin lugar a duda su carácter de pasivo, ¿no es acaso una sanción? Recordemos entonces la prohibición constitucional a la trascendencia de la sanción.

Son estos los elementos de un tema polémico e interesante que la licenciada Dione Rivera aborda con claridad y precisión, misma que le valió el ser galardonada con el "Premio de Estudios sobre Justicia Administrativa 2007", otorgado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

COLECCIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS



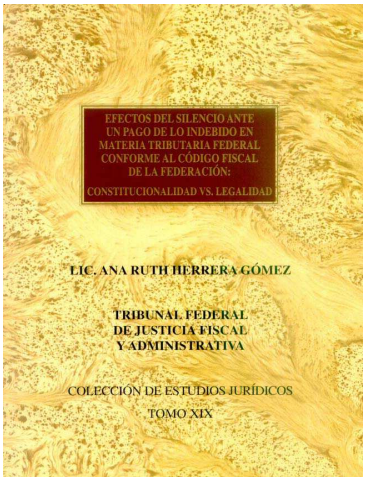
ISBN 968-7626-56-9

$280.00

REFLEXIONES EN ASUNTOS DE FINANZAS PÚBLICAS.- TOMO XX.- 2005, LIC. MIGUEL VALDÉS VILLARREAL

Como un homenaje a la trayectoria del Maestro Miguel Valdés Villarreal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa realiza la compilación de sus trabajos, estructurada en dos capítulos: en el primero se incluyen aquellas reflexiones presentadas por el Maestro en diversos foros, principalmente la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que versan sobre política fiscal, Necesidad de Tribunales Contencioso Administrativos locales, Asentamientos humanos, Amparo contra Leyes, Administración de Justicia, Misión del abogado hacendario, entre otros.

El capítulo segundo comprende los mensajes dados en diversos Congresos anuales del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal, así como los trabajos presentados en los mismos, relativos a Coordinación Fiscal, Modernización del Sistema Tributario Mexicano, Reforma Fiscal integral, Estado de Derecho y una visión integral de un Sistema Jurídico de Contribuciones.



ISBN 968-7626-45-3

$165.00

EFECTOS DEL SILENCIO ANTE UN PAGO DE LO INDEBIDO EN MATERIA TRIBUTARIA FEDERAL, CONFORME AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUCIONALIDAD VS. LEGALIDAD.- TOMO XIX.- 2003, LIC. ANA RUTH HERRERA GÓMEZ

Temas: El pago de lo indebido en Materia Tributaria, Devolución, Plazos para solicitar la Devolución de un pago indebido.

COLECCIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS

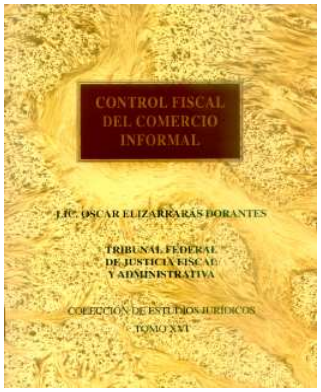


ISBN 968-7626-44-5

$250.00

LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN EL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS, ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA UNIÓN EUROPEA.-TOMO XVIII.- 2003, LIC. MARÍA ELENA PÁEZ MEDINA

Temas: Conceptos, La Unión Europea “Sinopsis acerca de la relación jurídico económica existente entre los estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea en el marco de la globalización internacional", “Tratamiento en el Derecho Mexicano a la doble contribución Internacional del Impuesto sobre la Renta”, “Tratados Internacionales celebrados entre los Estados Unidos Mexicanos y los países integrantes de la comunidad Europea, en material de doble tributación”, “Solución de Controversias”

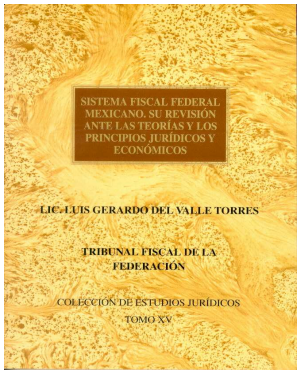


ISBN 968-7626-39-9

$170.00

CONTROL FISCAL DEL COMERCIO INFORMAL.- VOL. XVI LIC. OSCAR ELIZARRARÁS DORANTES

Temas: Generalidades del Comercio Informal, Breves Antecedentes de la regulación fiscal del Comercio Informal, Régimen Fiscal del Comercio Informal, Asistencia fiscal especializada para el Comercio Informal.



ISBN 968-7626-25-9

$100.00

SISTEMA FISCAL FEDERAL MEXICANO.- SU REVISIÓN ANTE LAS TEORÍAS Y LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS. VOL. XV LIC. LUIS GERARDO DEL VALLE TORRES

SU REVISIÓN ANTE LAS TEORÍAS Y LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS. Esta obra forma parte de la Colección de Estudios Jurídicos, que se encuentra formada en sus últimos tomos por las tesis que resultan premiadas en el Certamen “Revista del Tribunal Fiscal de la Federación”, o Certamen “Premio de Estudios sobre Justicia Administrativa”. Además de ser premiada, el Jurado Calificador determinó que este trabajo reunía la calidad para ser publicado en dicha colección.

COLECCIÓN DE OBRAS CLÁSICAS



ISBN 968-7626-38-0

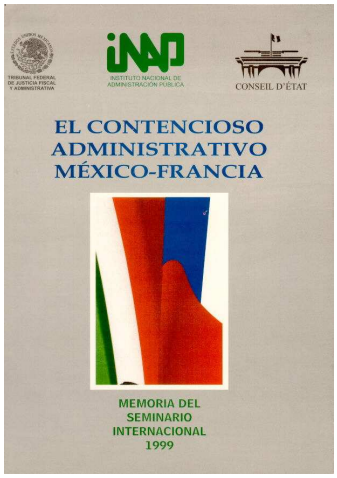
$100.00

LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL DERECHO TRIBUTARIO MEXICANO. TOMO II. LIC. SERVANDO J. GARZA

Obra escrita por el maestro de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, contribuyó notablemente a la construcción de esa Doctrina de la que hoy nos sentimos orgullosos.

Algunos Temas: Derecho y equidad, El Principio de Igualdad del Artículo 13, Proporcionalidad y Equidad, La autentica violación del Principio de Justicia, El Impuesto sobre dividendos, El principio de Irretroactividad, Sanción y Acción, La Sentencia como Norma concreta y El Principio de su Unicidad.

COEDICIONES



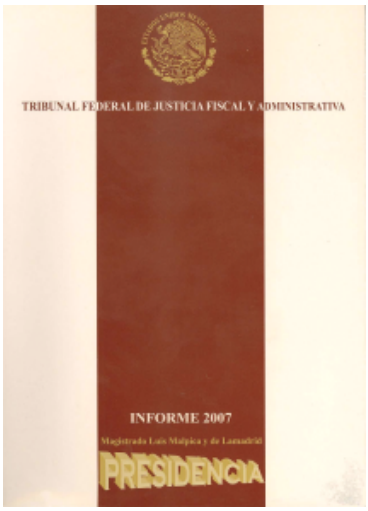
ISBN 968-6080-24-4

$160.00

EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MÉXICO-FRANCIA MEMORIA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL 1999

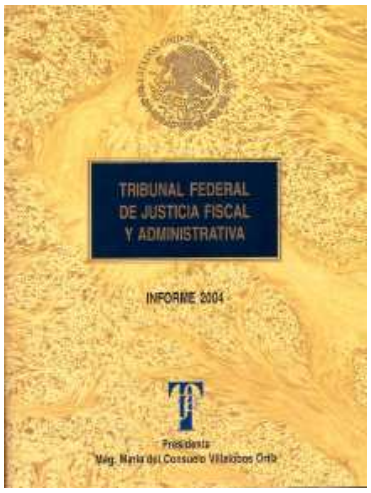
Memorias del Seminario Internacional sobre lo Contencioso Administrativo. Trabajos presentados por Funcionarios del Consejo de Estado Francés y por Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en los que trataron los temas de: La Reforma del Estado y La Jurisdicción en México y Francia; La Organización y Las Competencias de la Jurisdicción Administrativa en México; La eficiencia de las Jurisdicciones Administrativas y La ejecución de las sentencias en Francia y México; La Jurisdicción administrativa. El Derecho Internacional y La Globalización; y La Modernización Tecnológica e Informática en las Jurisdicciones Administrativas en Francia y México.

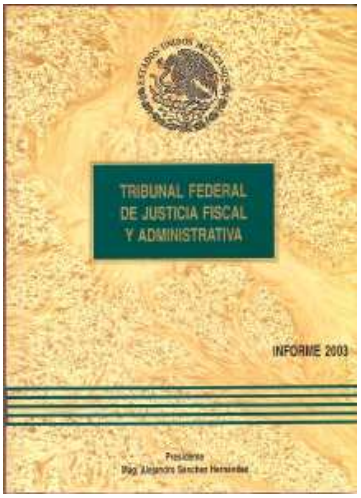
INFORMES ANUALES

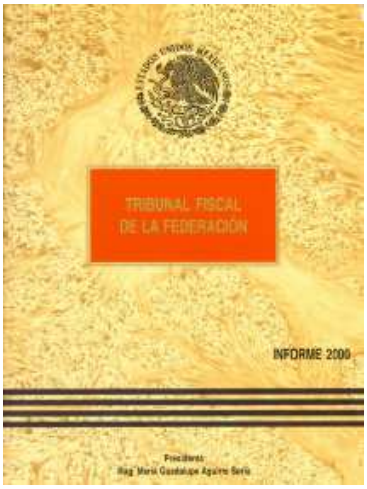












INFORME DE LABORES 2007	$310.00	ISBN 978-968-9468-00-4
INFORME DE LABORES 2006	$300.00	ISBN 968-7626-63-1
INFORME DE LABORES 2005	$292.00	ISBN 968-7626-55-0
INFORME DE LABORES 2004	$275.00	ISBN 968-7626-46-1
INFORME DE LABORES 2003	$250.00	ISBN 968-7626-43-7
INFORME DE LABORES 2002	$200.00	ISBN 968-7626-41-0
INFORME DE LABORES 2001	$190.00	ISBN 968-7626-28-3
INFORME DE LABORES 2000	$155.00	ISBN 968-7626-7

CORREO ELECTRÓNICO: **publicaciones@mail.tfjfa.gob.mx**

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN DE ESTAS PUBLICACIONES COMUNICARSE AL TELÉFONO 50-03-70-00 EXT. 3219 ó 3227

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA



LIBRERÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA

- **SUCURSAL INSURGENTES**

INSURGENTES SUR No. 881, MEZANINE
COL. NÁPOLES
DELEG. BENITO JUÁREZ. C.P. 03810
MÉXICO, D.F.
TEL: 50 03 70 00 EXT. 4144
Mail: libreria.juridica@mail.tfjfa.gob.mx